

Aitor Sáez

CUANDO
EL AGUA
SE ACABE

Prólogo de Yásnaya Elena Aguilar Gil

CUANDO

EL AGUA

SE ACABE

Cuando el agua se acaba, Aitor Sáez (autor) —
México: Bajo Tierra Ediciones/Fundación Heinrich Böll e. V., 2024,
350 pp: 21 cm x 14 cm.

Primera edición en español: noviembre de 2024

D.R. © Aitor Sáez, autor

D.R. © Bajo Tierra A. C., Av. Universidad 2014, U. H. Integración
Latinoamericana, Ed. El Salvador, Ent. B, Int. 8, Alc. Coyoacán,
CP 04350

D.R. © Fundación Heinrich Böll, e. V., José Alvarado 12, Col. Roma,
Alc. Cuauhtémoc, CDMX, CP 06760

ISBN Bajo Tierra A. C.: 978-607-69553-9-0

ISBN Fundación Heinrich Böll, e. V.: 978-607-59723-5-0

Coordinación editorial: Rocío Jenny Zapata Lopez y Jaqueline
Valenzuela Meza

Prólogo: Yásnaya Elena Aguilar Gil

Fotografías de interiores: Aitor Sáez

Diseño de portada e interiores: Amiel Aketzali Moreno Reyes

Corrección de estilo: Bajo Tierra Ediciones

Cuidado de la edición: Bajo Tierra Ediciones

Esta publicación contó con el apoyo del Centro de Energía Renovable y
Calidad Ambiental, A.C., bajo la coordinación de Jaqueline Valenzuela
Meza.

© El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores.

Obra bajo licencia de Creative Commons. Atribución -noderivadas 2.5
México

Eres libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo
las siguientes condiciones:

- ▶ Al reutilizar o distribuir la obra, tienes que dejar bien claro los
términos de la licencia de la misma.
- ▶ Algunas de estas condiciones pueden no aplicarse si se obtiene el
permiso del titular de los derechos de autor.
- ▶ Nada en esta licencia menoscaba o restringe los derechos morales de
los autores.



Aitor Sáez

**CUANDO
EL AGUA
SE ACABE**

 **HEINRICH BÖLL STIFTUNG**
CIUDAD DE MÉXICO
México y El Caribe



CERCA3
energía y aire limpios

Índice

Cuando el agua se rescató, por Yásnaya Aguilar Gil	15
¡Aguas!	21
La jungla de asfalto capitalina	27
<i>El pipero</i>	29
La última cerveza de Óscar	45
<i>El ambientalista de Tecate</i>	47
<i>La frontera maldita</i>	59
<i>El río Colorado</i>	69
Nuez y bala en Chihuahua	81
<i>El riego de los cárteles</i>	83
<i>El arsénico</i>	89
<i>La presa tomada</i>	95
<i>La narco-nuez</i>	103
La sembradora de agua	115
<i>Las ollas de Oaxaca</i>	117
<i>El pueblo dividido por la minera</i>	133
<i>El derrame</i>	143

Pescadores y furtivos en el Golfo de California	159
<i>El islote de los Cuevas</i>	161
<i>El ranchero oasisano</i>	171
<i>La seca del turismo</i>	177
La hora cero de Monterrey	185
<i>El dinero no compra el agua</i>	187
El Biólogo de Michoacán	201
<i>El Ecocentro</i>	203
<i>El aguacate</i>	213
<i>La guardabosque</i>	225
<i>La muerte</i>	237
El pozo hñähñú	245
<i>Hija y madre comtra el saqueo</i>	247
El guardián de los cenotes	257
<i>Los aluxes y los cerdos de Yucatán</i>	259
<i>La laguna negra</i>	169
<i>Las duras aguas del jagüey</i>	275
Guerrero rojo	281
<i>La masacre</i>	283
<i>La amapola</i>	289
<i>El cura que negocia con los narcos</i>	299
<i>La señora de la escopeta</i>	305
La sed embotellada de Puebla	311
<i>La defensora de la vida</i>	313

El eterna batalla yaqui	321
<i>Los guerreros mártires</i>	323
<i>El vaquero</i>	331
<i>El profesor</i>	339

*A Lucas,
por todos los mares a navegar.
A Laura, por tanto.*

*Matamos lo que amamos. Lo demás
no ha estado vivo nunca.*

ROSARIO CASTELLANOS, POEMA DESTINO

Cuando el agua se rescató

Yásnaya Elena Aguilar Gil

La existencia del agua, esa sustancia imprescindible para la vida, depende de una compleja serie de procesos en los que intervienen diferentes elementos del planeta. El agua se crea cíclicamente, como lo decían las cartulinas con las que explicábamos frente a la clase de primaria el milagro del agua. Cielo y tierra, tierra y mar, bosques, suelo, subsuelo, océanos y cavidades subterráneas toman parte del proceso. La existencia del agua no depende de una cadena de producción, el agua no es propiedad de nadie; sin embargo, el agua, esa condición *sine qua non* para la vida, ha sido convertida en mercancía.

Una antigua narración mixe que ha llegado a nuestras días nos alertaba: de no honrar a la tierra era posible un futuro terrible, un futuro en el que los enseres domésticos como el comal, las ollas de barro o la mano de los metates se rebelaran airadamente contra las personas. En ese mismo futuro terrible, según palabras de mi tatarabuelo, las

personas tendrían que hacer algo impensable para su generación, tendrían que comprar el maíz y el frijol en unidades de medida, las calabazas tendrían un precio y necesitarías dinero para obtenerlas. Cada vez que me contaban esta historia me preguntaba qué habría pensado mi tatarabuelo y qué tan escandalizado estaría de saber que ahora nos venden agua en mililitros precisos, embotellada en plástico. Poco a poco normalizamos la compra del maíz por kilos y, a estas alturas, parece bastante aceptada la práctica de comprar y vender algo tan fundamental y básico como el agua.

Hace unos años, paseaba por una conocida colonia de la Ciudad de México cuando me encontré con un cartel en la puerta de un establecimiento: “Jardín con aire puro. Preguntar por las tarifas”. Pregunté, se trataba de un pequeño jardín estilo Zen encapsulado dentro de una habitación. Un mecanismo purificaba el aire, podías entrar ahí para relajarte y respirar aire puro, las tarifas variaban, podías estar desde 15 minutos hasta cinco horas seguidas por cantidades concretas de dinero. Me di cuenta, estaban intentando venderme aire. Me escandalicé como mi tatarabuelo se escandalizaba ante la posibilidad de que el maíz pudiera venderse por kilo, como mi bisabuela se hubiera escandalizado de saber que se podía vender agua.

El agua, ese bien común que nadie ha manufacturado, que ninguna persona o empresa ha producido, ha sido secuestrada por el capitalismo que la ha transformado en mercancía. Mediante un complejo sistema de propaganda, que tuerce los sentidos y los significados, se ha naturalizado su venta, pero la operación para aceptar esto no sólo ha sido una operación narrativa. Cualquiera que se atreva a poner en entredicho el estatus del agua como mercancía sufrirá las consecuencias de ello, cualquiera que se atreva a decir que el emperador está desnudo, que el agua es un bien común, será acallado con violencia. Que el agua sea mercancía debería

ser tan escandaloso como el hecho de que el aire puro sea mercancía.

El presente libro es una serie de crónicas que muestran cómo funciona la violencia sistémica cuando las personas inician un proceso de recuperación del agua para rescatarla del capitalismo que la ha secuestrado. Estas crónicas hacen un viaje por el territorio mexicano para mostrar en la vida concreta y cotidiana, los desafíos que las personas defensoras del agua enfrentan cuando con palabras y acciones reafirman que ese delirio que nos dice que el agua es mercancía capitalista no se sostiene, que el agua es un bien común.

A través del recorrido por el norte, el centro y el sur de México podemos darnos cuenta de la gravedad de la crisis del agua, de cómo ha sido contaminada, de cómo se sustrae para el enriquecimiento de unos cuantos, de cómo la emergencia en el acceso del agua ya está aquí. Cada una de las crónicas conecta a experiencias concretas de defensores y defensoras que evidencian que la crisis ya está instalada, ya está sucediendo. Un chofer que conduce una pipa en Iztapalapa es obligado a punta de arma a entregar el líquido que transporta, dos mujeres indígenas se enfrentan al saqueo, madres sufren la desaparición o el envenenamiento de sus hijos, comunidades completas son despojadas del acceso al bien líquido. En medio de todas estas historias también se teje la resistencia y la esperanza, comunidades y organizaciones plantan cara para sembrar agua, para dar las batallas jurídicas necesarias contra las mineras, las cerveceras o cualquier cara que tome el capitalismo despojador.

Una de las conclusiones que se pueden derivar de este libro es que en la defensa del agua como bien común, las fronteras entre el estado, el mercado y el crimen organizado se desdibujan. La relación entre estos tres actores y la imposibilidad de identificarlos como agentes diferenciados se vuelve más intensa en cuanto más nos acercamos a las

experiencias concretas derivadas de las muchas caras de la crisis del agua. Esto es una característica muy propia del capitalismo tardío. Las instancias gubernamentales como la Comisión Nacional del Agua se convierten en cómplices por omisión o por colaboracionismo. El estado se ha erigido como el guardián del derecho humano al agua en términos del marco legal occidental, pero falla en garantizarlo.

Ante esta situación, la organización local y el fortalecimiento de los lazos colectivos parecen ser la única respuesta, los relatos de este libro apuntan hacia esa posibilidad. Por un lado, nos muestra con crudeza la crisis del agua en este país, pero por otro hace emerger en las crónicas las claves que pueden sostener la esperanza. Los testimonios que se hallan vertidos en estas páginas nos llaman a la indignación, nos invitan a desnaturalizar lo que el capitalismo nos dice que es normal, nos animan a abrir los ojos por el asombro y escandalizarnos, nos invitan a actuar para proteger a quienes defienden el agua, a quienes luchan por rescatarla del secuestro.

Hace unos años, personas de mi comunidad (Ayutla Mixe, Oaxaca) planteábamos a diversos funcionarios nuestra exigencia de justicia ante hechos violentos que nos habían privado del acceso a nuestro manantial. Las autoridades comunitarias explicaban lo que el agua significa para la cultura ayuujk, dieron detalles de las serpientes guardianas del agua y de los rituales para honrar a los manantiales. Los agentes del estado mostraban aburrimiento, entonces tuvimos que hablar el lenguaje del derecho positivo y mencionar el derecho humano al agua, los acuerdos internacionales y el marco legal, sólo así captamos su atención. Mientras que el estado sólo puede narrar el agua en términos legales, el mercado solo puede leerlo como mercancía; sin embargo, existe una multiplicidad de significados culturales del agua, en la mayoría de ellos el agua es un bien común, una dadora

de vida, en muchas de las lenguas de este país el agua se enuncia en sistemas gramaticales que no le asignan género.

Cuando el agua se acabó, se reveló la verdadera cara de quienes la han robado y privatizado para su beneficio. A pesar de todo, de la lectura de estas crónicas podemos concluir que un día, si nos articulamos en resistencia y defendemos el agua y a sus guardianas, podremos escribir otras crónicas en un libro que se titule: Cuando el agua se rescató. Ésa es la promesa que, a pesar de todo, empapa las páginas de este libro.

¡Aguas!

Serpenteaba por una de las tantas carreteras de la muerte en Michoacán. Cada curva era una escena de asesinato o balacera. Precipicio abajo, pasaba el rastro de un río. El camino llevaba a Acahuato, “lugar del agua”, pero todo ahí estaba reseco. Los pocos que se atrevieron a hablar contaban que el cártel de turno ya no secuestraba ni mataba tanto. Ahora, los asfixiaba. Se había apoderado del único ojo de agua, y para usarla en sus casas y cultivos, debían obedecer. El agua como arma de guerra. “¡Aguas!”, me susurró el cura que me llevó hasta Acahuato. Había un tipo con pistola detrás nuestro. Tenemos que irnos ya, al igual que se fueron centenares de familias, dejando el pueblo casi fantasma.

En dos tercios del territorio y de los hogares mexicanos falta agua. Más de 80 millones de personas abren la llave y muy pocos días sale agua, si es que sale. La acuciante escasez ha vuelto al líquido un bien preciado. Un negocio, como cualquier otro en el país, corrompido por los gobiernos,

sobreexplotado por las grandes empresas y disputado por el crimen organizado. El Papa Francisco dijo que la Tercera Guerra Mundial sería por el agua. ¡Aguas! En México, esa guerra comenzó hace tiempo. Tal vez se confunda con las muchas violencias que asolan al país, pero ahí está: en la masacre en un manantial, en el secuestro de pipas, en la ejecución de ambientalistas, en el asalto de pozos, en el desplazamiento forzado de campesinos.

Cuando el agua se acabó, los vecinos de Georgina bebieron el sobrante del riego en el desierto de Sonora. Doña Carmen en Oaxaca y los productores de Chihuahua se alzaron para frenar el saqueo. A Óscar lo mataron en la frontera norte por denunciar el monopolio. A Ricardo, por negarse a enviar unas pipas a una barriada capitalina cooptada por pandillas. Los hijos de Francisco tuvieron que abandonar la Montaña de Guerrero, porque su siembra se marchitó. Alberto se siente acechado por revelar que las macrogranjas de cerdos infestan los cenotes de Yucatán. A un biólogo de Monterrey lo amenazaron de muerte. Muchas de las voces que relatan la lucha por el agua son anónimas. Por terror, porque todavía quieren sobrevivir para seguir en su lucha de alguna manera.

Esta investigación en terreno recorre 12 de las zonas más convulsas para sumergirse en el conflicto por el agua, sus causas, impactos y, sobre todo, las personas que aún resisten. Siempre hay alguien que se juega la vida para defender el agua, la tierra o su empleo. Al fin y al cabo, se arriesga para sobrevivir. Por eso México es el país más letal para quienes protegen el planeta.

La sequía es un fenómeno natural, pero esas muertes y la crisis hídrica no lo son. Los gobiernos se sacuden su responsabilidad y quieren hacernos creer que se trata de algo irremediable, que pasa en todo el mundo y que es obra del cambio climático. ¡Aguas! Hay suficiente agua, pero mal

gestionada, con poco presupuesto y acaparada por unos pocos. Casi la mitad del agua se pierde en fugas de tuberías sin reparar. Un 70% del volumen de aguas concesionadas está en manos de 2% de los titulares. La llamada *hidrocracia* —terratenientes, multinacionales y familias acaudaladas— controla la distribución, los recursos públicos y los precios del agua. Un poder cada vez mayor para enriquecerse y dominar poblaciones.

Enfrente tienen a los municipios, a quienes la Constitución ha encomendado el servicio de agua potable. Del nivel de gobierno más frágil y maleable depende que la gente pueda beber agua. El ser humano puede vivir de tres a cinco días sin agua. Nadie, o al menos ninguna comunidad, ha muerto de sed en México. Los hogares se arruinan antes o dejan de comer para comprar un garrafón. Mientras, las embotelladoras multiplican sus ganancias. Los gobiernos siguen mirando hacia otro lugar hasta que el desabasto toca la puerta de los barrios acomodados de Monterrey o se desborda en Ciudad de México antes de unas elecciones.

Entonces, las medidas de urgencia son perforar más profundo, bombardear las nubes, entubar desde más lejos, construir acueductos. ¡Aguas! En definitiva, sacar el recurso de otras partes y seguir agotándolo. La colecta de agua de lluvia en las azoteas es un paliativo. Aunque se lograra instalar tinacos en todas las viviendas, su tratamiento es demasiado costoso. Y si no llueve, el problema es el mismo. La solución pasa por fabricar agua y sólo los bosques sanos pueden hacerlo.

Los grandes árboles, como pinos o encinos, limpian la lluvia y facilitan su filtración bajo la superficie. Además, generan la humedad que favorece la formación de precipitaciones. Por el contrario, algunas plantaciones como el aguacate, la nuez o la alfalfa para alimentar al ganado, requieren grandes cantidades de agua y aceleran la desertificación.

Otros, como los agaves para destilar tequila o mezcal, erosionan el suelo y dejan los cerros como toboganes. Las lluvias se escurren rápidamente y se pierden. Esos son sólo los daños. ¡Aguas! El 75 % del agua de México se destina a la agricultura. Y mucha de esa cosecha se va a Estados Unidos.

Las autoridades nos reclaman que ahorremos agua, y bien que hacen, pero no es la principal solución. Nos hemos dado cuenta de la emergencia y recién empezamos a cerrar la llave de la regadera o reutilizar algunos baldes. Sin embargo, todavía no hemos tomado conciencia de nuestro consumo general y el gasto de agua que supone. Una persona necesita unos 100 litros de agua al día para beber, lavarse y limpiar la casa. Alrededor de cinco o seis cubetas. ¡Aguas! Para producir un litro de Coca Cola se usan 69 litros de agua y para una tableta de chocolate o una hamburguesa, 2 400 litros.

Muy a pesar de todo eso, se abren refresqueras, cerveceras, minas y demás industrias a menudo en zonas con baja disponibilidad de agua. Todas esas concesiones, además, operan sin ningún tipo de vigilancia y chupan cuánta agua desean. El organismo encargado del recurso hídrico, la Conagua, sólo dispone de 141 inspectores para cubrir 427 mil explotaciones. Tampoco se invierte en estudios para conocer la calidad del agua, que, al extraerse cada vez a mayor profundidad, contiene más metales pesados. A nadie le interesa reconocer que su gente se enferma por el agua contaminada. El costo político sería notable y el costo económico para resolverlo, aún mayor. México debería desembolsar 1.3 puntos de su PIB cada año para atender los problemas hídricos que han sido descuidados desde siempre. Esto equivale a casi todo el gasto en seguridad, justicia y el INE. Un tercio del IVA recaudado.

Quien sí invierte en el agua es el sector financiero. Varios bancos han adquirido concesiones en zonas donde se prevé

que a futuro será rentable comerciar el agua. ¡Aguas! Los tres poderes del Estado mexicano tienen pendiente una ley nacional rotunda para frenar la sangría de sus aguas y, a la larga, de su soberanía. Pero, nadie quiere soltar su pedazo de pastel. Entretanto, seguiremos peleando por la pipa en las periferias de las megalópolis, se manifestarán en las comunidades de Puebla o Querétaro, o se darán bala en los cerros de amapola por unas cuantas hectáreas o un riachuelo. Los más privilegiados podremos escoger un domicilio cercano a una fuente de agua, como en el poniente de la Ciudad de México, tal y como escogían dónde asentarse los pueblos en la prehistoria.

Pero sólo nos salvaremos unos cuantos años más. La sequía es imparable, siempre irá a peor. Podemos mitigarla, pero es imposible detenerla. Tendremos menos agua en todo el mundo. En Barcelona acaban de aplicar cortes al suministro y un tercio de los sembradíos en Europa están en peligro. La crisis no es exclusiva de México, dirán, pero su emergencia es mayor que en muchos otros países. ¡Aguas! Los conflictos por el vital líquido se recrudecerán. ¡Aguas! La Tierra nos pidió auxilio y no la escuchamos. ¡Aguas! Estas páginas son otro grito de alerta, seguramente tardío, porque ya tenemos la mierda encima. Es probable que ni nosotros ni nuestros nietos vivan la temida “hora cero” del agua, pero esto se va a poner feo. Cuando eso suceda, será de ayuda saber que la carencia reventará nuestros límites, que hay gente que da su vida y resiste, que unidos se combate el robo del crimen y de las transnacionales, y que se aprieta más al gobierno. Será bueno saber que no todo está perdido; saber lo que pasó en muchos lugares de México, cuando el agua se acabó.



La jungla de asfalto capitalina

El pipero

IZTAPALAPA | CIUDAD DE MÉXICO

El axolote regenera sus extremidades e incluso su corazón y cerebro. El anfibio está críticamente amenazado por la pérdida de las chinampas, un ecosistema de la capital mexicana único en el mundo. Para el pueblo xochimilca, el axolote encarnaba a uno de sus dioses y, a través de él, medían la calidad del agua de sus canales. Creían que el día que se extinguiera esa especie de dragón, se acabaría la humanidad. Quedan menos de doscientas de esas salamandras divinas.

La vastedad de Ciudad de México se puede magnificar desde el avión, que sobrevuela durante 20 minutos la mancha de cemento. El Valle de México es la cuarta zona metropolitana más extensa del mundo y la más densamente poblada de América. La distancia del vértice norte al sur es de 100 kilómetros. El tiempo para cruzar una de las urbes con peor tráfico del continente puede superar las tres horas. En medio de esa congestión, sobre Ermita, la principal arteria de Iztapalapa, asaltaron a Margarito Mirafuentes un mediodía acalorado por el bufido de los motores. Dos muchachos se treparon a las puertas de la cabina y lo encañonaron, mientras un tercero se subió al tanque para comprobar si transportaba agua. “¡Ya valió madres! ¡Ya te la sabes! No te pongas al brinco que sabes cómo termina. Aquí el que pierde es

el patrón, tú sólo tiras el agua”, le gritó uno de los ladrones, de no más de 18 años. A punta de pistola, los hampones guiaron al conductor durante 15 minutos hasta adentrarse por un callejón en Santa María de Aztahuacan, donde descargaron el líquido en tres viviendas de la barriada. Otros vecinos aprovecharon para llenar algunas cubetas. Luego, lo dejaron marcharse sin broncas.

Margarito lo cuenta relajado. No fue la primera ni la segunda vez que le sacaban una pistola, aunque otras veces sólo fue por algún pleito con otros conductores. “En esta ciudad ya no puedes ir de broncado, porque no sabes quién es el otro. Cualquiera trae un arma”, dice. Por eso ya ni siquiera carga el bate y el cuchillo que antes utilizaba para defenderse. Más que miedo o enojo, sintió impotencia de que eran “puro chavos” y también por las fechas del incidente. Fue en los días posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017, que rompió partes de la infraestructura hídrica y provocó la primera gran crisis por cortes de suministro en la Ciudad de México. (Nadie imaginó que ese desabasto sería crónico). Los atracos a camiones cisterna obligó a las autoridades a organizar convoyes escoltados por patrullas policiales.

Desde entonces, la retención de piperos se afianzó como práctica delictiva en el oriente de la megalópolis, con una escasez agudizada porque el recurso proviene del extremo opuesto.

Iztapalapa es la alcaldía más poblada y densa de la capital con casi dos millones de habitantes, de los cuales sólo una cuarta parte cuentan con agua corriente las 24 horas del día. El acceso al vital líquido es un lujo en estos confines, acostumbrados a la distribución por tandeos, donde el propio López Obrador reconoció que el desabasto es un problema añejo y su solución, una deuda histórica. El ayuntamiento perforó 60 nuevos pozos de absorción y dispuso

120 mil viajes de pipas en apenas seis meses, pero ni así alcanzó para la mayoría de iztapalapenses.

Después de su breve secuestro y hurto del agua, la única medida de seguridad que Margarito pudo tomar fue moverse durante la noche, cuando el tráfico fluye y resulta más difícil emboscarlo. También mantiene comunicación constante en un grupo de Whatsapp con el resto de camioneros para alertarse mutuamente sobre la presencia de asaltantes. Pese a todo, gatilleros golpearon y robaron a varios de sus colegas que se han resistido a obedecer. Si alcanzan a avisar por radio y algún compañero llega, al menos la madrizo no se alarga tanto. En otras ocasiones, los propios vecinos de una misma cuadra han rodeado su camión y lo han retenido, tanto a él como al encargado local del reparto, como medida de presión para que envíen otra pipa. Sólo entonces o hasta que acude la fuerza pública a dispersarlos, quedan libres. “Esto es la ley del más fuerte. Toca cuidarse y cuidarnos entre gremios”, dice. En la jungla de asfalto, cada especie adopta sus propios mecanismos de supervivencia.

Desde adolescente, Margarito pasa el día recorriendo la alcaldía más violenta de Ciudad de México, y desde hace 18 años —la mitad de su vida— lo hace a bordo de El Consentido. Así bautizó a su camión cisterna de cabina amarilla, el color preferido de su madre, Doña Gaby. Su amor por ella es devoto. La mujer abrió una modesta purificadora hace 30 años y levantó un emporio de la distribución de agua mientras criaba a 10 hijos. Los seis varones tienen ahora dos o tres pipas cada uno, y las cuatro hijas asumieron el relevo en la regencia del establecimiento. Además de rifada, la Doña era visionaria, ya que fue de las primeras que predijo la crisis del agua e invirtió en ese negocio.

Al igual que El Consentido, ambas puertas de todos los vehículos de Los Gabis —como conocen en el barrio a la familia— están rotuladas con un escudo y el emblema Dinastía

Gaby. Su madre fue una reina en el hogar y una patrona en el salvaje rebusque ciudadano. A Margarito se le humedecen los ojos al nombrar a su madre. “A mi jefa la conocían por donde quiera que andaba. Todavía ni creemos que ya no esté. Era todo para nosotros”, dice. A Doña Gaby no la mató el cansancio ni la violencia, sino el Covid. Eso es lo que más enoja a su descendencia. Margarito se tatuó en el brazo izquierdo El Consentido y una silueta de él velando la tumba de su madre. Desde entonces, ha agregado una plegaria a la persignación de cada madrugada. “Señor, protégeme por estos caminos y llévame a salvo a casa. Señor, por favor, cuida a mi madre allá donde esté”, reza antes de agarrar el volante. El retrovisor es un altar improvisado con un rosario y una imagen de la Virgen de Guadalupe.

En los momentos bajos, la matriarca solía reunir a todos sus hijos los domingos, les preparaba un pozole muy picoso, y con el estómago lleno les soltaba un discurso que siempre terminaba con “esfuerzo y fe”, “esfuerzo y fe”. Con esa consigna en mente, arranca Margarito a las cuatro de la madrugada para ser de los primeros en estacionarse en la fila del pozo asignado para cargar el tanque. El depósito se abre hasta las siete. Esas tres horas de antelación significan un viaje adicional, unos mil pesos (50 dólares). Durante la espera, Margarito se echa una siesta, desayuna unas contundentes tortas y conversa un poco con otro de los piperos, el mayor de sus tres hijos. Con apenas 17 años, Osiel dejó la escuela secundaria durante la pandemia para acompañar a su padre. Se le complicó seguir las clases virtuales y, en palabras de su propio padre, tampoco era buen estudiante porque “nació ochomesino y no le da la cabeza para más”. No hay piedad dentro del linaje ni del negocio, como tampoco la hay en los submundos de una metrópolis de más de 22 millones de personas. El desprecio es una forma de entrenamiento. El imberbe no tendrá un diploma,

pero ya tiene una pipa llamada Junior, que le permite ganar su propio dinero, lo único que aquí vale. Margarito y su hijo Osiel se mueven juntos en sendas pipas para darse cierta protección.

El camión avanza a trompicones por los estrechos cruces del extrarradio, de esa anarquía urbanística que en cada esquina amaga con arañar la cisterna. Margarito maneja siempre con una mano en el cambio de marchas, para acelerar rápido al enfilear cada nueva calzada y no dar tiempo a la parroquia local a salir de sus viviendas. El rugido del viejo motor, sin embargo, atrae a los vecinos, que se asoman a las ventanas para suplicar que se detengan en su puerta. El paso del tanque rodante se contempla como la procesión de un santo. “La gente se pone muy contenta de recibir el agua y siempre te recompensan con un taco o un refresco. Hasta nos han invitado a cumpleaños. Con el agua la gente brinda toda la confianza. Hasta los perros nos quieren”, bromea el conductor. “Es chido andar en el camión, porque siempre vas a lugares nuevos y conoces gente diferente”. La mayoría de patios en el “barrio bravo” están vigilados por un perro de raza peligrosa, que a veces incluso cuida la cuadra completa desde alguna caseta que le ponen en la acera. Pero ni ellos se atreven a morder a los piperos.



Al escuchar el freno de la pipa, Marta Romo abre el pórtico metálico y llama a toda la familia. Salen hasta nueve personas, entre adultos y muchos niños. Más que una casa, es un vecindario laberíntico de minúsculos cuartitos que manufacturaron desordenadamente a medida que crecía el elenco y los ahorritos para unos cuantos bloques de hormigón.

“Ahorita ya teníamos dos semanas sin agua. A veces vienen las pipas y otras no. Muchas veces tenemos que ir a pedir las hasta el centro (de la demarcación) y hacer muchas horas de fila desde temprano para anotarnos en la lista del reparo”, cuenta la mujer, extasiada de alegría.

El esposo de Marta y sus tres hijos ayudan al pipero a estirar la manguera hasta el garaje para llenar un inmenso tinaco de 2 500 litros y varios cubos de basura. Luego, se apresuran a volar la manguera por el terrado para cargar otros tres depósitos. El tiempo cuenta para evitar que otros vecinos les recriminen por la tardanza. Nadie quiere ser el apestado de la cuadra y quedarse fuera de las ayudas sociales. Los niños traen baldes, cubos, cubetas y hasta floreros para aprovechar hasta la última gota de oportunidad. La cisterna del camión se vacía en ese domicilio. “Esto es un milagro. A mí me llega el camión una vez al mes y eso a veces. A menudo (los choferes) nos piden plata para dejarnos el agua”, se queja Marta. Ese recaudo es ilegal, puesto que la distribución es un servicio público y, por tanto, gratuito.

Pese a que el 99% de los capitalinos cuentan con agua entubada, tan sólo 6 de cada 10 la reciben a diario. Se desperdicia un 40% del líquido en fugas, debido al abandono de la débil red hidráulica. Varios gobiernos han pasado años sin reparar los daños causados sobre todo por el continuo hundimiento del subsuelo de la ciudad, asentada sobre un lago. El Zócalo, por ejemplo, se hundió ocho metros en el último siglo.

“¿Cómo una ciudad con un acuífero debajo puede sufrir por agua?”, me preguntan colegas de visita. El 60% del suministro se extrae de ese subsuelo con pozos y el otro 40% proviene del Sistema Cutzamala, un entramado de presas cuyo almacenamiento estaba al 37% en marzo de 2024, cuando se escribieron estas líneas. Y los niveles van en descenso. El gobierno de la ciudad y el federal están anunciando

inversiones millonarias para sacar agua de donde sea, más lejos o a mayor profundidad, más o menos contaminada, ¿qué importa? Ni siquiera se sabrá hasta dentro de muchos años, cuando se consigan fondos para realizar estudios independientes. Lo que importa es frenar la crisis hoy y hasta las próximas elecciones; luego, ya se encargará otro u otra. Me decía uno de esos científicos que, con los años y las emergencias, se vuelven ambientalistas, que gran parte de la escasez se debe a la precaria infraestructura hídrica. “Como está bajo tierra, no se ve, no da votos. Y si no da votos, no invierten. Y son obras que requieren muchísima inversión”, resumía.

Margarito tarda media hora en aprovisionar de agua al inquilinato. Los niños ya se han puesto el bañador y juegan con el chorro que salpica por todas partes cada vez que mueven la manguera de recipiente. La pipa ha traído la fiesta al hogar. Será la celebración familiar del mes. Pero la mujer más anciana matiza el júbilo: “El agua que sale de la llave está sucia. Tiene mucho polvo. La que nos traen de la pipa está un poco mejor, pero igual está mugrosa”, asegura. Es cierto que se ve algo amarillenta. Nadie presta atención. Para entonces, alrededor del mediodía, el marido de Marta ya se ha abierto una caguama y se ha quitado la camiseta para limpiarse el sudor. Cuando le digo que la capital mexicana es una de las 11 ciudades del planeta con mayor probabilidad de quedarse sin agua en los próximos 40 años, que algunos expertos vaticinan que el recurso del Cutzamala podría agotarse en los próximos cuatro meses y le pregunto por la “hora cero”, me abre otra caguama y me pide que me relaje.



Cuando la familia de Margarito se mudó del interior del país a la capital, Iztapalapa sólo era unos cerros de milpas que desde los años sesenta ocuparon miles de campesinos. Medio siglo después es uno de los mayores arrabales de Latinoamérica y el “tiradero” de la Ciudad de México. Incontables grafitis y fachadas coloreadas maquillan un océano de obra gris, alambres, ventanas enrejadas y varillas de la esperanza —en el argot humanitario, las barras metálicas que se dejan al descubierto para autoconstruir a futuro una nueva planta—. En las últimas dos décadas, la masiva llegada de personas desde colonias céntricas, junto con algunos maleantes, sumado a la endémica pobreza, disparó la delincuencia. Iztapalapa estuvo entre la decena de delegaciones más sangrientas de México desde que existe un recuento y solamente en los dos últimos años ha salido de esa lista gracias a las acciones de la administración de Morena.

Pese al lastre del mote de “Iztapalacra” y la vergüenza de algunos de dar su dirección a la hora de buscar empleo, al barrio nunca le han faltado huevos, como dirían sin rodeos. No hay lugar para eufemismos ni literatura en unas calles asfaltadas por sus primeros pobladores, los mismos que también dieron vida a reconocidos personajes de la cultura popular mexicana.

En esa vorágine de violencia, abandono y resiliencia, Ricardo Galicia Serralde se movía como pez en el agua. Trabajaba como “enlace territorial”, un puesto creado por Morena en las alcaldías que gobierna para brindar atención ciudadana en la calle. En concreto, Ricardo se encargaba de gestionar el reparto de pipas en la colonia Santa Cruz Quetzalcóatl, en el corazón de Iztapalapa. El 7 de diciembre de 2020, dos jóvenes en motocicleta le dispararon seis veces a quemarropa bajo la carpa donde coordinaba el recorrido de los camiones. Todo apunta a que había recibido varias amenazas para enviar pipas a ciertos lugares y lo mataron

por negarse. “No fue asalto, parece que fue por problemas vecinales que se fueron directo con él”, soltó uno de los policías con el cadáver aún tibio. Al parecer se recabaron pistas en esas primeras averiguaciones, pero las indagatorias siguen estancadas más de tres años después.

Desde el punto donde le quitaron la vida se ve el volcán que delimita la urbe, un par de talleres mecánicos y un multifamiliar. Una avenida anodina donde el asesinato no dejó ni una cruz, pero sí muchos chismes. “Lo mataron por el agua. Aquí las que controlan el agua dicen que son unas mujeres, pero vienen de allá de las invasiones (asentamientos irregulares)”, dice un tendero. Dos de sus clientas se marchan del local al oír el asunto de la conversación. “Las que operan (la distribución ilícita de agua) son la Tania, la Lety y Liliana”, le dijeron algunos vecinos al periodista de *La Prensa*, Alberto Jiménez, durante el levantamiento del cuerpo de Ricardo. El reportero me explica que quiso darle seguimiento tanto al homicidio como al robo de agua en el oriente de la ciudad, pero los directores del diario local le ordenaron que dejase a un lado el tema. Según me insinúa, el entramado del negocio esconde mayores intereses.

Uno de los funcionarios de la alcaldía, colega de Ricardo, me confirma que anteriormente ya lo habían secuestrado y amenazado para exigirle la entrega de pipas, como denunció su cónyuge. Ivone llegó a la escena del crimen desencajada, aunque en vez de lágrimas, soltó gritos para recriminar el papel de los agentes. Tuvieron que sujetarla entre dos personas para evitar que se abalanzara contra el cordón policial. La mujer subrayó tres días después que su marido fue ultimado por “ser honesto y no dejarse corromper”.

Él no sabía hacer política, por eso le pasó lo que le pasó. Fue uno de los políticos que quieren un lugar de la territorial, el que lo mandó matar (...) Trabaja con gente muy sucia de la alcaldía Iztapalapa y ahí me lo mataron. Lo asaltaron

una vez, pero él siguió adelante y no metió la denuncia, porque se lo impidió su trabajo, la licenciada Clara Brugada Molina (la alcaldesa), le dijo que no”, le contaba Ivone al periodista de *La Prensa* en el patio de su casa donde velaban al difunto. “Es una lucha política que hay en Iztapalapa. Quieren ganar territorio y el territorio era de mi marido; sabían que no iban a poderlo callar, que no lo iban a poder calmar porque era muy bueno desempeñando su trabajo (...) Los hago responsables a todos esos políticos que están queriendo un lugar en la alcaldía. Los hago responsables de lo que pasó a mi marido y lo que le pase a mi familia”.

En el entierro la familia también advirtió que, de no haber avances en la investigación por parte de la fiscalía, iban a manifestarse y a bloquear vialidades. Pero, a la carpeta le han salido telarañas y no ha habido ninguna reclamación. Logré contactar a varios allegados y familiares, pero nadie quiso hablarme. En una de las llamadas con la hermana de Ricardo, sólo deslizó que habían optado por pasar página.

Siete meses antes del asesinato, el diario *Reforma* publicó un reportaje bajo el título “Lucran con el agua en contingencia”, donde se acusaba a Ricardo de estar detrás del lucro del agua. “Algunos de los piperos o los que los dirigen están ahí beneficiados. Ya se empezó a identificarlos. Uno de esos, aquí en la territorial es Galicia Serralde”, escribieron, citando a “una fuente cercana a la alcaldía”. El mismo texto recoge otros testimonios que aseguran haber tenido que pagar entre 100 y 300 pesos (de cinco a quince dólares) para recibir una pipa de agua a cargo de las vecinas antes mencionadas: Tania, Leticia y Liliana.

Ricardo era parte de la cuadrilla de Paco Diego, director territorial de Santa Cruz Quetzalcóatl. Se le congela el rostro y le treme la mirada de lástima al nombrarle a su colega. (Los servidores públicos con un rango algo superior se distinguen de los subalternos por engominarse el pelo y

peinárselo hacia atrás; parece algo indispensable para que los tomen en serio). “Ricardo era un buen tipo. Uno está expuesto a muchas cosas en estas zonas tan conflictivas. Él se dedicaba a todo, no sólo al agua, era una especie de líder vecinal”, destaca el jefe. “No nos dio miedo el asesinato, pero sí alguna posible represalia de la esposa, que reaccionó muy violenta”.

A los enchalecados, los funcionarios que rondan por las calles, no les inquietó tanto la amenaza de los parientes de Ricardo de armar un alboroto, sino el señalamiento directo contra la autoridad de Iztapalapa. Ricardo vivía en Xochimilco, una alcaldía colindante bajo el influjo de otro cártel en el trasiego de agua. El temor de los funcionarios era que la familia recurriera a ese grupo para cobrarse su venganza. Al parecer no fue así, pero tampoco hay nada evidente que explique el silencio de la familia.

A pesar de ser el último reducto del sistema lacustre, Xochimilco sufre parecidos problemas de suministro. Una de sus colonias, San Gregorio Atlapulco, se movilizó en diciembre de 2022 para frenar la entubación de sus canales, que iban a desviar el recurso hacia otras partes. Centenares de antidisturbios reprimieron duramente a los manifestantes que bloquearon durante varios días una de las entradas al barrio. “El agua es del pueblo y para el pueblo”, se leía en una de las pancartas. Al día de hoy, las obras siguen paradas frente a la latente vigilancia de la comunidad. “Nos quieren quitar nuestra única fuente de agua para llevársela a las zonas ricas, ¿por qué siempre tenemos que pagar nosotros?”, reclama una de las vecinas que participó en las protestas. Los hogares capitalinos más pobres consumen cinco veces menos agua que los más adinerados.



Dos días después del homicidio de Ricardo, detuvieron a 26 jóvenes supuestamente involucrados en el tráfico de agua robada y la extorsión a piperos. Todos pertenecían al Sindicato Libertad, dedicado en un inicio a la recolección de cascajos en Ciudad de México. Una década después ya controla múltiples actividades en 20 estados del país. La propia jefa de la ciudad, Claudia Sheinbaum, declaró que no se trata de una organización gremial, sino de extorsionadores. En Ecatepec, otro de los focos rojos en el límite nororiental, sitiaron varios pozos de agua potable para presionar al alcalde a reactivar su contrato de distribución. También han formado escuadrones de pipas para cortar calles frente a comisarías y forzar, con éxito, la liberación de varios de sus integrantes arrestados.

El pseudosindicato entró al negocio del agua durante el terremoto de 2017. Fue en esa carestía que se dieron cuenta de las posibilidades de la crisis hídrica. Cuando los centros comerciales, oficinas o fábricas contratan a una empresa proveedora de agua, la banda exige a dicha distribuidora una cuota de afiliación por dejarles trabajar. Si se niegan a pagar la tarifa impuesta, les queman los camiones, como se ha visto en varios videos difundidos en redes sociales. En paralelo, coaccionan a los dueños de los negocios para que los contraten y así cobrarles el doble. Un pipero declaró a Televisa que la extorsión ascendía a 200 mil pesos mensuales por surtir a Reforma 222, uno de los *malls* más céntricos y concurridos de la ciudad.

Varios choferes, por no decir todos, han sufrido algún tipo de amenaza o extorsión por parte del Sindicato Libertad. Ninguno quiere dar su nombre y piden incluso ocultar el color de su camión. “Eso sí está caliente. Para mí era mejor quedarme con la entrega a tienditas que meterme en esos líos. A muchos compañeros les robaron la pipa, se la incendiaron, los fueron a buscar a sus casas, los madrearon”, me explican.

Para que haya negocio debe haber demanda, es decir, escasez. Además de la sequía en el Sistema Cutzamala, el desabasto se acentuó en el oriente durante varios años después de tronar la planta potabilizadora y la batería de pozos que proveían agua por Tláhuac, al sur de Iztapalapa. Algunos ambientalistas, expertos y demás conocedores anónimos coinciden en que los daños fueron provocados adrede, supuestamente por los grupos criminales que operan en esa alcaldía del extremo suroeste. Los mismos que también obstaculizaron las obras de rehabilitación.

Para acceder al agua —un bien público bajo resguardo— el Sindicato Libertad y demás cárteles realizan tomas clandestinas en tuberías o pozos. Se estima que alrededor del 15% de las más de dos millones de conexiones hidráulicas son clandestinas. Para taladrar una tubería de agua grande se necesitan herramientas y experiencia al alcance de muy pocos, en concreto, de los técnicos al servicio del organismo público de aguas y saneamiento. Es un secreto a voces, como sucedía en el *huachicol* de gasolina, que los propios empleados estarían haciendo fincas, en la jerga laboral, “trabajos por fuera” de sus labores. Esa ordeña ilegal alcanza el millón de litros diarios, equivalente a un centenar de pipas medianas, el doble del volumen que suelen destinar al abastecimiento diario de Santa Cruz Quetzalcóatl.

Los Gabis han terminado el último de los tres viajes que realizan en época de calor, cuando aumenta la escasez. Regresan al módulo para sellar sus comprobantes con los que luego pasarán por la alcaldía para recoger su valor correspondiente. “Es mejor chambear para la delegación. Ganas menos y se demoran en pagar, pero no andas peleando con nadie. Si te asaltan, tampoco pierdes tanto, porque no le invertimos nosotros al agua”, dice Margarito. Al día se embolsa unos 2 mil pesos brutos con la alcaldía y por cuenta propia, más de 2500. Al mes la diferencia supera los 10 mil pesos (cerca de 500 dólares).

En el bulevar Manuel Cañas se ubica la mesa plegable donde tres operarios gestionan con listas y mapas fotocopiados las 30 pipas que suelen recorrer la colonia. En algunas emergencias han tenido que requerir hasta 80 camiones. La alcaldesa Clara Brugada instaló decenas de focos para iluminar el camellón, una de las transformaciones para mitigar la violencia contra las mujeres. Pero, de día y sin agua, ninguno de los vecinos se acuerda de esas mejoras. Varias mujeres, la mayoría de avanzada edad, se acercan a los jóvenes de chaleco granate para exigirles una pipa. Todas afirman que llevan entre una y tres semanas sin recibir agua y que han tenido que comprar a pipas privadas. “A veces la gente viene muy agresiva. Nos amenazan con cerrar alguna calle si no les enviamos agua. Pasan mucha angustia, poco podemos hacer”, dice uno de los enchalecados. Una patrulla policial custodia ese punto de coordinación.

Por el afavelado suburbio despuntan los tanques sobre las azoteas, sostenidos por enclenques patas de mampuestos prefabricados que elevan todo lo posible el agua para que salga a mayor presión. Un cielo de Rotoplas que exhala toda la desesperación del segundo mayor aglomerado de gente del continente americano.



La última cerveza de Óscar

El ambientalista de Tecate

JUNTAS DE NEJÍ | BAJA CALIFORNIA

La salvia blanca es una planta silvestre del sur de California. Los pueblos yumanos la empleaban para curar enfermedades gástricas y respiratorias. Daba a sus antepasados la energía para caminar largas jornadas por el insufrible desierto.

“¿Y las carnitas y la caguama?”, gritaba Óscar Eyraud Adams con los brazos abiertos al recibir a sus visitas. A Norma, su madre, se le dibuja una sonrisa al recordar aquella cálida bienvenida, mirando la puerta por donde su hijo se asomaba. Pero él ya no sale a abrazarla. Lo acribillaron el 24 de septiembre del 2020.

El joven vivía solo en un cobertizo a las afueras de Tecate, ciudad fronteriza a una hora de Tijuana. Su auto está volteado y despiezado a un costado del camino de terracería que lleva hasta la remota vivienda. Apenas sobrevive uno de los cactus que decoraban la cerca de alambre. En la fachada salmón, que solía tener repleta de carteles revolucionarios con imágenes de Emiliano Zapata o Pancho Villa, tan sólo cuelga un lagarto de barro. Norma acaricia la figurita como si fuese el rostro de su hijo. Nunca lo vio enojado, dice, con su humor le daba felicidad. “Separaba mucho los

espacios. Si hablaba de trabajo, era serio. Si estaba con amigos, era el más carrillero (bromista)”, cuenta. La condición que pone Norma para hablarme es que omita su apellido.

En los 20 metros cuadrados de morada quedan los resortes de dos camas —una de ellas, para hospedar a cualquiera que llegase—, las piedras de una cocina a leña y una carcomida cajonera donde guardaba varios libros de Eduardo Galeano, su autor de cabecera. Óscar se dedicaba a leer, al cultivo familiar y a la defensa del territorio y el agua. Al parecer, por eso último lo mataron.

Una tarde de jueves, dos camionetas con vidrios polarizados se detuvieron frente a la casa de su tío, donde Óscar vivía algunas temporadas, a un par de calles de la alcaldía de Tecate. Cuatro hombres irrumpieron con armas de calibres diversos y vaciaron sus cargadores. Cuando su tío escuchó la ráfaga, pensó que Óscar estaba en el supermercado, pero, al salir del baño, encontró su cuerpo tirado en el traspatio. Tenía 34 años y 13 balas metidas en la cabeza y el torso. Los sicarios se llevaron su celular, cartera y una libreta con todos sus apuntes. (Siempre cargaba los documentos en papel, porque pensaba que el computador era más fácil de robar.)



Óscar nació en Juntas de Nejí, en la comunidad kumiai a una hora chaparral adentro desde Tecate. A los dos años su familia se mudó a Tijuana buscando la dignidad en una maquila. Se equivocaron y regresaron a Tecate, urbe pero no tan agresiva. A menudo se escapaba de casa para asistir a la telesecundaria en el cibercafé. Era el mayor y el más inteligente de los seis hermanos, a quienes siempre insistió

en que estudiaran, como lo hizo él, ingeniero agrónomo. Su madre murió cuando era pequeño y casi todo lo aprendió de su abuelo. Hace una décadas, regresó a su humildísima ranchería para poner en práctica la combinación de esos saberes ancestrales y los conocimientos universitarios. También para gozar de la tranquilidad de tener a los vecinos más próximos a varios kilómetros. “No se creían que era de rancho, porque era alto y muy güero (blanco), como si los campesinos sólo tuviesen que ser morenos”, dice Norma. Detrás de su apariencia tímida, su madre describe a un tipo guasón, afable y confianzudo.

“Yo no soy de Nejí, Nejí es mío”, acostumbraba a decir Óscar para enfatizar que llevaba a su comunidad en las venas. “Yo soy indio y a mí nadie me va a quitar eso”, seguía. Ese mismo arrojó lo empujó a cultivar, en medio del semidesierto, nopal, calabaza y frutales. La huerta nunca rindió demasiado y siempre iba justo de dinero. Por eso, quiso cuadruplicar la siembra a dos hectáreas. No halló riego para ello. Detrás de su casa hay un ojo de agua y dos pozos que los hermanos cavaron con pico y pala sin mucha fortuna. Entonces, Óscar presentó una solicitud a la Conagua para perforar otro pozo más hondo. Fue el principio del final: al negarle la autorización, se puso a investigar y averiguó quién poseía y utilizaba el agua de los kumiai.

Un mes antes de su asesinato, el ambientalista señaló a la cervecera Heineken como la causante de la crisis hídrica en la zona. “Todo esto desapareció (una sembrado de verduras) por falta de agua, porque no tenemos suficiente agua, no tenemos permiso para la extracción. Quisiéramos que se nos considerara antes que a las grandes empresas consumidoras de agua”, reclamó en entrevista con el diario *Reforma*. La trasnacional holandesa dispone de un abasto anual de 1 892 160 metros cúbicos de agua mediante 13 pozos, de los que 11 ya están abatidos. Ese volumen es casi el mismo que

reciben los 100 mil habitantes de Tecate, que a menudo sufren cortes en el suministro.

“Esos títulos (de agua) deberían ser para la comunidad indígena antes que para las empresas y las personas que tienen el poder adquisitivo sólo por tenerlas y ni las usan (...) Eso pone en peligro la cultura, a esta comunidad”, reprochaba Óscar, que aquella soleada mañana del 12 de agosto cambió su inconfundible sombrero de paja toquilla por una gorra de letras *yankees*. Los 300 pasos desde la casa de Óscar hasta el punto donde grabó esa videoentrevista se le hacen una eternidad a su madre. Se adelgazó 20 kilos desde la pérdida de su hijo mayor. Le salieron más canas, arrugas, y su mirada y sus labios se arquearon para siempre. Norma trata de maquillar esa tristeza con abundante delineador de ojos. “Hace siete años que empezó a escasear fuerte el agua. Sin agua se seca toda la cosecha, se pierde todo el esfuerzo que uno hace por vivir mejor”, dice. Entre los matojos y capas de césped que han brotado por unas recientes lluvias serpentean numerosos pedazos de mangueras que su hijo había colocado minuciosamente para optimizar el agua de riego.

En el prado donde el ambientalista hizo su última aparición pública hay varios carriles de ladrillos cubiertos de maleza. Ahí se sembraba jojoba, una planta que produce cera líquida y que daba buenos ingresos. La comunidad se sostuvo de ese proyecto desde mediados del siglo pasado hasta que, a comienzos del presente, tuvieron que abandonarlo por la sequía. Enfrente, hay una barraca de concreto y techo laminado, sin ventanas ni puertas, como una obra a medio terminar que es el velatorio. El cuerpo de Óscar no llegó a pasar por ahí, no pudieron ni velarlo. Estuvo una semana en la morgue, teóricamente para hallar pistas del homicidio, aunque todavía [cuatro años después] no ha habido ningún avance en la investigación. Uno de esos

primeros días, su madre entró enfurecida a la fiscalía y le gritó a uno de los agentes que le prestara su pistola y su placa para indagar ella misma los hechos. Sus hermanos desistieron de hacerle un funeral para prevenir que a su madre, de 65 años y diabética, se le disparara el azúcar.

Norma está convencida de que lo mataron por su lucha por el agua, ya que a mucha gente no le convenía su trabajo. “Lo mandaron a eliminar cuando empezaba a pisarle los talones a los poderosos de la región, cuando tal vez ya tenía la batalla ganada”, asegura. A finales de 2017, la directiva de Cuauhtémoc Moctezuma, el grupo que Heineken había adquirido siete años antes, comunicó su propósito de incrementar el 15% su producción en Tecate. Y para eso iban a utilizar muchísima más agua, teniendo en cuenta que se necesitan entre tres y cinco litros para producir cada litro de cerveza. En el Registro Público del Agua (Repda), sin embargo, no aparece ningún aumento del límite autorizado por el gobierno federal. Esa incoherencia era lo que escudriñaba y denunciaba Óscar. “No imaginamos que su activismo era peligroso. Esta gente hace lo que quiere, tiene abogados para todo, no había necesidad de quitárselo del medio de esa forma”, dice su madre. La cervecera anunció una inversión de 180 millones de dólares durante una visita del entonces gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, a la fábrica de Tecate. No había pasado ni un mes desde el asesinato del joven, lo que desconcertó a su familia y colegas.

Su tío José Enrique aún no ha digerido que aquel cadáver boca abajo era su sobrino, y su mejor amigo. En el comedor tiene un retrato de él junto a un cuadro con los mandamientos indios de Gerónimo, el jefe apache que combatió en la frontera a los ejércitos mexicano y estadounidense durante la segunda mitad del siglo XIX. Al hombre no le salen las palabras y se adelanta Norma: “Él era un líder para la comunidad. Se acercaban a él para que los ayudasen

a pedir programas sociales o resolver problemas. Siempre buscaban consejo y él los guiaba”. A su despedida acudió un centenar de personas.

En la cultura kumiai se celebra un ritual un año después de la muerte de alguien. Norma montó un colorido altar con el retrato de su hijo junto a alguno de los placeres que más disfrutaba: unos cigarrillos y una lata de Tecate —marca de cerveza propiedad de Heineken, que en los años cuarenta adoptó el nombre de la localidad donde se instaló—. Sus allegados cantaron y bailaron alrededor de la tumba durante 12 horas, el tiempo que tarda el alma del difunto en recorrer los pasos que dio en vida y guardarlos en tres cajas que luego se queman. La tradición manda que deben visitarse esos lugares, pero las circunstancias de transporte y seguridad no lo permitieron. En ese culto sólo pueden participar kumiai. El resto, esperaron hasta la medianoche para unirse a la familia y destapar una caguama, como le hubiese gustado a Óscar. Era una noche especialmente despejada, repite Norma, en un paisaje tan prístino que hasta dicen ver estrellas fugaces a plena luz del día.

Su madre mira hacia el cielo. No volvía al rancho desde ese día (hace cinco meses), un poco por miedo, por aflicción y por no contar con una camioneta capaz de resistir los 20 kilómetros de baches por el sendero que conecta la carretera principal con Juntas de Nejí, uno de los tres poblados kumiai, de chamizos desperdigados. No queda ni rastro de los cultivos y el agua de los pozos traseros se ha empantanado. Ninguno de los hermanos se atrevió a retomar el trabajo de Óscar, ni en el campo ni en la protesta.



El interés de Óscar por los movimientos sociales se lo despertó su tía, Yolanda Meza Calles, que vive unos cuantos kilómetros más adelante. En los tablones de su vivienda se lee “Rancho Meskuich”, su apellido en lengua originaria y una declaración de ideales. La corpulenta indígena de tez cobriza, melena densa y canosa, jeans y camisa de cuadros, es una de las pocas —si no la única— defensoras de la etnia kumiai. “Cuando llueve, cae más agua adentro que afuera”, bromea al entrar a la cabaña. El latón sobre nuestras cabezas es sólo uno más de la larga lista de problemas que sufren ella y su gente. Los alumnos del Centro Cultural de Tijuana, donde Yolanda es profesora de kumiai desde hace siete años, acaban de organizar una colecta para tapar esos agujeros. El huerto de ajos en su patio no le da lo suficiente para ponerse internet y dar clases a distancia, así que dos sábados al mes tiene que viajar a Tijuana. Los estudiantes se turnan para recogerla el viernes y regresarla el domingo. La poca gasolina que puede costear se la gasta en llevar a sus nietos al colegio entre semana. Se espera todo el día a que salgan porque no le alcanza para hacer y deshacer los 12 kilómetros de trocha.

La mayor resistencia de Yolanda es permanecer. En Juntas de Nejí sólo quedan una docena del medio centenar de familias que habitaban hace un par de décadas. Casi todas se fueron por falta de empleo, es decir, de agua para vivir del campo. En varias casuchas de alrededor viven seis de sus hijos y 14 nietos, la mitad de la comunidad. “Dicen que los kumiai estamos extinguidos, pero, aquí seguimos. Yo trato de rescatarnos”, dice Yolanda, que por la asistencia a las asambleas calcula que subsisten unas 200 personas de la etnia. Su misión es enseñar a los niños y niñas que tienen una lengua y un territorio. Bajo su porche se amontonan pupitres destartados y algunos juguetes. La fachada de madera azul está llena de dibujos y mensajes esperanzadores. Es el aula donde reúne cada julio a una veintena

de sus nietos repartidos en distintas ciudades, un campamento de verano de un par de semanas, o el tiempo que sus ahorros le alcancen para alimentarlos. Yolanda se alegra de que durante la pandemia algunos se quedaron periodos más largos. “Tienen que aprender que esta tierra es suya y que pueden vivir aquí, porque si nadie vive aquí, seguro que hay invasiones. Si ya con nosotros, nos han invadido...”, dice.

Los kumiai eran cazadores y recolectores trashumantes que se movían por el norte de la península de Baja California en busca de piñones, pescado, sombra y alguno de los pocos riachuelos. Por esa escasez de agua, las familias tuvieron que asentarse en puntos muy alejados, lo que facilitó el expolio de tres cuartas partes de sus 19 mil hectáreas originales. Los terratenientes, además, sueltan al ganado en las tierras de la comunidad, se comen el pasto, beben y ensucian el agua, degradan los suelos y los recogen una vez engordados. A la hermana de Yolanda la encarcelaron varios años por abigeato —robo de ganado—, tras hartarse de los destrozos de caballos ajenos y vender varios de ellos.

La fuerte ventisca sacude las hojas metálicas del tejado y el fragor nos sobresalta. El ladrido de sus perros y el motor de algún vehículo lejano son los únicos que quiebran el sepulcral silencio. Yolanda escucha a diario camionetas de narcotraficantes, a menudo en convoy, que pasan frente a su casa por la vereda que conduce a Mexicali, Tecate y Ensenada, puntos clave de la ruta del contrabando hacia Estados Unidos. Los árboles le impiden ver si van armados o cargan droga. Tampoco se ha fijado demasiado. Cuanto menos sepa, mejor. “Cuando nos los cruzamos (a los criminales), los saludamos sin más. No se meten con nosotros, nunca han representado un peligro. Le tengo más pánico a la Guardia Nacional”, dice. El ejército se desplegó en la zona desde el inicio del mandato de López Obrador. Usan la escuela primaria de cuartel y colocaron un retén permanente con una decena de marines armados hasta los

dientes y varios todoterrenos tácticos. Desde 2020, además, los guardias realizan cateos una o dos veces al mes. Yolanda les insiste en que no esconde armas ni trabaja para ningún cártel. Poco les importa a los militares, que siempre rompen el candado del domicilio y lo ponen patas arriba para esculcar cada centímetro, su auto y sus bolsas. A la defensora le aterra que algún día se vayan de la mano y le hagan algo a sus hijos. Cuando sale y se cruza un camión de soldados, se devuelve para que sus hijos no estén solos durante el registro. “No hay motivos para llevárselos, pero en este país no se sabe”, afirma. “¡Yo no tengo miedo a nadie!”, salta el menor, de 12 años, enfascado de impotencia. Su madre lo manda a callar de un codazo.



Kumiai significa “gente que enfrenta el agua en los acantilados”. Pero, los principales obstáculos que han tenido que superar se los pusieron los blancos. Los kumiai son el mayor grupo de la familia yumana, descritos en algunas crónicas como “los indios más olvidados de México”. Cuando los primeros misioneros arribaron a este llano árido y rocoso, creyeron que era una isla estéril y la bautizaron como “la tierra de las guerras vivas” por la bravura de los indoamericanos. Los invasores pensaron que resultaba imposible vivir en esas extremas condiciones, pero las 1 500 pinturas rupestres de la península demuestran lo contrario. Donde los españoles veían un pedrusco, los indígenas veían una persona sabia petrificada después del fin del mundo. Durante 12 mil años, los kumiai dejaron su huella en las cuevas y peñascos de la meseta que se extiende por ambos lados de la frontera. La etnia se fisuró cuando México cedió un trozo de su territorio a Estados Unidos en el siglo XIX y terminó

de fracturarse tras el atentado contra las Torres Gemelas en 2001, el pretexto para que Washington levantara kilómetros de muro fronterizo. Los kumiai quedaron divididos entre dos países y realidades: unos, protegidos dentro de una reserva y, otros, abandonados y despojados.

El cordón umbilical de Yolanda está enterrado en un lugar aún más recóndito de la sierra de Juárez, del que la familia se desplazó por estar demasiado incomunicados. Ella tenía cinco años, pero aún recuerda las historias que su madre les contaba alrededor de la fogata. Es lo mucho o lo poco que puede transmitirle a sus nietos. A los niños nunca les hablaban de los problemas domésticos o comunitarios para evitar preocuparlos y mantener su mente limpia. Yolanda se arrepiente de no haber prestado más atención a esas conversaciones entre adultos que, seguramente hoy, le ayudarían a entender muchos lastres y tradiciones. Sus antepasados subían a los enfermos al Cuchumá para curarse con plantas medicinales. La leyenda dice que en el cerro murieron Iztakat y su amado, un guerrero cuya imagen empleó la cervecera Tecate en su logotipo. Los blancos les robaron sus lugares, símbolos sagrados y, en el caso de Yolanda, también sus apellidos. La obligaron a castellani- zar el “*Meskuich*” por “Meza” y el “*Kuijas*” por “Calles” para expedirle su acta de nacimiento.

La madre de Óscar, tuvo que marcharse de su tranquila cañada hace 30 años para que sus hijos pudieran ir a la primaria. Todavía hoy Norma se rompe la espalda en una maquila por un ridículo salario, como la mayoría de los kumiai. Su prima, Yolanda, en cambio, escogió el camino de la lucha social. Se adhirió al Congreso Nacional Indígena en 2012, en plena oleada de torturas y secuestros en Juntas de Nejí por parte del ejército. Querían expulsarlos de su territorio para permitir la entrada de grandes productores de vino seducidos por el boom del Napa Valley mexicano. En

el Valle de Guadalupe, unos 50 kilómetros hacia el sur, una veintena de vinicultores poseen la mitad del recurso hídrico, lo que ha enconado las disputas por el agua. Los kumiai, desposeídos, terminaron laborando como jornaleros en su propia tierra. Yolanda sabe que la vida se ha puesto cara por estos lados y sobrevivir y mostrar la cultura kumiai a los pequeños, es suficiente. “Soy como el *Kuciay*. Me escondo para que no me molesten los extraños”, dice al justificar que prefiere mantener un perfil bajo. *Kuciay* evoca a la sabiduría del agua, que, como los cinco elementos de la naturaleza, tiene vida. Se trata de una especie de divinidad que sólo la encuentran los indígenas, pero desaparece ante los foráneos: el agua existe para los kumiai.

De hecho, Yolanda me advierte que al hablar conmigo rebasa una línea. Es un riesgo que quiere asumir, que considera que ya es hora de permitirse a sus 53 años. Los vecinos le han reprendido alguna vez por el peligro que supone hablar de Óscar. Cuando el ambientalista concedió la entrevista al *Reforma*, un mes antes de su homicidio, pasó con los reporteros por su casa a saludarla. Su tía le dijo esa tarde que no fuese pendejo y que no se metiese tanto con esos cabrones. “Tenía miedo por él, pero me dijo que él ya había perdido el miedo. Quizá debería haberle insistido más”, asegura. Si en algún momento Yolanda fue ejemplo para Óscar, tras su asesinato, fue al revés. Su tía se deshizo de cualquier temor. La diferencia para ella es que él aún estaba joven y podría haber aportado más a la comunidad en vida. “¿Hoy le volvería a recomendar que no diese esa entrevista?”, le pregunto. “Sí. La situación no ha mejorado nada. Sigue feo”.

En la despedida al año de la muerte de Óscar, Yolanda se encargó de preparar el fermentado de miel y los atoles de avellanas, así como de officiar la ceremonia y los cánticos en kumiai. Es una de las 12 personas que aún saben hablar esa lengua.

La frontera maldita

TIJUANA | BAJA CALIFORNIA

La salvia blanca es un subarbusto sagrado para los grupos originarios yumanos del noroeste de México. La cosechan con sumo cuidado, arrancándola una por una con sus manos en medio de rezos. La queman en los festejos para humear a los presentes y limpiar las malas energías. También la preparan en infusión como remedio para enfermedades respiratorias.

El costo de la gasolina adicional que implica cargar 80 kilos o litros en el auto, no sería demasiado alto para un trayecto corto, pero desde el trabajo de José Frausto, en el centro de Tijuana, hasta su casa, se tarda más de una hora. A la periferia de la periferia de la metrópoli fronteriza no llega el agua y a diario debe transportar cuatro garrafones que su jefe le permite llenar en el taller donde es mecánico. El flaco hombre de bigote radica en el ejido Lázaro Cárdenas, pasados los grises suburbios, en medio de una campiña que parece ajena al municipio más poblado de México. Pero aquí no hay nada de idílico. Su hogar está rodeado de escombros, un auto escacharrado, sofás ajados y un montón de chatarra. Comparte los 40 metros cuadrados con sus dos hijos desde que hace un par de años su esposa se fue con otro. “Cuando estaba mi señora, los de las pipas siempre venían a llenar el tinaco. ¿Por qué será? Seguro no era lo único que

rellenaban”, suelta. No ha superado su separación ni tampoco el hecho de que los piperos lo ignoren. Cada media hora pasa un camión cisterna con un megáfono a todo volumen que anuncia “agua de la buenaaa, llenado barato. Aguaaaa, agua sana”. Desde la partida de su esposa, además, le cobran todo el tambo, aunque lo tenga por la mitad y a José le va de 40 pesos (dos dólares), un par o tres de almuerzos.

La escasez de agua forzó en 2019 al gobierno de Baja California a aplicar cortes de suministro a los dos millones de habitantes de Tijuana. Los tandeos debían de durar un par de meses, pero se alargaron hasta la fecha (comienzos de 2024). Las fugas y el *huachicoleo* en tuberías han acentuado la pérdida de un tercio del agua traída del Río Colorado. Agua hay, me dicen los expertos, pero falla su distribución. Lo corrobora San Diego, su ciudad espejo donde, con una disponibilidad hídrica similar, nunca falta agua.

José nunca ha sufrido de desabasto, porque nunca le ha llegado agua corriente. Ni siquiera le puso fregadera a su casa. Numerosas administraciones le han prometido construir una tubería hasta allí desde que se mudó a la ciudad en 2004. Su hermana le recomendó comprar una parcelita muy a las afueras, porque los alquileres estaban muy caros algo más hacia el centro. Pese a todo, el tipo se siente satisfecho por haber liquidado su hipoteca hace poco y ser dueño de su pedazo de terreno. En la entrada plantó tres palmeras en honor a su pueblo, Granja Las Palmas, en Guanajuato.



Los 20 kilómetros de autopista y senda hasta el arrabal de José atraviesan un sinfín de condominios de adosados simétricos, de obras y de tractores que aplanan solares

baldíos. Tijuana crece de una a tres hectáreas por día. Y aún así, falta gente para cubrir la galopante demanda de empleo. La guerra comercial del expresidente Trump contra China, prorrogada por Joe Biden, ha provocado que muchas empresas del gigante asiático se trasladen a la frontera mexicana para sortear los aranceles.

La tremenda expansión urbana ha producido un déficit del 50% en el abastecimiento de agua. El recurso está garantizado tan sólo hasta 2025, auguró hace unos años el máximo responsable de servicios públicos. La agroindustria, sin embargo, recibe el 85% de la única fuente permanente, el río Colorado. Algunos productores del Valle de Guadalupe han dejado de sembrar, porque les sale más rentable vender el agua concesionada a particulares. “La falta de agua podría ser el próximo conflicto entre los habitantes de la región debido a que atenta contra la salud y bienestar”, avisó el subsecretario estatal de Desarrollo Sustentable en junio de 2021. Esa escasez no parece ser la mayor preocupación en una de las ciudades más homicidas del mundo, entre las cinco primeras desde 2017, con siete asesinatos al día.

Poca gente puso atención a las alertas de los funcionarios, como pocos sabían que hay mucho dinero en el agua. Sí lo sabía Bonilla cuando asumió la gobernación de Baja California en 2019. Había sido director del Distrito de Agua de Otay, en el municipio estadounidense de Chula Vista. Durante su década de gerencia, promovió una planta desalinizadora para, en teoría, resolver la necesidad de agua en Tijuana. En el fondo, planeaba producir un excedente destinado al sur de California, según revelaron documentos oficiales sobre los arreglos que propuso a algunos legisladores en Washington.

El gobernador lanzó desde bien al inicio de su mandato una cruzada contra la usurpación de agua por parte de fábricas y la corrupción al interior de la Comisión Estatal

de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), encargada de la gestión hídrica. “Llegaba el inspector y se ponía de acuerdo (con empresarios) para registrar el consumo mínimo”, dijo en su primera reunión con el organismo. El director de la CESPT que él puso, Rigoberto Laborín, fue más allá y señaló la existencia de un “cártel del agua”. Se refería a la banda de empleados del CESPT que habían colaborado en la concesión irregular de agua a potentes compañías, entre las que sacaron a relucir a Hyundai. Bonilla contrató a Fisamex para inspeccionar a tres mil empresas de las que, tras las auditorías, cobró adeudos por unos 1 800 millones de pesos (más de 100 millones de dólares). También abrió investigaciones contra 138 funcionarios involucrados en la entrega de contratos irregulares, abuso de autoridad, cohecho y sobornos.

Los registros se llevaron a cabo bajo amenazas de cortarles el agua si no pagaban o incluso tapándoles el drenaje. Hay dos denuncias penales por esos métodos y centenares de las compañías auditadas han interpuesto amparos que podrían costar a la entidad más de lo ingresado. Para rematar los desmanes, el propio gobernador hacía público en sus conferencias los nombres de los supuestos morosos. En medio del ciclón fiscalizador y el show mediático, intentaron matar al propietario de Fisamex, Manuel García Soto, el 7 de diciembre de 2020. Él y su chofer sobrevivieron a la balacera contra la camioneta. García Soto suele mencionar en sus cenas entre colegas a tres empresarios que sospecha que ordenaron su asesinato por venganza. El directivo abandonó la ciudad para salvar su vida.

Bonilla escondió la información sobre los organismos operadores del agua a su sucesora. Durante esa transición en octubre de 2021, se publicó el reportaje Fisamex y Orca, las empresas que lucraron con la sequía de Baja California. La investigación desvela que tan sólo el 20% de la

recaudación por deudas en facturas de agua se invirtió en renovar la infraestructura hídrica, mientras que Fisamex y Orca Energy —el proveedor de energía eléctrica para el bombeo del agua— inflaron por tres sus presupuestos para embolsarse casi todo el dinero. En resumen, el gobierno de Bonilla gastó más en auditorías que en obras para resolver el problema del agua. Sin embargo, nunca le puso la mano encima a los distritos de riego, los organismos privados que manejan la mayor parte de las concesiones a la agricultura, un 75% de toda el agua del país. Han acaparado tanto recurso que, por ejemplo, el Distrito de Riego 014 venda cada año agua a Tijuana. Tiene a la ciudad secuestrada.

A José Frausto le pregunto por todo eso y se encoge de hombros. Se dedica a trabajar y, como dice, sólo llega a casa para desmayarse. No ha tenido tiempo tampoco de conocer a tantos nuevos vecinos que, pese a las condiciones, siguen asentándose en esa loma. Quizá esa desunión ha imposibilitado a la barriada pelear por alguna mejoría. “Hay un ojo de agua a cinco kilómetros, muy cerquita, muy fácil de traer el agua”, señala. “Nosotros tenemos la culpa de no organizarnos, pero necesitamos un líder que nos apoye para presionar al gobierno, si no, así vamos a estar siempre”.



Desde joven León Fierro se implicó en toda clase de causas sociales, pero nunca pensó que lo haría por el agua y mucho menos que lo encarcelarían por ello. Participaba en las marchas que se oponían a la instalación de una cervecería en Mexicali, 200 kilómetros sobre la divisoria al este de Tijuana. A finales de 2016, el congreso de Baja California aprobó la Ley del Agua con la finalidad de privatizar el recurso a la

población y entregarlo a las empresas. Era la alfombra para la llegada de Constellation Brands y una fábrica del tamaño de 200 campos de fútbol de las cerveceras más grandes del mundo. Uno de los encargados municipales del agua alertó que el gobierno estatal pretendía otorgar a la multinacional un 44% de los 130 metros cúbicos anuales que a duras penas surten a Mexicali. El entonces gobernador, Francisco Vega de la Madrid, se quitó del medio a dicho funcionario para firmar un acuerdo con la corporación estadounidense.

A León lo detuvieron en varias de las protestas de las que surgió el colectivo Mexicali Resiste en 2017 y lo soltaban a las pocas horas. En uno de los altercados de los que trató de zafarse en auto, la policía estatal lo acusó de querer atropellar a los antidisturbios. Cuatro meses más tarde, la mañana del 3 de mayo de 2018, varios agentes simularon que se les averiaba el vehículo frente a la casa del joven ingeniero electrónico y, cuando salió a ayudarlos, lo arrestaron por intento de homicidio. La jueza lo calificó como “una persona peligrosa para la sociedad” y extendió la prisión preventiva. La intensa presión del movimiento y la falta de pruebas hizo que lo liberaran a las tres semanas. El activista tan sólo tuvo que pagar 1 889 pesos (unos 100 dólares) por los rasguños a uno de los agentes. “Nos fortalece, vamos a seguir en la defensa del agua, que es una lucha urgente, no sólo aquí en Mexicali, sino en todo el país”, clamó a la salida de la prisión, fundido en un abrazo con su madre, sus hijos y acompañado por decenas de compañeros. Mexicali Resiste se volvió desde esa época en referente de la lucha por el agua en todo el país.

No fue el primero ni el último ambientalista apresado en Mexicali. “La persecución es una constante para amedrentarnos. Han abierto una decena de carpetas y medio centenar de acusaciones, a veces contra personas que venían por primera vez a una marcha y que, después de eso,

se asustaban y dejaban de venir”, me cuenta. Tarda varios meses en comprobar mi identidad y mis referencias con varias personas cercanas antes de aceptarme una llamada telefónica. Su madre y sus dos hijos fueron detenidos en julio de 2019 mientras cruzaban el puente fronterizo para ir de compras a Calexico. Les quitaron el visado y los tuvieron una noche en el calabozo. Para León, eso fue demasiado lejos. La siguiente semana se escondió con sus pequeños de 13 y 9 años en otra parte del país. El portavoz de Mexicali Resiste participó en las asambleas de manera virtual y difundió por redes sociales la campaña para la consulta de marzo de 2020: un 76% de los votantes, 27 973 personas, desaprobaron la instalación de la cervecera.

A León le fastidia no haber podido festejar esa victoria con sus camaradas, pero le emociona que por una vez se haya impuesto el sentido común, como dice. La planta requería 20 millones de litros de agua anuales, equivalente al consumo de 750 mil personas, tres cuartas partes de Mexicali sin contar su extensa zona agrícola. En todo México, 71 de las 81 concesiones para cerveceras toman agua de mantos sobreexplotados o con déficit. Y, pese a esas obviedades, en Mexicali Resiste pensaban que iban a perder la consulta, porque la compañía había invertido mucho dinero para acarrear a centenares de personas a las urnas.

Constellation Brands, no obstante, todavía no se ha desmantelado. La administración de Bonilla interpuso varios recursos para que la cervecera pudiese continuar las obras. “Nuestros informantes dentro de la fábrica nos dicen que tienen un avance del 80%, así que en cualquier momento pueden ponerse a funcionar. No podemos bajar la guardia”, dice. “Siempre nos quieren intimidar, acallar y, cuando no lo logran, nos asesinan”. El gobierno estatal también retomó los casos de los activistas detenidos en 2017, cuyos cargos se habían desestimado, y los convocó a una audiencia en la

fiscalía estatal a mediados de 2021. Uno de ellos, claro, era León Fierro, ese maestro de 40 años que sólo quería compartir algunas ideas marxistas con sus estudiantes de preparatoria y que terminó sufriendo por su vida al volverse uno de los estandartes de la lucha por el agua.



León y otros colegas solían reunirse los fines de semanas en el rancho de Óscar para hacer un asado. Se acuerda de la amplia sonrisa de su compadre al verlos llegar. Se le henchía la barba de candado y le brillaban los ojos. Lo define como noble, entusiasta y hospitalario. Ese carácter amistoso le ayudó a estrechar contactos por todo el país y así nutrirse de muchos movimientos y difundir su lucha, la de los kumiai. Como tantos otros, fraguó su activismo con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, apoyó a las víctimas de la masacre de Nochixtlán, en Oaxaca, y acudió a varias protestas en Mexicali, donde conoció a los opositores de Constellation Brands. “El asesinato fue sumamente dramático para nosotros. Creció nuestra paranoia, los delirios persecutorios. Una compañera que trabajaba mucho con él sufrió ataques de ansiedad y su salud se vio muy afectada”, explica León. Pero, como en todo momento difícil en Mexicali Resiste, hubo una fuerte respuesta de apoyo. Óscar siempre viajaba de *raites* (autoestop) y portaba en el bolsillo una Constitución mexicana, que sacaba a cada rato para dar respuesta a planteamientos ambientales.

Durante la pandemia se centró en investigar los argumentos legales en derecho internacional para exigir la autodeterminación de los kumiai y denunciar el acaparamiento de pozos por parte de las grandes empresas. “Un 2 %

de los concesionarios controlan el 70% de las aguas concesionadas” en el país, escribió en una de sus últimas publicaciones de Facebook. Un mes antes de su asesinato, Óscar conversó con el abogado agrario del CNI para concretar los pasos a seguir hacia el reconocimiento de la etnia frente al riesgo de desaparecer por causa de la sequía, entre otros motivos. Nunca llegaron a tener la segunda llamada, programada para cuando el ambientalista consiguiera el censo de la comunidad.

El joven compaginaba su faena en el campo con los recorridos semanales por las desperdigadas viviendas de Juntas de Nejí. Intentaba convencer a sus paisanos de que rechazaran las despensas con que los políticos compraban su voto. En sus últimas horas de vida, abrió en Facebook la página “Buscando lluvia en el desierto” El muro que pretendía visibilizar la escasez y sobreexplotación del agua terminó por ser su obituario.

Norma, la madre de Óscar, es una mujer calma y tímida, pero, estalla al preguntarle por ciertos artículos periodísticos que vinculan a su hijo con el narco. “¿¡Cómo van a decir que no lo mataron por su activismo!?”, se enfurece. Como sucede en muchos de los asesinatos algo mediáticos, la fiscalía se apresuró en airear la idea de que el móvil fue el narcomenudeo o un ajuste de cuentas. Igualmente, la investigación sigue sin resultados. El de Óscar se diluyó entre los 165 asesinatos de Tecate en 2020, el año más sangriento de su historia. Menos de 24 horas después de su ejecución, otro comando baleó a su cuñado a las puertas de una tienda de abarrotes. En la indagatoria nunca se estableció relación entre ambos crímenes, pero se ensució la imagen de Óscar. “No había recibido ninguna amenaza o al menos no nos lo decía para protegernos y no preocuparnos”, dice. A Norma ya le quitaron a su hijo, ahora sólo ruega que se le recuerde como un defensor del agua y su comunidad.

Óscar Eyraud fue uno de los 30 ambientalistas asesinados ese 2020 en México. Para Norma, era su pequeño grandulón, el más aguerrido y bromista de sus hijos.

El río Colorado

COMUNIDAD CUCAPAH EL MAYOR

La fiebre de los yoguis por la medicina herbolaria disparó la demanda mundial de salvia blanca durante la pandemia. El aumento de su valor ha multiplicado su corte desmedido e ilegal en territorio yumano. Está a punto de extinguirse.

A los cucapah, un pueblo originario del noroeste de México, les llaman “la gente del río”, pero en realidad, la traducción sería “la gente que va y que viene”. Es una de las tantas rectificaciones que realiza con rigor académico Jaziel Soto, un joven de 29 años perteneciente a esa etnia. Sabe eso y mucho más, porque al ver que su abuela iba a morir, aprovechó esos últimos meses para sentarse muchas horas junto a ella en el patio trasero de su chamizo y así aprender algunas palabras en lengua nativa y algo de su historia, siempre vinculada al río Colorado, a un agua administrada en el último siglo por Estados Unidos.

La gente iba y venía según el caudal. En temporada de lluvia se subían al monte para evitar que las crecidas los arrastraran y, en la seca, sembraban melón, maíz y frijol en sus márgenes. Inocencia González, de 83 años al momento

de su muerte, llegó a pescar en esas aguas de las que hoy sólo quedan unos cuantos charcos. El agua que iba a desembocar al mar de Cortés dejó de correr por ese Valle de Mexicali después de que en 1936 Estados Unidos construyó la presa Hoover, en Arizona y Nevada. Ocho años después, ambos países firmaron un tratado fluvial que garantizaba a México 1.8 millones de metros cúbicos de agua al año para uso agrícola. El acuerdo jamás tuvo en cuenta a los cucapah y todavía hoy cerca del 90% del recurso que —cada vez en menor cantidad— entrega el vecino del norte se destina a los campos.

“Si se extingue el río, nos extinguimos los cucapah”, dice Jaziel. Las cartas hispánicas hablaban de unos 20 mil cucapah. Los datos oficiales cuentan hoy poco más de 300. El joven con aspecto de muchacho ve mi visita como una oportunidad para mostrarse al mundo, a alguien que comprenda que allí hay un pueblo en peligro. Son pocos los periodistas que se acercan a estas inhóspitas y tórridas latitudes en mitad del desierto de Sonora. Y cuando lo hacen, suelen entrevistar a los dos o tres portavoces de turno. Jaziel se sienta en el mismo traspatio donde su abuela le enseñó a coser faldas con la corteza de los árboles que abundaban en la rivera, como el sauce y el álamo, que requieren mucha agua. A duras penas pueden tejer ahora unas pocas para algunas ceremonias. El joven saca una de las cortezas a remojo en un enorme balde, la deshilacha y la cuelga sobre una cuerda. Me pide que no grabe cómo hace el nudo, porque si no se perderá la tradición oral. “Nos vienen a hablar de igualdad de género, cuando nosotros nunca hemos hecho diferencia entre hombres y mujeres. Todos pescamos y cosemos faldas por igual”, agrega.

A pocos metros de la vivienda de tablaroca rodeada de trastos y electrodomésticos viejos, se encuentra el centro comunitario que trata de rescatar algunas vestimentas y

vestigios. En una de sus paredes hay un mural de Sipa y Komat, los gemelos que nacieron en el río. Les hablaron a las hormigas para que sacaran barro y pudieran moldear gente, los cucapah. Por eso dicen que vienen del agua y por eso su Nana siempre le decía que no debía pisar las hormigas. La fachada la ocupa el rostro en blanco y negro de la abuela de Jaziel. Inocencia era por ese 2021, cuando murió y se inauguró el museo, una de la docena de personas que aún hablaba cucapah y era la lideresa de El Mayor, la comunidad en la que se tuvo que reasentar el pueblo nómada debido a una inundación en 1979 que asoló la mayoría de sus casas. Estados Unidos abrió las compuertas de sus presas para liberarlas de la gran cantidad de agua proveniente de intensas lluvias y deshielos.

La Nana consiguió que el gobierno les pagase las nuevas viviendas. No sabía que esa reubicación tenía trampa. “Antes vivíamos repartidos, a mucha distancia y nos uníamos para la temporada de pesca o cuando era necesario. Nunca habíamos tenido que convivir juntos, encerrados no es nuestra forma de organizarnos, por eso hay tantos conflictos”, asegura Jaziel. La vida sedentaria y gregaria provocó también una plaga de drogadicción, alcoholismo, diabetes y cáncer. Por los caminos de tierra y grava, junto a los alambres de espino, la sal oxida viejas caravanas que antaño utilizaban para acampar en las temporadas de pesca y luego para alojar a algunos gringos curiosos que venían de caza cuando todavía había agua y animales por esta comisura entre la península de Baja California y el México continental.

Aunque esas penurias se exacerbaban con el paso del tiempo y la sequía. Al principio, las inundaciones trajeron bonanza. El exceso de agua hizo que el río corriera hacia la Laguna Salada, un valle cercano a El Mayor. El agua dulce confluyó con los restos de las mareas del Golfo de California

y se dio una abundancia de pescado. “Vivíamos muy a gusto, todos tenían. Nadie se peleaba por nada”, cuenta Jaziel. Sus tenis Converse ni siquiera se hunden lo más mínimo por esa gran depresión cuarteada desde mediados de los ochenta. El lugar más caliente de la Tierra, donde en 2023 se registró una temperatura por encima de los 80°C, se encargó de evaporar el agua del lago a los pocos años de inundarse. La Nana solía pescar cada mañana en su canoa por donde hoy sólo queda un destellante manto de sal que irrita la vista. El joven señala un montículo en mitad de la laguna desecada. Se trata de *Xalkatat* (algo así como “cuerpo de ballena”). Cuenta la leyenda que un niño travieso lanzó una flecha a los genitales de ese monstruo y de un testículo salió un líquido azul, el mar, y del otro, rojo, el río Colorado. Así se formó el territorio de los cucapah, como lo narraba la Nana en esas largas tardes. “Tú eres el niño con el arco que perforará los testículos de los de arriba”, le decía a su nieto.



En aquellas sofocantes tardes en el patio, la Nana empezaba a mecerse con más impulso y a recitar un mantra en voz baja. Llamaba a *Cuitzar*, su dios del viento. El “chapulín verde”, la traducción del cucapah, siempre sale antes de que caiga la lluvia. La anciana, asfixiada de calor, invocaba a las aguas. A veces llovía y otras no, pero a su nieto le sirvió para entender la importancia de creer, de su cultura y sus tradiciones, que desde entonces ha tratado de preservar como una forma de supervivencia.

Jaziel se encarga de guiarme y de escoger a las personas con quienes conversar. No quiere que entreviste a los mismos de siempre, ni tampoco que sólo hable con personas

de uno de los bandos de la comunidad. El Mayor lo forman tres o cuatro familias, unas 120 personas, y entre ellas están divididas por rencillas añejas, pero que se han impregnado en su día a día. Su único deseo es que estas líneas no sirvan para fracturarlos aún más, sino para unirlos y darles fuerza de cara a sus reivindicaciones, básicamente por el agua.

El joven da charlas sobre la cultura cucapah en la escuela primaria, mantiene relación con organizaciones ambientales y civiles, aplica a proyectos y becas. Es un activista, aunque no lo sepa, y ese papel ya le ha costado algunos enemigos dentro de la misma comunidad. Esa mañana del domingo 12 de mayo de 2024 nos lleva con uno de sus tíos al río Hardy, un afluente del Colorado, de apenas 20 kilómetros, donde todavía pueden pescar algunas lobinas. Samuel Saiz, robusto, de tez tostada, dice que la falta de agua les ha afectado mucho, porque cada vez hay menos peces. La mortalidad también se debe a los fertilizantes que arrojan los cultivos aledaños, que provocan el crecimiento desmedido de plantas que les quitan su oxígeno. Aunque varios análisis han negado que el pescado esté contaminado.

“Como se acaba el agua, se acaban los pescadores. Se van”, afirma Samuel. Se van a Mexicali, 60 kilómetros al norte, o a otras ciudades. O aún peor, tienen que ir con la cabeza gacha a pedir trabajo al conjunto hotelero y residencial de una poderosa familia que instaló una represa que deja sin agua a los pobladores para abastecer a los visitantes estadounidenses. “Antes éramos esclavos de los españoles para cortar leña y ahora somos esclavos de los gringos para recoger su roña (desechos)”, señala Jaziel. Precisamente alrededor de ese complejo crece una frondosa vegetación y a lo lejos se ven algunos campos de dátiles, el último producto que recientemente se ha puesto de moda sembrar y que requiere mucha agua.

Dicho clan, de quienes me piden ocultar su nombre por temor a represalias contra esos mismos empleados, lograron sus tierras gracias a la venta por parte de algunos de los 78 cucapah que durante los años setenta obtuvieron su derecho agrario —títulos de propiedad— entorno a la Laguna Salada. Muchos cedieron esos terrenos de manera irregular; otros los malvendieron para sufragar las deudas por la falta de pesca. “La mayoría de los comuneros mexicanos (como se refiere a esos ejidatarios) ni siquiera viven aquí, pero son a los únicos que el gobierno y las organizaciones tienen en cuenta para implementar medidas que nos afectan a nosotros”, se queja el pescador.

Samuel fondea la panga en un recodo del río, de menos de un metro de profundidad, y luego acelera para que su hijo, aún más corpulento, arroje el chinchorro. En el perímetro cercado golpean el agua con una vara para espantar a los peces, que naden hacia la red y rápidamente recogerla. Sacan una veintena de tilapias y un par de lobinas. Antes pescaban con lanza, pero cada vez es más difícil encontrar palos duros de mezquite para armarla y acertar a un volumen de peces menguante.

Su única opción de subsistencia es ahora la pesca en el mar. Cuando a mediados de los ochenta se secó la Laguna Salada, los cucapah empezaron a pescar en el Alto Golfo. Entre febrero y abril, familias enteras se desplazan hasta Indiviso, en el delta del río Colorado, para zarpar con sus pangas cuando la luna se parte a la mitad y la marea permite escuchar el ronquido de la corvina golfina que llega a desovar. Antes de la cuaresma católica. Pero ya ni eso pueden hacer en paz. En 1994, el gobierno mexicano declaró esta esquineta de mar como área natural protegida, especialmente para la conservación de la vaquita marina, un delfín en serio peligro de extinción por la pesca furtiva de totoaba, cuyo bucho se vende a precio de oro a China. “Se preocupan más

de proteger a un animal que a las personas. Eso es lo que valemos para los mexicanos”, dice Samuel. A varios de sus colegas los encarcelaron por encontrarlos con un puñado de totoabas ya sin bucho, es decir, por recoger los desechos que arrojaban los pescadores ilegales vinculados al crimen organizado. Las autoridades los persiguieron y acosaron, les requisaban sus embarcaciones y su mercancía.

Por eso Samuel desistió de ir a pescar camarón y curvina, como la llaman aquí, desde hace una década. También, porque la zona de Indiviso está controlada por un cártel que les cobra “derecho de mar”, una cuota por salir a pescar y por su volumen de escama. Y, por si fuera poco, Estados Unidos ha prohibido durante varios periodos desde 2018 la importación de pescado y mariscos del golfo como castigo al gobierno mexicano por no aplicar las acciones suficientes para detener la muerte de la vaquita marina. La sanción fue la puntilla al último modo de vida que tenía el pueblo cucapah. Jaziel estudió ingeniería en acuicultura con el objetivo de meter piscicultura en El Mayor y disponer así de una alternativa económica sustentable. Su ambición es aún un sueño, porque falta mucho dinero y cohesión social para echarlo a andar.

Esa misma tarde había convocada una reunión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Baja California, que venía a ofrecerles la posibilidad de aprovechar unos fondos del Gobierno de Chile para el fomento del ecoturismo en etnias originarias lacustres de todo el continente. Jaziel lo ve como otro intento de la administración estatal para decretar el curso del río Colorado como un área protegida. Con el antecedente del Alto Golfo, los cucapah han rechazado esa reciente proyecto. También se habla de la iniciativa Tres Mares, que no es más que trasvasar agua del mar de Cortés hacia Estados Unidos. La infraestructura se plantea como una forma de llenar de agua el Salton Sea en California y la

Laguna Salada, y que esto permita restaurar toda la ribera del Colorado. Para Jaziel, en cambio, sólo se pretende abastecer de agua a campos y urbes fronterizas como San Diego, pero esos cauces ni siquiera pasarán por la comunidad ni la beneficiarán. Al contrario, considera que la desalinizadora que se instale terminará enviando los residuos a su territorio ancestral. «Seremos su vertedero», dice.

En la asamblea se ponen de manifiesto las diferencias sobre ése y muchos otros temas. Algunas señoras cruzan acusaciones de querer hacer carrera política a su costa; de subir a redes sociales varias denuncias sobre la contaminación del río Hardy que impactó mucho en la venta de su pesca. Las presentes, muchas mujeres, terminan por exigir a los funcionarios mejoras en el drenaje, la escuela, un puesto de salud, antes de venirles a proponerles senderos o torres de avistamiento de aves. Jaziel aprovecha para poner sobre la mesa la cuestión del agua. El público lo aplaude y en varias otras intervenciones halagan al joven, conscientes de que será, si no lo es ya, un líder comunitario.



“¿Por qué ellos tienen agua y nosotros no, si venimos del mismo barro?” se preguntaba la Nana. Los cucapah que se fueron del otro lado de la frontera, cuando aún ni estaba delimitada, tienen su derecho al agua garantizado por leyes federales. El millar de Cocopah, como se les conoce del costado norte de la valla, viven con todos los privilegios bajo la protección de una reserva indígena donde incluso hay casinos. Desde lo alto de algunas colinas de El Mayor se vislumbra ese pedazo de Arizona, verdísimo, un vergel que contrasta con la aridez de la parte mexicana.

Esa misma pregunta lanzó Jaziel en una reunión por zoom del Comité Internacional de Límites y Aguas (CILA), uno de los organismos binacionales de mayor tradición en América del Norte, creado en 1889 para administrar el recurso hídrico de la frontera. Según cuenta, cuando les pidió que tuvieran en cuenta y reconocieran al pueblo cucapah, se escuchó de fondo un “¡*Oh, fuck!*”. Para el activista la reacción resume cómo los ven, como un estorbo.

Desde 1944, el Tratado de Aguas firmado entre ambos países se ha modificado mediante varias actas. Por ejemplo, se ha acordado la entrega a México de cierta cantidad de agua con fines de conservación. Sin embargo, ese volumen está gestionado por organizaciones ambientales ajenas a la comunidad que nunca les han contemplado. La acuciante sequía de las últimas tres décadas redujo el nivel de las tres presas hidroeléctricas estadounidenses que se surten del río Colorado y ha forzado a Washington desde 2012 a pactar con México paulatinos recortes del envío del agua a cambio de compensaciones económicas. Gran parte de esos fondos se han transferido al Distrito de Riego 014, el ente privado que abarca a 668 usuarios de ese vértice del noroeste del país, los valles agrícolas de Mexicali, Baja California y San Luis Río Colorado, en Sonora. Sin embargo, esos productores ya han denunciado que desconocen adonde ha ido el dinero recibido por la cúpula, porque no han visto mejoras en la infraestructura hídrica. Al Distrito de Riego 014 le han llovido señalamientos por acaparamiento y especulación. Entre algunos interrogantes está el hecho de que, aún siendo un concesionario en cuyas cláusulas se especifica que no puede comerciar agua, esté vendiendo el agua al municipio de Tijuana. O que los directivos del distrito negocien directamente con el gobierno de Baja California sobre un bien federal, el agua. En marzo de 2024 se firmó la enésima acta, la 330, para reducir aún más la entrega de agua a México.

La Nana lloraría tanto como lloró cuando se secaron las aguas de las que nació su pueblo, de las que ella vivió. A comienzos de 2021, unos periodistas de la BBC llegaron a El Mayor para filmar un reportaje sobre el pueblo cucapah. En un fragmento grabado con celular por el propio Jaziel, aparece Inocencia sentada en su cama, de hombros encogidos, flaca, cara demacrada, pero muy digna, que dice:

“Cuando se acabó el río Colorado, ya casi todos lloraban y se acabó el pescado”.

“¿Tú quieres que llegue el agua al río, ma?”, le pregunta su hija, Antonia Torres, la madre de Jaziel.

“Pues sí, ¿desde cuándo estoy hable y hable? Por eso ya me he hartado y ya no quiero hablar”, responde malgeniada, cansada de dar tantas entrevistas que nunca sirvieron para mejorar nada.

Hacia mayo de ese 2021, bajo el programa “Flujo Pulso”, un acuerdo binacional de liberación de volúmenes de agua con fines exclusivos de regeneración ambiental, Estados Unidos abrió las compuertas de la presa Hoover y la corriente volvió a fluir por río Colorado. Jaziel asegura que eso se logró gracias a la presión de asociaciones como Revive el Río, después de tres años de negociaciones, pero que fue un mero gesto para callarles un poco.

En el video de la cadena británica vuelve a aparecer Inocencia subida a un auto desde donde observa a algunas personas bañarse en una pequeña laguna.

“Está muy bonito y luego trae muchas risas, ¿verdad?”, dice.

“Pero, ¿a quién vas a agradecer? ¿A todas las organizaciones?”, le pregunta su hija.

“A todos, a todos. Con los gringos que me peleé también”, bromea.

La gente se bañó y cantó en el río para festejar que volvía a tener abundante agua. Pero sólo duró seis meses. Voy con

Antonia y Jaziel a ese mismo punto, el Vado Carranza, la única parte del curso del Colorado donde se acumula un poquito de agua. Varias familias hacen pícnic en la orilla y los niños juegan en el agua, que apenas les llega a las rodillas. “Esta agua que enviaron en 2021 agarró otro cauce y se fue derecho al mar. Celebramos porque pensamos que llegaría el río y llegaría a la comunidad, pero no fue así”, dice Antonia, una de las lideresas de la etnia. Jaziel le tiene cierto rencor, porque considera que los adultos, incluida ella, han sido los culpables de todas las riñas y deterioro de El Mayor. Ahora él quiere distanciarse de todos ellos y de todo eso para reconstruir el tejido social entre la juventud.

Su Nana falleció en junio de ese año, un mes después de ver el vado lleno. “Tal vez es lo que estaba esperando para morir en paz”, suspira Jaziel. La enterraron durante el atardecer, con los pies apuntando hacia el ocaso, como indica la tradición. El funeral congregó a decenas de cucapah, muchos para un pueblo en extinción. Inocencia había marcado la vida de muchos y el destino de todos con su incansable lucha. A su espíritu, sin embargo, aún le quedaba una última hazaña que lograr antes de volver a la cordillera que forma la Sierra Cucapah. Pocos días después de su muerte, las aguas del río Colorado se unieron con el delta, algo que no sucedía desde hacía casi medio siglo. El milagro, como lo vieron, duró unas pocas semanas, pero fue la demostración de que sí hay agua suficiente para recuperar la zona, la fuente de vida y rescatar al pueblo cucapah. Dio alas y fuerza a Jaziel para tomar el relevo de su abuela. Fue la última lección de la Nana.



Nuez y bala en Chihuahua

El riego de los cárteles

VILLA LÓPEZ | CHIHUAHUA

El mezquite es un árbol de zonas áridas que puede medir hasta seis metros. En las partes más secas son arbustos desaliñados, pero vitales para dar sombra a liebres, zorros, lobos, serpientes y salamandras. Y, también, a los halcones al servicio del crimen organizado que se agazapan para aguardar a su presa.

En el kilómetro 37 de la carretera de Jiménez a Villa Coronado, en el desierto sur de Chihuahua, la guerra se declara en una señal de bifurcación pintada con las siglas GN y NCDJ727.

GN: Gente Nueva, el brazo armado del cártel de Sinaloa, más conocido como Los Chapos, por su líder preso, el Chapo Guzmán.

NCDJ: Nuevo Cártel de Juárez; y 727, el número de los *boeings* que empleaba el reconocido narcotraficante Amado Carrillo para transportar la cocaína de Colombia a México en los años noventa. El llamado Señor de los Cielos tenía una flota de 30 aviones.

Una línea blanca en el asfalto delimita sus territorios de arcén a arcén; el *frontline* de la brutal contienda entre conglomerados criminales mexicanos históricamente hegemónicos. A pocos metros del letrero se hallaron dos cadáveres tras un enfrentamiento en septiembre de 2019. Un

mes después, aparecieron cinco camionetas tiroteadas, otra incendiada, algunas granadas y centenares de casquillos. Aquella reyerta duró media hora. Desde entonces la prensa local dejó de informar sobre los combates en esos 30 kilómetros que separan a las localidades de Villa Coronado y Villa López. Sus habitantes, en cambio, siguen sobresaltándose a cualquier hora del día por las tormentas de balas.

Para llegar a Villa López me toca cambiarme hasta tres veces de vehículo para evitar que los halcones identifiquen el auto en el que viajo con demasiada antelación. Para esto me ayudan un periodista local, un activista y dos productores de la zona. (Nombrar a cualquiera de ellos sería su sentencia de muerte). Al cruzar las ocho calles de Villa López, una robusta *pick-up* negra marca GMC, cristales tintados, nos rebasa y se detiene en la orilla de la carretera para observarnos. “Nos van a tablear, verás”, repite uno de los tres ocupantes del vehículo. Tablear, en la jerga norteña, significa golpear las piernas y glúteos con una madera de clavos; una de las prácticas de tortura habituales del narco. El resto asiente entre risas histéricas. Uno de ellos se pasó dos semanas secuestrado a punta de palizas al confundirlo con un informante de la banda rival. Ésta es su segunda vida, como dice.

En estos confines resulta imposible distinguir a los integrantes del cártel de Sinaloa y el de Juárez. Todos lucen igual. A menudo se pasean con pasamontañas y armas largas, otras veces pasan a comprar en abarrotes desarmados, tranquilos. Depende de la calentura, el grado de conflicto. “Sabemos quienes son, pero no de qué grupo. Da lo mismo, te apartas y ni miras”, cuentan. La omnipresencia criminal me asusta mucho. Me falta un poco el aire y pido que bajen los vidrios. Las ventanillas ya estaban bajadas para evitar levantar sospechas entre los halcones. En los 15 kilómetros que recorreremos de Villa López hasta el ejido Emiliano Zapata vemos en diferentes arcones varias camionetas

detenidas, sin matrícula, el distintivo delincriminal. Entre los dispersos mezquites a lo lejos se asoman algunos hombres para otear el paso de nuestro coche. Enmudecemos al tomar el desvío hacia la izquierda, el de la señal con pintadas bélicas. La calzada de doble sentido se estrecha y se arruga.

Frenamos en el puente sobre el río Florido. En su cauce se sumerge un brazo de hormigón, una estructura de unos cuatro metros de ancho y ocho de alto, con un tubo hacia el agua conectado a un poste de electricidad que solamente llega a ese punto para brindar energía al cárcamo para extraer el agua. “Lo prenden durante varios días. Cuando bombea, nos reduce el agua a la mitad. Nos perjudica muchísimo a los 452 ejidatarios, porque prácticamente no llega agua”, asegura uno de los propietarios de pequeñas parcelas que conforman el módulo de riego de Villa López.

El cárcamo de rebombeo pertenece a Tomás Urionabarrenechea, uno de los caciques nogaleros de Chihuahua. Los productores tachan de ilegal esa construcción, en funcionamiento desde hacía cinco meses (mayo de 2020), porque se encuentra dentro de su concesión de uso de agua. En efecto, la Conagua me confirma por carta la irregularidad de esa sustracción y se compromete —a raíz de mi solicitud de información— a realizar una inspección “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”, así como a imponer “las sanciones que haya lugar”. El agua se canaliza por una tubería de tres kilómetros hasta una de las vastas extensiones de “Los Uriona”, como se conoce a la adinerada familia. El órgano federal para la gestión hídrica había desoído las reiteradas denuncias de la comunidad antes de mi consulta para redactar estas líneas. Tal vez por eso los dos ejidatarios asumen el riesgo de acompañarme y tampoco me advierten de semejante peligro.

“El mayor robo de agua lo hacen con pozos clandestinos. Los tienen dentro de sus ranchos. Es imposible entrar, ahí

sí nos corren (sacan) a balazos...”, me está explicando uno de ellos cuando un todoterreno gris sin placas baja por el terraplén a toda velocidad y derrapa frente a nosotros. La nube de polvo impide reconocer a los pasajeros, pero alcanzo a ver al menos un cañón de fusil asomado por una de las ventanillas traseras. Es hora de irnos. Ni 15 minutos ha tardado el grupo armado, al parecer los de Sinaloa, en darnos la señal de que no podemos estar más tiempo en ese lugar. El primer aviso es por las buenas, el segundo, mejor no averiguarlo. Los dos ejidatarios de Villa López se lo toman como parte de las amenazas que han recibido por sus quejas contra el supuesto hurto de agua. Dicen que “Los Uriona” los han llamado para advertirles que dejen de meter sus narices o sufrirán las consecuencias.

(De vuelta en Ciudad de México logro contactar por Facebook a Andony Urionabarrenechea, el hermano de Tomás. Niega que el cárcamo sea ilegal y que haya intimidado a nadie. Al contrario, acusa a los líderes del módulo de riego de robarse el agua para luego venderla más cara. Afirma tener documentos que prueban todo eso y me invita a visitarlo en Villa López para mostrármelos, pero nunca me los llega a enviar. Rechazo la oferta de encontrarme con él en su rancho. Tras emitirse mi nota sobre el tema en televisión, Andony me escribe por Whatsapp —sin haberle dado mi número— e insiste en que estoy equivocado por varios mensajes de audio que respondo con breves líneas. Ahora sí, me envía un documento donde la Conagua permite construir el cárcamo (no implica luz verde a bombear el río) y el pantallazo del fragmento de un amparo donde se insta a la Conagua a tramitar la solicitud de concesión de uso de aguas superficiales. Si no lo hace en tiempo y forma, se impondrán sanciones. En los 20 minutos de audios posteriores, Andony explica básicamente que la Conagua les iba a aprobar la extracción de agua, pero que con la pandemia

se frenó ese proceso. Es decir, la familia puso a funcionar el cárcamo para sacar agua sin contar con la autorización pertinente. Dejo de responderle y bloqueo su número después de marcarle repetidas veces.)

Los 15 minutos de regreso a Villa López se hacen eternos. Trato de fijar los detalles de la camioneta que nos ha amedrentado. En el asiento del copiloto iba una mujer. Rompo el silencio para preguntarles por eso. “Ya ellas también se han metido al crimen. No hace diferencia. La que menos te esperas, te mete una bala”, responden. Vuelve el silencio.

Varios parches de yeso cubren las marcas de disparos en la gasolinera a la entrada del pueblo. En el taller de enfrente, unas llantas amontonadas en la azotea sirven de parapeto durante los combates. Quienes viven al margen de la carretera tapan los orificios de sus fachadas para al menos crear cierta apariencia de normalidad. Ninguna de las huellas del conflicto se observa en las imágenes de Google Maps tomadas en 2014. Se puso feo, como dicen, desde 2017. Unas 700 personas, un tercio de la comunidad, se desplazaron por la violencia. Antes, para las fiestas patronales, venían decenas de familias que habían migrado a Estados Unidos, pero desde entonces ni se les ocurre.

Villa López es el bastión más al sur de La Línea —brazo armado del cártel de Juárez—, que sitió la localidad con la compra de inmuebles, la instalación de cámaras de videovigilancia y el sobrevuelo de drones. El asalto formaba parte de la incursión desde la ciudad fronteriza que da nombre a la banda, con el objetivo de recuperar ciertos territorios invadidos por su contraparte de Sinaloa, que avanzó por el sureste de Chihuahua. Ambos grupos, aliados en la denominada Federación hasta 2008, se pelean a sangre y fuego los límites del Triángulo Dorado, cuna inexpugnable de narcotraficantes. En el abrupto macizo, se refugió el Chapo en sus etapas de prófugo e instaló un macro laboratorio que

produjo gran parte de la droga mexicana. Algunos pobladores cuchichean que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió recientemente en la disputa, pero se retiraron de inmediato ante la supremacía de los añejos narco linajes.

La Línea impuso su ley en Villa López mediante un aluvión de secuestros y cadáveres —muchos policías— que espantaron cualquier atisbo de oposición o de legítima autoridad. A las siete de la tarde se vacían las calles y se cierran los pocos comercios que sobreviven al cerco. Empieza el toque de queda decretado por el cártel a los 4 mil habitantes de la localidad. “Al principio vigilaban que nadie saliese de casa. Ahora ya por costumbre nadie sale”, comentan. A las siete de la tarde termina el día en el culmen del control del crimen organizado: controlar las tierras, la economía, el agua e incluso el tiempo. A las siete de la tarde, comienza la noche, la oscuridad, una guerra anunciada en muros y señales de carretera.

El arsénico

JIMÉNEZ | CHIHUAHUA

Los mezquites son duros y tolerantes a la sequía. Sus gruesas raíces crecen hasta los 50 metros bajo tierra para absorber el más mínimo rastro de humedad.

La mayoría veríamos un montón de hierros viejos. Perla Sosa vio un triciclo, una oportunidad de mejorar su vida. Soldó la chatarra y fabricó un rudimentario triciclo. En el improvisado armatoste carga a sus cuatro hijos descalzos y sus cuatro cubetas. Antes tardaba el triple de tiempo y de esfuerzo en acarrear el agua. La joven robusteció su espalda y sus piernas de tanto criar y caminar. Entre los escombros del patio trasero guarda el agua en tres tambos. Los 60 litros que trae por viaje apenas le duran cuatro días. Es inédito que salga agua de su llave. “El agua llega cada 15 días, o depende. Y sale muy sucia, con tierra, desechos amarillos. De hecho, cuando uno la hierve, se queda un polvo blanco abajo”, dice y muestra. Por eso dedica una mañana a la semana a recorrer los 500 metros hasta el tanque municipal para recoger agua algo más limpia.

La madre de Perla se mudó de las ranherías de Villa López hacia Jiménez, 20 kilómetros hacia el norte, pensando

que en una localidad de 40 mil habitantes podría darle un mejor futuro a su hija. Por eso también le puso Perla. Creyó que el nombre tenía pegada para que algún día pudiese dedicarse a la canción o aspirar a un puesto de oficina. Pero, las únicas letras que entona la ama de casa de 28 años son las de Juan Gabriel, mientras pedalea en su triciclo o calma la fiebre de sus hijos. “Los niños se me deshidratan de no tomar agua. Se enferman de diarrea. El agua embotellada sale muy cara, no tenemos dinero para comprarla, somos de bajos recursos”, asegura. La menesterosa vivienda de ladrillo desnudo habla por sí sola.

En el interior apenas hay un fogón, dos colchones raídos y muchísimas moscas que aterrizan sobre las niñas atraídas por su hedor. No se bañan desde hace varios días, la poca agua que disponen se utiliza para beber. Ni se inmutan por el enjambre de insectos sobre su cuerpo, hasta en los párpados. La hija de cuatro años, Camila Yaneth, está especialmente flaca y tiene los ojos amarillentos. Aquí falta agua y también comida. Se retuerce de dolor en la barriga. Su madre dice que siempre está así. Según cuenta, en una de sus visitas al centro de salud municipal, le diagnosticaron una infección estomacal por envenenamiento. Cuando la llevó al hospital estatal, le quitaron de las manos ese informe y la enviaron a casa con un par de recetas.

En un análisis en 2012 de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) más del 13% de las muestras rebasaron los niveles de metales pesados —los estándares de calidad mínimos— y se determinó que la totalidad del censo estaba expuesto a fuertes dosis de arsénico. Jiménez se consideró, a raíz de esas pruebas, la urbe mexicana con el agua potable más contaminada. El doctor, Daniel Espinosa, colaboró en ese muestreo. También participó en otro estudio a cargo de diferentes instancias de salud municipales que detectaron la proliferación de enfermedades crónico-degenerativas,

cánceres, alergias, eclampsias, lesiones en la piel y malformaciones congénitas. Por la austera consulta de este médico familiar pasan al menos una o dos personas a la semana con esos padecimientos, poco comunes en la ciudad hace una década. Espinosa está convencido que el motivo es la pésima calidad del agua: “Falta el agua y entonces cada vez se tiene que extraer del subsuelo a mayor profundidad, lo que incrementa la presencia de arsénico”.

Varios dirigentes locales han manifestado públicamente que la principal causa de la escasez es la sobreutilización de aguas profundas por parte de los latifundistas de nuez pecana. En 1990 se construyó la presa Pico de Águila para satisfacer la demanda agrícola de la región sur del estado y Jiménez se quedó sin acceso al cauce superficial. Los volúmenes de agua subterránea cayeron año tras año y su distribución favoreció a los terratenientes. De los 1 200 pozos del municipio, apenas 13 se destinan al consumo humano. Las autoridades estatales indicaron que 42 de los 61 acuíferos del estado, de los que depende casi el 80% de su población, están explotados por encima de su capacidad de recarga.

En Chihuahua se forjó todo un mercado negro del agua con la falsificación de documentos, artilugios legales y sobornos, tal y como desvela la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción en su investigación “Los explotadores del agua”. El estrés hídrico en la entidad propició un negocio multimillonario que involucró a empresarios, políticos y hasta al gobernador César Duarte. “El agua se ha ido a cuantas manos de grandes productores y las concesiones se dieron de forma irregular. La Conagua no se comportaba de manera justa, equitativa y cumpliendo los lineamientos establecidos”, me dice la coordinadora regional de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mariana Chew, responsable de la agencia pública en el norte de México.

En 2013, Peña Nieto prohibió la concesión de títulos para el aprovechamiento de agua, una veda vigente hasta 2019 por falta de reglamento. Sin embargo, en ese periodo se entregaron centenares de aprobaciones en cuencas exiguas: cerca de 400 licencias tan sólo entre el 2013 y 2015, cuando Álex LeBarón estuvo a cargo de la delegación estatal de la Conagua. Por un sólo documento se llegaban a pagar tres millones de pesos (unos 15 mil dólares). Ante el contubernio de las autoridades en el tráfico del agua, colectivos civiles elaboraron un censo que contabilizó unos 1 500 pozos ilegales.

El llamado “huachicol del agua” se disparó en la última década al compás del auge del nogal en Jiménez, el municipio con mayor superficie de ese cultivo y que produce más nuez que todo Texas. El excesivo dispendio de agua también se da en grandes plantaciones de manzana y alfalfa. Esto lo sabe cualquiera. Desde la carretera se ven los áridos campos inundados en temporada de riego.

Esos dos palmos de agua le duelen en el alma a Elvira Peña, vecina de Perla en la colonia PRI —nombre del partido conservador que la fundó—, una de las más azotadas por la carestía. Su fregadero rebosa de platos y ollas sucias de cinco días, los que lleva sin agua corriente. “Aquí se maneja el agua a tandeos. En teoría, es cada tres días, pero cuando nos toca, a veces llega y a veces, no. No es siempre a la misma hora. Las personas que trabajamos muchas veces estamos fuera y no podemos almacenarla”, explica. Elvira se turna con sus dos hijos y nueras para despertarse varias veces en la noche a comprobar si sale agua. Cuando sale, levanta hasta a sus nietos para que ayuden a abrir todas las llaves y llenar cualquier recipiente. El bidón y los tres baldes de la ducha, donde se bañan a cubetazos, están pringados de una capa blanca, al parecer por los metales pesados que

contiene el agua. Elvira tuvo que cambiar los grifos de aluminio por unos de hierro, porque se habían corroído.

La artrosis en rodillas y manos podría ser por haberse pasado gran parte de sus 54 años dedicada al comercio, formal e informal, siempre de pie y moviendo mercancías. Pero, a Elvira esos dolores se le agudizaron cuando bebía agua corriente. También dice que su ropa se teñía de manchas rojas por lo tóxico que desprendía su piel. Por eso recomienda no usar tampoco el agua con arsénico para bañarse, porque el cuerpo absorbe el metaloide. A la mayoría de hogares de su cuadra, sin embargo, no les queda más opción que seguir consumiendo esa agua de llave. No pueden permitirse la compra de garrafones. Las estadísticas indican que un hogar mexicano destinó 62 pesos (unos tres dólares) al mes por concepto de agua natural embotellada. Eso, en promedio. La realidad en los barrios con grave desabasto es que las familias llegan a gastar una cuarta parte de sus ingresos. En casa de Elvira viven nueve personas y al día consumen unos 30 litros, un garrafón y medio. La recarga de cada garrafón cuesta 30 pesos (1.5 dólares). Al mes paga unos 1 400 pesos (70 dólares) en agua en plástico, un tercio del salario mínimo en ese momento de 2020.

“Hay agua embotellada que viene igual con arsénico, te engañan. Aquí en la colonia hay al menos un enfermo de diabetes en cada hogar y se han visto más casos de leucemia y problemas de huesos en personas jóvenes. Eso no pasa en pueblos cercanos”, dice. La percepción de Elvira coincide con los estudios de la UAM, de la Secretaría de Salud local y con los datos del doctor Espinosa. Los diferentes gobiernos municipales y estatales que van asumiendo el poder hacen la vista gorda.

El remedio para muchas familias ha sido abandonar sus hogares, asfixiadas en parte importante por el derroche

económico en agua y las penurias para conseguirla. Si se mantiene ese desplazamiento —a menudo disfrazado de migración hacia Estados Unidos— varios expertos pronostican que en menos de 15 años Jiménez será una localidad fantasma. Debería llover durante dos décadas seguidas, día y noche, para que se recuperen los niveles originales de su manto freático.

Elvira vivió hasta el año 2000 en el mismo barrio, pero a 600 metros. En la anterior vivienda el agua sólo salía cada seis meses y apenas llegaban los camiones cisterna. Fue el motivo primordial para mudarse a una ubicación próxima al depósito municipal, un tanque elevado a 40 metros que se ve desde su ventana. La mejoría no fue del todo la que esperaban, pero Elvira ha notado un cierto alivio en su vida. Ya no tiene que dedicar todo el día en exigir que le envíen o ir a buscar agua. Ha podido volver a trabajar y ahora solamente carga a diario en sus hombros un botellón de 20 litros durante unos 400 metros, desde la tienda que ahora también le queda más cerca. Cada palmo cuenta en Jiménez cuando se trata del agua y de una salud amenazada.

La presa tomada

SAN FRANCISCO DE CONCHOS | ESTACIÓN CONSUELO

El mezquite actúa de cortavientos: impide la formación de dunas, reduce la erosión y contribuye a la captación de agua. Fertiliza el suelo por su capacidad de fijar nitrógeno del aire. Pero, en el yermo norte de México se utiliza sobre todo en barbacoas y para la producción de carbón y muebles. Por eso y, sobre todo, para la siembra de nogal, se arrancan al año cinco mil hectáreas de matorral.

Dice un mito en el sur de Chihuahua que para fortalecer la estructura de una gran construcción y evitar su derrumbe debe realizarse una ofrenda humana, enterrar a personas vivas. Se dice que al iniciar las obras de la presa La Boquilla en 1910 desaparecieron cuatro niños de San Francisco de Conchos. A comienzos de siglo, unos pescadores escucharon el llanto de dos de esos niños. Del tercer lloriqueo se percató una pareja en 2009, pero las autoridades acallaron su relato para evitar el pánico entre la población. Los lugareños esperan horrorizados el eco del último lamento que augura el colapso de la construcción o un acontecimiento devastador. Para muchos, ese apocalipsis ya se ha desatado.

A comienzos de septiembre de 2020, centenares de agricultores se enfrentaron en una batalla campal con palos y piedras a un contingente de 400 militares de la Guardia Nacional que custodiaban la infraestructura. Los pobladores pretendían impedir el trasvase de parte del recurso que

consideraban suyo. La única sombra en lo alto de la presa es la de una bandera mexicana izada en señal de conquista.

El gobierno federal trataba de apropiarse de La Boquilla para sustraer parte de sus aguas y cumplir a tiempo un tratado internacional con Estados Unidos firmado en 1944. El acuerdo obliga a México a enviar 2 200 millones de metros cúbicos del río Bravo cada cinco años y, a su vecino del norte, 1 800 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, es decir, cuatro veces más. De los cuatro estados fronterizos, Chihuahua concentra más de la mitad del volumen total del río Bravo, al abarcar su mayor afluente, el río Conchos. Empero, es el único territorio que no recibe agua del convenio. “Siempre hemos cumplido con el tratado, no queremos faltar a ese deber, pero este año se han llevado mucha agua que no se sabe dónde ha ido a parar”, dice Domingo Márquez, un nogalero mediano del municipio contiguo de Camargo. No obstante, México arrastraba una deuda de 319 millones de metros cúbicos en la entrega del anterior quinquenio. Debía liquidarla para eludir una renegociación del tratado bilateral y la eclosión de un nuevo frente diplomático con Donald Trump, que apretaba las tuercas para así contentar a su masa de votantes en el campo texano en vista de las elecciones presidenciales de finales de 2020.

La verja de entrada está atiborrada de pancartas: “El agua de Chihuahua para los chihuahuenses”, “No al saqueo de agua!! No a la Guardia Nacional!”, “#SinAguaNoHayVida #AMLOescúchanos”. Bajo una gran carpa deambulan unos 30 campesinos. No hay mucho que hacer en una mañana que transcurre mansa, al menos en apariencia, porque uno de ellos alerta de que el riesgo es constante. “Estamos pendientes de que en cualquier momento pueda llegar la Guardia Nacional y enfrentarnos”, dice Guerrero Carrillo, quien se presenta como “el líder de la toma”. Los señores de tejanos,

hebilla prominente, camisa a cuadros y sombrero vaquero, se sientan en corrillos, codo en rodilla, para discutir sobre el desarrollo de los acontecimientos y decidir los siguientes pasos. Se distinguen claramente de sus empleados, con camisetitas de propaganda y botas en vez de zapatos de punta. En ocasiones, se levantan con andares ampulosos para dar alguna orden a los muchachos o a las mujeres. Ellas se refugian en la sombra y mueven cajas de comida para preparar el almuerzo: arroz con verduras, frijoles y pollo. Varios de los hombres se acercan a las gigantes ollas sobre mesas plegables para alabar, según ellos, el destacado papel que tienen sus esposas e hijas. Ellas sonríen sonrojadas. Tras saludar a todos los presentes, Guerrero me da permiso para avanzar.

Durante los 10 minutos de subida hacia la coronación de la presa, Domingo insiste en que si se acaba esa agua, se les acaban sus cultivos, su trabajo, sustento. Arriba del todo hay un par de jóvenes en su turno de vigilancia, garrote en mano y rostro cubierto. Uno de los veinteañeros está dispuesto a “luchar hasta la muerte contra los ejércitos, los más grandes apoyos de la tiranía”. Parafrasea una de las alegorías de Pancho Villa, el legendario revolucionario asesinado en el sur de Chihuahua a comienzos del siglo pasado, impregnadas en el discurso de los manifestantes.

Como la mayoría de los asaltantes, ambos son jornaleros pagados por los grandes latifundistas, los patrones que evitan ensuciarse las manos y soportar los 45° centígrados que abrasan con desdén. A Domingo se le escurren goterones de sudor por la cara. Tampoco él suele venir a la presa, aunque apoya la protesta, sólo me acompaña. Las temperaturas y la sequía se han cebado en el último lustro. “Tenemos escasas lluvias, este año no ha llovido nada. No nos va alcanzar el agua ni para menos de la mitad de las siembras del próximo año. Es una catástrofe ecológica”, dice y señala

una de las paredes del espaldón con bastantes números y rayas al descubierto, muchos más de los que debiera. Se encontraba al 31 % de su capacidad. El despiadado mediodía, rebotado en el espejo de agua, me ciega al intentar dimensionar la extensión de ese Lago Toronto, el mayor embalse de la entidad, “nuestra joya”, lo tilda el nogalero.

Los agricultores de nuez y alfalfa ya habían intentado ocupar ésta y otra represa en febrero y julio de 2020, ante los amagos del ejecutivo federal de trasvasar el agua. El conflicto escaló hacia septiembre por la cercanía al vencimiento del plazo —el 24 de octubre— para cubrir la cuota del tratado y estalló en esa vigorosa movilización. Sobre la bocina, López Obrador cumplió con el acuerdo al entregar agua mayoritariamente de las reservas de presas internacionales en los estados fronterizos de Nuevo León y Tamaulipas, confrontados por el trasvase de aguas. En Tamaulipas, además, surgió en 2022 una autodefensa de campesinos para proteger su río. “Con el cambio climático, ya no hay vuelta atrás para la mala administración del agua. Siempre habrá conflicto por el agua, aquí o en el pueblo de al lado. Nos gustaría que todos tuviésemos, pero, eso no podrá ser y a cada uno le toca defender lo suyo”, dice Domingo. Las reclamaciones de su gente fueron más allá de salvar el siguiente ciclo de riego.

El mandatario logró desactivar el conflicto con Estados Unidos, pero no la toma de las instalaciones, que se alargó un año. El gobierno estatal, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), hizo suya la protesta y respaldó a cara descubierta la ocupación. De esa forma forzaron el compromiso del gobierno federal a darles dinero para la tecnificación de riego y apoyos para la siembra. Los manifestantes celebraron su retirada por todo lo alto, aunque ese “hecho sin precedentes”, como valoraron su éxito, costó varias vidas.



Jessica Silva regresaba del asalto a La Boquilla hacia su casa en Estación Consuelo, a unos 70 kilómetros, cuando una patrulla de la Guardia Nacional disparó cinco veces contra su coche y la abatió. Su marido, Jaime, pasó varias semanas hospitalizado en estado crítico. Al día siguiente del homicidio, sus vecinos cortaron las vías del tren con una montonera de arena y colocaron un puesto de protesta permanente. Bajo esa carpa afloró la rabia. “¡Esto es un acto de guerra!”, grita uno de los serenos mientras hablo con la madre de Jessica. “La asesinaron por andar peleando el agua. Perdió la batalla”, resume Justina Zamarripa. Se siente orgullosa de ser esposa de agricultor, como su hija, que estudió quiropráctica, pero se dedicaba a vender pasteles. Tenía 36 años y era madre de tres hijos.

Justina arrastra los pies con la cabeza gacha y los hombros alicaídos entre la multitud de señores que discuten las últimas novedades y rumores de la lucha y me miran malcarados por ser un extraño. “Descansa en paz que los chihuahuenses lucharemos por hacerte justicia”, se lee en la camiseta con el rostro de Jessy que su madre no se ha quitado en una semana, desde el fatal 8 de septiembre. La misma imagen cuelga en varios pendones en su memoria. “No sabemos nada de lo que pasó con ella. El presidente dice que “abrazos, no balazos”, nos acaban matando a los inocentes. Si no nos dan una buena respuesta, la gente está muy enojada...”, advierte.

En un primer momento, la versión oficial fue que Jessica y Jaime habían interceptado y agredido con armas de fuego a un vehículo militar que transportaba a tres arrestados de los enfrentamientos y que los soldados dispararon para repeler el ataque. Luego, dijeron que la pareja había bloqueado la carretera con su vehículo para frenar la persecución y facilitar la huida de otros compañeros. Una investigación determinó finalmente que hubo un uso ilegítimo

de la fuerza. Seis elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en los días posteriores, en parte para calmar los ánimos, porque a cinco de ellos los exoneraron de todo cargo a las pocas semanas. Más de dos años y medio después, sigue pendiente el juicio contra el único acusado, en prisión domiciliaria.

AMLO criminalizó a las víctimas al criticar que detrás de la toma de La Boquilla había intereses políticos de exgobernadores del estado, dirigentes panistas y de grandes nogaleros de la región. Al principio los mencionados negaron ese señalamiento, pero, al ver que la protesta ganaba popularidad, evidenciaron su implicación. La reacción del presidente fue un inusitado despliegue de centenares de guardias nacionales.

La hilera de tiendas de camuflaje se prolonga por medio kilómetro del río Conchos hasta la entrada de la derivadora de Las Pilas, parapetada con sacos terreros, espigas de madera y una zanja perimetral. La trinchera de 40 metros hasta el dique está blindada por un cordón de militares, ataviados con casco, escudo y chaleco antibalas, que sólo se quitan para bañarse en el río. Desde el montículo otros tantos soldados embarricados avizoran cualquier movimiento. El comandante viene a hablarme, siempre acompañado de un par de rambos. Siguiendo el protocolo, me pide la credencial, se la lleva para hacer ademán de que pide autorización a sus superiores y vuelve para prohibirme amablemente el ingreso. El destacamento lleva un mes en esa posición, una zona copada por el narco. “La maña (los criminales) estaba viendo los enfrentamientos (entre productores y Ejército) y no se iban a meter a menos que los militares utilizaran sus armas. Pero, no fue así. El crimen no se mete con la población, nos cuidan”, asegura un agricultor que prefiere no identificarse.

López Obrador vinculó con el crimen organizado a varios nogaleros, entre otros, a Los Uriona y anunció una “limpieza” de la Conagua por permitir el acaparamiento del agua en Chihuahua a manos de esos pocos empresarios.

La narco-nuez

SAUCILLO | CAMARGO

El mezquite sobrevive a la aridez y a los mamíferos que buscan alimento en sus espinosas ramas. Las mismas que, a su vez, sirven de madriguera para diversas aves. Encuentran un ambiente fresco entre sus tallos.

Los campesinos de la médula de Chihuahua se autodenominan “los vencedores del desierto” por haber conseguido el progreso agrícola en una geografía estéril, donde ni los mezquites se atreven a brotar bajo el azuzante sol. El milagro se obró gracias al esfuerzo, pero también al uso de una ingente cantidad de agua para que crezca el nogal y la alfalfa. Para producir un kilogramo de nuez se necesitan 15 mil litros de agua.

Estos cultivos sustituyeron al maíz, frijol, trigo y algodón tras su caída de precios a raíz de la firma del viejo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (tlcan) en 1994. Su rentabilidad es cinco veces mayor. La hectárea de nogal genera al año 160 mil pesos (unos 13 mil dólares) de ingresos netos, mientras que la de maíz, unos 35 mil (1 750 dólares). El abuelo de Domingo se dedicaba al maíz y al frijol y su padre fue quien hizo la transición a la nuez. El joven heredó de su familia unos terrenos que con

el paso de las generaciones se fueron fragmentando, como tantos en Camargo, el segundo municipio exportador de nuez del estado. “Las ganancias con el nogal son un poquito mejor y es menos esfuerzo y cuidados que con una planta chica. Hay huertas de nogal desde hace medio siglo, pero es cierto que la mayoría nos pasamos a la nuez recientemente”, dice, cauteloso.

La fiebre de la nuez en Chihuahua se detonó a comienzos del milenio. Desde entonces se han duplicado los sembradíos hasta superar las 115 mil hectáreas. En Camargo, 4 de cada 10 terrenos de nogal todavía se encuentra en desarrollo, es decir, se sembraron hace menos de 10 años, el tiempo que tarda el árbol en alcanzar su madurez. La nuez se extendió a la par que la alfalfa, utilizada para la alimentación de ganado por parte de la potente industria lechera y cárnica de la región. Ambos cultivos requieren el doble de agua que el maíz, aunque Domingo insiste en que la diferencia es de sólo “un poquito”.

Uno de sus jornaleros se trepa por la imponente copa de 25 metros del nogal y con una larga vara agita las ramas para que caigan los frutos sobre una gran malla. Abajo, otro, separa las hojas. Sus manos están enmugrecidas por el polvillo que recubre la cáscara de la nuez. Le compensa que nunca más pueda quitarse esa mugre, porque cobra 10 pesos (50 céntimos de dólar) por kilo recolectado, cuatro veces más que una cosecha de maíz. Tampoco al vareador le preocupa el riesgo de subirse tan arriba.

Casi todas las 50 mil personas de Camargo viven de la nuez. En los arcenes hay numerosos puestos ambulantes donde se vende la pecana. En los tramos de avenidas donde hay una de las muchas comercializadoras de nuez es donde se colocaron jardineras. Acaba de iniciar la temporada de recolección, en octubre, y los vareadores rebosan las cantinas. La siembra de nogal, en cambio, está al alcance de muy

pocos. Implica una inversión a largo plazo, porque el árbol tarda de 10 a 15 años en dar frutos. “Es como una pensión de retiro”, dice Domingo, a sus 36 años. Por sus cinco hectáreas de nogal puede ganar unos 50 mil dólares al año. El monto es lo suficientemente atractivo para el crimen organizado, al menos como sucede en otras regiones de México.

Tras muchos rodeos para intentar no espantarlo, le pregunto si hay extorsión o robo de mercancía. Domingo esconde la mirada bajo su gorra y niega con la cabeza.



En una de las huertas de nuez en las inmediaciones de Camargo, su dueño montó una tienda de campaña para pasar la noche junto a su esposa y sus dos hijas pequeñas. Hacen guardia para disuadir cualquier intento de hurto en su arboleda, rebosante de nueces a pocos días de empezar su cosecha. “Son los mismos ladrones de la ciudad que vienen a saquearnos. No son del crimen, no sabemos quienes son, pero igual estamos atemorizados”, dice, sin querer dar su nombre.

Un par de agricultores terminan de labrar la parcela de enfrente y se preparan para dormir en la batea de las camionetas. También me piden ocultar sus rostros. La semana pasada les robaron 100 kilos de nueces, tan sólo agarrándolas de la parte baja de las copas. Calculan su valor en 8 mil pesos (unos 400 dólares). “Ponemos un velador por la noche y otro durante el día, pero siempre nos gusta quedarnos también a nosotros. De a pocos, estos robos terminan afectando mucho”, se lamentan. Se estima que al año la usurpación de nuez asciende las 3 mil toneladas, alrededor de 5 % de la producción total en Chihuahua. Las pérdidas superan los 250 millones de pesos. En Camargo y otros

distritos de pequeños y medianos productores se estila el saqueo de unos cuantos costales, el llamado robo hormiga. En regiones de vastos terrenos, sin embargo, el crimen organizado comete asaltos a gran escala.

(El negocio es muy lucrativo. La nuez es el octavo producto agrícola mexicano con mayor valor de exportación, que en los últimos 13 años se cuadruplicó y alcanzó los 15 mil millones de pesos —unos 750 millones de dólares—. La moda de la nuez por su “grasa saludable” disparó el consumo en Estados Unidos, y Chihuahua abarca más del 60% de su producción y venta.)

Dieciséis nogaleros de la entidad me dicen que han sufrido extorsiones, atracos en sus galpones o secuestros de familiares, pero todos rechazan dar su testimonio, ni siquiera por escrito de forma anónima. Tan sólo uno de ellos me explica por mensajes de audio con la voz distorsionada el modo de operar de los grupos delictivos: “Se le meten 40 hombres armados con cuernos de chivo (fusil AK-47) calibre 50, armas cortas y como 100 viejos (hombres) recogiendo nueces y echando arpilla, arpilla... Amarran a los vendedores, amarran a los trabajadores y a todos. “No te metas si no quieres que te mate aquí mismo”, te dicen. Así es la función. Por eso algunos productores prefieren dar sus cuotas de tres, cuatro o cinco milloncitos para evitarse problemas”.

Ante semejante virulencia, de nada sirve poner uno o dos centinelas armados, cámaras de seguridad o vallado eléctrico. En alguno de los allanamientos han asesinado a los vigilantes. Durante los dos meses que dura la colecta de nuez, el pánico es aún más superlativo.

La alcaldía de Camargo organiza un corto recorrido para mostrar a los medios locales los estragos de la sequía en el río Parral. Durante la exposición, me da por grabar a cuatro tipos que charlan y se ríen a lo lejos junto a una abollada Chevrolet negra sin matrícula. Cuando se percatan,

me gritan que baje mi cámara. Un poco más adelante, a la orilla del demacrado afluente, uno de los funcionarios me aparta para decirme algo: “Los propios malos ya tienen sus cultivos de nuez. Sí, hay mucho *huachicoleo* de agua en toda la región, pero no sabemos quienes son los autores. La mayoría de los delitos no se investigan por la peligrosidad”. Deja de hablar, azorado por la aparición de tres motocicletas que desconoce y que comienzan a dar vueltas alrededor nuestro. “Vete de aquí, por tu bien”.



El seguimiento del crimen sofoca más que el calor del desierto. En Camargo sólo hay dos hoteles. La primera noche de estadía, el conductor de una camioneta negra, cristales tintados y sin placas, pasa lentamente apuntando con su celular mientras ceno en la terraza. A las seis de la mañana del día siguiente, hay otra *pick-up* similar estacionada frente a la entrada del hotel durante más de una hora, hasta que me voy. “¿Quiénes son?”, pregunto retóricamente a mi guía. “Los malos de Sinaloa. Ya están averiguando a qué vienes, pero, si no te metes con ellos, no pasa nada”, me dice.

En las entrañas de Chihuahua la ley es el narco: controlan quién sale, entra, pernocta, cuándo respiras, por qué estás ahí y, sobre todo, para quién trabajas. Camargo es un lugar estratégico para el narcotráfico por los numerosos senderos útiles para el rápido trasiego de la droga, así como para escapar de algún enfrentamiento. Por sus caminos de terracería nos cruzamos con varias *pick-ups* ostentosas. En la rotonda de entrada a la ciudad, ornamentada con un enorme faro anhelante de un mar imaginario, aguarda todo el día la misma GMC blanca modificada con barras de acero

en la parte trasera. En una calle céntrica hay una casa estilo Bauhaus tiroteada y quemada. El pórtico neoclásico, mordido por los balazos, abre paso a un comedor de escombros que ni las autoridades han peritado ni los sintecho han osado ocupar. En la recámara principal encuentro un short tejano y salpicaduras de sangre en la pared. Era la residencia de uno de los jefes de plaza. Ninguno de los vecinos dice saber quién era.

En Saucillo, 40 kilómetros al norte de Camargo, la bienvenida la dan varios letreros carreteros baleados. En el centro de la localidad, la carnicería “Del Santuario” todavía luce calcinada y perforada por más de 20 impactos de alto calibre siete años después del ataque. Sus propietarios, una apoderada familia de nogaleros y ganaderos, tuvieron que abandonar su rancho y sus negocios tras varios secuestros y asesinatos. Pero, esa historia la tendré que averiguar por teléfono. Al cuarto de hora de estar en Saucillo, sin ni siquiera bajarme del vehículo, nos rodea despacio una patrulla municipal. A los pocos minutos, un turismo color ocre con placas chuecas (irregulares) —comúnmente utilizadas por delincuentes— nos rebasa y reduce bruscamente la velocidad. Atrás se nos pega una camioneta blanca de vidrios oscuros. “Nos están marcando el paso”, dice mi guía. Nos conducen hasta la salida de la urbe y se detienen en la incorporación a la autopista, señal de que nos marchemos.

Hay que llegar hasta la ciudad de Chihuahua, capital del estado, para pasar desapercibido entre sus 900 mil habitantes, y para que alguien salga del anonimato. El presidente del Sistema Producto Nuez, Víctor Loya, participa en un encuentro de nogaleros en cuyo estacionamiento abundan lujosas camionetas con sus respectivos escoltas. “Les resulta más rentable robarse un camión o una bodega de nueces, que una sucursal bancaria. Es un producto imperecedero de fácil comercialización”, explica sobre los motivos de

que el asalto con violencia del crimen se haya incrementado desde 2017. El representante del gremio calcula que las pérdidas por uno de esos saqueos pueden rondar los 20 millones de pesos (más de un millón de dólares). A los productores les sale más a cuenta pagar unos 70 mil pesos mensuales al cártel por proteger sus tráilers. “Les cobran entre dos y tres pesos por kilo transportada para garantizarles que no van a tener ningún problema en el traslado de su mercancía”, especifica.

Loya teme que esta práctica, habitual por Jiménez y la región sur, pueda afianzarse por toda Chihuahua. El delito causa daños colaterales como el destrozo de cultivos, enormes gastos en tecnología de seguridad y la caída de precios debido al mercado ilícito. En las esquinas de Villa López y Jiménez era usual encontrar bidones que anunciaban la venta de combustible robado, hasta que AMLO emprendió una cruzada contra el *huachicol* en cuanto asumió el poder en diciembre de 2018. Mermado el contrabando de gasolina, los delincuentes encontraron en el mercado de la nuez una fuente alternativa de financiación, dice el portavoz nogaleño. Tras muchas llamadas y comprobaciones, un grupo de empresarios me convoca en el reservado de un discreto restaurante para confirmar los datos y afirmaciones de Loya, y enfatizar en el temor y riesgo que sienten por todo eso.

La guerra entre cárteles de 2010 hundió en la psicosis a toda la gente. Lejos quedan esos tiempos en que estaba prohibido que cuatro hombres viajaran en el mismo vehículo; en que las trocas de los narcos se reconocían por su parachoques torcido hacia delante por los continuos frenazos en las persecuciones; los tiempos en que las jóvenes dejaron de salir a los bares y los jóvenes dejaron de salir con sus novias por miedo a que un sicario se obsesionase con ellas. Se terminó la extrema tensión y las refriegas diarias, básicamente porque uno de los cárteles, el de Juárez, venció,

se aposentó, impuso su orden y sus tentáculos penetraron en todas las esferas.

Convenzo a la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) para empotrarme en uno de sus operativos. Los funcionarios van escoltados por policías a la hora de intervenir alguna toma de agua clandestina. En 2019, cuando se dirigían al acueducto El Sauz, 60 kilómetros al norte de Chihuahua, fueron interceptados por un convoy de camionetas y un par de docenas de hombres enfusilados. Para movilizar a tantos sicarios en un punto tan concreto, me susurra un empleado de la JMAS, alguien desde dentro tuvo que darles la información. El director del organismo hídrico, Roberto Lara, admite que se han topado con gente armada que ha expulsado a su personal de la zona. “A fin de cuentas, el agua en aquella zona del norte de la capital (del estado) se estaba extrayendo ilegalmente para huertas nogaleras”, me dice, dando por hecho la relación de los latifundistas con el crimen.

Frente a ese peligro, opta por llevarme al acueducto Ojos del Chubiscar, algo más calmado, ya que el hurto de agua es para uso doméstico. Pese a todo, salimos con los primeros rayos del día para pasar lo más inadvertidos posibles y tomar desprevenidos a los vecinos. Nos acompañan dos agentes en cuatrimotos. La caravana de cinco camionetas oficiales se adentra en los labrantíos de El Sauz, donde la pérdida por robo de agua equivale al suministro de seis pozos, 10% del recurso que consume la ciudad de Chihuahua. No pareciera que se pueda chupar semejante cantidad por la delgada manguera irregular conectada a un grueso conducto. “Si el crimen posee cultivos de nogales, necesita agua. Entonces, seguramente también participe en el robo de agua”, señala Lara, antes de darse cuenta de que ya ha hablado demasiado. En 10 minutos los operarios cortan el tubo, lo taponan y salimos del lugar.

Cada tanto flotan cadáveres en la presa La Boquilla o se descubre alguna fosa común en sus proximidades, pero, los periodistas en Camargo no pueden informar sobre nada de eso sin morir a balazos. Algunas veces los jefes de plaza los llaman por teléfono o los paran por la calle para avisarles de algo que no les gusta. En general, son los mismos medios los que se auto-censuran. En uno de los municipios del cuarto estado mexicano con mayor tasa homicida en 2023, la nota de portada suele ser un accidente de tráfico, siempre y cuando no involucre a familiares de narcos. Quienes han tratado de alumbrar el agujero negro informativo han sido callados de la manera más cruel.

La periodista Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo de 2017 de ocho disparos en la cabeza mientras llevaba a su hijo a la escuela en Chihuahua. Había investigado la violación de derechos humanos contra comunidades rarámuri de la sierra Tarahumara, conflictos ambientales, crímenes contra mujeres y desapariciones, todo con el trasfondo de desenmarañar la narcopolítica del estado.

A finales de octubre del 2019, hallaron el cadáver de Gustavo Valerio López, influencer de 22 años de Hidalgo del Parral, a una hora de Jiménez. Un mes y medio antes, había empezado a señalar y a subir a Facebook fotografías de supuestos matones de Gente Nueva. En su última publicación lanzaba una alerta a los pobladores de varios municipios de que esa célula del cártel de Sinaloa robaría sus cosechas de nuez, nombrando a los nogaleros que serían víctimas y la estrategia para saquear su producción en complicidad con la policía.

El 29 de noviembre de 2020, acribillaron a Arturo Alba cuando salía de presentar un telediario que incluyó una pieza sobre la inseguridad y la corrupción de las corporaciones policíacas en el estado. Diez días después, esas mismas autoridades aprehendieron a un par de pandilleros

adolescentes que aceptaron la autoría del asesinato y alegaron que lo habían confundido con un gatillero rival.

Las muertes violentas en toda Chihuahua se duplicaron en la última década, por encima de las dos mil. No obstante, el mundo se fijó en el estado, por mucho el más grande de México, a partir del 4 de noviembre de 2019, tras la masacre de tres mujeres y seis niños de una misma familia, los LeBarón, mormones de ascendencia estadounidense. Donald Trump puso el grito en el cielo y ofreció apoyo para una intervención militar, infravalorando la capacidad de las fuerzas armadas mexicanas. La atroz matanza se achacó a Los Salázar, célula del cártel de Sinaloa, por motivos tan dispares como confundir las camionetas en las que viajaban con las del grupo enemigo, por desacatar su orden de no comprar gasolina en el estado vecino o hasta por una venganza por pleitos enquistados.

La colonia LeBarón se ubica en los inhóspitos límites entre Chihuahua y Sonora. El clan vivía acosado por el narcotráfico desde 2009, cuando secuestraron a Eric LeBarón, a quien liberaron gracias a una amplia movilización social. Dos meses después, mataron a su hermano. Uno de ellos, Julián, se alzó como férreo activista por la paz. Otro de ellos, Álex, se metió en política como diputado del PRI y estuvo al mando de la Conagua en el estado, la misma delegación que López Obrador había acusado de corrupta. Algunas comunidades también han denunciado que los colonos excavan pozos ilegales. El acaudalado clan ha multiplicado sus plantaciones de nogal, como muestran las imágenes satelitales. “No puede ser pacifista quien actúa fuera de la ley. Los LeBarón perforan y desmontan sin permiso Conagua y Semarnat”, protesta un letrero en una carretera del norte de Chihuahua.

El páramo se topa en el horizonte con la silueta de una cordillera interminable, la Sierra Madre Occidental, por la

que el rarámuri Isidro Baldenegro López entregó su vida. El activista reconocido en 2005 con el Premio Goldman —el Nobel medioambiental— fue asesinado a comienzos de 2017, 20 años después de presenciar la ejecución de su padre, del que había tomado el relevo para combatir la tala ilegal y la defensa del agua. Su homicidio encendió las alarmas sobre la inseguridad para los defensores de esas tierras indígenas. Un mes después, mataron a Juan Ontiveros Ramos, otro ambientalista de la misma etnia. Y en 2020, a otros dos. Incluso en 2022 asesinaron a balazos a dos sacerdotes jesuitas. El crimen opera a sus anchas en esa sierra Tarahumara, donde apenas se sabe lo que entre sus colinas ocurre. “Sucede igual que con el aguacate en Michoacán: el narco coacciona a quienes les va bien con la nuez y, a su vez, esos empresarios chingan (importunan) a los pueblos, les quitan el agua. La diferencia es que aquí nadie se atreve a hablar y ni siquiera puedes llegar a ciertas zonas para investigar”, me dice el guía. El terror impregna hasta las tradiciones.

Chihuahua es uno de los seis rincones del planeta donde se ha reportado el avistamiento del hombre-polilla. Fue en 2009, justo el año en que la epidemia de gripe A golpeó a México. La casualidad hizo que la fábula del humanoide con aspecto de gigantesco búho calase con fuerza en las regiones nogaleras. Me cuentan que los propios terratenientes esparcen la historia entre sus jornaleros para infundir miedo y que la gente no se acerque a sus cosechas, donde podría aparecer el hombre-polilla. La visión de la criatura se considera un heraldo de grandes catástrofes, que para algunos ya han acaecido en una tierra asolada por la extrema sequía y el narco. La mayoría de chihuahuenses de campo y fe conducen con las ventanillas subidas, tanto por el aire acondicionado como para evitar que la mirada se desvíe hacia la vastedad, y que entre los mezquites aparezca el hombre-polilla, o algún sicario.



La sembradora de agua

Las ollas de Oaxaca

SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO

El nanche es un árbol pequeño y retorcido, un arbusto que alzó una copa amplia, un paraguas, en medio de la sabana. Su fruto dulce, unas pulposas bolitas amarillas, cautiva a los animales. También alimentan a gran parte de Centroamérica desde el periodo prehispánico. Se conocía como “el fruto de la familia”.

El machete le pasó a un palmo del estómago. Carmen Santiago Alonso estaba recostada en la cabecera de la cama cuando alguien clavó la hoja metálica en los tablones exteriores de su barraca. Carmen charlaba con sus compañeras de cuarto, otras dos jóvenes misioneras, y las tres quedaron atenzadas al escuchar el golpe del cuchillo en la madera. Heladas, como aquella madrugada de invierno en Santa Cruz Itundujia. La noche era cerrada sobre el pueblo en las montañas altas de Oaxaca y la espesa niebla les impidió identificar al agresor. El tipo dejó el arma incrustada en la madera y huyó; las novicias escucharon sus pasos alejarse a la carrera. Carmen movió su piltra al centro de la habitación, pero ya no pudo conciliar el sueño. El agua, una niebla suspendida en millones de minúsculas gotas, fue cómplice del intento de homicidio.

Aquello sucedió en 1987, cuando el planeta era otro. El frío todavía era intenso en la Sierra Sur, cerca del istmo

de México. Aún había bosques y sus encinos atraían a las nubes hasta formar una niebla eterna y pegajosa. Carmen cumplía su primera misión pastoral en la comunidad, un sitio modesto de casas de listones y callecitas de terracería donde malvivían 200 mixtecos dedicados a la milpa y a cuidar unos flacos corrales de traspatio. La misionera llegó allí a dar catecismo y pronto cambió de idea: Dios podía ser útil, pero más lo era evitar que los caciques siguieran talando de forma inmoderada, arrasando a destajo los montes que captaban el agua de las lluvias. *Etunduteujia*, el nombre originario del poblado, significa “colina de siete ojos de agua” en mixteco. Entonces todavía estaba la niebla densa, pero de los pozos sólo quedaban tres: los otros se resecaron por la falta de agua subterránea debido a la sequía y la merma de los árboles que la filtraban.

La catequista Carmen se hizo activista. Respaldó a los campesinos para combatir a los taladores bloqueando el paso de sus camiones para proteger los últimos tres huecos donde nacía el agua para beber y regar sus cultivos. Eso la volvió enemiga del alcalde, que recibía su comisión por cada tronco talado. El hombre la amenazó de muerte varias veces, al grado de entrar en la casa parroquial y disparar al aire una pistola. Pese al hostigamiento, Carmen persistió en su misión, ya no parroquial sino de lucha por preservar los recursos naturales. Duró un año y medio. Solamente una bronquitis la obligó a abandonar ese lugar, que le había enseñado la importancia del agua.



Carmen Santiago Alonso nació en San Antonino Castillo Velasco, una villa donde en 1952 los vecinos empezaban a

poner las primeras paredes de ladrillo a sus casitas mientras sus flacos ganados todavía transitaban por calles de tierra que empolvaban las escasas hortalizas de su mercado semanal. La llamaban Carmencita y creció criada por su abuela y sus tías entre el campo y el trabajo doméstico, entre el sombrero de paja y la falda de algodón rosado que visten las mujeres mayores. Cuando niña, llegaba de la escuela con las manos llenas de los frutos dulces de los nanches amarillos y rojos, y morados, que se comía sin respirar. Aún hoy se relame con el recuerdo. En aquellos años los muchachos acompañaban a los adultos en todo. Siembra, pastoreo, recolección. La vida. Carmencita se acuerda de las ramas del nanche, resistentes y correosas —*clayudas* les dicen—, que juntaba con su abuela. Las varas servían para amarrar los zacates o las gavillas de maíz, sí, y para corregir a azotes a los niños y niñas revoltosos.

Alguna que otra vez Carmencita había sentido la dureza del nanche en sus nalgas, pero por lo general su familia prefería usar la palabra. Tal vez por eso pudo ser catequista. Estudiar en la parroquia local en esa época equivalía a entrar a la universidad. Además de aprender a leer, te daban de comer, algo no poco considerable en los campos de Oaxaca. Para ingresar debías tener dinero o inteligencia. Carmen carecía mucho de lo primero, pero le sobraba de lo segundo, así que desde adolescente el seminario fue su nuevo hogar. En cuanto cumplió la mayoría de edad ya seguía al mosén a todas partes y su inquietud por ayudar a los demás la llevó a enlistarse como misionera para enseñar la palabra de Dios.

Carmencita era como esas ramas de nanche: *clayuda*. Sigue siendo. Se empeñó en devolver el agua a San Antónino Castillo Velasco, porque veía que el pueblo agonizaba. Muchos años atrás, entre febrero y marzo, la familia limpiaba los pozos para preparar la siembra y celebraba una ofrenda a Cocijo, la deidad mixteca de las precipitaciones,

tormentas, granizos y de las fuentes de agua. Escarbaban un pequeño hoyo y depositaban un plato de comida hecha con maíz. Luego oraban y entonaban algunos cánticos en círculo: se disculpaban por las ofensas a la tierra y le pedían una próspera cosecha, generosa agua. “Los pueblos originarios tenemos una relación particular con la naturaleza”, me contó doña Carmen una tarde. “A la tierra la vemos como una madre. La naturaleza es un ser, un ser que necesita ser apoyado, porque lo hemos destruido”.

La región de los Valles Centrales de Oaxaca es una depresión parda que ocupa una décima parte del estado, espolvoreada de casitas que se agrupan en comunidades cuyos nombres, como El Vergel o La Noria, hacen alusión a la abundancia de agua de antaño. Ni Carmen ni nadie pudieron imaginar que la sequía del último medio siglo azotaría a dos de cada tres municipios oaxaqueños, y que la tala de los bosques haría el resto. Eso era reseca la mayoría de sus pozos y, por ende, sus cultivos. Hoy no hay ni rastro de verde en toda la lejanía. Muchas de las parcelas son pastizales amarillentos. Oaxaca ha perdido una cuarta parte de su superficie agrícola desde 2005. Ese año, tres maiceros zapotecas tocaron a la puerta de Carmen para pedirle auxilio porque no encontraban más agua. La misionera ya había renunciado a su carrera religiosa en 1995 para pasarse al activismo puro y duro. Fundó un centro de derechos indígenas, Flor y Canto, que vertió todos sus esfuerzos en aliviar ese problema de escasez de agua. Los mixtecos creían tanto en ella que la llamaba La Doctora.

Carmen pinchó a los campesinos para moverse como ella, rápido y sin miedo a raspase. Y tiraron de ingenio. Comenzaron a rescatar sus conocimientos ancestrales sobre los desniveles del terreno y los ciclos de precipitaciones para construir ollas de captación de agua: fosas rectangulares donde se acumulan las lluvias, que de otra forma se

escurrirían e infiltrarían en los acuíferos. Es decir, recolectar el agua para usar una parte y plantar el resto en el manto freático. Los campesinos se turnaban en pelotones de 20 que se repartían por varios puntos alrededor de San Antonino Castillo Velasco para perforar unos 10 metros de profundidad con excavadoras, palas y manos. Empujadas por Carmen, las mujeres también se unieron a las labores. Tomaba cuatro meses cavar una olla; en cuatro años terminaron las 30 y en una década recuperaron el nivel de agua subterránea de una de las zonas más desecadas del país. Al concluir el proyecto, 1 500 vecinos de 16 comunidades tenían agua de riego para sus cultivos.

Carmen me aseguró una vez que habían reavivado unos 300 pozos muertos. Nombraron al proyecto con una lógica inapelable: “sembrar agua”.



Las arrugas cincelan la frente de Carmen. Su piel está manchada por el sol, pero sigue siendo una mujer fuerte. Cuando la conocí, en 2020, Carmen andaba por los 70 años, aunque su cuerpo parecía obedecer a una edad más temprana. Ahora mismo echa el freno de mano y baja con la *pick-up* aún derrapando como si sus rodillas no dolieran. (Carmen superó un cáncer y una extirpación del riñón izquierdo hace apenas un año. No lo menciona, ni se le nota). Quiere enseñarme una de las ollas de captación, pequeños estanques del tamaño de un par de canchas de baloncesto. Ese paraje de El Cerrito es el punto de encuentro de las caminatas que la ex catequista vuelta activista organiza cada domingo junto a un grupo de jóvenes vecinos para ejercitarse y conectar con la naturaleza.

Carmen se agacha —yo pienso en su riñón ausente, sus 70 años, el dolor, pero ella actúa con una naturalidad pasmosa— y toca el agua con la misma suavidad con que un agricultor acariciaría sus frutos. “Vimos que la tierra estaba débil, la tierra ya no tenía agua, la estamos explotando mucho, se está enfermando”, me cuenta. “Y para resolverlo tenemos que inyectar agua directamente a sus venas”.

Las obras de las ollas son rudimentarias y la técnica es milenaria, pero hace pocos años volvió a utilizarse. Científicos de Noruega y Estados Unidos llegaron para avalar el método zapoteca. Les preguntaron cómo escogían las coordenadas donde cavar. La respuesta fue con horas y generaciones de observación sobre el comportamiento de las precipitaciones y los suelos; un tiempo y transmisión de saberes del que no disponen las sociedades occidentales. Los científicos se dejaron convencer por lo que vieron y regresaron a sus países. Se llevaron al menos un par de botellas de mezcal.

Carmen presume de esa visita, pero se enorgullece más de ver y mostrar la mejora en la vida de sus paisanos. Nuestra *pick-up* se ha detenido en la entrada de la parcela de Justino Martínez, uno de los pocos que sobrevivieron al agostamiento. El agua del retén El Cerrito se filtra bajo la superficie del pequeño campo del viejo, un bajito pero recio señor de sesenta y cinco. Carmen, Carmencita, Doña Carmen o La Doctora es uno o varios de sus ángeles y Justino la abraza al verla y se le dibuja una ancha sonrisa. “La escasez nos afectó mucho, porque año con año teníamos que escarbar más abajo para tener otro poquito de agua”, explica el hombre. “Fue bastante fuerte, hubo mucha pérdida. Mucha gente dejó el campo y se fueron al comercio o a Estados Unidos, porque aquí ya no había agua”. La sequía también forzó a muchos jóvenes a ganarse la vida de mototaxistas en el pueblo. En San Antonino Castillo Velasco

quedan cinco mil personas, pero vibra como una ciudad intermedia con el ajetreo del mercado y las decenas de mototriciclos *tuc-tucs*.

Justino pudo salvar las dos hectáreas de col y repollo gracias a la siembra de agua. Ahora puede sacar agua de su pozo noria durante todo el día; un privilegio en estas ajadas tierras. Ríe al encender la bomba y ver el agua brotar de la manguera: “Para nosotros fue un beneficio muy importante. El agua estaba a 25 o 30 metros de profundidad y ahorita de nuevo la encontramos a 13 metros. Fue impactante el trabajo. Es por este proyecto que queda algo de agua, si no, ya no hubiera nada”.



Las reservas de los pozos tocaron su nivel mínimo en 2005, tras la última y más grave sequía que asoló a todo México. En la región central, los zapotecas tuvieron que sacar el agua del subsuelo usando el doble de fuerza de bombeo. Eso disparó el uso de energía eléctrica y las autoridades calcularon que un mayor consumo de electricidad debía equivaler a una mayor extracción de agua, así que multaron a los agricultores por, supuestamente, emplear un exceso de líquido que nunca llegó a medirse. La decisión del gobierno fue la gota que colmó el vaso y Carmen se movilizó para encontrar una solución. Así renacieron las ollas de captación y así también nació la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), la organización de defensa del líquido en la que Carmen reunió a las 16 comunidades de los Valles Centrales oaxaqueños. A La Doctora ya la conocían por haber conseguido a través de Flor y Canto algunas ayudas para escuelas y puestos médicos.

Había aprendido tanto en la búsqueda de soluciones que fue allí donde le pusieron el apodo. Así que nadie dudaba en sumarse a sus planes cuando se presentaba en las asambleas comunales y les proponía organizarse para exigir su derecho al agua y la exención de la multa. No había tiempo que perder. La producción no podía detenerse en una zona donde un par de sacos de hortalizas sentencian el porvenir de un hogar.

Hoy es un día de mayo de 2021 y he venido con Carmen a su poblado. Cada mañana desde hace 40 años, la mujer estaciona su camioneta en la plaza principal de San Antónino Castillo Velasco y camina cargada de carpetas hasta el ayuntamiento, donde salta de oficina en oficina para reunirse con regidores, secretarios, cabildos, periodistas... Su frenesí contrasta con la parsimonia del mundo rural, acostumbrado a los almuerzos copiosos y la siesta. La Doctora se quita la camisa tejana y se pone un chaleco deportivo, y viceversa, varias veces durante el día, según sople o aparque la brisa, siempre con la sensación de encontrarse en medio de una acalorada jornada de movilización. Ella marca el ritmo de nuestra conversación. Igual me deja con la palabra en la boca como que se alarga media hora en una exposición. También le da la vuelta a las respuestas para volverlas preguntas retóricas que generen un efecto encantador en el público —en este caso, en mí. A Carmen no parece importarle tener enfrente una, diez o mil personas, sus palabras siempre suenan a mítin. O a evangelización: “¿Por qué a los campesinos, a las campesinas, que producen la tierra, que producen legumbres, verduras, se les restringe el uso de agua? ¿Y por qué a las transnacionales se les da la libertad de utilizar toda el agua que quieran?”

En esos días, Carmen promovía una protesta para revertir un decreto de veda de 1967 que impedía a los campesinos el libre aprovechamiento de los pozos agrícolas. Bajo el

pretexto de evitar la sobreexplotación, la orden presidencial prohibía realizar nuevas perforaciones para extraer agua del subsuelo. Por décadas, los zapotecos intentaron que los sucesivos gobiernos federales atendieran su reclamo para acceder a las napas freáticas, pero fue infructuoso, hasta que en 2012, con La Doctora al frente, la Copuda ganó un amparo judicial para modificar la disposición si la población así lo consensuaba.

Tras varios años de consultas entre las comunidades zapotecas, a comienzos de 2019 la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto de Pueblos Indígenas (INPI), los tres organismos involucrados en la discusión con la Copuda, se comprometieron a levantar la veda, pero dos años después seguía en vigor. En octubre de 2020, los comuneros encabezados por Carmen ocuparon como protesta las oficinas de la Conagua en la ciudad de Oaxaca e impidieron su actividad durante una semana.

Las expectativas eran notables cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México. Carmen mantenía una relación estrecha con él. AMLO se ganó el respeto de los pueblos indígenas desde finales de los años setenta, cuando fue director del Centro Coordinador Indigenista de los chontales y se adentró en las comunidades marginadas de esa etnia para, entre otras iniciativas, construir viviendas y camellones, los terrenos flotantes donde se cultivan hortalizas en Tabasco. Carmen compartió tarima y altavoz durante su campaña para las elecciones a la gobernación de Tabasco en 1988 y desde entonces le brindó un apoyo incondicional al punto de organizarle los eventos en Oaxaca, previos a los comicios presidenciales de 2018.

Durante aquella campaña presidencial, AMLO había prometido acabar de raíz con la corrupción, la inseguridad y la pobreza, aunque a Carmen le entusiasmaba sobre todo

la propuesta de crear un órgano que velase por el derecho de los pueblos originarios, el INPI. “El poder político y económico se han alimentado mutuamente y se han plantado como *modus operandi* del robo de las riquezas y de los bienes de la nación”, pronunció el presidente electo en su discurso de investidura el 1 de diciembre de 2018.

La mañana de la toma de posesión, Carmen estaba en Ciudad de México como parte de una nutrida comitiva de representantes de los 68 pueblos originarios del país. Se paseaba nerviosa por los pasillos del Gran Hotel en el centro de la capital. Durante el desayuno, varios compañeros le habían transmitido su deseo de que ella entregase el Bastón de Mando a AMLO en representación de todos. El báculo simboliza el poder y la jerarquía que los jefes originarios transmiten a modo de aprobación moral a un líder en quien confían para atender sus necesidades. Carmen nunca estuvo de acuerdo en otorgar un reconocimiento tan elevado a López Obrador. El bastón representa a más de 10 millones de personas. “Significa todo el poder, toda la responsabilidad”, me dijo tiempo después, ya en el segundo año de gobierno de AMLO. “Es la más alta distinción y no se ha dado cumplimiento para eso. Decidieron dárselo en una reunión que éramos 14 personas y en realidad se necesitaba un consenso nacional. Andrés Manuel es una buena persona, siempre lo he respaldado, pero se trata de algo demasiado sagrado para nosotros”.

A pesar de su resistencia, varios de sus amigos cercanos la convencieron finalmente de entregar la vara con una serpiente alada en la contera. El soberbio sol de la tarde se derretía sobre el rebosado Zócalo, la plaza más grande de Latinoamérica, cuando Carmen pasó a primera línea del escenario con el báculo en sus manos y se dirigió al nuevo presidente. Poco antes, los representantes de las etnias habían agasajado a López Obrador con obsequios, limpias

de incienso, bailes y cánticos. Carmen se aproximó al micrófono y, en sus tres minutos de alocución, enfatizó tres veces que el mandatario electo tuviese siempre presente la obligación que asumía al aceptar ese regalo:

“...sirva para usted mandar obedeciendo al pueblo”.

“Aquí está el símbolo con el que conducirá a nuestros pueblos, siempre y cuando, queremos recordarle, que queremos ser tomados en cuenta...”.

“Reciba de nuestras manos y a nombre de nuestro pueblo este símbolo que lo guiará. Y recuerde, los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano le entregan nuestra confianza y nuestro compromiso”.

A medida que avanzó el gobierno de AMLO, las esperanzas se diluyeron. La administración federal lanzó varios programas sociales que paliaron la asfixia de miles de hogares y los funcionarios dejaron de robar descaradamente (más allá de los señalamientos de corruptelas contra su hijo Andy). Eso creó una cierta impresión de cambio, pero nunca se produjo la profunda transformación predicada. Un ejemplo que lo resume: AMLO firmó la creación del INPI tres días después de asumir el mando, pero dos años más tarde su edificio sede fue ocupado por decenas de otomíes desplazados a Ciudad de México que pedían acceso a una vivienda digna.

Un día, cuando fui a verla a su pueblo, le pregunté a doña Carmen si creía que López Obrador había cumplido aquel mandato de atender las demandas de la población originaria implícito en la entrega del báculo, pero evadió darme una respuesta concreta. Se limitó a asegurar que el problema del agua viene de muchos gobiernos atrás y a cambiar de tema, lanzando balones fuera con la destreza de la política que lleva dentro, la misma que en el 2000 concurrió de candidata a unas elecciones municipales en San Antonino Castillo Velasco. La joven misionera que quería mejorar las

condiciones de vida de su pueblo al lado de su pueblo, abanderando manifestaciones y asambleas, se dio cuenta con los años que esas mejoras se conquistaban a menudo más rápido en los despachos y en el poder, tanto local como en las esferas federales. Trataba de navegar entre ambas aguas, la calle y el gobierno. El huipil —blusa con bordados típicos—, los lentes de sol, pendientes artesanales y un collar con cruz de madera, le daban un aire despreocupado, pero en realidad cuidaba cada uno de sus movimientos y gestos que, además, immortalizaba: un joven fotógrafo acompañaba a La Doctora en todas sus actividades, desde larguísimos consejos comunitarios hasta marchas o concentraciones frente a alguna instancia pública.

Aunque Carmen esquivase decírmelo, siempre pareció arrepentirse de haberle dado el bastón de mando a López Obrador, incluso desde el instante posterior. Miraba hacia otra parte mientras el presidente blandía el báculo y la muchedumbre lo vitoreaba. Un año y tres meses después, en 2020, AMLO aterrizaba en Oaxaca en uno de sus tantos recorridos proselitistas por el país. Carmen lo esperaba en el aeropuerto, como siempre, pero esta vez para interceptarlo y entregarle una petición de audiencia por la crisis del agua en la región. “Se acordaba de mí, le dijo a su asistente que pusiese atención en el asunto y me firmó un papel conforme había recibido mi solicitud”, me contó. “Pero, jamás me dio respuesta”.

Nueve meses después de eso, a finales de 2020, durante otro viaje, Carmen aguardó desde temprano a las puertas del Holiday Inn de la capital oaxaqueña para abordar al presidente a la salida de un desayuno oficial. Hablaron un cuarto de hora, pero AMLO no se detuvo demasiado. En esa ocasión le dijo al gobernador de Oaxaca, junto al presidente, que prestase atención al tema, pero, como antes, nada pasó. El clima había cambiado, así que en la siguiente visita del

mandatario al estado, en febrero de 2021, Carmen congregó a centenares de integrantes de la Copuda para manifestarse afuera del ex-Convento de Cuilapam de Guerrero, donde el presidente iba a dar inicio a los festejos de los 200 años de la Independencia de México. En una de las pancartas se leía: “15 años sembrando y defendiendo el agua. Dos años solicitando audiencia con AMLO. Aún confiamos en usted señor Presidente. No nos defraude”.



Es la mañana de un miércoles de primavera del 2021. El día está despejado y los miembros del consejo municipal de San Matías Chilazoa se han reunido en la cancha deportiva del poblado donde suele suceder todo, desde una pachanga de fútbol hasta la elección del cabildo a mano alzada. Llevan varias horas esperando a La Doctora, pero nadie reclama por el retraso, muestra del enorme respeto que inspira Carmen. La junta está compuesta por 12 hombres y un par de mujeres apocadas detrás de sus colegas. Hasta hace poco, tan sólo los varones podían formar parte de ese gobierno regido por usos y costumbres, pero la modernidad (¿o el poder?) flexibiliza y cuando aparece Carmencita y el círculo se abre, son los hombres quienes agachan la cabeza para escucharla con una especie de reverencia. Al terminar, toma la palabra uno de los señores de mayor edad: “Aquí semos (sic) los más afectados por la minera. Nos preocupa, porque nos interesa el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos...”

La montaña de desechos sólidos de la cuarta mayor mina de México, una explotación de oro y plata de la compañía Cuzcatlán, es visible desde cualquier calle de la pequeña comunidad de medio millar de habitantes. Es un vertedero de

piedras bañadas en químicos ineludibles apenas cuatro kilómetros al este de San Matías Chilazoa. En 2006, el gobierno de Vicente Fox otorgó a la minera canadiense Fortuna Silver Mines la concesión para explotar 64 mil hectáreas de terreno, el equivalente a la superficie de Guadalajara o Madrid. La compañía, que también opera en Argentina, Burkina Faso y Perú, extrae de allí tres mil toneladas de roca al día —en un año, el peso de la Muralla China—. La mina de 300 kilómetros de túneles subterráneos, como todas las de su tipo y magnitud, requiere de una significativa cantidad de agua para la flotación y la adición de compuesto químico que se une al mineral valioso y que luego flota, para luego separarlo de la mina. En 2023, Cuzcatlán extrajo alrededor de seis millones de onzas de plata y 35 mil de oro. En casos de mineras con volúmenes de extracción similares, el uso de agua diario asciende a cinco millones de litros, lo necesario para abastecer a unas 10 mil personas, es decir, 10 veces la población de Ejutla de Crespo. Pero, por la cabecera del municipio, San Matías Chilazoa, el pequeño torrente que la cruza y su régimen de lluvias de 377 mm anuales, se quedan cortos para el consumo doméstico, regar algunas hectáreas de cultivo y dar de beber al ganado, según lo que se puede observar. No obstante, por la sequía del último medio siglo y la presencia de la mina, según el comisario, la disponibilidad de agua se redujo a un tercio de su volumen habitual.

El séquito insiste a Carmen en llevarla a sus campos para mostrarle varios de los presuntos estragos que ha causado la minera canadiense. Carmen accede y el grupo avanza a pie lentamente hacia los extramuros. Muchos terrenos quedaron baldíos. Las plantaciones y los árboles están resecos. La tierra está a punto de resquebrajarse. Todo esto, dicen los consejeros locales, es producto del descenso en el nivel del agua de los pozos. Hasta ocho metros, aseguran. (No hay estudios independientes que avalen o cuestionen esa

medición). Los labradores han ido abandonando los cultivos para emigrar a Estados Unidos, desde donde envían remesas que sus parientes invierten en costosos sistemas de riego por goteo para rescatar algunas cañas de maíz. Cada familia puede llegar a gastar 15 mil dólares por ese sistema de mangueras que filtra las gotas de agua para cada planta, apenas para recuperar la inversión, el consumo propio y ganarse un par de miles de dólares anuales con la venta del excedente en los mercados locales. “La mina está utilizando la mayor cantidad de agua, nos queda poquita”, se queja el comisario de San Matías Chilazoa. “Está contaminando el arroyito por donde viene el agua que consumimos. Los árboles cercanos como que se marchitan y se mueren. Dijeron que iban a hacer un estudio, pero nunca vinieron”.

Después de recorrer algunas áridas parcelas, doña Carmen ordena al grupo que la rodee y anuncia que la próxima semana habrá una asamblea para hablar de la minera. Les exhorta a participar. La docena de hombres y las dos mujeres asienten obedientes. La Doctora blande el brazo en el aire para resaltar lo apremiante, y concluye: “Es crucial mantenerse unidos frente al problema del agua”. Tras la arenga, los vecinos se dispersan y se van a sus casas.

El pueblo dividido por la minera

SAN JOSÉ DEL PROGRESO

El nanche crece a pleno sol y produce fruto rápidamente, por lo que tiene una gran importancia ecológica. Se encuentra en suelos bastante degradados, ya que puede soportar condiciones de drenaje adverso; se utiliza para restaurar áreas desertificadas. El médico y botánico español, Francisco Hernández de Toledo, describió en el siglo XVI su fruto “de naturaleza fría y húmeda, comestible y favorable a los que tienen fiebre”.

Una calzada empedrada marca la frontera de San José del Progreso: a la izquierda residen Los Contrarios a la minera Cuzcatlán; a la derecha, Los Favorables, la mayoría del pueblo, todos empleados. Los primeros acuden los domingos a la antigua hacienda de los colonos pioneros, ahora una improvisada parroquia con la fachada blanca descascari-llada, sin campanario y envuelta de cipreses, el árbol de la muerte. Los otros dejaron de asistir a esas misas cuando, a pocas cuadras de la hacienda, la compañía construyó un descomunal templo de dos torres, cúpula y nave central de seis ventanales, pintada en estridentes verdes y amarillos, a la altura de cualquier capital. Por las calles circulan sobre todo mototaxis, que también están segregados; los azules son para los detractores y los rojos para los afines. Los rojos son más nuevos y mejores.

Cuando en 2006 aterrizó el megaproyecto minero, San José del Progreso no honraba su nombre: era el tercer

municipio más pobre de Oaxaca, a su vez, el tercer estado más pobre de México. Muchos pensaron que la minera era una bendición de Dios, pero se instaló sin el consentimiento de la comunidad. El alcalde de turno los engañó: aseguró que desconocía la finalidad de las obras que hacían los camiones en los cerros hasta que descubrieron que se habían aprobado en una asamblea con apenas 36 presentes de una población de seis mil. Entonces, un millar de pobladores se asentaron por meses en campamentos frente a las excavadoras para bloquear los trabajos. La respuesta de la administración estatal fue enviar centenares de policías, helicópteros, perros y gases lacrimógenos para desalojarlos. Los enfrentamientos fueron constantes. Cada dos o tres meses, los policías desalojaban a los contrarios, que volvían a instalarse.

Pese a la creciente represión, los contrarios a la minera mantuvieron la movilización durante cinco años. Incluso crearon un órgano de gobierno —sin reconocimiento legal— paralelo a la alcaldía local que los había traicionado. En uno de los disturbios, en 2010, el alcalde y un regidor de San José del Progreso fueron asesinados en un tiroteo. Los contrarios expulsaron ese mismo año al alcalde que lo reemplazó y, de inmediato, clausuraron el ayuntamiento. En el soportal —la reja seguía bajada la última vez que visité el pueblo, en 2021—, una pintada exponía las razones del cierre: “Tienes el valor de vender el agua y mañana?”.

La minera finalmente inició operaciones en 2011, pero la resistencia continuó aún entonces y se recrudeció hasta dejar cinco muertos, ocho heridos por arma de fuego y otros tantos intentos de homicidio. La muerte ha rodeado a la mina.

Uno de esos muertos fue Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo del 2012 mientras transitaba en su auto por una carretera principal. Varias camionetas le

cortaron el camino y hombres encapuchados le asestaron dos disparos en el pecho. Bernardo tenía 37 años y era el líder del movimiento de oposición a la mina. Poco antes de su asesinato había logrado sumar nuevas comunidades a la causa y estaba convencido de que podría frenar a los canadienses. Una semana antes del crimen, incluso le había dicho a su tío que a la mina sólo le faltaba “un empujoncito” para acabarse. Su tío y tocayo, Bernardo, vio como hasta en dos ocasiones trataron de comprar a su sobrino: un supuesto representante de la compañía le puso un cheque en blanco sobre la mesa de una cantina y le dijo que escribiese la cantidad que gustase. El joven ambientalista dibujó un árbol y un río.

“A raíz de sus negativas es que buscan a los sicarios”, me contó una tarde en uno de los porches de la placita central. “El entonces presidente municipal es el autor intelectual. A los autores materiales los agarraron, pero ya los liberaron, porque la policía anda en contubernio con la minera”. (Nunca pude contrastar esta versión con el alcalde acusado: lo mataron a balazos en 2016 en un pueblo aledaño). Según Bernardo, habría una presunta cadena de implicaciones que las autoridades nunca pudieron (ni habrían destinado demasiados esfuerzos por) esclarecer. La inscripción de la tumba de su sobrino en un cementerio reseco secunda esa demoledora teoría: “Los mataron los sicarios al servicio de la minera”. Al tío Bernardo lo detuvieron cuatro veces en los disturbios y pasó varias semanas encarcelado. Lo soltaban ante la presión de los grupos indígenas y ambientalistas que protestaban afuera de la prisión.

La fachada de la casa de Bernardo, el defensor ejecutado, está adornada con un mural azul que grita “Si amas la vida, lucha contra la mina”. Son las últimas palabras también de su familia, que decidió dejar de hablar sobre el asesinato para evitarse nuevos disgustos y sanar las heridas

en la comunidad. En San José del Progreso hubo una gran fractura social. “Se ha roto la comunicación con las propias familias”, cuenta la hermana menor del sobrino Bernardo, Agrepina Vásquez, que jamás concibió que su hogar sería de los más golpeados con los zafarranchos. “Hasta llegamos a discutir y pelear con hermanos de mi mamá y todavía no nos llevamos”.

Casi 10 años después del homicidio de su hermano, en 2020, Agrepina tomó el mando de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), el colectivo que organiza las acciones de oposición contra Cuzcatlán, creado por los dos Bernardos. Copuvo montó sus oficinas en un ala de la antigua hacienda vuelta parroquia. Visité las oficinas en mayo de 2021, cuando Cuzcatlán y Los Contrarios aguardaban la decisión de las autoridades ambientales para extender su concesión. (El ambiente estaba más calmado de lo habitual, así que se daban las condiciones de seguridad mínimas para estar en San José.) El amplio salón apenas está ocupado por un escritorio y un cúmulo de sillas y trastos arrinconados y entelarañados por el desuso. En el centro destaca un altar con fotografías de los cinco ejidatarios muertos en las protestas. Nadie se acerca en toda la tarde. El miedo y el desgaste precipitaron la pérdida de fuelle del movimiento social. Muchos se vieron forzados a renunciar al campo por la falta de agua y, en un giro perverso, recurrir a la minera por empleo. La planta de la filial de Fortuna Silver tiene 1 100 asalariados, aunque una de sus responsables de comunicación me dijo que dan trabajo a dos tercios de los ocho mil habitantes de la zona, a costa de respirar un aire cargado.



Primavera de 2021. San José del Progreso despierta con un rocío fuliginoso. La brisa se siente más densa y ardiente que en el resto del valle. Los lugareños cuentan que alrededor de las cuatro de la madrugada la mina abre los respiraderos para liberar gases: al amanecer huele a azufre. El viento levanta una polvareda de la presa de jales secos ubicada a menos de dos kilómetros del pueblo. La montaña de rocas molidas y desechadas tras separar los metales preciosos mide unos 100 mil metros cuadrados: 10 campos de fútbol de basura.

En el proceso de flotación —se agregan químicos para separar el mineral valioso de la piedra triturada—, las mineras utilizan sulfato de aluminio, ácidos, ditiofosfatos, lixiviantes, xantato de potasio y espumantes. La empresa ha negado el uso de cianuro y ha insistido ante la prensa que el cóctel de reactivos no supone un riesgo para la salud y el entorno natural. “Quizá es una contaminación que no se percibe directamente, pero desde que llegó la minera hemos notado un aumento de las irritaciones en la piel y la garganta”, dice el tío Bernardo. “Sobre todo los niños sufren mucha gripa y tos; también se han visto más casos de cáncer, pero no podemos comprobarlo”.

De hecho, sí. Los datos del boletín del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica muestran que el área donde opera Cuzcatlán experimentó un abrupto incremento de infecciones intestinales y respiratorias entre 2008 y 2014, año en que las dolencias misteriosamente caen en picado y a la par. La explicación de Bernardo es que el centro médico de San José —encargado de remitir las cifras a la institución federal— está cooptado por las donaciones de Cuzcatlán. Una de las sanitarias, de forma anónima, me contó que “la compañía” revisa las citas médicas de los pacientes y “se deshace” de los archivos de diagnósticos graves que evidencian el impacto de enfermedades que pudieran derivarse de la explotación, como los cánceres de pulmón y riñón.

En la única vía pavimentada de acceso a San José la minera erigió un elegante pórtico de bienvenida con cámaras de seguridad y puestos de vigilancia donde centinelas enfusilados inspeccionan los vehículos y controlan quién entra y sale del pueblo. En las inmediaciones del umbral, situado por fuera de las posesiones de Cuzcatlán, se asentaron los operarios foráneos contratados por la empresa, sus incondicionales. Es un barrio con funciones de parapeto donde sobresalen dos edificios: el motel El Rinconcito, destacado por la silueta de un beso entre un hombre y una mujer, y la sede de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el poderoso sindicato de la construcción ampliamente conocido por actuar como grupo de choque al servicio de megaproyectos. Bernardo dice haber visto a varios de sus integrantes en el convoy de camionetas de hombres armados que dispararon al aire durante el homenaje por el primer aniversario del asesinato de su sobrino.

A Bernardo le pesan más esos incidentes que los 47 años. Han cicatrizado ya las quemaduras por el ardiente hierro de la batea cuando fue detenido por una patrulla policial, ya no recuerda la suela de las botas en su cara ni las golpizas y los garrotazos en la cárcel de la ciudad de Oaxaca, pero no el acoso y el escarnio por una resistencia que lo dejó sin nada. Bernardo comía de su parcela o labraba las de sus vecinos, pero, debido a la desolación de los sembradíos producto de la sequía, tuvo que arreglárselas como albañil. El problema es que casi todas las nuevas obras son viviendas para nuevos trabajadores de la minera, que están avisados de las andanzas del antiguo agitador, así que a duras penas le sale algo. Hasta agua le cuesta conseguir: la CTM controla la distribución en camiones cisterna. Él mismo me aconseja que no hable con los conductores.

Le pido a Bernardo que paseemos por algunas calles de la zona contraria a la mina. Sus abatidos hombros y cejas

observan desasosegadamente de lado a lado en cada esquina. Los pocos transeúntes aceleran el paso para esconderse y las ventanas se cierran a nuestro paso. A Bernardo lo tienen en la mira y nadie quiere que lo asocien con él. Cuando en 2017 asumió la dirección de la Copuvo, el gobierno federal le concedió medidas de protección —guardaespaladas, alarma de pánico— frente a las amenazas de muerte del alcalde, pero nunca llegaron a materializarse. Unos meses antes de nuestro encuentro, fue interceptado por varias camionetas mientras subía en auto hacia la cima del cerro que bordea la minera para mostrar a un grupo de universitarios la suciedad de las aguas en la presa de descargas, el basurero de líquidos de la minera. Enseguida reconoció a algunos de los hombres: había ido a la escuela con ellos. Eran campesinos y obreros como él que ahora ejercen de matones. Los acorralaron a punta de fusil para intimidarlos y les ordenaron que se diesen media vuelta. Bernardo jamás volvió a transitar ese camino, rechaza acompañarme y me recomienda que mejor no me meta por allá.



San José del Progreso fue fundado por hacendados en el siglo XVIII. Por generaciones, los señores nombraban a las autoridades que se dedicaban a cometer y tapar sus fechorías. “El autoritarismo es el mismo. Hoy los señores son la mina”, dice Bernardo. “Es un monstruo económico que no se mancha las manos”. Los mototaxis rojos son los ojos y oídos de Cuzcatlán en el pueblo. Después de haberme visto junto a Bernardo y echarse a correr la voz entre los vecinos, ya no puedo ir a la mitad sur de San José. No tiene sentido: cruzo igual, pero nadie quiere hablar conmigo, mucho

menos acerca de la minera. Algunos me despachan con simpleza. “Estamos contentos”, dicen.

Bernardo lleva meses sin cruzar a ese hemisferio, adonde se trasladaron la mayoría de los comercios y el trajín. Sólo puede moverse por 10 calles a la redonda, la parte del pueblo de los contrarios. Acá no hay clínica, ni carnicería y apenas hay una miscelánea enclenque; del lado de los favorables está el centro deportivo y el de salud, varias papeleerías y restaurantes. Antes del arranque de la minera, casi la totalidad de los hogares sufrían dificultades de acceso a la seguridad social y a los servicios básicos. Una década después, 2 de cada 10 familias habían podido superar esa carencia; un paliativo a la extendida pobreza del municipio, pero alivio suficiente para empezar a aceptar la realidad de que, al menos socialmente, Cuzcatlán había ganado la partida. La desmovilización permitió incluso que varios de los empleados recién llegados radicaran del flanco adverso. Sus chalés de doble piso, balcón de balaustrada y capilla privada contrastan con el paisaje de adobe y el latón. “No hemos podido impedir que toda esa gente de fuera nos invada”, dice Bernardo. “Éramos una comunidad tranquila, pero ahora los vecinos se consternan de ver gente extraña”. Los daños colaterales han sido el aumento de la explotación sexual comercial y el consumo de drogas, sobre todo entre los mototaxistas, uno de los cuales se ahorcó en 2017 durante un *viaje* con metanfetaminas. Un mural en el quiosco de la plazoleta les recuerda a los muchachos que “las drogas te ofrecen su mundo a cambio del tuyo”. La última estocada, por la que siguen amedrentando a los pocos opositores, es reabrir el consistorio municipal.

Bernardo soba con inquietud una cinta métrica, su amuleto, un tesoro, lo único valioso después de que el oro y la plata le arrebatasen a familiares, amigos, su modo de vida y su dignidad. Está sentado en las escaleras del ayuntamiento,

junto a la persiana bajada, su primera y última victoria. El nerviosismo no es tanto por el temor como por sentirse un paria dentro de su propio terruño, al que alguna vez acaudilló megáfono en mano. La sombra de aquel adalid eran unas córneas rojizas enterradas en una ojerosa mirada. Los rastros del rechazo quedaron estampados en las paredes, en consignas como “No vendas el agua, a nosotros nos hace falta”, “Minera Cuzcatlan, estamos hartos que nos robes el agua”, “El agua vale más que el oro, no la vendas la mía”, “Si no luchas, al menos respeta a quienes sí lo hacen” o “Sin oro y plata se vive. Sin agua, no”.

El derrame

MAGDALENA OCOTLÁN

El nanche es el árbol de la selva sabanera. Los pueblos originarios empleaban su fruto hasta para sanar complicaciones ginecológicas. Su uso perdura en la medicina tradicional mexicana. También servía para fabricar tirachinas con los que lanzaban piedras para cazar aves.

Rubén Sánchez toma ambos extremos de la horqueta de nanche y camina despacio por un suelo de matorrales espinosos. Aún hoy, los campesinos zapotecas emplean esa rama para detectar los puntos donde hay agua subterránea: si tiembla o se rompe, hay humedad y, por tanto, ese es un buen lugar para cavar un pozo. Pero esta mañana el nanche permanece inmóvil. Rubén recorre cabizbajo su agrietado barbecho. Cada tres pasos clava el machete para comprobar cuán seca está la tierra. La hoja se esmerila en la greda tersa. Al riachuelo lindante le cuesta rellenar el foso. “Antes encontrábamos el agua arribita, a un metro, y ahora se bajó totalmente”, me dice. “Lo que más nos preocupa es que venga contaminada”.

Y hay razón para creerlo. La parcela de Rubén está en la Ciénaga, la zona baja al oeste del pequeño poblado de Magdalena Ocotlán, a unos tres kilómetros de San José del Progreso o, como todos ya llaman al área, “La Mina”.

La noche del 8 de octubre de 2018, el agricultor despertó por el estruendo de un aguacero fustigando el techo de lámina de su casucha. Sospechó algo malo, me contó, y la intuición le quitó el sueño. Al alba, fue a su parcela y entonces vio el arroyo El Coyote: estaba cubierto, embadurnado por una capa plomiza de lodo. Era un viscoso flujo de residuos minerales. La tormenta había rebasado la capacidad del depósito de la minera Cuzcatlán que capta las lluvias y los escurrimientos de la presa de jales secos aguas arriba. Las bombas no dieron abasto para enviar los vertidos a una presa mayor y la pileta repleta de químicos se desbordó. Las aguas sucias recorrieron unos cuatro kilómetros de afluyente hasta desembocar en La Ciénaga, como se conoce el área donde se sitúan un abrevadero, el pozo de agua potable de Magdalena Ocotlán y el terrenito de Rubén.

Dos días después del derrame, las autoridades ambientales federales inspeccionaron el área. Las muestras arrojaron una presencia excesiva de metales en el agua. El hierro superaba en 1845.8% los límites permisibles; el aluminio, hasta 955.12%; el plomo, en 167%. Los técnicos confirmaron que hubo “daño ambiental” y recomendaron a los lugareños dejar de usar el agua de El Coyote para regar sus cultivos de grano, hortalizas y maíz y para cortar la sed de sus caballos y chivos. “El agua se veía como cemento, era evidente la contaminación”, cuenta Rubén. “Antes del informe ya dejamos de consumir esa agua por miedo a que tuviese metales pesados y compramos agua embotellada”.

El gobierno federal impuso a Cuzcatlán una insignificante multa de 806 mil pesos (unos 40 mil dólares), lo que ingresa cada dos horas. (En 2021, sus ventas superaron los 200 millones de dólares por la exportación del concentrado de plata y oro especialmente a Corea del Sur y Alemania). La procuraduría ambiental (Profepa) obligó a la empresa a adoptar medidas para mejorar las instalaciones de Oaxaca:

duplicar el espacio del depósito desbordado, quintuplicar la capacidad de bombeo y presentar un programa de recuperación natural. Cuzcatlán encargó nuevos estudios a Intertek, un reconocido laboratorio supuestamente independiente, que halló cantidades de talio un 350% por encima de los límites permitidos. La minera buscó a tres consultoras para deshacer la conclusión de que hubiese talio —un metal pesado incorporado en el veneno para ratas— o de que su presencia fuese dañina. Algunas de las muestras ni siquiera se conservaron correctamente, según Intertek. El laboratorio también encontró otros dos metales pesados: bario, usado para la sustentación de pozos y refrigeración de maquinaria en perforaciones profundas, y vanadio, que se emplea en todo tipo de baterías autorrecargables. Llamativamente, a los cuatro meses de presentar su reporte, Intertek rectificó sus datos y la Profepa adujo que hubo “un error en la transcripción de los resultados”, es decir, una equivocación humana al teclear. Profepa determinó la inexistencia de talio por encima de la norma, por lo que, dictaminó, “el suelo no requiere de remediación”.

Todo apunta a que la contaminación no desapareció, sino que “el agua corrió, corrió, corrió” y se fue “a otro lado”, o se quedó en ese suelo, dijo entonces el director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el organismo descentralizado cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas de México. Las declaraciones fueron recogidas en “Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar”, la investigación conjunta de varios periodistas de los medios mexicanos *Avispa Midia*, *Aristegui Noticias* y *Pie de Página*, que desgrana la madeja de documentos y estudios contradictorios, omisiones y correcciones inverosímiles posteriores al derrame. (En mi trabajo de campo también tropecé con incongruencias e imprecisiones en el discurso de la empresa, sobre todo en cuanto a la medición

de los impactos ambientales, de los que ni existen análisis científicos fiables. Los efectos en las entrañas de la Tierra y sus aguas son desconocidos, pero se aprecian en la atmósfera de San José.)

A los dos meses del desbordamiento, fue insostenible para el millar de habitantes de Magdalena Ocotlán seguir pagando por agua envasada: 8 de cada 10 viven en la pobreza. Cada garrafón cuesta 20 pesos (un dólar), una cuarta parte de un jornal en el campo, así que la mayoría volvió a consumir el agua del pozo municipal contaminado. Poco después, las clases se suspendieron por un repentino brote de hepatitis A que afectó a 53 niños y niñas. En San José del Progreso, otros 15 pequeños también padecieron la enfermedad, asociada al consumo de agua insalubre y a la exposición al plomo. El médico local me contó que también aumentaron las infecciones gastrointestinales, complicaciones en el hígado y alergias en la piel. “Nunca tuvimos de primera mano los resultados” de las muestras, se quejaba Rubén cuando lo conocí un par de años después del derrame. Un colega de Oaxaca me había sugerido que visitase esta comunidad para descubrir de primera mano el impacto del accidente minero. Me recibieron con los brazos abiertos en mayo de 2021. Por entonces, Rubén reclamaba además por la falta de información sobre el estado del arroyo, que en verano se enjugaba hasta quedarse en apenas unos charcos. “Nunca supimos si el agua que bebemos está ensuciada, si no hará daño, pero lo que sí sabemos es que aquí nos enfermamos feo después del derrame”.



Esa misma semana fui a la mina, tenía que ir. Para mi sorpresa, porque habitualmente los grandes megaproyectos propiedad de compañías extranjeras requieren una larga cadena de autorizaciones, me permitieron el acceso el mismo día. (Tampoco podía avisarles con antelación para prevenir cualquier posible seguimiento o amedrentamiento contra los contrarios a la mina con quienes me iba a encontrar. Los precedentes justificaban esta decisión). En todo momento me escoltó una pareja de jóvenes del equipo de prensa.

Rodeamos en camioneta un inmenso macizo de piedras hasta alcanzar una de las cimas donde se observa la magnitud del yacimiento: la caseta de ingreso se ve minúscula desde aquí y el ruido de las máquinas ni se escucha. En el lado norte de ese paisaje cenizo está la presa de jales secos y por donde en esos momentos circulaban varios camiones cargados de rocallas que arrojaban en las faldas, revestidas con plástico a medida que se agranda el área de descarga con nuevos desechos. Si en efecto, esos materiales no fuesen contaminantes ni hubiese riesgo de volarse, ¿por qué la necesidad de taparlos? El compromiso de Cuzcatlán es sembrar árboles al terminar la explotación y dejar el área como otra montaña más. ¿Crecerá vegetación encima de los residuos de un proceso químico para separar los minerales preciosos de la piedra? En teoría sí, como se ha visto en otros casos, pero la toxicidad permanecerá debajo. Mis acompañantes del departamento de comunicación de la minera se empeñan en señalar algunos mustios matojos amarillentos en las pocas tierras todavía sin excavar como indicio de la nula contaminación. (Trato de seguirles la corriente para dilatar el recorrido).

Hacia el lado sur se abre una vasta presa de jales líquidos, una laguna de tamaño similar a la de jales secos, 10 campos de fútbol. Llegamos hasta un margen completamente seco desde el que nada más se vislumbra, muy a los lejos, un poco

de agua clara circundada por un tapiz de bolas de plástico flotantes que la minera emplea para evitar que el sol golpee directamente el agua y la evapore más rápido. El embalse está cubierto a menos de un tercio de su capacidad. Únicamente con el *zoom* de la cámara puedo ver a un operario que desde la orilla riega un rimero de grava recién volcada. Ninguno de los guías sabe responderme por qué vierten desechos sólidos en la presa de jales líquidos y por qué tienen que remojarlos si irán a parar al agua. La más joven de los dos persevera en su intento de convencerme sobre la calidad del agua: “Hemos visto golondrinas y garzas, ¿habría aves si las aguas estuviesen contaminadas como dicen? La mujer —entusiasta, de unos veintipocos años— está profundamente agradecida con Cuzcatlán, porque le pagaron la carrera de Periodismo fuera de San José del Progreso, donde nació, y luego la contrataron. Pese a mi tozudez, se niegan a llevarme hacia la parte de la presa donde se ve algo de agua.

De regreso nos cruzamos con cuatro operarios de la minera que pican y remueven grava al borde de la pista de terracería. Se apresuran a voltearse y ocultar su rostro en cuanto saco la cámara. Me imagino que tampoco se sienten orgullosos de dañar su propia tierra para ganarse la vida o bien se saben igualmente amenazados por las represalias de los vecinos contrarios o, quién sabe, quizás nada más no les gusta que un desconocido los fotografíe.

Unos días después de la visita a la mina, entrevisto por videollamada al director nacional de Fortuna Silver Mines, Luiz Camargo, la única persona de la compañía autorizada para hablar con los medios. Le pregunto sobre el uso de agua y las afectaciones de los químicos en el ambiente. Camargo parece un hombre tranquilo, pero sabe su lugar: es hombre de la empresa, y su devoción por la empresa es apenas menor que la chaperona de prensa que me acompañó en el recorrido por la mina. El tono de Camargo es en general

pausado, pero se desencaja con algunas preguntas que obviamente debería esperarse y con certeza ha toreado antes. Entonces me responde con aspavientos y un simple “es mentira” sin aportar ningún argumento. Cuando hablo del deslave, prefiere hablar de “escurrimiento”, porque “derrame” da una idea mayor de lo que, dice, realmente fue. “El río Coyote está normalmente seco”, justifica. “Sólo hubo un exceso de agua en sus márgenes. Es muy probable que el talio del reporte provenga de los fertilizantes de la agroindustria. No hubo necesidad de remediación, como ya concluyeron las autoridades”. (Unos días antes, en la mina, el encargado de prensa que me atendió me dijo lo contrario que Camargo: que no se encontró talio y que la minera sí realizó trabajos de rehabilitación del entorno).

“Recibimos el agua de la lluvia y de una planta de tratamiento”, sigue Camargo. “Tenemos un proceso de ciclo cerrado del agua, nuestra descarga es cero, porque la reutilizamos toda. El aprovechamiento es del 96%”. No obstante, en los registros públicos aparecen tres concesiones de descargas para la minera, permisos que la habilitan a arrojar distintos volúmenes de agua residual en la cuenca. El directivo asegura que nunca las usaron. Su explicación trata de dar una solución completa a todo el problema del agua, sin embargo, no excluye ninguno de los problemas: que el agua usada, sucia, contaminada, pueda desbordarse, ni que el agua utilizada por la planta, venga de donde venga, sea indispensable y escasa para las comunidades. Una mina necesita muchísima agua y Cuzcatlán se encuentra en una zona con fuerte estrés hídrico y baja disponibilidad subterránea —constatado en estudios oficiales y de la propia empresa—. Los suelos de Oaxaca tienen una baja filtración pluvial por ubicarse sobre una falla tectónica y la región de los Valles Centrales sólo cuenta con un río permanente, el Atoyac; el resto son estacionales.

La compañía declaró al comienzo de sus operaciones, en 2009, que iba a requerir diariamente 1 500 metros cúbicos de agua. La minera duplicó su producción durante la siguiente década, así que se entiende que, si no ha duplicado el consumo, al menos lo ha debido aumentar sustancialmente. Pero el dato exacto es una incógnita. Las mineras en México no están obligadas por ley a publicar cuánta agua toman del subsuelo, algo que Camargo también omite especificar.

Al preguntarle por un nuevo derrame en julio de 2020, cuando algunos pastores percibieron un color rojizo y un légamo blanco en el arroyo Santa Rosa —que pasa a 300 metros de la minera—, Camargo se sulfura: “Eso no se confirma. Son acusaciones falsas basadas en una campaña de difamación que hemos sufrido desde hace años de grupos que se oponen al desarrollo”. Hacia fines de 2023, la Profepa todavía no había hecho públicos los resultados del análisis de los sedimentos recolectados tras ese derrame. El expediente aún sigue abierto. Camargo me dijo en nuestra charla que tienen buena relación con las comunidades y cuentan con su apoyo. Quizá sea así, o al menos así lo aparenta oficialmente Cuzcatlán en su página web. En una de mis últimas visitas, recorrí los muros medio derruidos a la entrada de Magdalena Ocotlán, que braman lo contrario. Los dibujos de coyotes, símbolo de la resistencia, sacan los dientes a las excavadoras entre “La mina mata”, “No a la mina” y “Oaxaca no quiere minas”. De repente, una señora se asomó entre los ladrillos al verme tomar fotos y mandó al marido con un machete para ahuyentarme.



En Oaxaca, el clima de los 12 primeros días del calendario marca la tendencia de lluvias durante el resto del año. Si el 1 de enero hizo frío seco, significa que ese mes no lloverá. Si el 2 de enero amaneció húmedo, en febrero caerán algunas precipitaciones. Así, sucesivamente, ha sido siempre, me dicen los campesinos zapotecas. El cambio climático, sin embargo, descompuso la ancestral técnica meteorológica surgida del sincretismo entre la tradición zapoteca y la española. A Felipe Soto se le descuadraron sus pronósticos.

Un perro mestizo sigue al agricultor a todas partes; una de las pocas muestras de fidelidad en unos valles adulterados por las donaciones de la minera. “Hasta la madre o el padre de este canijo se arrimaron a la mina”, chanea el anciano sobre su lazarillo, mezcla de pinscher y pastor alemán —la raza de los perros que llevan los vigilantes de la minera—. “Míralo, igualito a los que cuidan la planta”. En Monte del Toro, donde vive Felipe, la minera Cuzcatlán también se ha ofrecido a abonar los gastos de festividades, financiar obras y organizar visitas escolares al megaproyecto. La estrategia ya había funcionado en San José del Progreso. Pese a invertir un irrisorio 0.3% de los más de 680 millones de dólares que el conglomerado canadiense ingresó en 2022, embaucaron a la población porque, además, habían creado empleo. Pero no así en las localidades aledañas. En el ejido de Felipe lo dejan claro desde el letrero de bienvenida: “Territorio prohibido para la minería”.

El recinto de la Fortuna Silver se pierde en el horizonte visto desde la yerma hectárea de Felipe, un terreno donde antes crecían maíz y frijol y que espera sembrar si en el año llegan las lluvias adecuadas. “Desde ahí”, señala Felipe a la montaña, “han lanzado cohetes y las nubes se zafan. Las nubes se apartan y ya no llueve. Según el agricultor, Cuzcatlán bombardea las nubes con químicos para inhibir precipitaciones y, de este modo, no tener que interrumpir ciertas

labores de excavación. La minera niega rotundamente esa práctica.

Felipe lleva el campo en la sangre y en la cabeza. No se quita el sombrero de paja puntiagudo aún con el cielo anubarrado. Pero, cuando joven, no había campo en la familia para tantos hermanos —los Soto eran siete—, así que cruzó por Sonora a Estados Unidos a trabajar en las plantaciones de algodón de Texas. Se congeló apenas abrigado por sus únicas dos camisas hasta que, unos cuantos inviernos y ahorros después, abrió una barbería. Cobraba un dólar el corte, atrajo mucha clientela y logró estabilizarse, pero entonces lo detuvieron en la frontera mientras recogía a uno de sus primos, y lo deportaron. Felipe ha sobrevivido a coyotes, policías, desiertos y heladas, pero le asusta más la minera que todo lo anterior. Desde que regresó del norte, hace 20 años, ha sido electo comisario ininterrumpidamente por los 600 habitantes de Monte del Toro. Como tal, su labor consiste en administrar el dinero de la comunidad, atender los problemas de convivencia más variados —si alguien se birló una gallina, si dos vecinos dejaron de llevarse— y aplicar las decisiones tomadas en asamblea.

Una de sus sus competencias fue conducir a unos reporteros por un cerro cercano a la mina —el mismo donde hombres armados interceptaron a Bernardo— con el objetivo de retratar la contaminación del agua de la presa de jales líquidos. Era 2013, cuando la disputa vecinal con la mina era álgida, y varias camionetas los persiguieron hasta obligarles a recular. “Tuvimos que salir corriendo. No dejan entrar ahí, anda gente armada vigilando”, dice. Le pregunto si me acompañaría a mí también, pero lo rechaza. “Lidiar con disputas de medianeras entre vecinos debe ser menos complejo”. “Eso está muy feo”, se disculpa. “No vuelvo a acercarme”.

Por aquel 2013, a escasos dos años del inicio de la explotación de la mina, en los terrenos que rodean el embalse de Cuzcatlán no había ni una sola vivienda. Ahora hay varias chozas dispersas en cuyos patios hay camionetas estacionadas donde supuestamente están los guardias que patrullan el perímetro del megaproyecto. Al día siguiente enfilo por esos senderos prohibidos que tan vehementemente me recomendaban evitar. Tal vez porque es domingo no hay gente ni vehículos, tan sólo algunos perros enjaulados, algo raro en zonas rurales donde suelen merodear sueltos pues su función es cuidar la casa. La vereda se empina entre piedras y arbustos pajizos hasta llegar al borde de la presa que a duras penas atisbaba durante el recorrido con el equipo de prensa de la minera. Ahora he subido por el otro extremo —por si acaso, voy con otro colega, periodista oaxaqueño—, por fuera de sus instalaciones, y acabamos a escasos 200 metros de la línea de agua, por el sur. Un manto cobrizo revuelto de espuma grisácea cubre la superficie de esa sección de la presa. La masa flota espesamente desde algunas de las tuberías hasta los márgenes, separada por bolas anti-evaporación del agua aparentemente limpia. (Ninguno de los cuatro científicos a quienes mostraré después las fotografías de esas aguas se atreve a asegurar que no puedan ser contaminantes). No se ven guardias, pero me voy del lugar a los pocos minutos para ahorrarme contratiempos.

Durante el descenso veo que en una de las zanjas se forma una charca de lodo y serrín, difícil de distinguir del suelo del camino. Lanzo una piedra y al impacto se abre un líquido terroso, denso, que de inmediato vuelve a tapar la capa de fango: un cuerpo con vigor propio que acaba de engullir esa piedra, más propio de los dibujos animados.

La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) negó en julio de 2021 la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que Cuzcatlán había presentado para

renovar y ampliar las hectáreas de explotación. “Sus obras han ocasionado impactos acumulativos, sinérgicos y residuales, originando en mayor o menor medida la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas”, expuso el órgano federal, que sólo medio año después aprobó de todos modos la misma MIA. Entonces alegó que “si bien no se consideraron las posibles afectaciones a la flora y fauna presentes en los sitios donde se desarrolla el proyecto, en virtud de que las obras y actividades ya se encuentran en operación...”. Léase: hay daños ambientales, pero como ya está funcionando, mejor que siga. Al aprobar la extensión del contrato minero, la Semarnat cometió un “error tipográfico”, como admitió, y escribió 12 años en vez de dos años. Un año después, en enero de 2023, la misma Semarnat anuló su decisión y requirió una reevaluación, ante lo cual Cuzcatlán emprendió acciones legales. En octubre de 2023, un tribunal federal falló a favor de la minera y restableció el permiso ambiental para operar en Oaxaca.

En marzo del mismo año, el presidente López Obrador presentó una ambiciosa reforma a la Ley Minera que pretendía limitar las explotaciones de minerales, proteger el agua para las comunidades y contextualizar el impacto social de estos megaproyectos. El decreto presidencial generó emoción entre los ambientalistas. Sin embargo, las presiones del sector extractivista hicieron que la Cámara de Diputados le quitara diente al texto y se quedara con un sucedáneo. Camargo, el director de Cuzcatlán, afirmó que no le preocupaba en lo más mínimo el nuevo paquete de leyes.

Durante esos últimos y tirantes meses, Bernardo, Rubén, Felipe y varios ambientalistas oaxaqueños me dijeron que se había intensificado el acoso para que sus comunidades aprueben el nuevo plan minero. La presión llegaba, contaban, usando las procuradurías agrarias locales, cuyos funcionarios detenían las actas de nombramiento de los

cabildos o cometían errores adrede en documentación para retrasar acreditaciones de usos de suelo. En definitiva, complicarles la vida.



Carmen Santiago murió el 5 de febrero de 2022. El cáncer acabó con su energía. Tenía 69 años. El cierre de la minera y la devolución de las tierras a sus dueños, los campesinos, era uno de sus sueños. O, mejor dicho: una de sus metas. Para ella ninguna batalla se perdía antes de librarla. El optimismo y la energía impregnaban sus discursos, motor de unas comunidades vilipendiadas. Así la recordaron en su funeral.

La sembradora de agua era la menor de dos hijas. Cuando pequeña y sin hermanos varones, la familia no tuvo más remedio que llevársela a trabajar al campo, algo inusual para las mujeres hasta en la actualidad. Alguna vez me contó que su padre veía que no le daba miedo montar a caballo ni mover el yunque así que le enseñaba nuevas labores del cultivo. En una de nuestras últimas conversaciones me dijo que, en realidad, siempre tuvo miedo, pero aprendió a ser valiente. Ese arrojo lo necesitó también en sus postreros meses de vida para enfrentar las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que enviaban directamente a su casa. “Estáis en la mira, orga(nización) que obstaculiza el desarrollo que las transnacionales traen. Estamos vigilando. Sé que tu familia vive en San Antonino, tiene la casa en (...)”, le chillaron en alguna de las llamadas. El gobierno federal había inaugurado en la zona una prisión de máxima seguridad donde había recluidos integrantes del CJNG, y eso atrajo a otros miembros de ese cártel que, a tenor de la advertencia telefónica, estaban del lado de los megaproyectos de

compañías internacionales. Carmen rechazó al guardaespaldas que le brindó el gobierno estatal como medida de protección. “¿Cómo voy a aceptar un escolta de la policía, si son los mismos al servicio de esas empresas? ¿Cómo me va a defender el que me ha atacado?”

La casi septuagenaria activista desconocía si el motivo de las amenazas eran sus denuncias contra la Minera Cuzcatlán o la asesoría legal a San Lucas Atoyaquillo, una de las 40 comunidades afectadas por el proyecto de presa Paso de la Reina, una hidroeléctrica cuya construcción anunció la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2006, pero cuyas obras no habían comenzado aún en 2023 por la resistencia social. Sólo a comienzos de 2021 asesinaron a cinco defensores del río opuestos al embalse. El presidente López Obrador prometió la cancelación de la presa en varias ocasiones, pero a comienzos de 2024 todo seguía en vilo.

Dos meses antes de fallecer, La Doctora alcanzó a celebrar su mayor éxito: el levantamiento de la veda al uso de agua para riego agrícola por las comunidades indígenas de los Valles Centrales. El nuevo decreto benefició a 1 500 productores zapotecas, marcando un precedente: era la primera vez que se aceptaba en México la participación de pueblos originarios en la administración de un acuífero.

Sus amigos bromean con que Carmelina estaba esperando la derogación del decreto que prohibía el acceso al agua para irse tranquila. En una de sus últimas entrevistas con la prensa mexicana, se quitó otra espina: uno de sus momentos de oscuridad, dijo, fue participar en la ceremonia de investidura de AMLO. Quienes la conocieron bastante la describieron como un espíritu libre, una mujer fuerte, aguerrida y sabia. Destacaron su papel no sólo como sembradora de agua, sino como conciencia para defender el aporte de la mujer a la vida comunitaria. La lideresa “nació con indignación”, reza uno de los obituarios, para encarnar

la teología india al estilo de Bartolomé Carrasco: la palabra de Dios se hizo indio, se hizo mujer, se hizo rebeldía.

Cuando estuvimos en El Cerrito, aquel paraje donde se ubicaba una de las 30 ollas de captación que sembraban agua, La Doctora se paralizó un instante y guardó silencio para sentir la naturaleza. Todo se detuvo a su alrededor. La vi más allá que aquí. Se oía un lejano zumbido. “Las chicharras llaman a la lluvia cuando necesitan agua. Los cantos deberían haber terminado a mediados de mayo, pero estamos a julio y todavía siguen sonando”, susurró. La ausencia de árboles amplificaba el grito desesperado de los insectos. Luego, Carmencita oteó el horizonte varias veces en busca de algún nanche que le devolviera un ápice de esperanza. El nanche, saben aquí, crece en terrenos pedregosos, arenosos, en praderas baldías, en cultivos abandonados. Resiste a la sequía y a los incendios de los pastizales. Si hay un nanche, dicen, hay un resquicio de agua, de vida. Pero Carmen buscó y no lo había, no hay.



Pescadores y furtivos en el Golfo de California

El islote de los Cuevas

EL PARDITO | GOLFO DE CALIFORNIA

La vaquita marina es tímida y escurridiza. Se le considera el mamífero marino más raro del planeta y por eso la descubrieron tardíamente en el mar de Cortés.

El primer rayo de sol pega en una cámara de videovigilancia que corona El Pardito, un islote de media hectárea donde viven 18 personas. Antes de amanecer, Juan y Felipe Cuevas ya se han tomado tres tazas de café y se han enfundado en el peto de hule amarillo. Los cardúmenes de sardinas, que usan de carnaza, se pescan mejor a las seis de la mañana. El sol ya escuece y obliga a hacerle reverencia. No es problema para los hermanos, que podrían encontrar la mancha de peces con los ojos cerrados. La lancha de 23 pies y motor fuera borda de cuatro tiempos —para los terrestres, una barca potente— es capaz de resistir cualquier torito. Así conocen, en la punta sur de la península de Baja California, a los repentinos tornados, cortos pero virulentos, que suelen aspirar a los grumetes novatos. Los Cuevas no tienen miedo a esos temporales, ni al mar, ni a la vida en general. Por eso su lancha se llama *No Fear*.

Tampoco tienen miedo de los pescadores furtivos que recientemente navegan en sus aguas, saquean su pescado y acaban con toda la fauna marina a su paso. Sí les tienen algo de respeto, uno más que el otro. “Los de la comunidad le quebraron la lancha en dos partes a los buzos, a los furtivos. Le tiraron la lancha y le pasaron por encima”, narra Felipe con saña, la que podría ser una escena de James Bond. “A veces tiene que ser así, porque la gente no entiende”, justifica. La única forma de combatir a los depredadores es rompiéndoles el motor o la embarcación. De lo contrario, ellos los amenazan con sus arpones o su nueve milímetros. Son los pistoleros, no por sus armas de fuego, sino por su agresiva técnica de pesca submarina: disparar puntas a diestro y siniestro. La mayoría vienen de poblaciones cercanas, pero los más beligerantes son de Sinaloa. Agotaron toda la escama de su litoral y ahora van a buscarla a otras partes. Los *parditos*, los residentes del islote, se enfrentan una o dos veces al mes con esos furtivos. Ninguno, sin embargo, se aventura a hablar de sus vecinos. No se sabe quién viaja o de quién es cada lancha.

“Los de aquí, si nos ven, se van; pero, los otros, son bien bravos”, dice Felipe. Lanza la atarraya con un suave giro de muñeca y cintura. Su robusto torso, curtido de estirar cuerdas, hacen el resto. Juan agarra el acelerador y surca con soltura las aguas someras. Fuerza y cabeza. Siempre fue así, siempre se repartieron así las tareas en la lancha y en la vida. Siempre juntos. El mayor, Felipe, de 43 años, quiere hacer más rondines de vigilancia para defender sus aguas, mientras que Juan, dos años menor, cree que protegerán mejor su mar con turismo sustentable y planea montar una empresa. De pequeños tan sólo pisaban tierra firme para comprar los regalos de Navidad. El resto del año jugaban en su pedacito de mundo, fabricando sus propias mallas y barquitos de madera, atrapando pargos, lisas o mojarritas.

Su padre y su abuelo los regañaban por matar los peces chiquitos. Sus semillas, al fin y al cabo. Comprendieron pronto que debían pescar responsablemente para conservar el ecosistema marino, su hogar. “Hacemos todo lo posible para cuidar nuestras aguas. Estamos atentos todo el tiempo, colocamos una cámara atrás de las isla... pero se necesita más apoyo. Ellos (los furtivos) están siempre a la espera de que bajemos la guardia para meterse”, explica Felipe. Le gustaría imitar a Agua Verde, a unas 60 millas náuticas. Sus 300 pobladores se organizaron desde comienzos de 2021 para patrullar su ribera.

Los Cuevas han echado el ancla y llevan un rato con la piola a remojo. Están sacando su segundo pargo cuando se nos pega una panga azul policial. Son de la Red de Observadores Ciudadanos, una docena de vecinos de La Paz, la capital del estado, a unas 70 millas, que se dieron a la tarea de custodiar los recursos marinos de su bahía. Al “Dueño de la Noche”, como se indica en su estribor, le toca la vigilia nocturna, la más movida. Los pescadores ilegales aprovechan que los peces están adormecidos en la oscuridad de lunas nuevas, los atolondran con sus linternas y les disparan con “pistolas matadoras”, los arpones modificados para que el recorrido de la línea de caza sea más corto y poder tirar más rápido. En tres horas arrasan con toda un área, matan caracoles, pepinos y demás especies protegidas.

Uno de los dos tripulantes, Luis Alberto, lleva 4 de sus 27 años como voluntario en la red y se nota que disfruta esa dosis de adrenalina. “Cuando nos ven (los furtivos), suben a los buzos inmediatamente y comienza una persecución. Tiran a chocarnos la embarcación de falca a falca. A toda velocidad, tratan de volarnos el motor con su proa”, cuenta. Otras veces les han sacado una pistola o les han disparado con el arpón. Por eso, considera que no estaría mal portar un arma. Patrullan cuatro veces al mes, el presupuesto para gasolina no da

para más, pero, si fuera por Luis Alberto, saldrían cada día. Su único límite es el océano Pacífico. En Bahía Magdalena, en la otra orilla de la península, el crimen organizado navega a sus anchas para capturando almeja generosa, langosta o abulón. “Ahí sí está caliente, la maña (el narco) está con todo. Los marines les dan balazos en los motores”, se exalta. Su compañero, de unos 40 años, que prefiere no identificarse, avisa al joven de que se le está yendo la lengua.



Todos los *parditos* son parientes. Juan Cuevas Ramírez se instaló en el islote en 1923 para cuidar a sus hijos de los coyotes y pumas de la playa y esquivar los ingentes mosquitos de islas más grandes. El bisabuelo de Felipe y Juan trabajaba en el boyante negocio de extracción de perlas naturales que hizo famoso al mar de Cortés. “Llegamos aquí mi mujer y yo. No había nada que hacer, ni luz. Y con eso de usar solamente una cobija, ya ve lo que resulta. Ahora somos más de veinte”, le dijo el Juancho al primer periodista que visitó el escondrijo a mediados del siglo pasado. “Hemos nacido en el mar. Lo que sabemos, ni nosotros sabemos que lo sabemos hasta que alguien de afuera nos lo dice”, redunda Juan. Por ejemplo, nunca imaginó que todo lo que le enseñó su abuelo sobre la tortuga Carey y la mantarraya diablo tendrían tanto valor para la universidad con la que investiga estas especies desde hace unos años.

El Pardito es la única de las 244 islas del Golfo de California que tiene un huinche; una polea para remolcar las barcas y ponerlas a resguardo de las drásticas subidas de marea. Cuando salimos por la mañana había unos siete metros de arena, por la tarde, sólo quedaba uno. Las olas salpican el

pedestal de un pequeño San Pedro que da la bienvenida a la estrecha playa de guijarros. Cualquiera que ahí fondease ha sido acogido en alguna de la decena de casitas de hormigón y paja.

Juan todavía gateaba cuando aterrizó frente al islote el hidroavión del explorador francés Jacques Cousteau, un enamorado de la apoteósica biodiversidad de ese golfo. El anfibio de cuatro motores fue para los *parditos* lo que la llegada a la Luna para el resto de la humanidad. Los siguientes años arribó el Calypso. Los locales visitaban el mítico buque dragaminas y se asombraban por sus antenas y aparatejos. El oceanógrafo y su familia solían almorzar con los pescadores de El Pardito y los contrataba para guiarlo por el fondo marino. El abuelo de Juan y Felipe, el Tata Cuevas, buceaba mucho con Cousteau en las expediciones que lo llevaron a definir el mar de Cortés como “el acuario del mundo”. “El francés era buena onda, pero nos reíamos más con el piloto gringo”, dice don Beto, hermano del Tata. Los viejos Cuevas nunca llegaron a magnificar el aporte a la ciencia que hicieron desde ese pedrusco. El único rastro del célebre marino en casa de don Beto es una fotografía en blanco y negro que Jacques le regaló a su padre. Aparece la familia Cousteau en el Calypso. Pero, como todo en la isla, está corroída por la humedad y la sal. Lo que aún cuelga intacto en su pared es la mandíbula de un mako, el tiburón más grande que ha atrapado. De eso sí se siente orgulloso y se exhibe en relatarme la hazaña. Juan me pone en contexto: “Llegó (Cousteau) como llega mucha gente. Vienen famosos, personas muy adineradas que no sabemos ni quienes son. Se acercan a platicar un rato, porque esto les causa mucha curiosidad. Nos piden mariscos, almejas, pescado y aquí siempre les brindamos lo que tenemos”.

Por la isla han pasado Luis Miguel, Paulina Rubio, Iñárritu o Galilea Montijo. También extravagantes yates de

capos de la droga, de quienes ni quieren saber su nombre. De unos y de otros, a los *parditos* les interesa lo mismo: el agua potable, el bien máspreciado en el peñón. Sólo la consiguen de esos yates que pueden desalinizar el agua del mar, o bien, perdiendo un día entero y mucha gasolina para ir hasta el continente. La tonelada de agua corriente que suelen cargar les dura un par de semanas para cocinar y lavar. Lo único que les consuela es pensar que su tata tenía que hacer eso mismo en una barca a vela.

Tuvieron electricidad hace apenas un par de décadas gracias a la donación de varios paneles solares y hace poco contrataron un servicio de internet satelital. Antes, utilizaban las radios náuticas como teléfonos fijos. Pero, sin duda, la mayor invención que llegó a la isla fue el hielo. Todo el pescado se salaba para conservarlo, pero aguantaba pocos días y a menudo se pudría. Es difícil sacar la mercancía. Se tarda una hora de lancha hasta la comunidad costera más cercana y otras tres horas de sinuoso sendero hasta La Paz. Los 130 kilómetros a veces están bloqueados por enormes rocas que se desprenden tras el paso de huracanes. Felipe y Juan han cocinado en una hoguera en mitad del camino algo de su pesca para al menos sentir que no tiraban totalmente su esfuerzo. Fue en varias de esas noches de enfado que los hermanos pensaron en dejar la pesca, pero no pudieron. “Es muy bonita. Nuestra actividad depende del clima, la mancha de peces, el viento... muchos factores que no controlamos. Por eso somos tan adaptables y resilientes”, dice. Al congelar su género pudieron multiplicar el comercio con la ciudad y vender para exportación algunas especies *premium* como el huachinango, pargo, estacuda o cabrilla.

Las grandes poblaciones de ostras perleras se extinguieron a partir de los años cuarenta y los isleños pasaron a dedicarse de lleno al hígado de tiburón. Era un producto

muy valioso en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su aceite se usaba como lubricante en aviones de guerra. Hasta hace un par de décadas, Felipe y Juan todavía cazaban mucho tiburón, porque su carne era muy codiciada. Solían navegar por mar abierto hasta agarrar unos 50 ejemplares en un sólo día. Abandonaron esa pesquería al darse cuenta de la mengua del animal. En El Pardito se aprende por experiencia propia. Se arrepienten de no haberlo podido observar antes, pero no se avergüenzan.

Hacia las seis de la tarde el sol empieza a dar una tregua y los Cuevas se quitan las gafas polarizadas. Ni las camisetitas de licra y manga larga evitan que su piel se haya tostado por años. El atardecer baña a los parditos que limpian el pescado del día en la playa. Las gaviotas revolotean para picar alguna tripa desecha. Su graznido se funde con la música de un baffle. Suena una de las estrofas de Don Arturo, de la banda norteña Los Dos Carnales. El narcocorrido elogia al capo de la droga Arturo Beltrán-Leyva, aliado y luego enemigo del Chapo:

No me alcanzaron los santos
 Para topar a un mundo de guachos
 En Cuernavaca tembló la tierra
 Por el que iban no era cualquiera
 Casi por nadie, un Beltrán Leyva.

Los isloteños reciben a muchos visitantes de Sinaloa y allí también van para comprar sus pangas, repararlas o vender producto. Tienen mucha relación e influencia. Sobre los gruesos mesones de madera comienza haber más botellas de cerveza que filetes de pargo. Los cortes y la rumba se animan al son del ocaso, mientras el sol cae tras el acantilado del horizonte. “¿Cuántas lanchas habéis tenido en vuestra vida”, les pregunto a los hermanos. “No tantas como novias”, se ríen. Los bucaneros cuentan que su abuelo tenía tres

mujeres, una en cada isla donde faenaba. Y seguramente esas mujeres tenían otros hombres. Los hermanos bromean con que algunos de los Cuevas salieron “más blanquitos de lo normal” y que alguno “hasta hablaba inglés”.



Cuando eran niños había tantos peces que su padre ni siquiera tenía que arrojar carnada para atraerlos. Simplemente ataba un calcetín al anzuelo. Su disminución los alarmó y los empujó a participar en 2012 en la creación de la primera red de Zonas de Refugio Pesquero del país. Se trata de 13 áreas donde se permite la pesca comercial exclusivamente a sus pobladores y con estrictas medidas. Desde entonces ha aumentado un 30% tanto la talla como el volumen del pescado en los 150 kilómetros de litoral que abarca el Corredor San Cosme-Punta Coyote. Juan y Felipe han visto duplicarse lo que atrapan en sus redes. El éxito de ese manejo pesquero hizo que el modelo se replicase en Sonora y la península de Yucatán, pero no que el gobierno aumentase su interés por cuidar los mares. Al contrario, en 2018, quitaron a 8 de los 11 inspectores de Baja California, pese a ser el estado con mayor extensión de costa. Felipe lamenta que están maniatados frente a los furtivos. No tienen la potestad legal para detener a nadie y, cuando dan el aviso a las autoridades, tardan muchísimo en acudir. Se tienen que conformar con escribir en una bitácora toda esa actividad ilegal para presentarlo a los órganos competentes y que puedan aplicar sanciones.

Una investigación de Oceana descubrió la incursión de al menos 19 grandes navíos por la zona de refugio de los Cuevas en 2020. Sus radares, sin embargo, no detectan

a las lanchas, las que mayor destrucción causan al corredor biológico, las que extraen ilegalmente cerca la mitad del pescado en México, el doble del promedio mundial. El propio López Obrador dijo que le preocupaba la piratería, las extorsiones y el asalto a embarcaciones. Unos delitos que afectan a 300 mil familias que viven directamente de la pesca. En lugar de apoyarles, su gobierno suprimió el subsidio a las comunidades para la vigilancia de sus aguas. Esa impunidad ha permitido al crimen organizado aplicar el “cobro de mar”, un impuesto a los pescadores por salir a faenar, en todos los estados menos en Yucatán. Los hermanos aseguran que nunca les han extorsionado, pero sí presienten que a la larga pueda suceder. De momento, su único peligro son las olas. “Es un trabajo arriesgado. Hay que tener pericia para no cortarse la mano con la piola, leer las nubes para predecir los nortes (fuertes vientos). Hay que estar muy atento, precavido. Si te distraes, te puede tirar un animal”, dice Felipe.

Su tata también les enseñó a respetar a las orcas. Los *enmascarillados*, como apodaron al depredador marino tope, hundió el bote de un pescador de la zona. Otra de las leyendas con las que crecieron habla de El Mechudo. La costumbre obligaba a los perleros a ofrendar a la Virgen la última perla que recogían. Aquel buzo mechudo se negó, porque la última perla de aquella jornada era muy grande. Así que se sumergió de nuevo para sacar otra. Nunca volvió a aparecer. Su melena se enredó en alguna roca y quedó atrapado en las profundidades con una concha de madreperla en la mano. El Mechudo se llama ahora el bocado de cordillera frente al que se ahogó el perlero. Es uno de los puntos de referencia visual que sirve a los navegantes para orientarse. “Hay que respetar el mar”, es la moraleja que saca Juan, que bien sabe las consecuencias de contradecirle. Se enfadaba mucho a los siete años, porque quería quedarse en la playa

jugando en vez de zarpar con su padre y su abuelo. Se sentaba en la regala de la panga con los pies colgando y la mirada fija en el oleaje. Su manera de expresar el disgusto. El tata le aconsejaba que se pusiera a pescar para no marearse. El niño lo desoía hasta que vomitaba. Así fue como el mar le exigió a Juan lanzar sus primeros anzuelos.

Los hermanos capturan 400 kilos en cinco horas. Antes de regresar al islote, Felipe estruja las sardinas sobrantes y las devuelve medio muertas al agua, para que a los otros peces les resulte más fácil atraparlas. “Es para que el pescado aprenda a comer. Parece mentira, pero, el pescado es muy sentido, hay que consentirlo. Si no, se asusta o se cansa y se va”, dice.

Durante la cena, los Cuevas discuten hacer remodelaciones a la vivienda para alojar a estudiantes de universidad. Los hermanos reconstruyeron con hormigón las paredes, pero en 10 años ya se han resquebrajado. Tiraron por la borda todos sus ahorros y tantísimo tiempo y esfuerzo en transportar los bloques de cemento. Entre taco y taco de cochito con repollo, Juan le sugiere a Felipe utilizar tablo-nes. La madera resiste más a la sal, los vientos y el agua, como lo han demostrado dos de las primeras cabañas, que, un siglo después, siguen en pie. Su madre sirve varias tazas de café. La dificultad para traer refrescos o fruta para licuar volvió al café la bebida típica del lugar. Y un vicio, que los mantiene despiertos hasta bien entrada la medianoche. Un océano de estrellas se cierne sobre el islote. El único ruido de las noches en El Pardito es el motor de algún generador eléctrico y de las lanchas de narcotraficantes que cruzan a toda velocidad el Golfo de California para subir la merca hasta la frontera norte.

El ranchero oasisano

LA SOLEDAD | BAJA CALIFORNIA SUR

Tan sólo quedan una decena de vaquitas marinas debido a la pesca furtiva del pez totoaba, en cuyas redes se atora la marsopa. La vejiga natatoria de la totoaba se vende a nueve mil dólares el kilo en el mercado negro de China, donde es un producto de lujo al que se le atribuyen propiedades afrodisíacas y curativas. La pesca del pez más caro del mundo es el enésimo negocio de los cárteles mexicanos y la sentencia de la vaquita.

El mar de Cortés lleva el nombre de Hernán Cortés, aunque el colonizador no pasó demasiado tiempo en la península por sus rudas condiciones. El sol hierve los párpados. Baja California Sur es el estado con menos lluvias y las pocas que caen, lo hacen de forma torrencial. La primera de 2022 se desató en octubre (tres semanas antes de mi viaje). Por eso el arenal luce algo verdoso. Germinaron varios arbustos bajo los cardones, los cactus más altos del planeta. “El desierto es agradecido”, dicen quienes lo habitan, que también aprovechan cualquier gota para florecer.

En una de las depresiones de la escarpadas cordillera sobresale un puñado de palmeras, señal de que hay un oasis, de que hay agua, de que hay humanos. Una mujer sale de su choza y se asoma a la vereda para saludarme con entusiasmo. Es la única persona que me encuentro en cuatro horas y, para ella, soy el primer vehículo que ve en días.

Los primeros evangelizadores de finales del siglo XVII se asentaron junto a los oasis, pero no pudieron someter a los nativos nómadas que se desplazaban largas distancias en busca de esteros donde pescar moluscos y de las lagunas estacionarias que se forman algunos meses tras una tormenta. Baja California es un angosto y alto brazo de tierra, que se cuarteó como un pastel por la falla de San Andrés. Las huracanadas precipitaciones ahondan las grietas por donde se escurren rápidamente hacia el océano. El empinado relevo acentúa estos torrentes. Desde el avión se ven los profundos surcos que deslizan por la serranía, como el puño de un gigante. La otra mitad de las lluvias se evapora al impactar con el abrasante suelo. Únicamente en los prístinos cañones de las sierras La Giganta y Guadalupe crece la suficiente vegetación para captar algo de agua. Esa espina dorsal surte a tres de los cinco municipios surcalifornianos y a su principal valle agrícola.

La flora del desierto se adapta a las elevadas temperaturas, pero le afecta mucho la radiación solar. La intensidad de los rayos ultravioletas, en aumento en los últimos tiempos, satura a las plantas y dejan de hacer la fotosíntesis. Y, a menos matorrales, más rebota el sol en la piedra. Esa tierra es un asador. Los cardones alzan sus brazos para ser los primeros en recibir las contadas aguas. Ahora, parece que lo hacen para despedir al día. El crepúsculo es rojo y lila, fantástico. El anochecer me obliga a detenerme en un rancho del camino para pernoctar. Es peligroso conducir en esa oscuridad y chocarse con alguna de las tantas vacas que andan sueltas.



La mayoría de los pescadores eran serranos que abandonaron sus cultivos por la carencia de agua. Además de los lazos familiares, mantienen un estrecho vínculo comercial entre mar y tierra. Los campesinos bajan a comprar pescado y sal para curtir sus pieles; los pescadores suben a conseguir frutas, verduras y algo de carne para las fiestas. Manuel Amador comparte apellido con los Cuevas y nació en la misma rancharía que su madre, pero ni se conocen. Comparten además su adicción a la cafeína. “Si no tomas café, te sientes drogado. Andas todo el día de mal humor”, dice. En La Soledad, 30 abruptos e interminables kilómetros desde la costa más cercana a El Pardito, también cuesta traer otras bebidas.

Antes de tomarse la primera taza del día, don Nino aprovecha el sereno para ordeñar a sus cuatro vacas. La barriga le impide doblarse demasiado y apenas llega a las ubres. Le cuesta levantarse del taburete, lo da todo por tener algo de leche para ponerle al café. El resto del ganado pastorea libre por el monte para que encuentren algún aguaje donde beber. Recogerá a su centenar de reses entre marzo y abril, cuando comienza la sequía extrema. Asume que al menos una cuarta parte habrán muerto.

Su última idea fue obtener una rudimentaria prensadora de quesos, que le genera unos ingresos para mantener a sus vacas lecheras y le deja algo adicional. “Aquí no crece nada y, si no llueve, tampoco hay pasto, no hay ramajo, está todo seco. ¿Qué van a comer las vacas?”, dice. Tener al ganado encerrado y alimentarlo con pura pastura comprada, afirma, manda al rancharo al fracaso. No es el primer año que no llueve y, como siempre, van superando la temporada. Pero, si llueve un poquito, es un gran valor para ellos. Los quesitos de don Nino, por ejemplo, le han ayudado a pagar la gasolina para visitar a sus nietos en La Paz. “Como aquí estamos tan aislados, todo cuesta mucho dinero conseguirlo”, concluye.

Las 50 personas de La Soledad no tienen ni una tienda, ni una cantina, ni un médico. Tan sólo un internado donde las familias de la zona dejan a sus hijos los cinco días de entre semana, porque la lejanía les complica recogerlos cada tarde. Con esos estudios de primaria pueden aspirar a ciertos empleos formales. Eso, y la sequía, ha hecho que en la última década muchos jóvenes se marchen a la ciudad. “Es un riesgo para ellos. Ya sabemos cómo corre el agua en la ciudad. Es fácil que (los cárteles) capten a los (migrantes) de la sierra”, dice. Bajo el sombrero vaquero y el canoso bigote de herradura hay un tipo sensiblón.

Don Nino también salió de su ranchería. El oasis ya no alcanzaba para abastecer a más familias y, cuando se casó, tuvo que buscarse una ubicación más apartada para empezar de cero. Al principio acarreaba en camioneta y cubetas el agua de beber para sus animales. Tardó 40 años en juntar los 300 mil pesos (15 mil dólares) para construir una pila y tirar una manguera de cuatro kilómetros hasta el oasis más cercano. Disponer de agua continuamente le ha cambiado la vida. “Ahora sembramos poquito, pero sembramos. Es mucha mejoría. Con el agua constante podemos tener el pedacito de tierra limpio y en forma para trabajar”, dice. Su acre de frijol, maíz y alfalfa es un sueño cumplido y una tranquilidad.

Esa reciente comodidad, sin embargo, no lo aplacó. Don Nino sigue yendo a las reuniones en la ciudad para negociar la entrega de apoyos de gobierno. Hace poco logró instalar una carpintería donde los rancheros más desfavorecidos tallan figuritas. “Si tienen un ingreso fijo, ya no dependen de vender un becerro o una chiva. Es un aliviane”, dice. Lo hace para que los muchachos no se vayan. “Vas viendo que esto se va acabando, porque sólo quedamos los mayores, que no damos el mismo rendimiento”, agrega, a sus 65 años. Cada tanto se sienta bajo el soportal de palma para descansar y tomarse otro café. La pierna derecha dejó de responderle

hace unos años y apenas puede agacharse o caminar más de 10 minutos. Su corral de puercos y cabras lo cuida un ayudante, que se crió con ellos, y su único hijo mayor, que salió a estudiar a La Paz e insólitamente regresó a la sierra. De no haber sido así, don Nino habría tenido que renunciar a sus tierras.

“A nadie le beneficia más proteger el medio ambiente que a nosotros. No podemos destruir lo que nos da de comer y beber. Es como cuidar nuestra casa. El día que dejemos de estar aquí, se meterán otros con ciertos intereses que no les importará acabar con todo esto”, dice. Hace alusión a algunos proyectos mineros que amenazan otras partes de la península. Las vacas de don Nino también maltratan ese ecosistema, porque se comen los brotes más nuevos de las plantas, cuyas raíces son las más fuertes y abren el terreno por donde se infiltran las lluvias que recargan el manto freático. Además, el ganado por su peso tiende a aplanar la superficie y acelerar la desertificación. Pero, es el mal menor. Es el precio para que allí viva gente.

El final de la cultura oasisiana será el final de la sierra. Y de sus grandes mamíferos, como el borrego cimarrón, el puma americano o el venado bura. “¿Merece la pena tanto esfuerzo por vivir aquí? ¿Por qué se quedan?”, le pregunto. “Para mí ser rancharo ha sido mi afición. Es lo que me ha gustado. Se sufre tantito, pero también se está a gusto”, guasea. Don Nino tiene un inquebrantable apego a todo lo que le hace feliz. El rancharo tuvo un perro, León, que acostumbraba a morder los neumáticos de los autos. Durante años se gastó más plata en pagar ruedas y reparar reventones que en comprar más vacas. Nunca le importó. León murió de viejo y adoptó a otro amigo de rancho, Tigre. Su diversión es perseguir cualquier animal que ande suelto. Ya se ha comido varias gallinas y ha roto la manguera. Tampoco le importa. Su vida en el oasis es esa, valorar lo poco que le da naturaleza, lo que más ama.

La seca del turismo

CABO PULMO | BAJA CALIFORNIA SUR

La vaquita marina no se adapta a la vida bajo cuidado humano y la única forma de salvarla es conservando su hábitat. La Unesco declaró esas aguas patrimonio de la humanidad en peligro. Washington anunció que México será sancionado con un embargo al camarón y a varios pescados por no haber hecho lo suficiente para proteger al cetáceo más pequeño del planeta del narco. Los barcos de organizaciones ambientalistas han sido atacados con balazos y cócteles molotov por parte de los traficantes de buche de totoaba, conocida como la “cocaína del mar”.

“Hay algo en el Golfo, que cuando uno se encuentra en aquel escenario fantástico y exótico, le hace asentir y decirse interiormente: ‘Sí, lo conozco. Recordar el Golfo es como recordar un sueño’”. Con esas palabras describió el Nobel de Literatura, John Steinbeck, la sensación que experimentó en la costa Cabo Pulmo, que, en aquellos años cuarenta, eran sólo cuatro jacales. Esos y tantos otros versos sobre su belleza atrajeron al turismo. Y el turismo trajo empleo y dinero, a costa de una vida esclava. La comunidad trabaja para comprarse una mejor lancha y llevar a más visitantes y ganar más dinero, que invertirán en mejores equipos de buceo para captar a más turistas y ganar más dinero, que invertirán en renovar los chalecos salvavidas... y así una espiral que les ha robado la tranquilidad y el agua.

La trepidante colonia de estadounidenses y sus mansiones de veraneo obtienen el agua de un pozo privado. La

empresa privada que lo gestiona les proporciona suministro constante, mientras que los locales reciben agua de manera intermitente y casi ni llega a las cabañas de primera línea de playa. Los de la barda alta utilizan el agua para regar las flores exóticas del jardín, mientras que los autóctonos no tienen ni para cocinar. Pero, todo el recurso se extrae de un mismo acuífero que ya se declaró sobreexplotado. Esto ha borboteado cierto recelo que evidencian el murete y la barrera que los pobladores colocaron durante la pandemia para aislarse de los extranjeros, que ya los han superado en número.

Los cabopulmeños perforaron un pozo informal que no está registrado ante la Conagua y, por tanto, ninguna autoridad debe administrarlo o darle mantenimiento. La cuota de servicio se paga a don Toni, el anciano a cargo de abrir las llaves y encender la bomba para que baje el agua a las casas. El pozo y el sistema de bombeo es muy rudimentario y suele fallar. Javier Castro es uno de los locales que se ha enriquecido con la llegada de visitantes, que a diario doblan a los 200 habitantes de Cabo Pulmo. Con ese dinero se compró las gafas de sol y bañador de marca que viste, pero no puede comprar el agua y eso le pone nervioso. “Ya se batalla con el agua. ¿Qué pasará en un futuro no muy lejano con el tema del agua, si se sigue creciendo a este ritmo?”, se cuestiona.

Javier evoca a su padre, cuyo mayor dilema era escoger cuál de los chivos cocinar. Juan Castro solía contar la historia de cuando sintió que su lancha se agitaba y al voltearse vio una ballena azul con la boca abierta. Mito o realidad, lo cierto es que en esos años ochenta se sacaban peces de tamaño humano. Hace 51 años, cuando nació Javier, había meros de 300 kilos. Pero, los *goliats*, como los llamaban, se han ido alejando a causa del calentamiento de las aguas y la contaminación de grandes enclaves turísticos cercanos.

Ya de joven le tocó salir a pescar más lejos, más horas y con más riesgo, porque no se encontraba pescado cerca. A veces tenían que dormir en la panga a mar abierto. El turismo los ha salvado de esa miseria, a cambio de otras.

“Cada año aumenta la visitación y es un gran reto para que no se vuelva un destino de sol y playa”, dice el turistero. Cabo Pulmo se sitúa tres horas al sur de La Paz y dos horas al norte de Los Cabos. Un caramelo para la explotación de un turismo masivo. La comunidad se ha opuesto a varios megaproyectos hoteleros en los últimos años, entre otros, uno de capital chino que pretendía incluir un acuario del tamaño suficiente para meter un tiburón ballena. Hay 24 fondos internacionales que han invertido más de 1 100 millones de dólares en 60 desarrollos inmobiliarios en Baja California Sur, que superó los cuatro millones de viajeros en 2023.

En el sendero que conduce al poblado hay numerosos rótulos de *real states* con teléfonos estadounidenses que ofrecen enormes lotes ya perimetrados. Dicen las malas lenguas que fue el patriarca de los Castro, una de las tres familias que fundaron la aldea, quien malvendió miles de hectáreas de terreno ejidal a un empresario gringo en los años sesenta. No está claro si lo hizo por engaño o por avaricia. Javier niega cualquiera de las versiones. “No queremos más plata, queremos mantener esto equilibrado. Si el polo turístico se expande, será desastroso para nosotros. Ya hemos visto lo que le pasó a Los Cabos”, añade. En ese paraíso de lujos, playas vírgenes y campos de golf, destino de muchas estrellas de Hollywood, se desató una feroz disputa entre cárteles por el control de la venta de droga y la prostitución. El segundo hogar de Jennifer Aniston, George Clooney o Leonardo DiCaprio fue la ciudad más sangrienta del mundo en 2017.



El padre de Javier fue de los primeros que trabajó como guía de buzos y se percató de que ganaba mejor acompañando a extranjeros que saliendo a pescar. Fue uno de los primeros interesados en crear un parque natural que, 25 años después, ha quintuplicado su fauna marina. Se considera una joya de la conservación, no sólo por esa recuperación, sino porque el área está gestionada por los propios pescadores. “Hay que estar actualizándose con las reglas del parque, reservar las zonas donde vamos a fondear para que no se acumulen muchos visitantes, atender a los extranjeros...”, explica Javier. Corre de un lado para el otro de la playa a la palapa del Eco Adventures, la empresa de paseos que dirige junto a su hermano. Se sienta sólo cinco minutos a conversar antes de enredarse con otra tarea. “Antes era más relajado. Era un rancho muy tranquilo. Cabo Pulmo era para nosotros”, zanja. Algunos jóvenes locales ni siquiera querían ser turisteros para evitarse todo ese estrés, pero, al heredar el negocio familiar y no haber otra actividad, no les quedó más remedio. Ya no hay vuelta atrás. Nadie pesca ni puede enseñar a pescar, si esa pudiese ser una alternativa. A Juan lo siguen a todas partes tres huskies siberianos, otro de los disparates provocados por la desenfrenada llegada de foráneos.

Las tres familias originarias se han enzarzado en riñas por menudeces del negocio turístico, en lugar de unirse para combatir el desmedido crecimiento y uso del agua por parte de los pudientes gringos. La expansión del conjunto de villas ha absorbido el pozo local. Tampoco ha habido reacción alguna de la comunidad para impedir que su única fuente quedase dentro de una propiedad privada. El incesante flujo de visitantes no les deja tiempo para nada. La bióloga Gabriela Anaya, ideóloga del parque natural, dijo en una entrevista en 2016 que hacía “cinco años que Cabo Pulmo pasó de ser el interés de varias familias de una pequeña comunidad, a ser el interés de una comunidad que ya no tiene fronteras”. Ni tampoco agua.

Juan Cuevas pasa intervalos de tres semanas seguidas en El Pardito. Extraña mucho a su esposa y a sus hijos, que viven en La Paz. Pero, antes de abrazar a su familia, lo primero que hace al llegar a la ciudad es ir a buscar agua purificada. Baja California Sur es el estado donde más agua potable falta y, pese a ello, una décima parte del agua tratada se destina a campos de golf. El pescador llena cuatro garrafones en uno de los locales de tratamiento de agua por osmosis que hay en cada esquina. Casi nadie toma agua de la llave por sentido común. Sale sucia. En los baños se hace sarro y deben cambiar la regadera cada seis meses, porque se tapa. “Tiene un sabor muy malo, ni para lavarse los dientes”, dice Juan.

El agua llega a las casas cada dos o tres días, pero a muchos de sus 250 mil habitantes nunca les llega y deben comprarla de las pipas. La rima que anuncia el paso de las pipas forma parte del paisaje sonoro de la ciudad. Frente a la carencia se ha sobreexplotado el acuífero de La Paz y esto ha desencadenado, además, una intrusión salina en el manto freático, bajo tierra, que ha empeorado aún más la calidad del agua. Juan y su familia viven en uno de los nuevos condominios a las afueras, donde abundan los solares con publicidad de futuros edificios residenciales. La capital del estado tiene cinco veces menos agua que hace cinco años debido a ese desmedido crecimiento urbano y al pésimo manejo hídrico. Su pequeño, pero moderno dúplex, cuenta con una cisterna que almacena los tandeos y tienen siempre agua corriente.

Aún así, tampoco gastan demasiada agua. Juan se acostumbró desde pequeño a racionarla, porque en El Pardito siempre era escasa. Eso trata de inculcarle a sus pequeños. Esa doble realidad, entre el islote y la urbe, le ha servido para aplicar lo mejor de sendos modos de vida. Lo que no ha querido es convencer a sus hijos, de 15 y 5 años, de las

bondades del mar. Ambos han nacido y crecido en La Paz, al igual que los tres niños de Felipe. Los hermanos tuvieron claro que sus retoños debían estudiar para dedicarse a otra cosa, o bien, para hacerse del negocio turístico de pesca recreativa que tienen en mente. “Somos pescadores de nacimiento. El mar es nuestra casa. Es el mejor lugar para estar tranquilo, estar a gusto. Es un lugar especial, pero ser pescador también es muy duro”, afirma Juan. Les gustaría que aprendiesen a pescar, para que allá donde anden nunca les falte comida, pero no mucho más. Tan sólo los llevan al islote algunos cumpleaños y navidades.

En los años noventa habitaron El Pardito más de medio centenar de Cuevas y ahora quedan menos de veinte. Las últimas generaciones se fueron marchando por la caída del pescado, en volumen y precio, y por el enorme sacrificio de vivir apartado del mundo, sin resquicio de confort. Los *parditos* son otra de las especies del Golfo de California, como bromea Juan, en peligro de extinción.



La hora cero de Monterrey

El dinero no compra el agua

GARCÍA | NUEVO LEÓN

Los osos negros se quedaron sin agua y bajaron del cerro para beber y refrescarse en las albercas de los condominios. Se comen la carne de los asados y la basura de las calles. La gente los grabó y se viralizaron. La habituación al medio urbano del carnívoro más grande de México causa curiosidad y mucha gracia. Deberíamos asustarnos, no de los osos, sino de la especie humana.

Cuando María Matús abandonó los Valles de Oaxaca hace 30 años y se trasladó a Nuevo León, nunca imaginó que, incluso en el estado más próspero de México, algún día faltaría agua. El nombre de su comunidad prefiere omitirlo, porque, además de la sequía, también la persiguen las extorsiones de quienes piensan que, por vivir en el norte (de México), es rica. Pero las cuentas tampoco le cuadran de empleada doméstica. Y ahora, ni eso. La mujer de 42 años tuvo que dejar de ir a las casas que limpiaba para recoger algo de agua de las pipas que distribuyen cada tres o cuatro días, sin orden ni aviso.

Ese 23 de junio de 2022 la pipa sí pasó. María está despierta desde las cuatro de la madrugada y anoche se acostó a las 12 a la espera de que salga un chorro de agua por su llave o llegue una pipa. Son las siete de la mañana cuando el rugido del camión hace salir al trote de sus casas a los vecinos de Villas de Álcali, en el municipio de García,

a 40 kilómetros del centro de Monterrey. Familias enteras cargadas de botellones, tambos, baldes, botes y carriolas; carros de la compra y hasta Mini Coopers infantiles, van siguiendo la cisterna como al flautista de Hamelin. María improvisó una carretilla con la carriola de su nieto. Sus otras dos nietas, a quienes cuida mientras su hija se pasa toda la semana trabajando fuera, la acompañan con un bidón de basura y tres cubos de pintura vacíos. Se alegra de que no hace mucho calor. La temperatura en Nuevo León para esas épocas puede superar los 40 grados. La idea de que tendrá agua le hace olvidar por unos instantes sus dos condenas: que su marido haya perdido tantos empleos en fábrica, que les hubiesen dado algo de estabilidad económica, y que se hubiesen instalado al extremo oeste de Monterrey, azarosamente la parte más alejada de las tres presas que abastecen de agua a los 5.3 millones de habitantes de Monterrey, que el verano de ese año sufrió la peor crisis hídrica en toda su historia. Nuevo León tenía un déficit del 40% del recurso en ese momento. El gobierno estatal anunció restricciones de suministro desde abril, con un tandeo entre las cuatro de la madrugada y las 10 de la mañana. Pero, García fue el municipio más afectado por la escasez y a comienzos de mayo ni siquiera recibieron el recurso durante ese horario.

En el humilde fraccionamiento de centenares de viviendas minúsculas adosadas y calcadas —una forma de deshumanizar y recordar a esa clase obrera que ha venido a eso únicamente, a trabajar— llevan dos meses sin recibir agua en sus hogares. María es la decimonovena en la fila. La mujer menuda de pelo rojizo teñido se pone cada día sus aretes y collar de oro para presumir algo frente a las vecinas mientras esperan su turno de agua. Con ellas aprovechan las dos o tres horas de espera para compartir sus últimos ingenios para ahorrar o reutilizar el agua. “Se puede quitar el tubo del lavaplatos y ahí mismo con esa agua y jabón

sirve para lavar el piso”, dice una de las mujeres, mayoría en la hilera. Muchas de ellas acarrear a sus pequeños, que en cuanto pueden caminar ya llevan una garrafa en la mano. “¿Esto es como África, verdad?”, me pregunta María, dando por hecho que conozco ese continente. “Da pena. Hasta más morenos nos vamos a poner de tanto rato bajo el sol”. La oaxaqueña se percató demasiado tarde, cuando ya había vendido su parcela, que el norte no te blanquea, sólo araña tu color de piel para cerrarte la puerta, para dejarte al margen de las oportunidades.

García tenía apenas 25 mil habitantes en el año 2000 y ahora tiene cerca de 400 mil. El descomunal crecimiento y la pésima planeación urbana explican la carencia de agua. Esta periferia se formó de gente del sur que se mudó al mayor polo industrial de México en busca de un contrato en una maquila que les brindase una vida digna. El desencanto hoy tiene forma de cubeta y charcos; ayer y mañana, de atascos en la buseta, de desahucio o de balacera. La frustración se suma a los dos o tres días sin agua en casa, al picor de cuerpo o a los niños llorando de calor. Algunas de esas interminables filas han terminado en trifulcas y golpes entre grupos que acusan a otros de venir de otras colonias a recoger agua. Varios de los conductores del camión de agua han sido retenidos por los vecinos como forma de presión para reclamar el envío de otra pipa. “A veces la gente se pone agresiva”, dice el pipero de manera anónima. Deja la manguera en manos de dos mujeres y un hombre, al parecer los líderes de la barriada. García sólo contaba con cuatro pipas antes de la extrema escasez y ahora disponen de 25, muchas donadas por empresas. Aún así, el recurso es insuficiente y la alcaldía ha solicitado la presencia de agentes federales para vigilar el hidrante de donde se surten los vehículos cisterna.

María carga con esfuerzo y cuidado los tres cubos de agua en una tabla de madera sobre la carriola y la arrastra

junto a Evelyn, la nieta de siete años, a quien regaña cada vez que se derraman unas gotas. “La niña está contenta de ir a la pipa, porque ve a la gente contenta (de recibir el agua)”, asegura la abuela, aunque las caras de la fila son más bien fruncidas. Son dos cuadras hasta su casa, unos 200 metros, pero se hacen una eternidad. En el último y único bordillo para entrar la carretilla, ambas aguantan la respiración. La familia tapó con una caja de fruta plástica, amarrada con candado, la bomba, llave y tubería exterior de la vivienda para evitar el hurto de su agua. Los ahorritos apenas les alcanzaron para pintar de verde pistacho la fachada del primer piso y dejar el segundo de blanco yeso. El resto tuvieron que gastarlo para poner doble reja en la puerta y las ventanas hacia el 2012, cuando Los Zetas se escindieron del Cártel del Golfo y detonó una guerra en la ciudad. En Valles de Álcali aumentaron los robos en domicilio por parte de aquellos jóvenes que tenían que pagar sus deudas por drogas o llevar dinero a sus patrones para financiar la contienda. A María le atracaron tres veces y en la calle de abajo hubo un tiroteo. “Hay un poco de miedo”, dice.

Una diputada local opositora denunció que 14 hombres armados irrumpieron durante el reparto de una pipa para secuestrar el vehículo y llevarse toda el agua, en la colonia Independencia, una de las zonas cooptadas por el crimen organizado. El gobierno estatal de Samuel García, la joven revelación de Movimiento Ciudadano, desmintió esos hechos. Monterrey es una plaza en disputa por el narcomenudeo, el oasis de bodegas donde esconder la droga y por ser paso obligado de transporte pesado hacia Estados Unidos, tanto para el control de la ruta de contrabando como para el cobro de impuesto carretero a cualquier mercancía. El agua tal vez era un negocio demasiado enjuto en una urbe tan dinámica, pero fue en algunos casos un instrumento de propaganda social para las bandas delictivas, al igual que

sucedió con la entrega de despensas durante la pandemia. Tres semanas después de mi visita, vecinos de Allende, a 60 kilómetros al sur de Monterrey, quemaron 18 tubos con los que el gobierno estatal pretendía canalizar agua de su río hacia la capital de Nuevo León.

A María y su familia le protege el San Judas que preside en una enorme pintura y figura su sala principal. En el comedor y la cocina hay una docena de cubos y seis garrafrones repletos. Lo primero que hacen es vaciar el agua sobrante de la lavadora, que aprovechan para limpiar el baño, así como el agua de la ducha. Pese a todo ello, suelen quedarse sin agua durante dos o tres días. “A mi nieta mayor le da vergüenza a veces ir a la escuela porque se siente sucia. No puede bañarse cada día y se suda mucho en el verano”, dice. Estefanía, de nueve años, llena un par de botellines de litro para llevar a la escuela, una de las obligaciones impuestas a los alumnos para afrontar la emergencia. También se restringió el uso de los baños, se recortaron los horarios y algunos centros incluso suspendieron clases. En una de las dos recámaras del fondo su nieto de cuatro años ve la tele a primera línea del colchón y mira de reojo a sus hermanas y abuela sin entender tanto trajín.

La mujer de espalda y cintura ancha vuelve a la pipa. Será el segundo de seis viajes para llenar en cada uno tres cubos de 20 litros y el tambo. En total, recoge por cada pipa unos 500 litros de agua. El volumen suena cuantioso, pero apenas les alcanza para un par de días a las ocho personas del hogar. (Un mexicano o mexicana gasta en promedio 307 litros diarios, el triple de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para satisfacer las necesidades de higiene personal y limpieza del hogar.) La familia de María estaba consumiendo tan sólo 30 litros al día cada uno. Ya se habían acostumbrado a ese ahorro. Lo que ahora más perturbaba a María era la compra de comida y demás

bienes básicos. “Como tuve que dejar de trabajar para buscar agua, ahora sólo contamos con los ingresos de mi marido, de albañil. No nos llega”, dice. Con ese sueldo deben pagar, además, la clínica de rehabilitación para uno de sus hijos adolescentes, que cayó en las drogas. Esa era la tercera condena de María y la enésima bofetada de la gran ciudad.



Entrando hacia la zona metropolitana de Monterrey, la segunda más poblada del país, abruman los rascacielos y conjuntos de unidades habitacionales trepando por las empinadas laderas, pero sobre todo sorprenden la cantidad de macro-obras sin terminar. El propio gobernador reconoció que la especulación inmobiliaria es uno de los grandes negocios de la urbe. Me desvíó por el sur, hacia San Pedro Garza García. El municipio con mayor poder adquisitivo de Latinoamérica también estuvo golpeado por la escasez de agua y tal vez eso marcó la diferencia con otras crisis de esta magnitud y provocó la rápida reacción de las autoridades. En Villas de Álcali llevaban dos meses sin suministro y apenas salieron algunas notas en medios locales, pero, en cuanto faltó agua en la zona noble, se pronunció el gobernador y se activó toda una respuesta.

Diana y Jorge García viven en uno de esos condominios desde donde se ven los suburbios de casuchas. “Al regio le gusta mirar a la miseria a la cara”, describe el colega que me acompañaba sobre lo que considera una idiosincrasia pueblerina, chocante con el porte y bonanza de la metrópolis. La mayoría de viviendas de San Pedro tienen cisternas, pero a muchas de las más nuevas no les pusieron. A nadie le importaba eso hace apenas un lustro. Al matrimonio

le llegaba agua intermitente de los tandeos desde hacía 10 días y se había tenido que bañar con baldes en varias ocasiones. Otros vecinos habían ocupado agua de sus albercas para limpiar el piso. “Hemos aprendido la importancia de cuidar el agua, ya no dejamos la llave abierta al ducharnos o lavarnos los dientes”, dice Diana. Cuando visité su casa, la trabajadora doméstica estaba regando las plantas del jardín exterior con una cubitera de Absolut Vodka, que llenaban de agua cuando se les acababan los barreños.

Al ver que la problemática podía alargarse todo el verano —de hecho se alargará para siempre—, Jorge buscó durante tres días un tinaco, agotados en esas fechas por la ola de pánico. Desde la azotea del dúplex donde lo tiene instalado se ven decenas de esos Rotoplas nuevos. Los precios de los tanques se triplicaron frente a la gran demanda y llegaron de algunos estados aledaños para venderlos por doquier. Era habitual ver camionetas cargadas de tinacos por las carreteras.

En Darvisa, una pequeña empresa de distribución de depósitos y tuberías, me explicaron que se quedaban sin existencias al poco de recibirlas y que el propio gobierno estatal les había pedidos. La lista de espera para adquirir un tinaco era de dos semanas y, pese a todo, aseguraban que por ética habían evitado aumentar los precios. “Monterrey nunca ha sido una ciudad tinaquera”, apunta la gerente, Brígida Rodríguez. Según ella, en San Pedro ya estaban colocando tanques bajo suelo porque en las azoteas no llegaba la presión del agua; uno de los inconvenientes de vivir loma arriba. Pese a todo, a día de hoy todavía es el municipio de Nuevo León con mayor consumo de agua por persona.



Un motel del centro de Monterrey ofrecía regaderazos a 120 pesos (seis dólares). La imagen trascendió a la prensa y al propio gobierno, que aseguró que investigaría el caso por tratarse de un abuso y una posible irregularidad. Pero, la fotografía ya estaba tomada. Al igual que las centenares de pequeñas tuberías cortadas para robar el agua y que se habían quedado al descubierto, emanando agua sin parar en calles transitadas, ante la mirada incrédula de la población. A gran parte de esos transeúntes, como a miles de hogares sobre todo del oriente de la zona metropolitana, no les faltó agua ni un día. Por eso a veces les resultaba difícil dimensionar las reacciones de sus conciudadanos. En la Avenida Revolución, una de las arterias, se desplegaron unos 50 antidisturbios frente a la convocatoria de bloqueo por la falta de suministro. A la protesta acudieron seis personas. Días antes, habitantes del extrarradio habían cortado alguna de las principales vías y provocaron graves afectaciones al tráfico. Algunos restaurantes tuvieron que cerrarse al quedarse sin agua potable. Vecinos de varias colonias hacían guardias para custodiar los tinacos gigantes entregados por el gobierno estatal para surtir a las periferias más urgidas. Una de esas mujeres vigilantes, Gloria Ilda Pérez, me cuenta que han sufrido agresiones, insultos y amenazas de personas que vienen de otros barrios a cargar sus botes o de otras que quieren sobrepasarse de los litros que ella misma estipulaba.

Ante ese panorama, Samuel García puso el grito en el cielo y tomó acciones contundentes, como movilizar a todas las dependencias en labores para resolver la emergencia hídrica. También tuvo un discurso frontal hacia la industria por su ingente consumo de agua y pidió apoyo para la entrega de parte de sus extracciones de agua. Todo esto envuelto de la espectacularización de la política que lo caracteriza, al aparecer en operativos contra el *huachicol* de agua

o caminando sobre un río. El presidente López Obrador se sumó a la arremetida contra el poder económico y reveló que varias compañías fueron beneficiadas desde los años noventa por la entrega de 63 concesiones que en conjunto ascienden a los 50 millones de metros cúbicos. Casi todas son cerveceras (Heineken), refresqueras (Topo Chico), cementeras (Cemex), ganaderas (Lala), avícolas o productoras de papel, pero destaca la acerera Ternium, que dispone de cerca de 10 millones de metros cúbicos, por encima del nivel actual de La Boca, una de las presas desecadas en Nuevo León.

A corto plazo, sin embargo, el objetivo era cubrir la demanda de agua de las poblaciones más afectadas. Una de las oficinas de los Servicios de Agua y Drenaje parecía una sala de crisis de guerra, de hecho, la apodaron como la “war room”. Bajo una lona con el título “Mesa de control y monitoreo” decenas de técnicos de varias áreas, desde Protección Civil hasta atención a violencia de género, se coordinaban entorno a largos mesones. Apenas un mes antes el salón tan sólo contaba con cuatro funcionarios y un pizarrón, ahora tenía varias pantallas gigantes con mapas y gráficas. Su director, Juan Ignacio Barragán, daba instrucciones frenéticas. El cargo del máximo representante de la gestión del agua en Nuevo León pendía de un hilo y al organismo se le había señalado por varios casos de corrupción en anteriores administraciones. “Hemos tenido que modernizarnos y equiparnos”, afirmaba Barragán, sin responder a cualquier tipo de previsión. La mayor responsabilidad en esos momentos no recaía en él, sino en un hombre corpulento y de aspecto afable sentado frente a una de las pantallas donde se movían unos puntitos de varios colores. Rubén Francisco Rivera era el encargado de decidir el lugar de entrega de las pipas. Por sus manos pasaba el suministro y el alivio de millones de personas. Por eso en las últimas

semanas la jornada laboral del ingeniero se había alargado a las 18 horas. Se había perdido el cumpleaños de uno de sus hijos y de su padre. En casa se le perdonaba, para su familia era un héroe; para el resto, un desconocido. Pero, a él le dolía en el alma cuando se hacían bloqueos, se retenían pipas o se registraban agresiones contra operarios por falta del vital líquido. Sentía que la gente estaba sufriendo, en parte, por su culpa.

La misión de Agua y Drenaje sólo empezaba en esas cuatro paredes. De ahí me empujaron a un convoy para desconectar tuberías irregulares. Las autoridades calculaban unas 160 mil tomas clandestinas en Nuevo León. Se habían llegado a encontrar ranchos con represas construidas a partir del desvío del cauce de un arroyo. La emergencia había sensibilizado a la población para dar aviso de esas conductas. Las autoridades empleaban drones o imágenes por satélite para verificar la denuncia. Íbamos a atender un llamado en La Huasteca, zona montañosa al sur de Monterrey. El operativo lo acompañan vehículos del departamento de Gobernación y de Medio Ambiente, y lo escoltan dos patrullas de Fuerza Pública (policía estatal), dado el riesgo de presencia de grupos delictivos o incidentes armados con los propietarios de terrenos, concretamente en las zonas cítricas del sur del estado, colindantes con Tamaulipas. El robo en grandes cantidades también se daba en bloques de oficinas y centros comerciales.

Las seis camionetas enfilan la carretera secundaria durante unos 30 kilómetros hasta adentrarse en un laberinto de colinas escarpadas, arrugas de roca cubiertas de cactáceas. En uno de los desvíos de terracería damos volantazo y nos metemos en una quinta. Al poco rato nos detenemos y en seguida hallan una delgada tubería conectada a un pozo. Los funcionarios cierran la llave, cortan el tubo en varios pedazos y cavan alrededor para dar con otras tomas. Todo

se graba y se sube a redes sociales de inmediato para difundir la labor gubernamental. No encuentran otras tomas, pero sí cinco pipas particulares estacionadas dentro de una parcela vallada. El grupo de hombres rompe el candado de la verja y al entrar comprueban que los camiones son ilegales, no tienen permiso para el reparto de agua. El velador del recinto, ante semejante despliegue, se ve asustado. Dice no saber nada ni conocer al dueño, a quien no logran localizar. Samuel García señaló, sin dar nombres, que detrás del saqueo hay artistas, políticos y testaferros de ex-gobernadores. Jamás llegó a sentenciarse a alguien por hurto mayor, más allá del cierre de establecimientos y la aprehensión de algunos ladrones de tinacos y medidores de agua. Tampoco el robo de agua estaba tipificado como delito y la iniciativa de reforma al código penal quedó en el tintero.



La Boca, una de las tres presas que surte a Monterrey, se convirtió en el símbolo de la sequía. Su volumen disminuyó al 9% de su capacidad, su mínimo histórico. También es el cuerpo de agua más cercano a la ciudad, a una media hora. El paraje dominguero para los regios era hoy un atractivo por sus grietas hexagonales del terreno y sus franjas multicolores en los montes circundantes, que daban testigo del abrupto descenso del nivel del agua. Varios barcos quedaron varados en tierra. En lugar de dar paseos por la presa, los visitantes sólo podían alimentar al averío de patos sedientos. La comida se compraba en unas máquinas expendedoras de pienso que habían colocado desde 2020 los arruinados restauranteros de la orilla. La escasez de agua venía avisando, pero nadie se lo tomó en serio.

El biólogo Antonio Hernández también lo había alertado. El hombre de ropa deportiva y perilla de cabra contrastaba con la formalidad del regío ciudadano. Monitoreaba a diario los niveles de las presas y también su deterioro por vía satelital. “Hay un interés político por parte del gobierno estatal en profundizar la crisis para presionar al ejecutivo federal a otorgar fondos para la construcción de la Presa Libertad”, dice. Lo justifica por la supuesta reparación de compuertas en un par de momentos en que se soltaron millones de litros de agua y el aumento del nivel de la presa El Cuchillo en abril y mayo de 2022, lo cuál indica que no se extrajo agua y eso aceleró la sequía de las otras dos presas. El ambientalista recibió amenazas hace unos cinco años por su oposición a varios desarrollos inmobiliarios, había bajado su exposición pública por un tiempo, pero la actual emergencia ameritaba volver a asumir el riesgo. Para él, la solución pasa por la restauración de la cuenca del río Santa Catarina, donde brota el agua para el 60% de Monterrey. La ribera de esa fábrica de agua, sin embargo, ha perdido masa forestal a pasos agigantados debido al crecimiento urbano. El padre de Antonio solía bañarse con sus amigos en el caudal del río Santa Catarina que atraviesa la zona metropolitana de Monterrey, del que ya sólo queda su huella, incómoda para los miles de conductores que se atascan cotidianamente en sus puentes. “Los pueblos antes se asentaban entorno al río, era su fuente de vida. Desde que empezamos a entubarlos, nos olvidamos de dónde viene el agua y les dimos la espalda. Pero, ahí debajo hay agua”, dice.

Samuel García, en cambio, prometió la perforación de centenares de pozos y la construcción de presas y acueductos. Así lo ha hecho, en gran medida gracias al financiamiento y voluntad del gobierno federal. Tan sólo un año después ya funcionaba la Presa Libertad y a finales de 2023 se inauguró el segundo acueducto de El Cuchillo, que

además sirvió para impedir el trasvase de agua a Tamaulipas, porque la capacidad de la presa quedó por debajo del límite acordado.

Cuando regresé a La Boca en octubre de 2023 sufría el mismo agotamiento. Tanto esa como las otras presas estaban a niveles incluso más bajos que el año anterior. Nuevo León sufría una sequía igual o más severa, pero Monterrey tenía agua. La población se había olvidado de la crisis hídrica, apenas había reducido seis litros en promedio su consumo diario y se entusiasmaba con la llegada de una mega fábrica de Tesla. Me encontré a Antonio en ese mismo suelo resquebrajado. “La gente habla de dejarle un mejor planeta a las nuevas generaciones, pero ni se acuerda de cuando ayer le faltó agua. Creemos que por tener agua el problema está resuelto”, dice. El agua se extrae de otras partes donde a la larga también se acabará. La única salida es producir el recurso y eso sólo se consigue preservando el entorno natural. Parece tópico y fácil, agrega el biólogo, pero implica cambios sociales y decisiones políticas profundas.



El Biólogo de Michoacán

El Ecocentro

ARROYO COLORADO | ZUMPIMITO

La charanda es una tierra rojiza, desolada por el maltrato al bosque. La tala inmoderada, los incendios y las plagas sin sanar, arrasaron con toda su materia orgánica. Esta arcilla pesada se endurece en periodos secos. Se reblandece y se infla por las lluvias. La loma late. Una alfombra aterciopelada que refulge fresca bajo el sol y se encarroña en la sombra. Es una tierra inservible, muerta.

“¡Es increíble, mira qué color!”. El caminante se maravilla a su paso por un suelo oxidado que pisa todos los días. Y todos los días le sorprende el granate de la charanda mientras empina la vereda hacia su casa. Juan Manuel Madrigal Miranda vive solo en medio de 100 hectáreas de pinos y encinos desde hace tres décadas. Un bosque ubicado en la periferia de Uruapan, en el corazón de Michoacán y de la guerra en México. En los últimos años, un frente de batalla entre cárteles de la droga que ahora también se disputan los campos y el agua. “Ahí están los halcones (vigilantes de un grupo criminal)”, señala una garita de tablonos a 30 metros. “Si preguntan, eres estudiante”.

El hombre de 72 años carga una cubeta en su mano izquierda y un machete en la otra, sus utensilios para salir cada mañana a regar las plantas; su única compañía y distracción desde que las balas llovieron sobre su cabeza. “Escuché un estruendo muy fuerte y me tiré al piso. Se

estuvieron disparando como 20 minutos, pero luego duró una hora el olor a pólvora. Un aire y un silencio de muerte. Hasta los pájaros dejaron de cantar”, recuerda sobre aquel 22 de mayo de 2019 a las dos de la tarde, a 100 metros de su vivienda. Los Viagras emboscaron un convoy del grupo rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y abatieron a 12 de sus integrantes. En el enfrentamiento había un centenar de sicarios. La charanda se volvió a teñir de sangre. No era el primer combate en esa arboleda, pero sí el que detonó una etapa aún más salvaje del conflicto en Michoacán.



Juan Manuel tiene ojos diminutos, vidriosos y los párpados inferiores hinchados como a punto de soltar una lágrima. Sus arrugas de la garganta, su perilla canosa y sus prominentes venas en las manos parecen pesarle y encorvar su complexión huesuda. Viste un polo amarillo con un chaleco de pana que repite todos los días y usa cordones verdes. Tiene aspecto y alma de hippie, pero es un superviviente. Cursaba filosofía en la capital y militaba en las juventudes comunistas, cuando en el 68 estalló la revuelta estudiantil. Su familia lo envió a casa de una de sus hermanas en California para ponerlo a salvo. En la Universidad de Berkley, donde solía merodear sin estar matriculado, descubrió el incipiente movimiento ecologista y resume aquellas enseñanzas visionarias: “La Tierra será como sea el ser humano. Somos cabrones, pues la destruiremos. Desde ahí que empecé a hablar del calentamiento global y aquí en México me miraban como un loco”.

Viajó largos periodos por todo Michoacán para impartir talleres de compost, huertos sostenibles y reciclaje, tanto

en facultades como en comunidades indígenas. Allá donde iba, regalaba semillas orgánicas, por lo que se ganó el apodo de Juanito Manzanas, el legendario arboricultor nómada de Estados Unidos. En 1983, fundó junto a varios colegas Viva Natura, una de las primeras organizaciones ambientalistas en el país, que logró detener algunos saqueos de madera y manantiales. Naciones Unidas los invitó a Nueva York en 1991 para preparar la Cumbre de la Tierra del siguiente año. “Lo más importante del movimiento por el medio ambiente es que haya ejemplos vivos de lo que significa la naturaleza. Necesitábamos un lugar donde mostrar que era posible una vida sustentable”, dice.

Viva Natura consiguió que los ejidatarios de Zumpimito, en ese apéndice de Uruapan, les cedieran un pedazo de su foresta charandosa, porque les parecía improductiva. En las tres hectáreas crearon el Ecocentro Cupatitzio con la intención de ofrecer un espacio de preservación para el estudio del entorno natural y para fines recreativos, una suerte de pequeño parque natural para cuidar uno de los últimos resquicios verdes de la ciudad y especialmente uno de sus principales generadores de agua. También le permitió al profesor estudiar la diversidad de fauna y flora, a la que en otros rincones del estado sería imposible acceder. A su inauguración en 1999 asistieron representantes de Canadá y Reino Unido, que habían contribuido a financiar la iniciativa y hasta pasaron noche sendos embajadores.

Juan Manuel pernoctó varios meses en una cama de paja bajo un cedro para custodiar los materiales de construcción. “Nos decían que estábamos al lado de un barrio bravo, pero nosotros lo vimos como una oportunidad para hacer trabajo comunitario”, dice. En sus inicios contrató a albañiles del lugar para construir las cabañas del conjunto. Desde ahí los pobladores lo llaman El Biólogo, porque siempre está con las plantas.

La historia del proyecto, de ese bosque, es la historia de la violencia.

El Ecocentro colinda con Arroyo Colorado —por el rojo de la charanda—, cuyos desprendimientos formaron una barranca en la que ahora pende un reguero de chabolas de lata; un asentamiento de unas 200 familias dedicadas en su mayoría a la recogida de chatarra en un basurero cercano. Siempre tuvo fama de peligroso, pero al ambientalista nunca le importó. A esa comunidad llevaba grupos de voluntarios foráneos para dar clases, pintar la escuela o reparar ropa en Navidad. También solían reforestar y abrir los caminos para el acceso de los moradores. Juan Manuel se sienta en unas banquetas colocadas en círculo, cubiertas de pinaza, al igual que las largas mesas de picnic: “Aquí hacíamos unas fogatas preciosas. Venían alemanes, españoles, holandeses... hasta 15 jóvenes de diferentes nacionalidades. Nos poníamos a tocar música y a charlar sobre el futuro del planeta”.

Los extranjeros dejaron de venir hace más de una década, cuando reventó la llamada “guerra contra las drogas” en México, iniciada precisamente en Uruapan. En septiembre de 2006, varios hombres entraron a un club nocturno de la ciudad y arrojaron cinco cabezas humanas: los primeros decapitados que vería el país. Ese año hubo medio millar de asesinatos en Michoacán (que parecía mucho en ese entonces) y en diciembre su gobernador pidió ayuda al ejecutivo federal para combatir al crimen. Al día siguiente, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y envió 6 500 tropas federales para detener a decenas de peones de tres cárteles. El operativo marcó el comienzo de una acuciante oleada de violencia que ha desangrado al país: más de 35 mil homicidios dolosos cada año desde 2019. Michoacán llegó a los 2 762, cinco veces más que antes de esa cruzada y Uruapan fue la tercera ciudad más violenta del mundo.

Ante la ineficacia del Estado, para 2014 habían surgido numerosos grupos de civiles alzados en armas que, con el apoyo de la fuerza pública, expulsaron a las bandas delictivas de la mayoría de municipios michoacanos. Decenas de los sicarios que huyeron con sus familias se instalaron en Arroyo Colorado. En ese hueco en la periferia de una ciudad intermedia pudieron pasar desapercibidos.

Entre semana Juan Manuel siguió recibiendo a niños y niñas de escuelas para enseñarles la naturaleza endémica, y a universitarios que aprendían sobre agrosistemas y técnicas de conservación. Los sábados acudían familias enteras a celebrar cumpleaños, no sin antes ofrecerles un recorrido guiado. “Maestro, yo siempre creí que la vida podía ser de otra forma y esta visita me lo demostró”, le dijo una vez un estudiante—. Para el Biólogo fue un regalazo, su mejor recompensa, porque nunca pudo culminar el sueño de una reserva natural, hoy abandonada y amenazada.

La maleza empezó a engullir los cinco cobertizos esparcidos que conforman el Ecocentro cuando hace una década el proyecto dejó de obtener subvenciones. Juan Manuel los tapó con una lona para evitar filtraciones de lluvia al ver que los listones se carcomían. Una viga rota amaga con derrumbar el techo del aula principal. El moho corroe la amplia cocina. Un deshidratador de verduras que él mismo fabricó yace destartado entre los matorrales. Los tres colchones que sobreviven en las seis literas del dormitorio común son el lecho de perros callejeros, la única compañía del profesor, que hace mucho tiempo dejó de recibir a nadie por razones de seguridad. Ese febrero de 2020, fui su primera visita en más de un año.



A finales de 2018 se mudaron a Arroyo Colorado decenas de miembros de Los Viagras, banda criminal surgida de antiguas autodefensas, cuyo nombre proviene de la gomina que se ponían en exceso sus fundadores, los hermanos Sierra Santana, para peinarse el pelo de punta. Hicieron del arrabal uno de sus cuarteles. A veces Juan Manuel se cruza con hombres —o mejor dicho, muchachos— armados y encapuchados. Normalmente ni se miran, pero en una ocasión le dijeron: “¡Ah, usted es el que ayuda a la gente, el Biólogo, qué buena onda!”. Quizá su labor comunitaria le salvó la vida y se la sigue salvando, o quizá aún no iban tan drogados. “Pueden cambiar de opinión. Son chavitos de 16 años que van con los pinches fusiles. Son pobres sin oportunidades, producto de las circunstancias. No querría verlos en la cárcel”, dice. “¿Por eso sale con el machete?”, le pregunto. “¡No! Es algo psicológico para sentirme seguro”, se ríe. “Con los malandros (delincuentes) no sirve de nada, andan con puro cuerno (AK-47). Esto es sólo por si me encuentro algún maleante. Antes había un par de adictos que me molestaban. Algunos días sacaba una vieja escopeta para asustarlos, pero ya hace tiempo que no están. Me contaron que los mismos Viagras los habían desaparecido. Ellos imponen su ley”.

A ratos Juan Manuel enmudece repentinamente y eleva su mirada, pensativa, misterioso, clavada en alguna nube, unas ramas, un pájaro o en nada concreto. Disimula ese halo de demencia bajo sus innumerables apuntes históricos. Se detiene al lado de un tanque de agua (¡aquí todavía brota agua!), pero esta vez agacha la cabeza. En el reflejo señala la punta de una colina y me pide que no mire hacia arriba. “Ahí están los pillosos (Los Viagras), donde hacen el desmadre talando. También los he visto bañarse aquí en este depósito. Por ahí se dan bala con los de Jalisco. Esos, si se enteran que soy ambientalista, nos dan chicharrón

(tirotean) antes de preguntar. Ya no podemos subir más”, considera.

El Ecocentro es uno de los frentes de la batalla entre Los Viagras y el CJNG —antes aliados—, que desde 2018 se libra barrio a barrio, cerro a cerro; una pugna por la que se derrama más que sangre para apropiarse de una calle o media hectárea, para vender unos gramos de *crack* o mover toneladas de coca. Esa arboleda es un punto estratégico, porque conecta a Uruapan con Tierra Caliente, una vasta depresión que divide el interior de la costa mexicana, escenario de las más feroces refriegas en la última década. Por Arroyo Colorado hay brechas que permiten moverse rápido hacia ambas direcciones. La privilegiada ubicación de la loma produce una atmósfera particular, donde crecen tanto árboles de frío como de calor, pinos y plátanos. Hacia abajo se desliza el valle que trae un aire cálido durante el día y por la noche predominan los vientos frescos de la parte alta. Con mucho esfuerzo, cariño y mucho abono, Juan Manuel logró que en la charanda germinase caña de azúcar, mango y papaya. “Antes tenía una hortaliza preciosa, pero, no la pude conservar, porque estamos en tiempos de guerra. Los vegetales son como bebés, necesitan calma, requieren de logística para cuidarlos. También tenía muchos perros que no pude mantener”, se lamenta. Con su sueldo de cinco mil pesos (250 dólares mensuales) por dar clases en la universidad, apenas le alcanza para pagar la gasolina y hacer cuatro arreglos imprescindibles en sus chamizos para evitar que se le caigan encima. Así que ese huerto le daba de comer y también un alivio al bolsillo.

Pocos meses después de la llegada de Los Viagras, el ruido de las motosierras quebrantó definitivamente la tranquilidad del lugar y del ermitaño. Comenzaron a transitar frente a su casa caravanas de camiones cargados de troncos y hombres armados. El estrépito era como 20 veces al día y

hasta en la madrugada le desvelaban. Han metido incluso maquinaria pesada para abrir caminos, Juan Manuel calcula que han cortado unos 30 mil pinos, la mitad del monte, regulador del clima de Uruapan. “Ya he notado un calor inusual. Además, hay manantiales en riesgo. El agua viene de los pinos, que son como fábricas de agua. Sin este bosque, habrá menos agua en toda la región”, asegura. Varias colonias de la ciudad han sufrido un creciente desabasto hídrico debido a la deforestación. No sólo lo advierte el Biólogo, sino también un viejo conocido suyo, el secretario michoacano de Medio Ambiente, Ricardo Luna, quien ha enfatizado públicamente su preocupación por la tala ilegal alrededor del Ecocentro. Las policías estatales y municipales tienen conocimiento del atropello, pero hasta ahora no se han tomado medidas para proteger la zona. “Aquí vino la policía cuando llegaron los pillosos y sobrevuelan helicópteros, pero nada. (Colegas políticos) me dijeron que eran muy peligrosos y estaban viendo cómo entrarles (atacarles). Pero, si los hubiesen querido agarrar, ya lo hubiesen hecho. Se pasean por el barrio con las pinchas ametralladoras”, dice. Esa exasperación ante la pasividad de las autoridades la manifestó en redes sociales. Las represalias no se hicieron esperar.



La cabaña de madera y tejado puntiagudo del septuagenario se mimetiza con el ecosistema por los detalles verdes y paredes amarillas, donde trepan unas enredaderas marchitas y cuelga una desgastada vitrina con información turística. Permacultura lo llaman. La cerradura de la puerta todavía tiene la huella de una bota. El 15 de junio de 2019, varios

policías estatales asaltaron el Ecocentro y robaron un atornillador eléctrico, una pulidora, martillos, somieres, ropa, documentos y paneles solares, según el Biólogo. Algunos vecinos vieron ingresar a tres patrullas dirigidas por un comandante identificado por sus abusos contra la ciudadanía y relegado a otro municipio en agosto de ese mismo año.

Al momento de interponer la queja, los mismos funcionarios judiciales avisaron a Juan Manuel que sería difícil investigar el caso, dado que “existe mucha corrupción” en el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Michoacán. En ese segundo allanamiento en menos de un mes, los presuntos agentes dejaron una nota de advertencia:

NI TE ARRIMES

Q ya sabemos

Que tu los

Escondes aquí en

Tu ecosentro

biologo Te llamas Juan

(sic)

“No me van a callar ni me van a mover de aquí”, murmura el anacoreta mientras abre la puerta, que de inmediato cierra con llave, pese a vivir sin nadie más alrededor. Resulta imposible caminar por la sala principal sin tropezarse con las pilas de libros, archivos y cajas. Las tablas crujen tétricas a cada paso. Unas estrechas escaleras llevan a la planta de arriba, donde apenas cabe un maltrecho colchón, un fogón a gas y un escritorio repleto de papeles y notas. Juan Manuel se amoló a una soledad que llena dibujando y escribiendo ensayos, poemas y demás reflexiones hasta que la luz del día se lo permite. Cuando le invade la inspiración, prende algunas velas o tira un cable hasta la batería de su coche para encender una tenue bombilla. Las estanterías se arquean por el peso de las enciclopedias, cintas y casetes.

Abarrotó las paredes de crucifijos, imágenes del evangelio, de buda, y retratos de sus padres y sus dos hijos. Varias figuras indígenas y orientales terminan de rebosar el dormitorio-cocina-despacho de unos 20 metros cuadrados, insuficientes para almacenar toda una vida de retraimiento y activismo.

“La naturaleza es uno de los lenguajes por donde el misterio de dios nos habla. Es belleza”. Así concluye su visión del mundo, una larga interpretación que por momentos interrumpe para alertarme: “Corre la mosquitera para que no te vean”, “Si ves a alguien, me dices”. Otras veces detiene la conversación para admirar un piulido, el aleteo de las hojas sacudidas por la brisa o el enjambre de insectos que revolotean sobre un cesto de frutas casi podridas, su dieta habitual. “¡Escucha los jilgueros, cantan increíble!”, exclama. Inclina el cuello para contemplar por encima de las gafas alguno de esos atributos del entorno que tanto le entusiasman. Desde el palmo de balcón del segundo piso, Juan Manuel medita todas las tardes con la vista perdida en un horizonte cada vez más ralo.

“Hola, don Juan, ¿cómo está?”, le gritan unos chiquillos que pasan a buscar algo de leña y lo despiertan de su embelesamiento:

“¿Cómo me voy a ir? Esto es bello. Si me voy, lo destruyen”.

El aguacate

URUAPAN | MICHOACÁN

La charanda es una tierra erosionada que antes fue andisol, un suelo formado de cenizas volcánicas, muy fértil y abundante en Michoacán, donde se dan las condiciones de terreno, clima y altura idóneas para que crezca el aguacate, el frutal más productivo del planeta. La charanda se menosprecia al convivir junto a esa superficie próspera.

Sin bosque no hay agua. Esto lo saben los viejos ejidatarios de Zumpimito y sus nietos. La diferencia es que los primeros lo valoraban y los segundos, no. Los jóvenes están dejando a los talamontes llevarse la madera que se les antoje por 500 pesos (25 dólares). A veces se venden a cualquier precio y otras se ven forzados a aceptar con una pistola en la sien. “Toda la tala de este bosque en realidad esconde un plan más ambicioso: meterle luego aguacate”, protesta Juan Manuel. Ya había organizado varias manifestaciones en contra de la industria aguacatera y sus reclamaciones enardecieron a los productores. Al principio sólo lo insultaban en grupos de Whatsapp y luego, según él, le robaron un escacharrado coche noventero. Como no dejó de insistir, redoblaron sus amenazas. En 2019, le dejaron un cadáver en la entrada del Ecocentro. Pocos meses antes de irlo a ver, tiraron otro cuerpo encima de su auto. “Los aguacateros son muy poderosos, andan con matones para que

los cuiden y se dedican a intimidar”, dice. Zumpimito es un tiradero de muertos, ya han aparecido varios encobijados (envueltos en mantas) a plena luz del día, en frente de la escuela o en la plaza central. “Los políticos no quieren frenar esto, porque forman parte del negocio, tienen cultivos de aguacate o cobran de ellos”, afirma Juan Manuel. Vio esa colusión de primera mano al trabajar como secretario técnico de la Comisión de Ecología del Congreso de Michoacán entre noviembre de 2019 y enero de 2020. Renunció a su puesto desfavorido por esas corruptelas.



Saliendo de Uruapan hay siembras de aguacate por todas partes. Las espesas y redondeadas copas verdes o amarillentas se distinguen en seguida de las discontinuas franjas de pinos y encinos que a fuerza deben mantener para obtener algo de agua y leña. Los rayos se cuelan por el grueso follaje y aguijan a Javier Guerrero. El aguacatero da instrucciones a un par de jornaleros que descargan sacos de abono. “Antes de que se pudiese vender a Estados Unidos (en 1997), nos pagaban un dólar o menos la caja. Ahora ya va por encima de 100 dólares el kilo y el precio sigue para arriba”, dice. Se pueden sacar unos 200 mil pesos (unos 10 mil dólares) por hectárea. Se gana 20 veces más que con cualquier otro producto. “El aguacate en este pueblo nos ha beneficiado mucho, pero también cuesta”, continúa. Los beneficios de su huerta familiar y los problemas se han multiplicado a la par.

A su padre lo secuestraron en 2018 y tuvieron que pagar un rescate de 1.7 millones de pesos (unos 100 mil dólares). A dos de sus primos se los llevaron, uno acabó muerto y el

otro sigue desaparecido. El cártel de turno, en este caso La Familia Michoacana, les pide mil pesos (50 dólares) mensuales por hectárea cosechada y 10 pesos (50 céntimos de dólar) por cada kilo vendido. Les dejaron una libreta, la llamada guía, para anotar su producción y pagarles. Si te encuentran sin la guía, te roban el camión o directamente se adueñan de tus terrenos, te obligan a firmar el cambio de nombre de las escrituras. A partir de 2020, además, hombres armados cargan pipas de agua del depósito de Javier cuando les falta en sus cultivos y a varios de sus colegas directamente les han entubado los pozos para usurpar el agua bajo amenaza de muerte.

El “oro verde” trajo una boyante riqueza a la región, pero también miseria y mucha violencia. La capital del lucrativo negocio, como indica su letrero de bienvenida, es Uruapan, donde se instalaron las grandes empresas comercializadoras. Es uno de los polos económicos más dinámicos del oeste de México y donde más se evidencian los lastres del aguacate, de la repentina fortuna: estilosos chalés adosados junto a barracas de ladrillo descubierto; concesionarios de lujo al lado de comercios ruinosos; las fronteras invisibles en suburbios donde quedó prohibido transitar, las calles desérticas. El vaivén comercial de sus 320 mil habitantes disfraza el profundo desasosiego de la segunda urbe mexicana con mayor sensación de inseguridad (94.1%). Uruapan también se ha erigido como baluarte de un amalgama de cárteles atraídos por el succulento pastel de palta.

El consumo de aguacate en Estados Unidos se ha triplicado en las últimas dos décadas y Michoacán, que produce el 80% del fruto en el país, es el único estado mexicano que cuenta con la autorización fitosanitaria para comerciar con el vecino del norte. Las exportaciones se han cuadruplicado en la última década hasta alcanzar su máximo de

3 554 millones de dólares en 2022: el producto nacional con mayor valor de venta al exterior por detrás de la cerveza y duplicando las divisas del petróleo.



La fiebre por el “oro verde” ha acelerado la expansión de este cultivo intensivo en más de 180 mil hectáreas, la superficie de Ciudad de México. Cuatro de cada 10 aguacates hass en el mundo provienen de Michoacán. La pérdida de bosques es incalculable y tampoco ha habido interés por dimensionarla. “El gobierno por vía satélite identifica dónde se está talando, pero cuando vienen, les aflojan un dinero y hacen la vista gorda. Todo sigue igual”, me cuenta otro productor que se une exaltado a la conversación, pero que se rehúsa a dar su nombre. El temor es contagioso. Sólo afuera pueden medir la deforestación y publicar los resultados.

Más de 10 mil hectáreas de huertos de aguacate autorizados para su exportación a Estados Unidos se encuentran en tierras que estaban cubiertas de bosques en 2014, según geógrafos ambientales de la Universidad de Texas en Austin. Es decir, son cultivos ilegales, porque desde ese año se dejó de permitir el cambio de uso de suelo. Ni Washington ni México están interesados en investigar eso. La organización Climate Rights International estima, en base a proyecciones oficiales, que en la última década se han deforestado en promedio unas tres mil hectáreas anuales, no sólo en Michoacán, sino también en los estados aledaños como Jalisco, Guerrero o el Estado de México. Otro estudio calcula que la cantidad de tierra utilizada para cultivos de aguacate en Michoacán aumentará en más de un 80% para 2050. Seguramente para esas fechas se habrá agotado antes

el agua y ya estarán sembrando aguacate por el sur húmedo del país.

Un árbol de aguacate maduro utiliza tanta agua como 14 pinos maduros, o lo que es lo mismo, requiere cinco veces más agua que un pino de 12 metros. Las pinedas generan agua mientras que los aguacatales la chupan en demasía. Si cada vez hay menos agua y se sobreexplota, los mantos freáticos colapsarán en menos de medio siglo. Pese a ello, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado concesiones para extraer más de 200 mil metros cúbicos anuales de agua a tres de las principales compañías aguacateras de Uruapan, mientras la mitad de la población de siete comunidades indígenas del municipio sufre desabasto.

“A este ritmo, en 10 años ya no quedará agua, ni para el aguacate ni para nadie”, lapida Javier. Un funcionario le propuso hace unos años facilitarle el permiso para construir otro pozo de agua y luego revenderla. “¿Y a cuánta gente voy a perjudicar ara ganar más dinero?, se cuestionó para rechazar la transa. “Cada vez perforan más y se roban más agua de tomas clandestinas. Antes los agricultores vigilaban que no les quitasen su producto, ahora andan armados de madrugada para cuidar sus depósitos de agua. Un día nos vamos a matar por el agua”. Los pozos ilegales proliferan alrededor de las nuevas huertas y nadie quiere o puede frenarlo. Las autoridades michoacanas destruyeron 700 hectáreas irregulares de palta en 2019, tal y como informó el titular de Medio Ambiente. Varias personas de esa institución me confirman que los operativos de erradicación tuvieron que suspenderse a mediados de ese año “por la fuerte resistencia de los campesinos y las agresiones del crimen”.

Javier prefirió exportar su producto a Europa para sortear el acoso delictivo, que pone en la mira a los productores con certificación para vender a Estados Unidos. Se considera un aguacatero mediano, aunque su sembradío se

desvanece en el horizonte, y oculta su mirada tímida bajo el ala del sombrero para eludir con rodeos la cantidad exacta de hectáreas que posee. Nadie quiere ponerse en la diana del narco y revivir la pesadilla.



Por la carretera secundaria que une los 60 kilómetros de Uruapan a Peribán nos rebasan a toda velocidad tres *pick-ups* blancas sin matrícula y cristales tintados. “Son de Jalisco, irán a darse bala más adelante”, suelta mi guía por la zona, un campesino de fresa que también opta por ocultar su identidad. Reconoce a cada grupo por el tipo de vehículo y color que utilizan para distinguirse de sus rivales. Nos detenemos durante una hora para no toparnos con la escaramuza. Más adelante vemos marcas de derrapes, pero ningún cartucho. La violencia entorno al lucro aguacatero fue en aumento hasta 2014 y con el auge de las policías comunitarias y autodefensas experimentó un lapso de relativa calma hasta finales de 2018 con la irrupción del Cártel Jalisco, resuelto a ensanchar sus dominios al estado colindante. Eso incluía pelearse el botín aguacatero con un caleidoscopio de al menos una docena de bandas. Tras decenas de contactos y visitas a centros de producción del aguacate, tan sólo Jaime Blanco, propietario de Yarely, una pequeña empacadora de Peribán, quiere hablarme, ya no sobre delincuencia, sino sobre cualquier tema referente al negocio aguacatero. “La delincuencia se ha vuelto a poner muy muy fuerte. Hace poco balearon a un compañero que trataban de levantar (secuestrar), han vuelto a cobrar cuotas, a asaltar camiones. Afecta a todo el gremio”, cuenta. Es habitual que algunas carreteras estén bloqueadas por los retenes que

instalan los grupos armados para inspeccionar los camiones y recaudar su impuesto. Algunos días suspenden clases por el peligro de enfrentamientos o las familias prefieren que sus hijos no vayan a la escuela. Nadie se libra y quien lo hace es porque puede abonar las sustanciosas extorsiones que los cárteles ofrecen a modo de “pago por protección”.

Jaime se mueve sin escolta ni camioneta blindada. Las ganancias de Yarely son limitadas, porque sólo venden al interior del país, a comparación con las multimillonarias ventas a Estados Unidos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (Apeam). Para adherirse a la patronal, requisito obligatorio para exportar, la cuota asciende a 300 mil dólares al año. En 2014, su presidente apareció en un video reunido con Servando Gómez, alias La Tuta, líder del cártel de Los Templarios, acompañado por otros empresarios y políticos locales. Jaime le quita hierro al episodio y matiza que en aquella época era común negociar con el narco para resolver perances y suavizar tensiones, por voluntad propia o coaccionados. Su rudimentaria planta se mantiene al margen de esas presiones, asegura, pero por lo que cuenta parece que toda la cadena productiva esta maniatada por el crimen organizado: “La gente no quiere salir a la calle por el pánico. Las cuadrillas (de recolectores) no quieren salir ni a cortar, porque los paran, los investigan, los esculcan. Quedan pocos municipios limpios”.

Varios jóvenes descargan cajas al son de Los Tucanes de Tijuana y su canción Barbarino, gatillero de la vieja guardia del cártel de Sinaloa que se hizo famoso por míticos narco-corridos dedicados a una carrera que sólo podía terminar ultimada a balazos:

Trae más armas que el gobierno
y más gente que Al Qaeda,
apoyado por el Mayo y Joaquín Guzmán Loera.

Me refiero a Barbarino,
hombre valuado en docenas.

El jolgorio y la música se silencian al sacar mi cámara. Tanto los mozos como los operarios del empaque se afanan en taparse el rostro.



En las principales avenidas de los pueblos, trolepes de hombres aguardan desde temprano para hacinarse en la parte trasera de alguna camioneta que les dé trabajo en la huerta. Son el eslabón más débil y no por ello el menos afectado por la vorágine criminal.

“¡Ya te chingaste, ya pronto se te lleva la maña (el crimen)!”, gritan entre carcajadas varios cortadores mientras hablo con uno de ellos. Los demás se esconden entre las densas copas del aguacatal, cuyo propietario me pide omitir su ubicación. Explica que a menudo los cárteles secuestran a las cuadrillas para llevarlos a cortar a sus terrenos. A veces los regresan y otras, los desaparecen. A Javier Medina le cuesta encaramarse por las retorcidas ramas a unos 10 metros de altura. “Es peligroso, es fácil caerse. Uno ya de avanzada edad no puede seguir trabajando en esto, es arriesgado, pero aquí no hay más chamba (empleo). Uno sobrevive con lo que haya”, dice a sus 49 años. Hace 10 que se metió de cortador, porque el pago es mucho mejor que, por ejemplo, en los campos de maíz. Gana 400 pesos (20 dólares) por una jornada de nueve horas y en la tarde completa el sueldo como albañil o electricista. Aunque ni eso le ha permitido salir del 51% de la población de Uruapan que vive en la pobreza. Antes, el distribuidor de aguacate

se ocupaba del contrato y del seguro médico, pero recientemente el servicio de cuadrillas se ha subcontratado y no siempre cubren las prestaciones mínimas.

“Pues si me caigo, ya no sirvo. ¿Ya para qué el seguro, si no voy a tener para comer? Cada vez pagan menos porque lo ven a uno tarugo y ha bajado el trabajo. Antes hacíamos seis días corridos (seguidos) y ahora sólo tres o cuatro. Cada vez vienen más cuadrillas de fuera”, se queja Javier. “¡Por los de Oaxaca!”, vociferan a lo lejos.

“¿Supone un riesgo trabajar en las huertas?”, le pregunto.

“¿Por las caídas? ¿Los bichos?”, torea con una sonrisa nerviosa.

“Por el crimen”.

“No, aquí está muy tranquilo, todo calmado”, atiesa el bigote.



Tanto en el núcleo como en las lomas de Uruapan resulta muy difícil que alguien hable del CJNG. Quien lo hace, siempre se refiere a los narcos como “los nuevos”, “los que recién llegaron” o a lo sumo “los de Jalisco”; aunque se sabe quiénes son y en dónde están: “pa”l norte de la ciudad es su territorio”, “controlan de la central (de buses) pa” arriba”, “se metieron por Zamora y ya tienen su base en Los Reyes”.

El CJNG se creó en 2007 como brazo armado del cártel de Sinaloa bajo el nombre de Los Mata Zetas, su banda archienemiga compuesta de exmilitares. Después se independizaron y se dieron a conocer en 2011 liderados por Nemesio Oseguera, alias *El Mencho*. Tras la caída del todopoderoso Joaquín el Chapo Guzmán y el declive de los Zetas, la organización se emplazó como la más vigorosa y despiadada

del país. Consolidó su dominio por toda América y parte de Asia mediante prácticas tan sádicas como para no osar ni a vocalizar sus siglas.

La noche del 8 de agosto de 2019, desparramaron 19 cadáveres en el centro de Uruapan: unos colgados de un puente, otros decapitados... regados en trozos por tres kilómetros del concurrido bulevar Industrial. México volvía a amanecer horrorizado por la enésima atrocidad y el mundo escandalizado ponía el ojo en Michoacán por un día.

Un par de semanas antes de mi visita, el 3 de febrero de 2020, varios sicarios del CJNG masacraron a nueve personas, entre ellos a cuatro menores. Entraron en el local de máquinas tragaperras preguntando por dos integrantes de Los Viagras y al no obtener respuesta empezaron a disparar como si no hubiera mañana. En la escena hallaron 65 balas. México es el país donde más se ha agravado la peligrosidad para la niñez en las últimas dos décadas. En 2021, murieron asesinados siete menores al día.

La reacción gubernamental, sin embargo, no se dio hasta que la violencia tocó a la puerta de la Casa Blanca. En febrero de 2022, un inspector estadounidense recibió una llamada intimidatoria, motivo suficiente para que el gobierno de Joe Biden suspendiera las importaciones de aguacate mexicano. Una semana y 50 millones de dólares en pérdidas después, levantó la sanción tras dar el visto bueno al plan de seguridad que contemplaba la creación de una unidad de inteligencia y un protocolo de escolta para garantizar la seguridad de los 90 empleados del vecino del norte, así como el acompañamiento de camiones y retenes militares para acorazar el traslado de una mercancía tratada como diamantes.



Nadie imaginó en aquella Uruapan pueblerina de los ochenta que algún día estarían pidiendo créditos para blindar su camioneta o huyendo al norte. Juan Manuel se crió en una familia de madre soltera y seis hermanos que andaban con los zapatos agujereados. Su hogar se ubicaba a dos cuadras del bulevar Industrial, donde aparecieron los 19 cuerpos descuartizados. La neurálgica calle empedrada de rústicas casitas de pizarra escupe la decadencia de lo que iba camino de ser un “pueblo mágico” y terminó en infierno. Por donde antaño paseaban ríos de turistas desde la plaza mayor hasta un bello parque de manantiales, hoy los vecinos se apresuran en cruzar las desoladas calles para llegar a su casa antes de que anochezca. El abandono desconchó las fachadas, repletas de garabatos y persianas bajadas.

“Cuando era pequeño se hablaba de muertos o robos como algo de otro mundo. Desde por la mañana se abrían las puertas de las casas para que le corriese aire a las plantas”, recuerda el Biólogo sobre la costumbre tan michoacana de decorar los pasillos con macetas. Coloridas entradas que ahora barran rejas y cuchillas. Tampoco él vio venir el conflicto.

Muchos anhelan los tiempos en que una sola familia copaba todo el negocio de la droga. Desde 1990 los Valencia produjeron a sus anchas marihuana, heroína y cocaína, sin mayor pretensión que venderla a las bandas del norte, y camuflaron el contrabando en la comercialización del “oro verde”, de ahí su apodo de Los Reyes del Aguacate. Hacia 1998, estructuras de otros territorios de México envidiaron su señorío, en concreto por disponer del puerto marítimo de Lázaro Cárdenas y con poco más de un millar de homicidios aquel era hasta entonces el año más violento de Michoacán. El cártel del Golfo —en Tamaulipas, entidad limítrofe con Estados Unidos y el Atlántico— envió al combate a su fuerza paramilitar, los Zetas, desertores de una

unidad de élite del ejército mexicano. La contienda concluyó en 2002 con la eliminación de los integrantes clave de los Valencia. Pero, en lugar de conformarse con tomar el relevo de la ruta de la droga, los Zetas diversificaron sus actividades ilícitas a la extorsión, secuestros y al sometimiento de la población. En 2006, un clan local conformó La Familia Michoacana para enfrentarlos y liberarse de sus atropellos, pero acabaron por aplicar los mismos métodos salvajes. Y así sucesivamente en una guerra de mil cabezas a la que de últimas se ha incorporado el CJNG.

Los de Jalisco también han tocado a la puerta del Biólogo. Un supuesto comandante del cártel telefoneó a muchos habitantes de Uruapan para exigirles dinero a cambio de brindarles supuesta seguridad. “Necesitamos que nos apoye para proteger a la población”, fue lo poco que escuchó Juan Manuel antes de colgarle, a sabiendas de ese tipo de llamadas. A cada uno de sus amigos a quienes han tratado de extorsionar les han pedido diferentes cantidades dependiendo de sus posibilidades económicas. Por tanto, existe detrás una investigación previa y eso asusta sobremanera a la población. Por su lado, Los Viagras hacen lo propio en Zumpimito, donde cobran 5 mil pesos (cerca de 250 dólares) por hectárea sembrada por concepto de “servicios de vigilancia”.

“Esto jamás fue así. Siempre ha habido pobreza, pero no había tanta antítesis. El aguacate es el causante de toda esta desigualdad. Deja mucho dinero, pero también mucha sangre”, se indigna Juan Manuel mientras muestra unas fotos antiguas de colegas sonrientes en lugares icónicos de la ciudad y cerros cercanos. “Ha traído violencia hacia las personas y hacia la naturaleza”

La guardabosque

ARANTEPACUA | MICHOACÁN

La charanda (en purépecha, “tierra colorada”) se compacta como una piedra en la estación seca y se resquebraja en hondas grietas, abrupta e impredecible. También es el nombre de una bebida alcohólica típica de Michoacán por el cerro La Charanda, donde se abrió la primera bodega del destilado de caña de azúcar a comienzos del siglo pasado.

Los socavones de la senda hacia la cabaña de Juan Manuel hacen sufrir a su ochentero *vocho* —Volkswagen Beetle— verde trébol. Suele quedarse atascado en el resbaladizo barro que se forma al humedecerse, aunque eso ahora no le preocupa. “Agáchate, aquí también hay halcones”, mientras cruzamos la valla de salida del Ecocentro, por donde rondan dos jóvenes en motocicleta que no se marchan hasta que nos alejamos.

Debo sentarme sobre una pila de papeles que ya no caben en otro asiento del escarabajo repleto de carpetas. Por mi entrepierna asoma una pestaña con la etiqueta “Estimulación, Aburrimiento, Violencia”. Se trata de uno de sus ensayos sobre la fórmula para la pacificación de México. Atrás lleva un rimero de ropa y un saco de dormir. El coche es el segundo hogar y oficina del Biólogo. “Nunca sé si voy a poder volver. A veces hay bloqueos de los narcos; otras, hay

derrumbes o árboles caídos. Entonces debo quedarme en donde algún amigo”, se justifica. El trayecto apenas dura 10 minutos y siempre hay un retén policial. Al acercarnos me pide que baje la ventanilla para evitar suspicacias, porque en ocasiones los criminales están con ellos en esos controles o los mismos agentes trabajan para algún grupo. Si me preguntan, tengo que decir que soy estudiante.



“¡Tocaron las campanas!”, repite Francisco Hernández como un mantra. Tocaron las campanas de la iglesia de Arantepacua para alertar de que por la variante hacia el pueblo avanzaba una marabunta de 300 policías estatales a bordo de camionetas y furgones encabezados por el rinoce-ronte, el furgón blindado que aplastó una endeble barricada y todo lo demás a su paso. “Entraron a matar, echaron bala por todos lados. Nunca tuvieron intención de dialogar, era como una guerra. Nosotros estábamos desarmados, había gente mayor”, relata Francisco sobre la hora que duró el tiroteo. “Todos corrimos a nuestras casas a refugiarnos, pero nos sacaban a rastras, a golpes”.

Eran las 14:50 horas del 5 de abril de 2017.

Minutos más tarde, Francisco recibió una llamada. Habían matado a su sobrino, Luís Gustavo Hernández, estudiante de 17 años. El operativo de la fuerza pública dejó un saldo de cuatro pobladores muertos. Según él, Luís Gustavo había llegado desde otro municipio alarmado por el estruendo de los disturbios. Al ver la carnicería en la avenida principal, se echó hacia el monte para esconderse, pero el disparo de un presunto francotirador de la policía impactó en su brazo derecho. Se arrastró varios metros hasta que una docena de uniformados lo alcanzaron, lo patearon

hasta cansarse y luego le dieron el tiro de gracia. “Ya cayó el de rojo”, se escucha en radiocomunicaciones policíacas difundidas por medios locales. El de rojo era Luis Gustavo.

Su tío lo encontró en mitad de un campo de papas y ahí lo enterró, a 100 metros de la fronda donde pretendía refugiarse. Entre el fango revuelto reposa una gavilla envuelta por unas maderas blancas y una corona funeraria azul. Francisco se apoya en el austero altar para romper en llanto. Adecenta un manojito de ramas secas antes de recuperar el aliento: “No entendemos por qué esa brutalidad, por qué nos quisieron humillar de esa manera, no era tan grande el problema para que actuaran así”.



Un día antes, 38 comuneros de Arantepacua fueron a Morelia, capital de Michoacán, para reunirse con el gobierno estatal a fin de resolver una histórica discordia territorial con el pueblo vecino, Capácuaro, que en esos días se había agravado. En las 520 hectáreas en disputa desde 1984 se encontraba la principal fuente de agua de Arantepacua, que en años recientes estaban desviando para la siembra de aguacate. El encuentro terminó sin acuerdos y a su regreso la comitiva de arantepacueños fue arrestada, acusados de secuestrar al chofer del autobús que los transportaba. A fin de exigir su liberación, la comunidad bloqueó sus inmediaciones y retuvo a una veintena de autocares y camiones de reparto. La Secretaría de Seguridad Pública michoacana definió el operativo como un “rescate” y alegó que los agentes fueron primero atacados con piedras y cohetones. En imágenes divulgadas por las autoridades, se aprecia a varios agentes heridos presumiblemente por esos artefactos.

En la calle de la embestida todavía hay viviendas en ruinas. En los muros donde antes había anuncios de candidatos, ahora hay pintadas del emblemático líder revolucionario Emiliano Zapata disparando a una rata con las siglas del PRI, PAN y PRD —los partidos tradicionales—, rodeado de las palabras “Autonomía”, “Libertad”, “Respeto” y un mensaje en grande: “5 de abril, ni perdón ni olvido”. Pocos días después de la masacre, los tres mil habitantes de la comunidad decidieron expulsar a los partidos políticos, a la policía, declararon un autogobierno y crearon su propio cuerpo de seguridad. Arantepacua sea tal vez el último municipio de México que se sublevó contra el Estado.

Dos camionetas abolladas y una decena de civiles armados custodian un retén de continuos badenes, parapetado de sacos terreros y una caseta de policial remodelada con la multicolor bandera purépecha. “¿En quién podemos confiar, si son los políticos y la fuerza pública quienes vinieron a agredirnos? Nos quedamos desprotegidos y nos vimos en la necesidad de velar por nuestra propia integridad”, dice una de las paisanas. Juana Morales viste un chaleco antibalas donde carga un viejo revólver Smith & Watson Modelo 10, dos cargadores de fusil y un tubo de papeles. Mide un metro y medio, pero su presencia impone. Escudriña imperturbable cada momento. Permanece impassible, con las manos en los bolsillos, mientras varios hombres enfusilados cachean contra la pared a un muchacho de aspecto andrajoso. Ella es la jefa de Seguridad de Arantepacua, lidera a 14 *kuaris* (vigilantes).

La mujer tiene una amplia tradición de lucha en Arantepacua. Al momento del asalto policial, había 38 hombres presos en Morelia y medio centenar acababa de partir hacia la capital para pedir su excarcelación. Las mujeres, entre ellas la madre de Juana, salieron con palos y machetes para defender a sus maridos capturados durante el operativo.

Desde entonces se consolidó el reconocimiento al papel de la mujer y su derecho a participar en la autoridad. Juana siempre se había involucrado en la lucha social, ayudaba en la logística de los bloqueos, pero desde los hechos (como se refieren a la arremetida) empezó a acudir a las asambleas y se presentó a las elecciones locales. “Lo hice por el dolor que traigo, porque me da fuerza para demostrarle al gobierno que seguimos en pie”, asegura. La joven candidata de 33 años fue la candidata más votada en 2019 para formar parte de un consejo comunal integrado por seis mujeres y seis hombres. Esa paridad se estableció hace tres años al configurarse como una estructura de gobierno horizontal, donde nadie está por encima.

Nunca creyó que luego el consejo la escogería para encabezar la seguridad. A las mujeres solía tocarles en la oficina de Asuntos Sociales o Civiles. Decidió aceptar para demostrar a las demás que también ellas podían encargarse de la vigilancia. Hubo algunos en la asamblea que seguían sosteniendo que ése era un trabajo de hombres y al comienzo algunos compañeros sentían que les robaba autoridad, pero logró limar las asperezas con tacto y dando ejemplo. La joven sigue sin soltar una mueca, con la misma postura hierática a la hora de dirigir un arresto o de señalar los vehículos sospechosos que deben revisarse. En ocasiones Juana se sacude para ajustarse un chaleco antibalas que le queda grande y le incomoda. Por las mañanas, imparte clases en una escuela primaria. Por las tardes, cambia la tiza por la pistola para ejercer de comandanta. “Cuando llego a mi comunidad, dejo de ser maestra y soy comunera. Pero, mi arma principal siempre serán el lápiz y los libros. Son las mejores herramientas para enseñarles a los niños a defenderse del Estado. A veces no son necesarios los fusiles, pero nosotros nos defendemos con armas porque el gobierno nos traicionó”.

“¡Ya! ¡Vámonos! ¡Suban!” ordena Juana al grupo que hoy encabeza: cinco hombres armados de edades dispersas y una mujer sesentona con una cachiporra. Algunos usan pantalón o camiseta de camuflaje; otros, chaqueta negra serigrafiada con las palabras *Kuaricha Jarhanipacua* (Policía Arantepacua) y casi todos se cubren el rostro con pasamontañas o pañuelos para evitar que los reconozcan. Los comuneros portan una escopeta calibre 12, un par de fusiles R-15, un Ruger mini-14 y una AK-47 clásica, que se echan a la espalda para montarse en la Ford Ranger y la Nissan NP300 blancas, sin matrícula y rotuladas con la insignia de un indígena armado. Juana otea la llanura sin inmutarse, sujeta con firmeza a una de las varas del soporte trasero. Las viejas *pick-ups* se empinan por una pedregosa trocha para adentrarse entre encinos y pinos recién sembrados. Además de patrullar las calles, la ronda comunitaria también resguarda los bosques. Ese nuevo recorrido se implementó en 2018 cuando se percataron de que estaban tumbando árboles para plantar aguacate y la tala se disparó. Si atrapan a los talamontes, los encarcelan por tres o cuatro días y deben pagar los daños que les impongan. “Ya se lo piensan dos veces antes de cometer el delito”, dice Juana. La aplicación de su propia ley también incluye la obligación de reforestar, aunque los pinares tardarán unos 20 años en alcanzar su tamaño máximo.

Quienes talan en Arantepacua son los propios comuneros, para la fabricación de muebles por necesidad —el 80% vive en la pobreza—, pero en algunos casos han detectado que hay terceras personas detrás, vinculadas al crimen, que les instigan a introducir aguacate con falsas promesas o a perforar pozos clandestinos. En Michoacán se da sobre todo una tala hormiga, a pequeña escala, pero muy constante. Por ello, raramente se ven las impactantes imágenes de cúmulos de árboles serrados, como en la Amazonía.

También por eso se trata de un desastre silencioso. Desde la colina se observa todo el valle pelado, reseco, una pastura espolvoreada de raquíptico ganado; parches de terrenos asolados escalan por la lejanía.

Esa tala hormiga ha depredado un 60% de las 680 700 hectáreas de superficie de la Meseta Purépecha, como arrasar con toda Buenos Aires o Seúl. Un compás de degradación superior al resto de Michoacán, el tercer estado con mayor industria maderera de México. El ritmo se aceleró con la incursión del CJNG. Los *kuaris* interceptaron en agosto de 2019 dos camionetas de sicarios que cruzaban el poblado a pleno mediodía. Les dejaron claro que la comunidad no iba a permitir la presencia de bandas criminales. Hasta la fecha, no ha aparecido ningún otro cártel. Juana se enorgullece y enfatiza su convicción: “En esta tierra ya no entra ni la policía, ni los narcotraficantes, ni los talamontes... esta tierra la vamos a defender aunque nos cueste la vida”.



Las patrullas de la *Kuaricha* se detienen en otro terraplén. El más joven, con una AK-47 culata de madera, siempre se adelanta a Juana para escoltarla y apartar las ramas. Es de los pocos que en ningún momento se cubre el rostro, con una actitud satisfecha por la tarea que desempeña. La columna la cierra uno de los conductores, el único con una pistola semiautomática, una Colt 1911. Caminamos media hora entre una floresta de coníferas hasta llegar a un barranco cuyo fondo escarbado por los comuneros se cubre con una inmensa lona plástica. Será el nuevo ojo de agua artificial de Arantepacua, que no cuenta con ninguna fuente acuícola propia más que el manantial en disputa con sus

vecinos y algunos enjutos arroyos. Juana calcula que en los últimos cinco años llega un 30% menos de agua, consumida sobre todo por los cultivos de aguacate de las partes altas. Ese depósito de captación de lluvia es su única alternativa y esperanza frente a la escasez.

Uno de los comuneros masacrados en el operativo policial de 2017, Jiménez Crisóstomo, formaba parte del colectivo que reclamaba el otorgamiento de nuevos permisos de perforación de pozos para el suministro de agua en esa comunidad ante la constante mengua de sus afluentes. Acabar con la vida del ambientalista y su demanda es uno de los móviles de la arremetida que barajan en la comunidad.

Cuatro de cada 10 hogares michoacanos no disponen de agua corriente ni la reciben a diario, un porcentaje por encima de la media nacional. Las dificultades de acceso hídrico se acentúan en zonas indígenas, según una encuesta oficial. En la demarcación de Nahuatzen, donde se encuentra Arantepacua, sólo hay cinco pozos de agua potable que a duras penas abastecen a sus 30 mil habitantes con un volumen anual de 516 288 metros cúbicos. Mientras, en los alrededores de Uruapan ni siquiera existe restricción para el uso industrial del agua; sólo la empresa Bebidas Azteca de Occidente, la embotelladora de Coca Cola, utiliza 300 mil metros cúbicos al año.

En total, las principales fábricas refresqueras del área consumen 842 554 metros cúbicos de agua, según los datos recopilados en el libro *El agua o la vida: Otra guerra ha comenzado en México*, del periodista michoacano Jesús Lemus, encarcelado en 2008 acusado de pertenecer a La Familia Michoacana. Pasó más de tres años en prisión hasta demostrar su inocencia. Había revelado supuestos nexos de familiares del presidente Felipe Calderón con dicha organización narcotraficante.

La carencia de agua en Arantepacua se mesura en la pila del pueblo, donde un grupo de mujeres lavan sacos de ropa durante toda la mañana. En sus carretillas se amontonan las prendas sucias de una semana. Las más jóvenes se cubren las piernas con una bolsa de basura y las mayores aprovechan su delantal de percal que cubre la colorida falda sabanilla, la indumentaria tradicional purépecha. “Sale un chorrito muy fino, no hay agua en los montes. Cuando era niña había mucha agua, era una barranca, pero ya no. En el mes de mayo que hace mucho calor, escasea mucho el agua”, cuenta Juanita Martínez, de 26 años, sin alzar la vista. Frota la pastilla de jabón contra una camisa y la restriega contra la piedra. Vierte un cubetazo y vuelta. Estruja y escurre, estruja y escurre, estruja y escurre. En casa tienen mangueras, que al menos les aligerarían sus labores domésticas, pero llega muy poquita agua o ni llega. En la época seca, entre marzo y julio, se juntan desde las tres de la madrugada en el abrevadero para lavar o cargar agua en cubetas, antes de que se termine. Su castellano es vacilante, pero su enojo es firme. Un campesino se acerca para que su caballo beba un poco y las mujeres lo regañan, porque el animal ensucia y se acaba su agua.



Los bueyes suelen obstaculizar el tráfico por las estrechas calles de losas embarradas y casuchas de adobe. Pero, nadie toca la bocina. Los niños corretean solos (algo ya inusitado en México). Casi todas las transeúntes son mujeres. Muchos hombres migran a Estados Unidos o salen largas temporadas para laborar en las huertas de aguacate. (¡Qué paradoja! Trabajar y sustentarse de los cultivos que a su vez

te quitan el agua y matan tus tierras). La mayoría de las mujeres todavía lucen su vestimenta típica y hablan purépecha, a diferencia de otras localidades vecinas. “Hemos mantenido mucho nuestras raíces, porque un 70% del pueblo somos maestros. Eso ha ayudado a crear más conciencia”, dice Juana, que ni se inmuta al recibir varios mensajes por walkie-talkie.

Hacia los años sesenta, un profesor de Arantepacua se construyó una casita de tabiques, material costoso en aquella época. Sus vecinos pensaron que dar clases estaba bien remunerado y muchos se decantaron por ese oficio. La comunidad se volvió feudo del movimiento estudiantil en la región, abanderado por las escuelas normales rurales, centros educativos para campesinos, de base marxista y con una notoria trayectoria de lucha social en todo el país. Otra de las hipótesis que sondearon sobre el empleo de semejante brutalidad policial, es que el gobierno quería disuadir del todo las protestas de normalistas que se extendían en la región desde hacía un año. La otra, es que uno de los autobuses interceptados por los comuneros transportaba droga. Esa misma teoría se maneja en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aquel 5 de abril de 2017 quedó grabado a fuego en la aldea y marcó su porvenir. En la columnata del antiguo ayuntamiento, el nuevo consejo comunal, cuatro retratos de bronce rememoran a los caídos. Bajo el pórtico, coloridos murales de campesinos y multitudes indígenas envuelven el emblema *Juchari Uinapekua* (Nuestra Fuerza). “Ese día mataron a cuatro compañeros, pero hubo mujeres embarazadas que perdieron a sus criaturas, mucha gente mayor falleció luego de diabetes o de presión alta. Se están muriendo de otras enfermedades por todo el miedo que sienten desde entonces. El trauma es enorme. Cuando salimos a Uruapan y los niños ven a un policía, les piden a sus papás que les

protejan, porque piensan que les van a golpear”, cuenta Juana, cuya mirada taciturna se empaña al hablar de ese día.

Las dos patrullas se estacionan en la plaza central al caer el sol para relevarse con el turno de la noche. La jefa de Seguridad se dirige de inmediato al callejón trasero del consejo y abre el candado de una puerta metálica. Es la cárcel comunitaria, un zulo medieval sin ventanas. Tras las rejas de una segunda puerta se asoma un desaliñado muchacho desde una celda de dos por tres metros y una manta. “¡Porfa, comandante, déjeme ir! No he hecho nada. Sólo llevaba para consumo propio”, le suplica a Juana en cuanto la ve entrar. Agarraron al joven fumando marihuana cerca de una escuela.

Por andar ebrio o alteración del orden público, los retienen algunas horas; por consumo de estupefacientes, 24 horas; por robo o agresiones leves, un par de días; por portar armas o talar árboles, más de cuatro días y una multa acorde al grado del delito. “Aplicamos esas sanciones para que sirvan de ejemplo. Como hay poco empleo, debemos prevenir los robos o el reclutamiento criminal. Todo eso empieza por el consumo de sustancias ilegales”, dice Juana. Desde los hechos han notado un cambio rotundo en el comportamiento y el tejido social, derivados de los daños psicológicos. Se quebrantaron los valores comunitarios y se disparó la drogadicción y el alcoholismo sobre todo entre los jóvenes.

“Después del miércoles de ceniza venía la festividad del pueblo. Todas las familias subíamos al bosque. Las niñas llevaban cántaros, los escondían entre los manantiales y los niños tenían que buscarlos. Luego del 5 de abril, dejamos de organizar el festejo. Por la tala tampoco se podría celebrar, porque ya no hay agua. ¿Dónde esconderían los cántaros?”. Juana se funde en el letargo vespertino. “Peleo para que mi comunidad sea la de antes, armónica, solidaria, tranquila.

Pero, es tan difícil sanar las heridas”. El atardecer colma de ambarino el tímido zócalo y languidece sus sombras. Suenan las campanas de la sobre torre parroquial, pero, esta vez, para anunciar que son las siete de la tarde.

La muerte

BARRANCA DEL CUPATITZIO | MICHOACÁN

La charanda retiene poca humedad. Por las lluvias torrenciales, cada vez más fuertes en Michoacán, sus terrones desprovistos de vegetación se deslavan y arrastran todo a su paso. El azolve obstruyó centenares de tomas de agua y dañó válvulas en Uruapan en agosto de 2019. Unas cien mil personas —un tercio de la ciudad— se quedaron sin agua en sus domicilios durante varios días.

Algo parecido sucedió en el siglo XVI en un oasis natural en el centro de Uruapan, hoy protegido como Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, donde nace el río que le da nombre y la fábula de La Rodilla del Diablo. La leyenda cuenta que ese manantial dejó de emanar agua por causa de una presencia maligna, aunque en realidad se debió a la acumulación de desechos. El monje franciscano español Juan Fray de San Miguel, fundador de la ciudad en 1533, realizó un ritual para destaponarlo. Ante sus oraciones el diablo salió ahuyentado de una cueva, tropezó y dejó la marca de su rodilla en un pedrusco.

Juan Manuel fue director del Parque a comienzos de los ochenta y hacia 1986 su organización Viva Natura consiguió frenar la entubación de esos manantiales a fin de extraer agua para abastecer a cultivos de aguacate y hoteles. “Nos dimos cuenta que detrás de cuestiones ambientales, siempre había motivaciones de poder”, dice. Organizaron

manifestaciones de unas seis mil personas, mucha asistencia en esos tiempos. Uno de sus primeros éxitos fue detener el proyecto. Para celebrarlo se bañaron en ese río, el mismo en el que aprendió a nadar de niño. Esa alberca natural hoy apenas le cubriría hasta las rodillas. La Rodilla del Diablo ha disminuido su aforo de dos mil a 700 litros por segundo en las últimas dos décadas. Pese a decretarse parque natural en 1938, la Barranca del Cupatitzio sufrió durante años el saqueo de su agua para venderla, la invasión urbana y hasta la construcción de una granja de truchas. En años recientes ese manantial de agua cristalina se ha enturbiado por la basura de toda índole que arrastran las lluvias por la Barranca de La Guerra, donde se vierten residuos domiciliarios, aguas fecales y agroquímicos.

Al Biólogo le cautivan esos helechos y musgos que bordean las exuberantes cascadas. La excelsa vegetación refresca el paseo de decenas de paseantes, los pocos que todavía se atreven a visitar la que fuese una de las principales atracciones turísticas de Michoacán. Las tenderas saludan con cariño al profesor. “Este lugar es especial, desde la época precolombina fue un centro ritual. Siempre agarro fruta y me siento aquí a comerla para contemplar esta belleza. Mi alma es el parque” dice. Por eso bautizó a su proyecto Eco-centro Cupatitzio (en purépecha, “río que canta”)—. Además, porque este parque forma parte del mismo ecosistema que el del Ecocentro, pero la mancha urbana seccionó el corredor natural. La idea de Juan Manuel era crear un lugar de estudio para tipificar la fauna y flora y así tener herramientas para reclamar su conservación, pero las universidades —muchas financiadas con dinero de la industria aguacatera— nunca mostraron demasiado interés.

“Entender el Ecocentro es entender el parque. Son un termómetro del nivel de conciencia ambiental del municipio y sus impactos”, dice. En ese caso, la temperatura está bajo

cero. Las 19 hectáreas de esa lengua selvática son un vertedero de residuos y excrementos que en el último lustro atascan las fuentes de agua cuando arranca la temporada lluviosa. Los contaminados manantiales del Cupatitzio abastecen de agua a toda Uruapan y gran parte de Tierra Caliente, la región que se extiende por todo Michoacán hacia el oriente y se adentra en el Estado de México y Guerrero, un valle árido de unos 34 200 kilómetros cuadrados, el tamaño de Puebla o de Catalunya, habitada por 250 mil personas.



Como en los últimos veranos, al iniciar la temporada de lluvias se activaron las alarmas en Uruapan por el riesgo de desprendimientos en los asentamientos encaramados en las barrancas. El 13 de agosto de 2019, un fuerte aguacero desgajó una cárcava y el alud sepultó un domicilio en la falda de La Charanda. En su interior falleció anegado un chico de 16 años.

Una semana antes, otro argayo derrumbó un puente en una carretera cercana. Y en 2010, una avalancha acabó con la vida de 34 personas en Angangueo, al este de la entidad, golpeada por los primeros eventos climáticos extremos acelerados por ecocidios. México es el cuarto país del mundo con mayor deforestación desde el inicio del milenio. Ha perdido un tercio de masa boscosa, como asolar toda Bélgica o Suiza u otras 130 naciones. “La destrucción de la naturaleza acabará con nosotros, si antes no nos matamos entre todos”, dice Juan Manuel, que convive con los criminales y su devastación de los recursos naturales. Ve de cerca a la muerte, no tanto por la edad, sino por el peligro que corre: nueve ambientalistas asesinados y otros tres desaparecidos

en Michoacán, el cuarto estado con más activistas (74) bajo el mecanismo de protección federal.

Homero Gómez González fue el primer asesinado de 2020. Localizaron su cuerpo sin vida en un pozo agrícola dos semanas después de su desaparición el 13 de enero. El líder ejidal administraba uno de los santuarios de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, donde suelen pasar el domingo muchos capitalinos. Había denunciado con vehemencia el asedio del crimen y sus esfuerzos por preservar el hábitat del insecto le costaron la vida. En la reserva donde ejecutaron a Homero, a 200 kilómetros al este de Uruapan, varios comuneros me cuentan que los taladores se han metido hasta el corazón del área protegida para sacar madera y meter cultivos de aguacate. Ya han notado los efectos de la deforestación. “Antes, el pasto se cubría de mariposas y las vacas se las comían”, describen sobre los millones de monarcas que vuelan cada invierno cuatro mil kilómetros para huir del frío de Estados Unidos; uno de los fenómenos naturales más asombrosos del planeta. Su llegada marcaba el Día de Muertos, pues los habitantes creían que las mariposas eran las almas de sus seres queridos. Pero, la tradición se ha esfumado en esta zona de Michoacán con el ocaso de esa migración de la mariposa.

En 2021, mataron a 54 defensores y defensoras de la Tierra y México escaló al lamentable primer lugar de ambientalistas eliminados. “Lo más importante para el cuidado del medio ambiente es que haya ejemplos vivos de lo que significa la naturaleza”, considera el Biólogo. Su frase me trajo a la cabeza aquella frase de un colega que decía que “un periodista muerto no vale nada”. En México descubrí que eso no es tan así.

Después de la matanza de una docena de sicarios a menos de 100 metros de su casa y la amenaza de muerte, los hijos de Juan Manuel le rogaron que se mudase del

Econcentro. Pero, es tan testarudo como cuando se divorció de su esposa y se alejó de sus hijos para recluirse en el Eco-centro. La única medida de seguridad que tomó el profesor fue sacar sus objetos de valor (un ordenador, documentos y libros) para salvaguardarlos en casas de amigos. “No te hagas el pendejo, no seas necio, salte de ahí ya”, le gritó su hijo por teléfono en cuanto se enteró de la balacera. Tiene razón el profesor cuando les responde que cualquier parte de Uruapan es insegura. Pone como ejemplo que hace unos días paseaba por el zócalo una pareja del CJNG uniformada con sus siglas y las autoridades no hicieron nada; por nombrar lo menos en una ciudad que ha ardido en automóviles quemados por los narcos en respuesta a la detención de alguno de sus jefes. Esos lances son anécdotas en un país acostumbrado a batir récords de violencia: más de 200 mil homicidios en los últimos seis años, cifras de una guerra en un territorio sin guerra declarada, pero que atraviesa el conflicto más mortífero del siglo XXI apenas superado por Siria. (En el último año, un saldo de vidas humanas cercano al genocidio de Gaza).

Juan Manuel se paraliza bajo la copa de un pino retoño. Dice sentir el frescor. Acaricia un tallo con mimo. Las agujas se deslizan entre sus dedos y vuelve a alzar la mirada y a cerrar los ojos como para tomar una bocanada de aire. Pero, no, contiene la respiración y todo queda en suspense. Me da por escribir unos versos, poco prolíficos, al evocar el instante:

Frente a la adversidad,
 el Biólogo se resiste a abandonar su bosque,
 aunque la parcela ni siquiera sea de su propiedad.
 Se resiste a que el crimen organizado arrase sus árboles,
 aunque no le aporten ningún beneficio económico.
 Se resiste a que sus coníferas dejen de oxigenar a su ciudad,
 su suelo se deslave y arrolle a todos sus paisanos,

su cerro deje de dar agua y el aire achicharre
hasta ahogarnos.

Aunque seguramente
él ya no esté para verlo.

O tal vez sí.

¿Quién sabe?

Lo saben los árboles
y el futuro,
si aún existe.

“Estoy abierto a todas las opciones, así no habrá derrota posible. Hay jóvenes que están retomando las luchas ambientales, pero asumo que no habrá un relevo en el Econcetro. Sería una forma de aferramiento pensar que alguien vendrá para seguir protegiendo este bosque. Me doy por bien servido con lo que he hecho”, zanja, antes de citar al poeta mexicano Octavio Paz: “Basta una sola persona que lea tu poema para entrar en el río de la conciencia”. Sus palabras suenan a despedida y afronta con resignación ese adiós.

“¿Ve cercana su muerte?”, le pregunto.

“Si no me han matado ya es porque no han querido. Quizá se ablandaron por las imágenes religiosas de los cobertizos; quizá, porque trato de ayudar a la comunidad, o igual pensarán que ya me queda poco y les doy lástima”, responde.

“¿Le da miedo vivir aquí solo?”

“Me da nervios, pero no miedo. Acepté la posibilidad de morir por la naturaleza, por este lugar. Cuando uno decide morir, está todo claro. Ya se puede seguir viviendo tranquilo”. Ese consejo se lo dio José Manuel Mireles, reconocido líder de las autodefensas michoacanas, quien esquivó durante muchos años las balas del narco, salió ileso de un accidente aéreo y de la persecución de varios gobiernos, y finalmente lo mató el Covid.

Juan Manuel escucha a lo lejos a las madres de Arroyo Colorado cuando regañan a sus hijos, ve entre las sombras de una tenue vela, se ducha con una cubeta de agua fría y huele los incendios en los cerros lejanos. Ya no recolecta sus propios frutos, porque dejaron de florecer, pero apenas come alimentos cocinados. La soledad y su modo de vida lo han integrado al bosque, es su alma, una de sus últimas especies.

“¡Mira las clavellinas, son increíbles!” salta. Se distrae olfateando un manojo de flores fucsias que colorean los porches desmadejados. Hace tres décadas se veían coyotes por el Ecocentro. Su agilidad y pelaje rojizo los camuflaban entre la charanda donde cavaban sus madrigueras. Tan sólo se sentían por su aullido y el destello de sus ojos en la noche. También había venados grises, su animal preferido y sagrado en varias culturas prehispánicas; un ciervo sigiloso, de afinado olfato y oído. Por su gran sensibilidad en las pezuñas, únicamente habitan en ecosistemas sanos. Son indicadores de la calidad de conservación del suelo.

Tanto el venado como el coyote están en peligro de extinción en Michoacán.

Sólo el Biólogo sobrevive en la charanda.



El pozo hñähñú

Hija y madre contra el saqueo

SANTIAGO MEXQUITITLÁN | QUERÉTARO

La biznaga bola de hilo es un diminuto cactus esférico que la agroindustria y su comercio ilegal han arrasado. Apenas quedan unos cincuenta. Tiene un altísimo valor ornamental y simbólico alrededor del mundo por sus flores rosadas y hermafroditas, que raramente le crecen.

Nada bueno se viene cuando suena el timbre de casa a las cinco de la madrugada. Eso mismo pensó Sara Hernández al despertarse por el estruendo del portón metálico. Su vecina Ángela golpeaba sin parar para avisarle que descendía un convoy de pipas particulares hacia el pozo de agua potable de Santiago Mexquititlán, al sur de Querétaro en los lindes con el Estado de México. No era la primera vez que camiones cisterna sin identificación y sin explicación extraían el recurso. Ocurría desde hacía años y en los últimos meses se había intensificado. El enésimo robo aquel 31 de marzo de 2021 fue la gota que colmó el vaso. “Noche y día entraban pipas sin el logo de la CEA (Comisión Estatal de Aguas), pero sí tenían la llave del pozo. Esas pipas se llenan en media hora. Era mucha el agua que sacaban”, dice.

Ángela buscó a Sara, porque es una de las pocas que cuenta con auto en la humilde villa, donde la débil señal telefónica las obligó a ir casa por casa para movilizar a la

población. Por la tarde ya se habían reunido unas 60 personas y habían retenido uno de los seis camiones. Sara regresó por la noche para llevar agua y café a sus compañeros y vio el despliegue de una veintena de camionetas de la policía estatal y municipal que cercaban el único camino de terracería hacia el pozo. Un funcionario de la CEA se presentó en el lugar para dialogar con los manifestantes sin llegar a un acuerdo y, al marcharse, los uniformados echaron balazos al aire. Pero, en vez de acobardarse, los pobladores decidieron instalar un campamento permanente para resguardar su fuente de suministro y la pipa confiscada.

“Yo antes veía a los que resistían y pensaba que eran unos locos. Hasta que no te pasa algo así, uno no se da cuenta”, admite Sara, pese a pertenecer a uno de los pueblos originarios más combativos. La gran mayoría de los 1 700 habitantes de Santiago Mexquititlán son hñahñús, más conocidos como otomíes, el etnónimo castellanizado del náhuatl con el que los mexicas los denominaban como “flechadores de pájaros”. Se extienden por varios territorios discontinuos del centro de México y son uno de los pueblos más azotados por el desplazamiento forzado, tanto colonial como moderno.

Tras la primera semana de la toma del pozo, brotó de nuevo el agua y se recuperó la presión en las zonas más alejadas. En días posteriores, justo después de permitir el ingreso de técnicos de la CEA para —en teoría— estudiar las causas de la escasez, volvió a disminuir el volumen. “Entraban sólo para cortarnos la llave. Es su forma de desgastarnos”, asegura Sara. Cuando se percataron de eso, les negaron definitivamente el acceso y hasta la fecha se han mantenido los niveles de abastecimiento. “El pozo se construyó en 1978 con nuestro dinero y esfuerzo. Cada uno puso 10 mil pesos (cerca de 500 dólares). El pozo es nuestro”. Así lo expresaron con pintadas en la pipa que sigue ahí

retenida y destartalada en un terraplén baldío, con pintadas por todas partes. “Ni una gota más”, se lee en la cabina. “Ni una pipa más”, en el parachoques. “No más al robo de agua CEA”, en uno de los laterales del tanque y en su parte trasera: “Lacras, ratas”.

Desde el búnker de hormigón del que salen numerosos tubos azules se observa una laguna grisácea, camuflada en la reseca planicie, que había desaparecido desde 2019 y por cuyo fondo hasta se podía transitar. La usurpación del pozo había desecado el estanque. En los barrios cuarto y quinto pasaron tres meses sin recibir una gota. Muchas familias tuvieron que buscar el agua en los bordos de contención a orillas del río. Cuando se quejaban a la CEA, la respuesta era siempre que desconocían la procedencia de las pipas y se comprometían a abrir una investigación. Tras la toma del pozo, sin embargo, la CEA les comunicó en seguida que los camiones estaban contratados por el ente, pese a no llevar estampado su logotipo.

“Algunos vecinos siguieron esas pipas y vieron que llevaban el agua a terrenos de políticos panistas (del Partido Acción Nacional), a constructoras de familiares de gobernantes y al paradero turístico de Cerro de los Gallos”, asegura Sara. Se cubre del fresco y del sol con una sudadera y una gorra. Con la bota barre un poco de grava para destacar una gruesa tubería enterrada que se dirige afuera de la localidad. Sospechan que canaliza agua hacia el Estado de México. Ese es otro tema que todavía están indagando, pero a Sara le gustaría más volver a agarrar los libros que estar persiguiendo a pipas y a corruptos.

Los revoltosos, como los etiquetaron las autoridades, señalan que el desabasto se agravó desde 2009 durante el primero de los tres periodos de Rosendo Anaya como alcalde de Amealco de Bonfil, municipio al que pertenece Santiago Mexquititlán. Al cacique del panismo en Querétaro, feudo

conservador, lo acusan de estar detrás del negocio de las pipas. También lo señalaban de colocar a varios de sus allegados en cargos de poder, entre otras, a Verónica Hernández, diputada local, y a la delegada Verónica Sánchez, que desmiente cualquier tipo de conflicto con ningún sector de su comunidad. Cuando los hñähñús retuvieron la pipa, el conductor les dijo que estaba empleado por el señor Gilberto, el esposo de Verónica Hernández. Eso confirmaba la implicación del panismo estatal en el saqueo del agua.

A las dos semanas de plantón, un grupo de matones irrumpieron en el campamento, escupieron a uno de los comuneros y amenazaron con lincharlo. “Nos enviaron a la gente de Vero”, dice Sara. En varias ocasiones agentes de la fiscalía y la policía estatal la han saludado desde las patrullas tras seguirla por varias calles, o le han tomado fotos. Sospecha, además, que han intervenido teléfonos y han hackeado grupos de Whatsapp. Todo son formas de hostigamiento, según ella, para amedrentarlos. “El miedo nunca se quita. Consiguen que la gente deje de apoyar el movimiento”, reconoce. Las incontables noches en vela para hacer guardia junto al pozo no les han quitado el sueño, pero sí lo hace esa amenaza constante.

La madrugada del 12 de mayo de 2021, un destacamento de la policía estatal emboscó a tiros a tres movilizados que iban a traer cobijas. La joven, su hermano y su esposo, herido de bala en el cuello, pudieron escapar del ataque y sortear las barricadas. La madre de Sara, Jacinta Francisco, se despertó con los disparos y temió por la vida de su hija. Los centinelas del agua pensaron que la embestida llegaría hasta el campamento y llamaron a la población a través de mensajes, cohetones y campanazos. En seguida bajó una turba del barrio quinto que frenó el avance de la fuerza pública.

Afines a los gobernantes panistas difundieron por redes sociales que Jacinta tenía resguardados a los agredidos, a quienes tildaban de delincuentes. El pánico se apoderó de la mujer de 60 años, que creyó que en cualquier momento los agentes tumbarían la puerta de su casa y escondió sus ahorros con tanta prisa y desconcierto que nunca recordó dónde puso los fajos de billetes. Días después apresaron a los tres familiares atacados y los imputaron por intento de homicidio. La presión social a las puertas de la comisaría hizo que los liberasen a las pocas horas. Ninguno de los tres volvió a participar en las vigalias ni tampoco quisieron darme su testimonio.

Durante los meses posteriores, las mismas autoridades fabricaron varios procesos legales contra Sara, su madre y su hermana Estela, por presuntas amenazas a Verónica Sánchez. En cuanto tomó sus casos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), cerraron las carpetas de investigación. La fiscalía sabe que tenía las de perder en ese litigio frente a la organización de abogados. Ellos fueron quienes lograron la excarcelación de Jacinta en 2009 tras pasar tres años entre rejas. En 2017, la propia fiscalía emitió una disculpa pública por acusarla falsamente de secuestrar a seis agentes federales. Nunca recuperó del todo la libertad, considera, porque la siguen criminalizando a ella y a su familia, ahora por la cuestión del agua.

“Dijeron que teníamos armas para disparar a la delegada. Nos hacen ver como criminales para desprestigiarnos y poner a los vecinos en nuestra contra. Y lo consiguen. Nos odian como si les fuésemos a quitar su trabajo”, cuenta Sara. Por el pueblo las han insultado y les da vergüenza vender en el tianguis. En la modesta casa de la activista y su madre hay montones de papeles, frascos de hierbas medicinales y muchas imágenes de la Virgen. En su traspatio se acumula la chatarra utilizada para soldar las mesas y carritos de

venta de nieves (helados) y aguas frescas, a lo que siempre se ha dedicado la familia por generaciones. Ambas señalan que desde que hace una década los panistas asumieron el poder, han comprado a parte de la comunidad con despensas o empleos y los tienen amenazados con quitarles todo si no cumplen sus órdenes.

Ante ese acoso y la aprehensión de uno de sus compañeros, en septiembre de 2021 los hñähñú movilizados desmantelaron el campamento y mantienen la vigilancia del pozo de manera más sutil, desde las viviendas cercanas. En cuanto nuestro auto se acerca a la estructura, a unos 200 metros, aparecen dos vecinos para preguntarnos por el objetivo de mi visita. El gobiernos municipal y estatal los han mareado durante un año por decenas de despachos, con la entrega de documentos sin destinatario, sin presentarse a las reuniones pactadas, con promesas incumplidas. Frente a ese desplante, el 31 de marzo de 2022, un grupo de pobladores se manifestó en las inmediaciones de la sede nacional de Conagua para llamar la atención del ejecutivo federal, que dijo desconocer la problemática. “Desde que la CEA tomó el control del pozo, empezó a faltar el agua. Nos dicen que somos incapaces de gestionar el pozo, porque es muy complejo, pero ya lo hemos hecho este último año. Seguro es mejor a que nos roben y además cobrarnos tanto por usarla”, aseguraba Sara durante la protesta.

Ella, su madre y su hermana siguen estando en la mira de las autoridades. Hace unos meses, una vecina les contó que (se omite el nombre de la política por razones legales) la visitó en su casa y entre broma y broma le preguntó cuánto quería por desaparecerlas. Cuando la gente acude a la CEA de Amealco a pagar la factura del agua, los funcionarios esparcen el rumor de que Jacinta y sus hijas son las que cierran la llave del pozo y les dejan sin agua. No fue sólo por el auto que Ángela, la colega de Sara, la buscó a ella cuando

estalló la movilización. La familia ganó a fuerza experiencia legal y política para sacar a Jacinta de la cárcel. Su vida cambió por completo.

La fecha que más ansiaba celebrar al salir de prisión era el 15 de mayo, la danza de San Isidro, patrón del agua. Ese día las feligresas se reúnen desde temprano para preparar los tamales que regalarán al pasar casa por casa para bendecir las tierras. En su parcela siembran maíz, nopales y quelites. Cuando quiere comer proteína, agarra alguno de los pollos del corral. Antes ni siquiera había carnicerías en el pueblo, porque la gente mataba a sus propios puercos. Ahora, desde su liberación, varios colectivos la invitan con frecuencia a la capital, a dos horas y media, para exponerla como un referente de lucha: las mujeres indígenas encarceladas injustamente se conocen ahora como “las jacintas”. Pero, la hñähñú le cogió odio al ajeteo urbano tras vivir seis años en Monterrey vendiendo hortalizas en la calle. “Me dan asco las salchichas”, se ríe. “No me gusta meterme en la ciudad. Allá las personas batallan mucho siempre para conseguir todo”. En esa villa de burros y agaves, nunca han sufrido por tener alimento. Jamás imaginaron que les faltaría el agua. Para esa batalla nunca les prepararon sus ancestros.

Las primeras publicaciones bajo el título “la guerra del agua” manaron en la prensa local hacia el 2013, cuando el alcalde del cuarto mayor municipio de Querétaro confrontó a la CEA por impedirle extraer agua del río para surtir a los asentamientos irregulares y por negarle la provisión de pipas. “Si no logramos nuestro objetivo (administrar el pozo), al menos queremos ser ejemplo para otros”, asegura Jacinta. Su ejemplo empieza por su vestimenta típica, una brillante blusa de seda morada, de cuello alto, pliegues y falda blanca. Meses después de la movilización en Santiago Mexquititlán, la localidad contigua de Garabato también

frenó el paso de pipas privadas y algunos barrios cortaron calles en protesta por el desabasto. Jacinta mantiene la esperanza por eso y por los arbustos alrededor del pozo que florecieron durante la toma. Y pese al cansancio, que no esconden, ella y sus hijas tienen claro que nunca más dejarán que nadie les robe el agua, la dignidad ni otros tres años de sus vidas.



El guardián de los cenotes

Los *aluxes* y los cerdos de Yucatán

HOMÚN

Los mayas llaman a las abejas “gente”. El destino de la humanidad y de esos insectos está ligado en su mitología. Kaab significa abeja, miel y también universo.

“Buenas tardes, papá. Buenas tardes, mamá. Han venido unos amigos a visitarte, vamos a entrar a tu casa y te quería pedir permiso, mamá y papá, antes de bajar. Estamos haciendo esto de corazón para poder ayudar a cuidaros y queríamos mostraros respeto antes de molestaros”

Doroteo Hau Kuk se asoma a la boca de la cueva y ruega el consentimiento de Chaac, su dios de la lluvia, y la protección de los *aluxes*, los duendes que resguardan el cenote, antes de bajar conmigo por esa singular formación geológica de la península de Yucatán. El crujido de las escaleras y el gorjeo de un pájaro reloj resuenan en los 30 metros de hueco iluminado por un chorro de luz que se cuele por la abertura hasta su agua turquesa. “El cenote es un templo para nosotros”, dice. Era tan sagrado que su papá ni siquiera le dejaba entrar sin su permiso y sin mostrarle respeto. A sus 62 años, don Doro comienza a olvidarse de algunas cosas, pero nunca de las palabras de agradecimiento en maya que

su padre repetía cada vez que descendía a buscar agua para beber, cocinar, lavar o regar los cultivos. También recuerda que, cuando era niño, los mayores se metían en las grutas para invocar a Chaac por buenas cosechas y ofrendarle sus mejores mazorcas. Los cenotes son aún santuario y fuente de vida para los mayas del occidente de Yucatán, pero hoy como atractivo turístico.

Para los visitantes los cenotes son una alberca. En la cosmovisión maya son la puerta al inframundo, uno de los tres planos en que se divide el universo junto a la tierra y el cielo. En sus profundidades se han hallado vasijas, esculturas y restos humanos. Se siente una energía fuerte: el contraste del calor de afuera con el fresco, la cargante humedad, el eco, los reflejos titilantes. Don Doro encontró la huella roja de unas pequeñas manos en una pared del cenote. Por eso lo bautizó como *Bal-Mil*, “lo que está escondido” en maya. Y lo que se esconde en esas grutas son los *aluxes*, esos elfos traviesos y ladronzuelos. Pese a su cojera y sus maltrechas sandalias, don Doro camina sin mirar donde pisa por esas resbaladizas piedras que se conoce tan bien como cada una de las figuras que moldean las incontables estalactitas. Muy a su pesar tuvo que colocar unos focos de luz para evitar que los foráneos se tropiecen, se lastimen o, peor aún, aplasten a algún animal. “Si matas una culebra, te mueres tú, porque las culebras o cualquier ser vivo aquí adentro, encarna a los *aluxes*. Y ellos son los dueños del cenote”, avisa. Si les faltas al respeto —orinando, tirando basura, grafiteando, etc.—, también se vengarán causándote alguna caída, una subida de la tensión, mareos o echándote un mal de ojo. Lo prueba don Doro con una retahíla de historias, por eso mantiene la plegaria de sus ancestros antes de entrar, aunque ahora sea para implorar que los bañistas salgan sanos y salvos.

“Tomamos la decisión de abrir los cenotes al público por fuerza mayor, por la falta de empleo, porque, realmente si

hubiese otra alternativa, jamás nos dedicaríamos al turismo. Estamos violando las creencias”, dice. Luego, mira hacia arriba con los brazos abiertos y pide el perdón de dios por ello. A comienzos del siglo xx, la invención de las fibras sintéticas desplomó al henequén, la planta utilizada para fabricar sogas y cordeles que tanta bonanza trajo al sureste de México en la centuria anterior. Casi todos los ocho mil indígenas de Homún, donde vive don Doro, se arruinaron. En la última década, unos pocos hogares, 3 de cada 10, han podido salir de la pobreza al explotar sus cenotes, viendo el beneficio que daba en muchas otras aldeas. El ingreso al *Bal-Mil* solamente cuesta 50 pesos. Su propietario —odia que lo llamen así— no quiere hacerse rico, sino conservar el lugar, su hogar.

De la caverna emerge un esbelto álamo, el árbol que indicaba a los antiguos mayas que ahí había agua y, por tanto, ahí debían asentarse. Sus raíces penden hasta zambullirse en sus aguas. Don Doro nació y habita a 20 pasos del cenote, pero jamás diría que es suyo. La naturaleza no se posee. Se protege. Cuando la llegada de 49 mil cerdos amenazó con destrozarse su centro de vida, la comunidad se organizó y crearon *Ka'anán Ts'onot*, en maya, “guardianes de los cenotes”.



Ese “abismo”, como lo entendían los antiguos mayas, es una de las 1 200 cavidades que componen el Anillo de los Cenotes, un círculo perfecto de 180 kilómetros de diámetro que se dibujó hace 65 millones de años por la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios. El impacto elevó la superficie marina. Los orificios de esa llanura de roca

caliza se fueron ensanchando por las precipitaciones ácidas hasta formarse los cenotes. El cráter del meteorito se conoce como *Chicxulub*, “pozo del diablo”, un término que don Doro tiene prohibido pronunciar, porque, según sus creencias, le traería mala suerte.

La desdicha les cayó de todos modos en 2017. Varios polígonos de concreto empezaron a engullir 113 hectáreas de selva —como unos 160 campos de fútbol—. La instalación de esa granja porcícola ponía en riesgo los cenotes de Homún, su agua y su sustento. Los pobladores saben que cuando llueve mucho todo se empantana y al poco rato ya se ha secado. El agua se escurre rápidamente hacia el subsuelo por hondas grietas. Como dice don Doro, no hay que ser científico para saber que las heces de miles de puercos también se van a filtrar en los cenotes. Homún se ubica en la zona de recarga del anillo, donde brota la mayor reserva de agua dulce de México y que abastece al 70% de Yucatán. Eso no fue motivo suficiente para frenar las obras. Tampoco lo fue que estuviese incluido desde 2009 en la lista Ramsar de humedales de importancia mundial, ni que en 2013 lo decretasen área natural protegida. Esa designación de por sí debería impedir cualquier actividad “no compatible” con el ecosistema, además en este caso, único en el planeta. “¿Tanto título (a los cenotes) para qué sirve? ¿Y pudieron poner una granja a cuatro kilómetros de aquí?”, exclama don Doro.

En 2016, el alcalde de turno concedió una licencia de uso de suelo a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo), que incurrió en todo tipo de irregularidades: sin consulta a las comunidades, sin autorización del gobierno estatal para ocupar un bosque mediano y sin una medición contrastada del impacto ambiental. Don Doro y un grupo de vecinos se presentaron en una asamblea local para exigir explicaciones por todo eso. La reunión se crispó al punto de

amenazar al alcalde con quemarle la casa. Se votó por unanimidad retirar los permisos a la megagranja, pero la decisión quedó sin efecto legal. Pese a ello, estaban convencidos que las autoridades estatales y federales iban a paralizar el proyecto al recibir sus quejas. “Nuestros abuelos nos han dicho que en el gobierno son estudiados, saben lo que hacer”, dice, en un castellano entrecortado que tampoco lo arruga. Esos funcionarios, en cambio, desoyeron su petición y los tacharon de locos por oponerse a algo que supuestamente les iba a traer puestos de trabajo.

La granja inició operaciones en agosto de 2018 y un olor insoportable impregnó el aire. La porosidad del relieve kárstico de la península favorece la infiltración al manto freático de los excrementos, la orina y los químicos aplicados para bañar a los lechones. Pero, los pobladores de Homún no tenían manera de demostrar esos nocivos efectos. “Si se contamina un cenote, se contaminan todos”, asegura don Doro. Los 10 mil cenotes que se estima que hay en la península de Yucatán están interconectados y sus aguas cristalinas forman el Gran Acuífero Maya. Aún con un biodigestor, el agua residual de los cerdos no queda totalmente limpia y se han detectado restos de nitrato cerca de las granjas: un peligro para el mayor sistema de ríos subterráneos del mundo.

“Sabemos que nos enfrentamos a empresarios muy poderosos, pero no hay que tener miedo. Este es nuestro territorio”, dice. La culpa, para él, no es de esos empresarios, sino del gobierno que tiene la responsabilidad y hace la vista gorda. Papo funciona bajo un modelo de aparcería: cría y engorda a los chanchos que vende a Kekén, la principal marca del Grupo Kuo, la mayor productora mexicana de carne, que envía sobre todo a Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos y Canadá. El conglomerado, también dedicado a los químicos y las autopartes, registró “un fuerte incremento

en el volumen de exportaciones” al gigante asiático, como indica su balance financiero de 2020. “Por algo será que ni China quiere tener estas granjas en su tierra. Y tierra no les falta”, sigue don Doro. La industria porcícola requiere de grandes cantidades de agua dulce para limpiar constantemente los corrales y Yucatán dispone de esa abundancia. El calor caribeño obliga a utilizar aún más agua para refrescar a los cerdos, pero tampoco eso ha sido impedimento para que las cabezas de ganado porcino se hayan sextuplicado desde 2007.

Después de muchas reclamaciones desatendidas y protestas, Homún encontró el camino legal más creativo e idóneo. Seis niños de la comunidad interpusieron una demanda de amparo en un juzgado yucateco en septiembre de 2018: “En Homún habitamos aproximadamente 2 600 menores de edad, quienes estudiamos. En nuestros ratos libres acompañamos a los turistas que llegan a nuestro pueblo a conocer los cenotes. El agua de los cenotes la ocupamos para diversas actividades, la más importante es para tomar, también la ocupamos para bañarnos, lavar ropa y para lavar trastes”, expone la carta que acusa de omisión a varias instancias. Una jueza estatal determinó que, en efecto, la granja transgrede su derecho a un entorno sano, al agua, a su autonomía como pueblos indígenas y a una vida digna. Bastó para ordenar el cese de operaciones. La sentencia fue un hito, porque por primera vez en México se echaba mano del “principio precautorio”, exigir medidas de protección ambiental antes de que el daño sea irreparable. “Cuando uno se ampara tiene que demostrar la afectación directa, pero en el caso del impacto ambiental es muy complicada, porque la devastación es visible a los 30 o 40 años. Entonces, ya es irreversible”, me explica uno de los abogados que asesoró a los guardianes de los cenotes.

La Corte Suprema recogió los mismos argumentos para confirmar la suspensión de actividades de la planta de Papo. El fallo emitido en mayo de 2021, dos semanas antes de encontrarme con Doroteo, sentó un precedente en el país. Homún y varios pueblos igual de afectados lo celebraron por todo lo alto, pero, ya desde antes el cenotero me decía que eso no era el punto y final. La semana posterior a la decisión del máximo tribunal las autoridades clausuraron tres paradores turístico de los principales defensores del agua. Al mes, el mismo ejecutivo estatal publicó una carta donde aseguraba que Papo había incorporado mejoras y que ahora ya cumplía con todos los requisitos de tratamiento de aguas negras. El documento sirvió a la compañía para interponer un recurso que volvió a sembrar la incertidumbre en la apacible aldea de tornasoladas casitas y triciclos.

La empresa ha tratado de reanudar su funcionamiento de mil maneras, entre otras, exponiendo que su proceso de saneamiento de aguas es óptimo. Me acerco para comprobarlo —quiero decir, tomar fotos para que luego un técnico lo valore—, pero debemos darnos la vuelta. La vigilancia es 24 horas. Un centinela sale de las rejas que cortan el camino de terracería hacia las naves de la granja. Saca su celular y nos apunta. “Lo pueden ver como una provocación y tienen perros”, dice don Doro. Mejor nos retiramos. Al contactar a la empresa por teléfono, me niegan la posibilidad de ingresar.

“A mí me da igual lo que diga el gobierno estatal o federal, el pueblo sabemos cuál es la amenaza, lo que nos va a dañar”, dice. Los guardianes guardianes conocen la fragilidad de ese ecosistema. En la entrada de todas las grutas pusieron letreros que prohíben el uso de bronceadores o cremas solares que afectan al equilibrio ecológico. Don Doro, además, aconseja a los turistas que no se porten indebidamente, porque los *aluxes*, los castigarán. Los niños

se quedan boquiabierto y a los adultos se les escapa una risita. Al salir, le dan la razón. No busca la aprobación de nadie, de ningún blanco ni de ningún gobierno, empeñados en censarlos para hacerles caso o darles ayudas. Doroteo se desquicia, cierra el puño, se inclina hacia delante: “Quieren marcarnos de que sí somos maya. Quieren ponernos una marca como animales. A ellos los vamos a marcar hijos de su chingada. Yo no tengo que demostrar que soy maya. *Tin wiknal uts in ya'ala'al masehual* (A mí me gusta que me digan *masehual* —término empleado por los mexicas para referirse despectivamente a los plebeyos—). *Ya'ab indio. Bix túun? Ma' K'abab k avergonzar k* (Soy indio, ¿y qué? No tenemos que avergonzarnos)”.

Los guerreros maya se adentraban en los cenotes antes de una batalla. Se bañaban y oraban para que, si morían, sus almas se quedasen en el interior. Don Doro también cruza la puerta al inframundo y se purifica en esas aguas cada vez que sale de la comunidad para encabezar una manifestación o declarar en un juzgado. “No es una cosa pequeña, lo que estamos defendiendo es el agua. Hay muchos intereses. Si nos sucede algo, ya sabe la gente por qué estábamos peleando y contra quién”. El resplandor baila sobre las estalactitas, nervioso, agitado. El cenotero señala esos reflejos y luego hacia abajo. El agua está quieta, en calma. ¡No es posible! Los *aluxes*, dice. Salgamos.



Regresé donde don Doro al cabo de un año, esta vez de vacaciones. Le contaba a mi familia ese último episodio en el cenote y no se lo creían. Don Doro me miraba de reojo y sonreía, como diciendo, ahora sabes lo que se siente cuando

te toman por loco. No me cobró por ingresar a su hogar, a la cueva. “Esta también es tu casa”, me dijo, con la mano en el corazón. Se veía cansado, muy aquejado. Me contaba que se había enfermado varias veces por todo el estrés y se había apartado un poco. Homún seguía a la espera de la decisión judicial.

Tuvieron que pasar dos años y medio desde el fallo de la Suprema Corte, hasta febrero de 2024, para que la justicia yucateca revocara el permiso ambiental a Papo. Se recabaron numerosas pruebas científicas y legales que anticipaban el daño. El adiós definitivo a la fábrica de cerdos animó a don Doro. Me cuenta por teléfono que ahora buscan que los cenotes sean declarados sujetos de derecho. Convertiría a los maya en representantes de los cenotes y evitaría que los gobiernos aprueben proyectos a sus espaldas. Sería pionero en México y en el mundo reconocer legalmente que un bien natural, que no tiene voz, sí tiene vida. Si no, que se lo pregunten a los *aluxes*.

La laguna negra

KINCHIL | YUCATÁN

La península de Yucatán es la mayor zona productora de miel en México, pero en los últimos años se han perdido un 30% de las colmenas debido a la deforestación y al uso de pesticidas que diezman la floración. Los monocultivos están arrasando con las abejas, en vías de extinción a nivel mundial por el cambio climático. Han socavado el único sustento para unas veinticinco mil familias de pequeños apicultores.

Los limones de Filiché ya no crecen. El productor de Kinchil, otro poblado en el Anillo de los Cenotes a 100 kilómetros de Homún, ha visto sus árboles pudrirse desde que hace una década se afincó una meggranja de Kekén justo al lado de sus cultivos. Las dos hectáreas de cítricos habían dado de comer a su familia hasta entonces. “Apenas que entró la cochinería, en seguida las matas empezaron a quedar tristes”, dice. Las matas que siembra se mueren a las pocas semanas. Los 74 años de humedad y cosechas han roído la rodilla de Filiché, que se tambalea al caminar y debe sentarse cada pocos metros. Aprovecha las pausas para arrancar un limón y comérselo a mordiscos. El refrigerio se lo fastidian las moscas, las mismas que le están acabando con sus limoneros. El agua de su pozo apesta. Al regresar del campo, siente la garganta tapada y un dolor de estómago que le dura varios días. Lo cura con una bebida de hierbas medicinales y reposo. Lo que no resuelve la naturaleza y el

tiempo son las deudas. Los ínfimos ingresos que le deja la mitad del plantío aún sin marchitarse no le alcanza para pagar las facturas de la luz o el agua.

“Si los cochinos siguen aquí, van a desaparecer todas las matas. Nos está afectando demasiado”, dice. Un manto de hierbas grisáceas y troncos carcomidos cubre parte de su parcela, la que colinda con los terrenos de la empresa porcícola. Las aguas sucias vertidas durante años han reblanqueado el suelo. Remueve un poco de ese barro para que sienta el fétido olor.

Filiché supo su verdadero nombre, Emilio Madera Kanul, hace pocos años, cuando le tocó rebuscar entre los documentos familiares su partida de nacimiento para interponer una queja en las oficinas de la alcaldía, porque sus limones perdieron el sabor. Sus ojos se vuelven más diminutos y se le quiebra la voz. Su amigo, Alberto Rodríguez, lo consuela. Él se apenó del mismo modo durante años y luego decidió enfrentar el problema. En ese mismo punto, pasa por debajo de la cerca de alambres para avanzar por los terrenos de la granja Kekén. Sigue un tubo entre los matorrales hasta llegar a un pequeño páramo que hace dos años era una ciénaga de excrementos. El propio Alberto lo grabó y los videos se utilizaron en el documental Una laguna negra, que al menos empujó a la empresa a asear la cloaca y plantar algo de césped para disimular el despropósito ambiental. La mierda sigue ahí. Al abrir la llave de una de las tuberías sale a presión un chorro purulento y marrón.

A los cinco minutos de estar dentro del perímetro, varios hombres vociferan a lo lejos. No escucho qué dicen los gritos, pero Alberto sale espantado. “¡Corre, corre, vámonos!”. Tras el lanzamiento del documental, la compañía también reforzó la vigilancia: valló gran parte del recinto, multiplicó los guardias y los armó. Nos rasgamos los brazos entre los zarzales y los alambres para que no nos atrapen.

La noticia de la instalación de una granja porcícola en 2010 se celebró con bombo y platillo entre los siete mil habitantes de Kinchil. Se les prometió empleo y bonanza para toda la gente. No fue así. Siete de cada 10 hogares, uno menos que hace una década, viven en la pobreza, el mismo porcentaje que en Homún, donde la granja suspendida nunca generó ocupación. “Sí hay trabajos, pero mal pagados. La gente también tenía trabajo antes de la granja, eran obreros, campesinos o turisteros. Y nadie los explotaba”, dice Alberto.

La comunidad no se percató del desastre en su selva hasta 2018. Algunos ejidatarios vieron que sus reses se morían y pidieron ayuda a Alberto para ir a buscar su ganado y encontrar las causas. Recurrieron al Indiana Jones de la zona, ataviado con pantalones cargo, botas, camisa verde oliva y sombrero country, por su amplio conocimiento de las veredas. Nació y pasó gran parte de sus 55 años metido en esa selva, recolectando, criando abejas, cazando venado. En una de las expediciones se toparon con esa laguna negra, la que destapó el engaño de la empresa, que había perjurado al pueblo que trataba sus aguas residuales.

Alberto lo tacha de ecocidio y por eso encabezó la creación del Consejo Maya del Poniente de Yucatán. La maquinaria arrasó un área natural que Kinchil había respetado desde 1935. Allí se criaba el venado, el jabalí y había vestigios arqueológicos. En respuesta a las demandas del colectivo, los tres niveles de gobierno han sostenido que la planta cumple con todas las normas ambientales. No obstante, un estudio realizado con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2022, mostró contaminación con bacterias como la *Escherichia coli*, la principal causante de enfermedad y muerte en cerdos. Todas las 200 muestras extraídas de 23 cuerpos de agua en Kinchil y Maxcanú, la mayoría de cenotes y pozos

artesanales, dieron positivo en presencia de coliformes fecales. “Van a seguir vertiendo agua manchada al manto freático, porque gozan de la protección del gobierno de Yucatán, pasados, presente y futuros. Todos se han dejado comprar y les han dado acceso privilegiado a fuentes de agua”, afirma Alberto.

(Una empresa fundada por Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia durante los dos primeros años de López Obrador, obtuvo en la última década concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea del estado y la tercera en todo el país. La compañía de biotecnología, Enerall, se sirvió de un acuífero cuya disponibilidad media anual ha bajado un 43% durante esos 10 años, con la ambición de convertir en fértiles suelos improductivos por su dureza, es decir, acelerar dos siglos el ciclo de la naturaleza. Los inspectores federales de la fiscalía ambiental encontraron un cenote de 5 500 metros cuadrados tapado con tierra y rocas, pero la única penalización fue una multa y el cierre temporal del rancho, como reveló la investigación periódica Alfonso Romo: un cacique del agua en el paraíso maya.)

Según un informe de Greenpeace, hay 257 granjas porcícolas en toda la península que han causado deforestación, contaminación de acuíferos y despojo de tierras. De éstas, 43 se ubican en áreas protegidas y sólo 22 cuentan con los permisos ambientales. A raíz de esa investigación, La Carne que está consumiendo al planeta, la procuraduría ambiental de la entidad realizó inspecciones que derivaron en la orden de clausura de cuatro granjas, entre ellas, la de Kinchil. La sanción se impuso “por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”, como exponía el

documento. Kekén, sin embargo, nunca ha interrumpido su producción.



Los lechones andaban sueltos por los poblados maya, donde a menudo una iglesia y una pirámide comparten plaza mayor. La convivencia relativamente cordial con los invasores españoles permitió que el cerdo se introdujera en la gastronomía maya y hoy sea parte central de su cultura. Las mujeres solían cocinarlos con frijoles cada lunes. Era un plato rápido de preparar que les dejaba tiempo para dedicarse a las tareas domésticas que habían acumulado tras el descanso del domingo.

La mitad del mercadito de Kinchil lo ocupan puestos de carne, colmados de cortes que se terminan antes que el borchorno los encarroñe. La gente deambula con parsimonia, se saludan y se paran a charlar un rato. Su única inquietud, cuenta Alberto, era la de observar el soplo del viento y la forma de las nubes para predecir las lluvias sobre sus campos. Él también tenía una vida sosegada. En los últimos años era guía turístico y eso le daba tiempo para interpretar la naturaleza, ahondar en los saberes tradicionales y apreciarla. Eso lo impulsó a abandonar todo para liderar la batalla contra la fábrica de 60 mil chanchos. Lo que no esperaba es que la confrontación fue a la par con parte de su pueblo. “Los partidarios de Kekén dicen: “Si nos dan trabajo, al menos que contaminen un poco”. Es una forma muy pobre de pensar”, dice.

El Consejo Maya consiguió, finalmente y como establece la ley, la celebración de una consulta popular sobre la meggranja. En Kinchil, 576 personas votaron a favor de

su continuidad y 423, en contra. Una derrota amarga, pero esperada por Alberto. Varios de sus compañeros reportaron durante la jornada que empleados de la empresa intimidaban machete en mano a representantes locales.

De nuevo, trato de contactar a los responsables de la compañía para que me den su versión. La carretera hacia la planta porcícola está bloqueado por un portón del que penden animadas pancartas con ofertas de empleo. Un celador de chaleco reflectante me pide los datos personales. Desde ahí, nos pasa su celular para hablar con uno de los portavoces de Kekén, que rechaza darnos acceso ni declaraciones.

Aquel plebiscito de julio de 2021 desactivó la movilización social durante muchos meses, pero no así la sensación de acoso que siente Alberto. Se mueve constantemente para no pasar muchas horas en un mismo lugar y duerme en diferentes casas de amigos. “Mi vida ya se la encargué al gobernador del estado y al comandante de la policía. Si me pasa algo, que les pregunten a ellos. ¿Quién más me puede eliminar sino quienes protegen a Kekén?”, asegura. El señalamiento es parecido al de don Doro y me sorprende mucho ese nivel de peligrosidad en el estado de México más seguro. Su tasa de homicidios es menor que la de Europa. “¿Crees que tu vida está en riesgo aquí?”, le pregunto. “No hay lugar seguro en México cuando hay dinero de por medio. El crimen organizado es de cuello blanco”. “¿Has recibido amenazas?”. “No, pero tampoco les hace falta. A la gente que defiende el agua, simplemente se le secuestra y se le mata. Esa es la realidad de nuestro México. Entonces, ¿por qué a mí no, si estoy atentando contra intereses de gente muy poderosa?”. Me acordé de aquel activista en Colombia que me dijo que si de veras te quieren asesinar, no te amenazan, te asesinan directamente.

Las duras aguas del jagüey

CALAKMUL | YUCATÁN

La Xunáan Kaab, la abeja melipona nativa de la península, no tiene aguijón. Para defender su colonia muere hasta morir en la contienda. Llegan a introducirse en la nariz y orejas de otros animales para asfixiarlos.

Los cenotes son la única fuente de agua en el interior de la península de Yucatán, 500 kilómetros al sur del Anillo. Samuel García enciende su lámpara de cabeza para evitar un tropiezo o una picada de serpiente dentro de la cueva. El joven carga una cubeta y un bidón en la misma mano, a duras penas puede sujetarse a las paredes mientras desciende. La grieta se angosta y oscurece. Coge aire en un descansillo para penetrar por una hendidura de un metro de altura, que sólo puede bajar sentado. El joven se pierde en la negrura hasta pisar un magro charco. Agazapado, utiliza media botella como embudo para llenar el bidón a toda prisa, antes de asfixiarse por la falta de oxígeno o la claustrofobia. Una improvisada baranda que colocaron los mismos pobladores le posibilita la subida con 20 litros a su espalda. “Está peligroso, te puedes resbalar, golpear con una piedra, puedes encontrarte culebras o arañas. La lamparita te salva”, dice, fatigado.

Cuando Samuel era pequeño, no hace tanto porque tiene 28 años, llovía en abundancia y contadas veces se veían con la urgencia de aprovisionarse del cenote. Ahora, tiene que venir una vez a la semana. La pequeña caverna brinda agua al centenar de habitantes de La Victoria en los tiempos de sequía, cuando se agosta el jagüey, la balsa artificial que capta el agua pluvial. Sólo unos pocos tienen camioneta para transportar los bidones, la mayoría, lo hace en bicicleta, carretilla, a pie o a caballo, como Samuel, que tarda tres horas en ir y volver del cenote. Con el animal puede acarrear como máximo 80 litros, que invierte en dar de beber a sus tres puercos y 10 pollos, su patrimonio. Ya no le queda para lavar la ropa, pero la ropa no se muere, bromea.

En su patio retoza un fornido cerdo pelón, especie endémica, al que le echa la mitad del agua que acaba de traer para mantenerlo fresco y limpio. Samuel espera que la venta de ese individuo le permita comprarse un triciclo y así poder cargar más agua en menos tiempo. Por el momento ni siquiera puede pagar los 100 pesos (cinco dólares) que piden los autos para llevar a la gente al cenote. Su esposa lava la ropa a mano y la extiende sin enjuagarla demasiado. De la vivienda de listones y láminas destaca un depósito de hormigón. Es un tanque de 400 litros entregado gratuitamente por una organización civil para recoger agua de lluvia, la única manera de abastecerse en la península de Yucatán. Su relieve plano y absorbente hace que no haya ríos. La familia vive a 100 metros del jagüey que durante la mitad del año surte a la remota comunidad, pero sus aguas no son aptas para beber o cocinar. “Si hierves frijoles con esa agua, te quedan como piedras y te hacen daño al estómago”, dice.

El relieve de Campeche, el estado del sur peninsular, contiene altos niveles de yeso. Eso hace que las escasas aguas superficiales sean muy duras, insalubres. Además, la mayoría de casas no cuentan con baño y las heces de las

letrinas se desbordan fácilmente con las frecuentes tormentas torrenciales. En la región caen 1 200 milímetros anuales de precipitaciones, el doble que en Londres, pero concentrados en un lapso de cinco meses. De ahí la complejidad para almacenar esas aguas y sobre todo hacerlo antes de que toquen el suelo y se enturbien.

En esta remota aldea en el vértice con Belice y Guatemala no ha llegado ni la idea de tratar el agua. Tan sólo el 5% del agua utilizable en Yucatán se sana y el 70% de la potable está contaminada. Varios niños juegan a pelota en la cancha cubierta, que ofrece una de las pocas sombras del lugar. La principal función del techado, sin embargo, es captar las lluvias y canalizarlas a un aljibe comunitario, una cisterna bajo tierra que inventaron los propios pobladores para tratar de aprovechar cualquier gota.



La relación de Rosa Hidalgo con el agua es intensa, tanto, que se refiere al líquido como ella. Le ha quitado y le ha dado mucho. En 2005, salió de su hogar nadando sobre una puerta que la salvó de morir en una inundación que anegó la periferia de Villahermosa, capital de Tabasco, el estado contiguo hacia el sur. Dos años después, otro huracán arrasó la ciudad y le arrojó sus pertenencias. Se instaló en la costa, pero la posibilidad de que a futuro su chamizo desapareciese bajo el mar la forzó a buscar un lugar tierra adentro para estar a salvo, al menos psicológicamente, de las catástrofes naturales. “Siempre ando moviéndome por culpa de ella. Y ahora que nos deja tranquilas, ahora la extrañamos”, dice. La última huida con dos de sus hijas la llevó en 2012 hasta El Manantial, donde hace medio siglo se

asentaron un centenar de familias, porque, como su nombre indica, había una fuente de agua. Aunque no era un manantial, sino de un cenote.

Se trata de un agujero de 50 metros a cielo abierto. Por su pronunciada pendiente se desnucaron dos niños. Rosa encabezó hace 10 años los esfuerzos para conseguir el interés y el presupuesto para tallar unas escaleras y colocar una valla. No sólo para impedir el paso de la chamacada, sino también del ganado que defecaba en las aguas y había originado brotes de enfermedades gastrointestinales. “Cercar el manantial nos cambió la vida, fue lo mejor que nos sucedió. Ella debe estar limpia”, asegura. Pese a los juanetes y sus 68 años, Rosa no duda en bajar los arriscados 30 metros al ver desde lo alto un envase de detergente y una bolsa de plástico que flotan en el agua.

En 2014, tan sólo seis años después de empezar su vida de cero en unas huertas de maíz, frijol y chile de El Manantial, la comunidad la escogió comisaria municipal, una suerte de alcaldesa. Doña Rosa se sobrepuso al doble obstáculo de ser foránea y mujer para ganarse la confianza de ese entorno rural con iniciativas como la de alambrear el cenote. Lo primero que hizo la tabasqueña fue lograr una bomba para succionar el agua del cenote hacia unos tinacos. “Antes perdíamos una hora para llenar el agua. Ahora son cinco minutos. Abres una llave y sale agua”, dice con entusiasmo. Es el mayor indicio de progreso en un poblado donde ni llega la señal telefónica.

Por sus calles de arena se cruzan las crías de cerdos con los triciclos cargados de bidones que pedalean sobre todo mujeres, las encargadas tradicionalmente de buscar el agua. Semejante ahorro de tiempo alivió su día a día y por eso admiran a doña Rosa. La señora ha tenido agallas para confrontar a las instancias que desde siempre habían ninguneado a la aldea. En 2020, varios operarios de la Conagua

llegaron para plantearles el montaje de unos ductos de agua potable. Eran parte de la construcción del Tren Maya, el megaproyecto insignia de López Obrador. La comisaria intuía que al terminar la obra, si la terminaban, nunca pasaría agua, porque necesitaban extraerla y bombearla de algún otro sitio. Así que optó por usar esos fondos en comprar una bomba que trajese el líquido por una tubería que reparó después de nueve años rota.

Su última conquista fue una planta potabilizadora que sana la nociva agua del aljibe comunitario. Al principio nadie quería gastarse 10 pesos (50 centavos de dólar) por un galón de agua, pero doña Rosa se propuso convencer a los vecinos de la necesidad de beber agua purificada para cuidar su salud. Ya son 30 las personas que a diario llenan su garrafón ahí. El cuarto de máquinas está resguardado por una verja de púas y únicamente la comisaria tiene la llave. “Tanto dolor que me ha causado ella y ahora la ando cuidando”, se ríe. La robusta mujer de espalda y caderas anchas carga sin vacilar un botellón de 20 litros para demostrar lo moderna que es la purificadora. Para doña Rosa no hay creencia ni poesía en los cenotes. Tampoco tiene un significado especial para el resto de comunidades de esa área selvática. Calakmul fue una de las capitales del imperio maya, arrasada por los colonizadores y repoblada el siglo pasado por campesinos de regiones cercanas que buscaban terrenos y fuentes de agua. En su nuevo hogar, Rosa se ha reconciliado con ella.



Guerrero rojo

La masacre

PLAN DE AYALA | ACATEPEC

El oriente de Guerrero se bautizó como la “montaña roja” por ser el bastión de la guerrilla en los años setenta. Toda la Sierra Madre Sur del estado padeció las aberraciones del ejército durante la década posterior, la llamada “guerra sucia”. Un tercio de los soldados de todo el país se desplegaron en esa región y forjaron la desaparición forzada como insignia. En los ochenta, la estrategia de contrainsurgencia viró hacia la propagación del cultivo de amapola para justificar la brutalidad militar. La montaña es ahora roja por el color de las plantas de donde se produce la heroína.

Ocho cruces. Ocho maderas cruzadas con ocho nombres y collares de flores naranjas. Son las tumbas de 8 de los 10 familiares que el 3 de febrero de 2019 estaban en el manantial para celebrar un ritual de petición de lluvias. Uno de ellos era Roberto Neri García, a cargo de llevar las veladoras. Desde temprano en la mañana se reunieron en su casa para preparar todo y subir en grupo al cerro. Se sentaron en círculo alrededor de la única fuente de agua de la comunidad. Encendieron varias velas y comenzaron los rezos y cantos.

Hacia el mediodía, dos jóvenes con fusiles saltaron de entre los arbustos y los rafaguearon. Sólo dos familiares de Roberto pudieron escapar malheridos. El motivo de la agresión fue una disputa por “el dominio de una fuente de agua”, señalaron las autoridades en un atestado donde erraron al

colocar la edad de Roberto. ¿Qué importa? A Plan de Ayala sólo trepa ese enjuto manantial, el párroco que me acompaña y las balas suficientes para quebrar las pocas voces que osen oponerse al negocio de la amapola. Ese día también llegó este periodista, algo inédito que despierta el recelo de los halcones, los pistoleros que custodian el lugar. Varios de ellos se camuflan entre la muchedumbre que se congrega en la oficina comunitaria para recibirnos.

Probablemente por ese acecho titubea Celia García, la madre de Roberto, que tarda bastantes segundos en recordar la edad de 28 años que tenía su hijo cuando dejó a cuatro niños huérfanos. “No sé de dónde vino esta situación, el caso es que se murieron. Siempre vamos a rezar allí y tomamos agua de allí. No tenían problemas, pero hubo un momento que esto llegó y no sabemos de dónde vino”. Lo cuenta en *me'phaa*, lengua indígena del centro-sur de Guerrero. Pocos saben hablar castellano en esta porción de viviendas de adobe con más personas analfabetas que televisores. El ayuntamiento apenas apareció para entregarles unos listones de madera para carpintear los ataúdes de sus difuntos. Pero a Celia le preocupa más el futuro, cómo alimentar a sus cuatro nietos. Las heridas se cierran con comida. Tampoco le aflige la falta de avances de una investigación inexistente, por la que nunca preguntó ni creyó siquiera que se iniciaría. “No se ha hecho justicia ni nos han apoyado, aunque ya se nos va olvidando, vamos tomando la tranquilidad de olvidarnos de este asunto”, agrega. La mujer de cuello y cadera anchos ha pasado casi todos sus 50 años cargando leña, bebés y galones de agua, pero no puede permitirse acarrear con el pasado.

Los asesinos siguen sueltos, viven en poblados vecinos, se burlan de las víctimas, portan armas largas y tal vez participan incluso en esa reunión improvisada. Nadie sabe o nadie quiere saberlo. Pocos meses después de aquel 3 de

febrero de 2019, mataron a otros tres miembros de la misma familia. Las viudas se reúnen cada domingo para ir juntas al sepulcro. Son unos 100 metros desde donde estamos, los pasos suficientes para sufrir el mismo final. “¿Si mataron a ocho, no pueden matar a otros ocho de un sólo ataque?”, dudo, parapetado por el grupo de mujeres. Tras la matanza, tuvieron que ampliar el cementerio hacia el mirador del camino. En la losa donde los enterraron sobresalen unas varillas que dejaron al descubierto con la esperanza de ponerles una lápida algún día. La única lápida hasta el momento es la del temor, que pesa sobre las cabezas de los pobladores. Alejadas del gentío y los oídos de los verdugos, algunas se deciden a hablar. “Tenemos miedo de vivir aquí, porque no sabemos quienes eran los malos, por qué los mataron. De repente llegaron los malos aquí mientras ellos estaban haciendo sus costumbres”, suelta Marcela García. Le mataron en la emboscada a su esposo, con quien la forzaron a casarse siendo niña. El matrimonio infantil todavía sigue enraizado en la Montaña Alta y ni el siglo XXI logró arrancar lo que sí hizo una munición de cartuchos: acabar con la ofrenda a *Akuun iya*, su dios de la fertilidad y las precipitaciones; dejar de quemar vela, encender cirios cada primer domingo de febrero para implorar una buena cosecha. Nadie más se atrevió a subir al arroyito del múltiple homicidio hasta ese día en que al menos un centenar de sus 600 habitantes habían acudido al llamado del altavoz de la escuelita, un chamizo de cuatro por cinco, para acompañar al güerito —de piel blanca— con cámara, utensilio que también contribuyó a sentirse protegidos.

Por el estrecho sendero de media hora, esquivamos varios manojos de tubos que penden de los árboles hasta nutrirse del raquíptico chorro. Las mangueras proliferaron tras el ataque, donde también murió el propietario de esos terrenos, a quien tenían que pedir permiso para utilizar esa

agua. Las primeras y últimas averiguaciones apuntaron a que, días antes de la masacre, hubo una discusión por el recurso hídrico y un conflicto territorial entre Plan de Ayala y sus vecinos de Barranca Pobre.

“¿Quiénes son los malos?”, le murmuro a Marcela entre la húmeda vegetación que tapiza la fuente. El silencio de la expedición se cuartea por el escurrimiento de la fuente y nos permite cruzar dos palabras sin ser escuchados, aunque su explicación se quede corta: “Vienen de ahí arriba”. Desde algunos recodos se abre un hondo valle regado de maíz, mamey y algo de café, ensombrerados por cimas de pinos y encinos, pero ni rastro de vida humana. ¿De dónde vienen? ¿Para qué quieren el agua?

Nada de eso podemos preguntar al comisario comunal. Ya me lo ha advertido el cura que me lleva hasta ese rincón, una de las pocas personas con acceso, es decir, con el permiso de la banda delincuencia que domina la zona, que en aquel momento eran Los Ardillos, ayer Los Rojos y mañana quién sabrá. La distribución territorial del crimen en Guerrero es tan dinámica, y a menudo solapada, que antes de terminar de trazarlo, el mapa ya habría cambiado. Para evitar despertar suspicacias, el comisario de Plan de Ayala, un joven electo teóricamente por la ley de usos y costumbres propia de los pueblos originarios, prefiere que conversemos frente a su gente. Él se refiere a la población, pero su mirada escondida bajo un sombrero negro de ala ancha se dirige constantemente hacia unos hombres más apartados, los mismos que visten diferente al resto, mucho más zarrapastrosos. Los mismos a quienes de vez en cuando alguien más se acerca para susurrarles algo. Los mismos que nos obligan a acortar nuestra visita.

Esos halcones pertenecen a Los Ardillos, que habían penetrado en el municipio de Acatepec para adueñarse de unos de los epicentros de la producción de amapola, de la

que se extrae la goma de opio para la heroína. Su método de expansión era más simple que lo que una guerra requiere: se presentan al comisario y le dicen que quieren trabajar ahí. Si se niegan, lo matan. Así lo habían hecho con el esposo de una diputada federal ahorcado en la barandilla del cuartel policial o con el comandante de la misma policía local, unos pocos días después de mi paso por esos derroteros. Un tumulto irrumpió a golpes en el mercado central, cercó el ayuntamiento y su alcalde tuvo que ser evacuado por el ejército, que sólo tiene presencia para salvar algún político que tenga tiempo de anunciar en redes sociales que lo van a matar o para levantar más de tres cadáveres. Lo corrobora el párroco, quien por esos y los demás detalles pidió omitir su identidad en estas líneas.

Los elementos policiales y militares destinados al peritaje de los ocho cuerpos encontraron en el área un par de sembradíos de amapola de mediana extensión. Dos semanas antes, helicópteros del ejército habían fumigado varios otros cultivos de enervantes. Tampoco al imberbe jefe local se le puede interrogar por la amapola, que recientemente se ha vuelto tabú en estas montañas; un hondo valle regado de maíz, mamey y algo de café. Ni rastro de amapola ni de vida humana, que se esconden por igual entre la densidad de pinos y encinos. Nada se sabe, nada se ve y nada puede hablarse. Sólo me queda charlar sobre la sequía que azota esa región central de México. Y en su balbuceo están todas las aclaraciones. Cada vez que traga saliva al pronunciar la palabra “agua” está dando toda la respuesta: la matanza tenía por objetivo usurpar el manantial, indispensable para regar los cultivos de amapola.

La amapola

ZONTECOMAPA | GUERRERO

*Azúcar morena, ¿cómo es que sabes tan bien?
Ah, baja, azúcar, como una jovencita debería bajar...
Ah, venga, venga, azúcar marrón, ¿cómo es que sabes tan bien?
Ah, venga morena, azúcar morena, muévelo todo.*

*ESTROFA DE BROWN SUGAR,
canción de los Rolling Stones sobre la heroína*

De Plan de Ayala a Zontecomapa tardamos una hora en recorrer 15 kilómetros. La abrupta orografía de la Montaña de Guerrero no logró impedir que el apogeo de la amapola y recientemente del aguacate la dejaran al desnudo. Sus lomas calvas se resquebrajan con facilidad ante los pasos de temporales cada vez más virulentos. El agua cae con fuerza y resbala con furia. Lo llaman desastre natural, pero la acción humana, la codicia o la necesidad, hacen el resto.

El millar de habitantes de Zontecomapa lleva ocho años a la espera de que reconstruyan el puente y la escuela sepultados por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, que dejaron 157 muertos. Más que las tormentas tropicales, fue la avalancha de piedras que rodó por el río desbordado la que se llevó por delante los cultivos de maíz y las edificaciones de la parte baja del pueblo. La mitad de la aldea tuvo

que trepar por el cerro donde ahora habitan colgados de un terraplén en barracones variopintos, como si la pintura los fuese a salvar de otro deslave. Justino vive con su esposa y sus dos hijos en una estancia azul. “Creció el río y se llevó todos los árboles de la orilla. El agua se tapó y se hizo grande. Olía a quemado y salía humo del agua —por la fricción de los gigantescos pedruscos—”. Así describe el chico de 28 años “el día que brotó el infierno”, un alud propiciado por la tala desmedida para plantar el “oro rojo” que alisó durante décadas el suelo hasta dejarlo como un tobogán.

La familia vendió su coche y todos los objetos de valor para construirse una casita de latón donde guarecerse durante dos años hasta recibir la ayuda del gobierno. Los fondos para la reparación cubrieron una minúscula parte de los daños causados por los ciclones a 200 mil damnificados. Las ayudas llegaron a esta región tlapaneca —“cara sucia”, término nahua peyorativo para denominar a su etnia rival— tan remotos como sus comunidades, arrinconadas a las faldas de La Montaña tras siglos de exclusión.

Justino se aferra a la amapola. Ha rayado desde los nueve años, cuando su padre salía a la ciudad y su madre lo mandaba a campos ajenos. Ahora ya posee cuatro hectáreas. Si uno no *hace el guache* (el vago), como dice, se gana unos 40 mil pesos (dos mil dólares) cada tres meses: lo suficiente para mantener a sus pequeños Irwin y Mari Cruz, de ocho y tres años, y hasta comprar una máquina para preparar tortillas de maíz, una dicha difícil de ver en otras zonas rurales. En el cobertizo tiene un rimero de bulbos secándose al sol para luego extraer las semillas. El joven amapolero se encoge de hombros al preguntarle por el cambio climático o la deforestación. Sus ancestros preveían las inclemencias ambientales con solo mirar las nubes, pero la naturaleza se ha vuelto más caprichosa últimamente. Eso sí lo sabe. Después de los ciclones de 2013, un temblor resquebrajó

la nueva escuela en 2017, y dos años más tarde la tormenta Narda derrumbó parte del muro que cimentaban para encauzar el río. La ausencia de puente obliga a sus hijos a caminar más de una hora para ir al colegio y les imposibilita salir del pueblo cuando llueve.

La creciente imprevisión de las precipitaciones tampoco ha contribuido a la siembra de amapola, porque si se moja, la goma de opio sale muy aguada. El cielo se empieza a encapotar y Justino sale disparado en moto hacia la parcela donde raya. Se arrastra pendiente abajo hasta las matas más crecidas, como de un metro. Sujeta el bulbo con delicadeza con la mano izquierda y con la otra, realiza tres incisiones quirúrgicas con una pequeña cuchilla. Las cicatrices de sus dedos demuestran la dificultad de esa operación. Otro compañero aprieta ese bulbo y con un sutil giro de muñeca frota media lata de refresco para recoger la savia, como un yogur espeso. El propietario del terreno nos pega un grito desde la carretera. Hay cierta psicosis entre los amapoleros de que, tras aparecer su cultivo en un medio de comunicación, el ejército lo ubique y pase a fumigarlo. Los helicópteros rocían el veneno indiscriminadamente, no sólo sobre la flor roja, sino sobre los plantíos de subsistencia y sobre la misma población. En la media hectárea de Marcelino Santiago también crece un poco de maíz, frijol y calabaza. “Lo destruyen todo. La amapola es para comprar la ropa, jabón, material de la escuela... no para ganar mucha lana (dinero) o comprarse autos”, lamenta Marcelino Santiago recostado en su descompuesto camión de estacas.

La planta para la elaboración de la droga más cara del mundo es la única alternativa de aliviar algo las duras condiciones del segundo estado más pobre de México, donde 7 de cada 10 familias viven en la miseria. En temporada de lluvias les darán unos cinco pesos (25 céntimos de dólar) por gramo de goma, la mitad de lo que ganarían en época

seca. Aún así, le conviene tres veces más sembrar la adormidera que maíz. Además, a diferencia de otros productos, su derivado puede guardarse a la espera de que se revalorice. Cuando el precio alcanzó su pico, a unos 26 pesos (poco más de un dólar) el gramo, allá por el 2017, un agricultor mediano podía embolsarse medio millón de pesos (unos 25 mil dólares) al año con cuatro cosechas. De esa bonanza se levantaron segundos pisos y balastradas que sobresalen entre las casuchas desportilladas. Bajaban a comprar televisores, muebles y abultadas despensas a Chilpancingo, la capital del estado, que hacía su agosto en mayo tras la recolecta. Nadie sembraba maíz, todo era amapola.

Ninguno recuerda cómo llegó la semilla hace unas tres décadas, cuando se cambiaba la goma de opio por huevos, pero todos coinciden en la causa del desplome del “oro rojo”: la sustitución del consumo de heroína por fentanilo en Estados Unidos, su principal mercado. El tráfico del opiáceo sintético, 50 veces más potente que la heroína, más barato y más difícil de detectar, se ha multiplicado en los últimos años. Este anestésico está presente en más de la mitad de las drogas sintéticas y en 2022 causó unas 110 mil muertes en el vecino del norte: 300 al día.

“Lo que el fentanilo hizo en unos pocos años (reducir los cultivos de amapola), no lo hizo el ejército en medio siglo”, se jacta Marcelino. Los castrenses siempre fueron el adversario por estas latitudes. Ante las emboscadas de los pobladores a sus tropas, el gobierno optó por la fumigación aérea. La bajada del precio de la adormidera y la presión de las autoridades provocó una disminución de la producción. Frente a esa crisis, cada vez regresaban menos de las familias de Guerrero, que históricamente migraban a Sinaloa para la temporada de cosecha de jitomate, hortalizas o amapola, y que recientemente preferían brincar a Estados Unidos con lo que ahorran en un par de estaciones. Pero, antes de

salir de la Montaña, debes hacer tu labor comunitaria: saber rayar la amapola, ley y religión. Esa experiencia de los rayadores guerrerenses se valora en el Triángulo Dorado — la densa cordillera entre Chihuahua, Sinaloa y Durango —, donde los sembradíos de amapola siguen aumentando pese a todo, donde se ocultan vastas extensiones de marihuana, laboratorios de drogas y las guaridas de los narcotraficantes más buscados. Varios líderes sociales del estado, presos políticos, habían compartido celda con el Chapo Guzmán y otros capos, lo que terminó de estrechar lazos.

El grupo de amapoleros entra en confianza y empieza a contar algunas de esas batallitas en el norte, con los que sugieren como narcos buenos, los que pagan, tratan y visten bien. Y no matan, que ellos sepan. No como los de aquí, los miserables que se meten a sicarios. Hasta me guasean para que le dé una chupadita al látex. Se me duerme la punta de la lengua al instante. “¿Hay laboratorios de fentanilo cerca? ¿Podemos ir?”. Aprovecho la distensión. Varios señalan con la cabeza hacia una misma cima. El resto considera que es momento de terminar la conversación y movernos. La tienda de abarrotes tiene algunos refrescos, dulces, bolsas de papas, muchas cervezas y pilas de ovillos de manguera, que también se acostumbran a ver mucho en las bateas de las camionetas. Cualquier ocasión es buena para enterrar un tubo en algún suelo empapado y conectarlo hasta el campito de flor roja.

La caída de las ganancias y la demanda de jornaleros, sumado a un excedente de resina, orilló a muchos jóvenes al consumo de heroína fumada; caldo de cultivo para el reclutamiento del crimen organizado y su rápido avance. “Ahora ya manejan los sicarios, ellos ponen el precio como les da la gana. Han secuestrado familiares esa gente mala de los sicarios”, tartajea el comisario, “las paredes escuchan, ya no sabes con quién estás hablando”. Los delincuentes ya no son

foráneos, sino los mismos muchachos de la comunidad. A finales de 2020, hallaron en una cuneta de Chilapa —municipio regentado por Los Arillos— los cuerpos de cuatro comerciantes de Zontecomapa. Su escudo es la cadena que sueltan por las noches en su carretera de entrada. La mejor defensa es aceptar las imposiciones de los enfusilados. “El gobierno sólo llega a La Montaña para arrasar nuestros cultivos”, lanza uno de los campesinos. Pero, su modo de vida, la amapola, ya no es tan rentable, así que los cárteles de la región han buscado otras fuentes de ingresos como el cobro de tributos por hectárea, transporte de mercancías, a la comisaría, tiendas, a la peluquería, por la venta de dulces, el agua... prácticamente por todo. Es decir, el conocido como narco —que ya no es narco, porque dejó de dedicarse al tráfico de drogas— domina la economía local y, por tanto, es la autoridad de facto.



La trocha se empedrega, se inclina y se humedece. Sus curvas cerradísimas suben y bajan la montaña hasta marearnos. Sólo se distingue la altura por lo lejos que se escucha el río y se temple el hálito. Los primeros indicios humanos son algunos letreros del gobierno federal que anuncian los fondos otorgados en Azinyahualco para proteger ese pulmón de Chilpancingo. Sus habitantes se dedican a la siembra de amapola, pero no beben alcohol, porque son evangélicos. La selva nublada guarda tantos secretos como contradicciones. Desde uno de los desmontes desprovisto de pinos se desliza la serranía de vértigo. El sol despeina las cimas, mientras algunas nubes solitarias bajan a tomar agua.

Varios obreros pavimentan una de las tremendas cuestas. Seguimos a pie. Las paredes del cerro sudan, su oxidación

indica que contienen minerales. Las rocas crepitan como si en cualquier instante se fuesen a desprender. El eco del manso caudal resuena en cascada. Las peñas esparcidas por los maizales se confunden con jornaleros encorvados. Pero, no vemos a nadie en kilómetros. Una silla de concreto insertada en lo alto de un risco junto a un tronco de mástil sirve de torre de guardia. Nos cruzamos a varios campesinos con escopeta al hombro y walkie-talkie, imprescindible para comunicarse en La Montaña. Sin importar cuánto caminemos, todos nos dicen que el pueblo queda “detrás de esa curva, a unos 10 minutos”, lo que finalmente se traduce en una hora.

En El Fresno manda supuestamente la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), una de las muchas autodefensas. Nos recibe un tal René y dos muchachos jóvenes, desaliñados, nada que ver con las formalidades de otras comisarías. Ninguno usa una camiseta o distintivo que los identifique como policías comunitarios. Mejor ni preguntar, por si a caso, por si pertenecen a otro grupo, por si anoche decidieron unirse a una banda delictiva, por si hay infiltrados... no hay manera de catalogar con precisión las comandancias, que suelen vincularse al caudillo que les brinde mayores recursos, dinero y armamento. Tienen para escoger: en Guerrero operan al menos 14 grupos armados locales y tres cárteles internacionales.

La ropa estirada sobre los tejados de lámina colorea el altozano y el centenar de barracas que en su traspatio tienen algunas matas de amapola. René desconfía de nosotros, insiste en que las plantas no han crecido y torea durante varias horas cualquier pregunta sobre la flor roja, pese a contar con la autorización de su superior y haber mantenido contacto previo durante varias semanas. El encuentro se había enrarecido desde el comienzo, cuando nadie vino a recogerlos como lo habíamos pactado. Es hora de irse lo antes posible. De regreso nos adelanta un muchacho con

un fusil de asalto G36, marca Heckler & Koch, el fabricante alemán que exportó ilegalmente a México armamento utilizado por algunos policías la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es una forma de intimidación. Nuestra presencia ya no es bienvenida tras la escueta y áspera visita, y seguramente así lo han transmitido por sus radios. Los comuneros que reparaban el camino, quienes por la mañana nos habían saludado efusivos, ahora ni nos miran. Contenemos la respiración hasta topar con la carretera asfaltada.

Las sinuosas brechas que abrieron los madereros para sacar los rollos clandestinos ahora son utilizadas por el narco con la misma finalidad, pero con sacos de goma de opio o marihuana. El trayecto es otro muestrario de la ausencia del Estado y el abanico de grupos armados; letreros con alusiones de defensa al pueblo, hombres con escopetas en el porche de las comisarías, que a menudo se autodenominan policías comunitarias para blanquear su accionar delictivo, como hicieron los 300 *ardillos* que en 2015 asaltaron Chilapa y desaparecieron a una treintena de personas ante la impasible mirada de la fuerza pública. “Los Arditillos tienen un territorio muy definido y una base social importante. Hacen partícipes a las comunidades de sus recursos ilícitos, eso genera empatía entre una población empobrecida. Les dan su *modus vivendi*”, reflexiona el secretario estatal de seguridad pública. De esa manera habían movilizado a centenares de pobladores para incluso repeler el despliegue de convoyes militares. “Las poblaciones de Guerrero quieren a su propia gente (bandas locales), no dejan que se metan de fuera, ni otros cárteles ni la fuerza pública”, añade. Tampoco las autoridades dedicaban demasiados esfuerzos en atender esas comisuras rurales, a sus ojos, ciudadanos de segunda.



El río Balsas forma un espejismo de paraíso en la Sierra Madre Sur de Guerrero, en el centro del estado. Sus frondosas colinas embeben de uno de los raudales más largos de México. El oasis termina en el primer destacamento de soldados que resguarda la presa El Caracol, que surte de electricidad a las mineras canadienses de la zona y cuya obra desplazó en los ochenta a quienes allí habitaban. Casi medio siglo después la historia se repite. Los 600 habitantes del Nuevo Caracol, a tan sólo 10 kilómetros, se desplazó en mayo de 2023 por los constantes ataques con explosivos lanzados desde drones; artefactos de fabricación casera con poco alcance, pero gran capacidad de generar terror extremo. Tan sólo regresaron la mitad, pese a los bombardeos y los balazos que llueven desde la ladera, que agujerearon varias paredes, el techo de la cancha y las ventanas de la escuela, que suspendió clases por falta de maestros ante la inseguridad. Los niños distinguen los calibres de los puñados de cartuchos que recogen, su nuevo entretenimiento. Han visto más proyectiles que libros en los últimos meses. Varios hombres armados hasta con granadas rondan por las calles o se parapetan en casas abandonadas. Una cuarentena de comunidades de Tierra Caliente, una de las regiones más violentas del país, se alzaron en armas contra La Familia Michoacana, la banda delincriminal que les asediaba, según ellos, para apropiarse del tráfico de madera, proyectos mineros y del agua. “El ejército defiende la presa y los sicarios defienden al pueblo”, señala el sacerdote Filiberto Velázquez, con el que viajó escoltado por dos patrullas de la policía estatal. La única forma y con la única persona viable para sortear toda la zona de influencia y retenes de La Familia Michoacana, que pretendía incursionar hacia el Cinturón de Oro, un fructífero arco minero. El padre Filiberto habla siempre de disputa, porque del otro lado, a los *sicas* de Los Tlacos que blindaban la comunidad, les movía

el mismo interés; cobrar pequeñas comisiones a los trabajadores de la mina. El conflicto en esta sierra ha recrudecido sus motivaciones y sus técnicas. Los pobladores colocaron varias barricadas en el puente y obstruyeron el otro camino de acceso con un montón de cascajos. El Nuevo Caracol se encuentra aislado, sin poder abastecerse. Por eso Fili les lleva algunos víveres y libretas. Los niños aprovechan esa tarde para bañarse en el río, después de varios días confinados. Las brazadas y los chapoteos son lo más cercano a la libertad que pueden sentir. El infierno volvía a disfrazarse de paraíso mientras el sol se escondía y aterciopelaba el paisaje. El río centelleante siguió su curso ajeno a lo mundano.

El cura que negocia con los narcos

MEXCALTEPEC | CHILAPA

Las amapolas son hierbas muy frágiles cuyos pétalos se caen fácilmente al más ligero soplo de viento. Sus flores solitarias y terminales vibran al son de la perenne brisa montañera.

“Moisés... Nissan Frontier blanca... camisa blanca con bordados y pantalón marrón claro... con tres personas, uno de ellos periodista extranjero... cada dos horas, por favor... Moisés”.

Filiberto Velázquez oprime el botón de pánico que cuelga de su cuello para finalizar la llamada; la única medida de seguridad que le brindó el gobierno tras ser interceptado e increpado por una turba de la CRAC-PF, las siglas de otra de las innumerables policías comunitarias de nombres rimbombantes: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores. Sólo pudo zafarse escoltado por elementos de la policía estatal, los mismos que de nuevo nos acompañan hacia las entrañas de La Montaña Baja. El lampiño padre, corpulento y de amplias mejillas, debe reportar al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos cada salida de la ciudad que comporte cierto peligro. Cada vez que se prende un cigarrillo

bromea si a dios le molestará más que fume o que suelte el volante para encenderlo. Al capellán de 39 años, originario del Estado de México, la labor clerical es la que menos le importa, es apenas un canal para la ayuda humanitaria y el activismo; una llave a ciertos contextos de vulnerabilidad.

Estudió Filosofía en Estados Unidos desde 2010 y regresó a su país natal siete años después para involucrarse en el movimiento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ayudó a tramitar el asilo a algunos familiares de los desaparecidos. Tras el asesinato de dos párrocos en 2018, se dio cuenta de que para acabar con la violencia en Guerrero hacía falta mucho más que “aceptar al otro”, como le habían enseñado en los seminarios de la Saint Johns University de Minnesota. Se arrimó al obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, conocido por su amistad con Los Ardillos. “En un estado donde manda el narcotráfico, ponen a sus alcaldes, los funcionarios están a su servicio, no es con los políticos con quienes hay que negociar, sino con los cabecillas”, justifica Filiberto, mediador en la liberación de varios secuestrados. “Hay dos opciones: poner una denuncia y que no suceda nada, o contactar al jefe de plaza y rogarles piedad”.

Timbra el botón de pánico. “Moisés... sí... sí... sí... sí, gracias... Moisés”.

El audaz cura ha sentido más pavor por el gobierno que por el crimen organizado. Ha recibido amenazas veladas de ambos y hasta de su patrón. El obispo le agarró un día literalmente de los pelos frente al alcalde de Chilapa y le reprendió por su respaldo al partido contrario: “Ya le dije a este cabezón que hay que seguir trabajando por la pacificación. Si entran los otros (el cártel de Los Rojos), se pondrá esto como antes (de que invadiesen Los Ardillos)”. Una advertencia que no dice nada y lo dice todo; que el dirigente político está coludido con un grupo armado, también apoyado por el poder eclesiástico, que el candidato de

la otra formación tiene alianzas con los rivales, que todos se inmiscuyen en la campaña electoral y sobre todo que todo se resuelve con la intimidación. La anécdota traza la idiosincrasia de muchas de las regiones rebañadas por la criminalidad. “Ya me han preguntado por ti (Los Ardillos) y les he dicho que cooperas por aquí”, le dijo en otra ocasión.

La sotana de Fili es su chaleco antibalas. El ego es su analgésico contra el horror. A través de su centro de Derechos Humanos “Minerva Bello” acompaña cuantas causas sociales toquen a su puerta, sin discriminación por el bando criminal que esté implicado. Eso le ha generado el recelo de todos y a la vez es el argumento más efectivo que puede esgrimir para sobrevivir. ¿Por qué arriesgarse? Por ayudar y también por el reconocimiento, la satisfacción personal, la adrenalina. Lo mismo que respondería un sincero reportero o un trabajador humanitario.

Se prende otro cigarrillo al desviarnos de la carretera asfaltada y enfilar terracería. De nuevo, el susurro del río es el solo indicio de que hay algo más que árboles. El agua nos calma hasta avistar un par de niñas que atizan con una rama a un rebaño de cabras. Se cubren el rostro al rebasarlas. Estamos cerca. A diferencia de los pueblos aledaños, que se instalaron en el fondo del valle, el conjunto de casuchas de Mexcaltepec se sitúan sobre una loma. La placita repleta de hoyos y montoneras de tierra aguarda los recursos públicos de una obra inconclusa desde hace tiempo. Se oye el chirrido de las ollas y algún grito de niños acallado inmediatamente por sus madres. Las cuatro calles del pueblo no están desiertas por la hora del almuerzo, sino por nuestra llegada. Los pocos y las pocas que se atreven a dar la cara, nos esperan en el soportal de la comisaría municipal. A mediados de 2020, los vecinos de Alcozacán los conminaron a incorporarse a su policía. “Decidimos por asamblea que no queríamos unirnos. No tenemos ni para comer, menos

vamos a andar con armas. Colegas de otras partes nos avisaron que entrar a la comunitaria daba mucho problema”, se adelanta el encargado de la unidad de riego. Como castigo por su rechazo y como forma de presión, los integrantes de la CRAC-PF les rompieron el pozo y vandalizaron el manantial taponándolo con piedras. Los 300 habitantes de Mexcaltepec se quedaron sin su principal fuente hídrica.

Las mujeres deben ahora bajar y subir la pendiente y buscar agua durante más de una hora cuando el riachuelo se marchita. Tres de ellas, de blusa y falda relucientes, se agarran el delantal de cuadros al agacharse para llenar la cubeta en el palmo de torrentera agitada por las piedras. Cuando se les termina, no les queda más remedio que utilizar la que brota cerca de sus casas, sucia, con lodo rojo. “Los niños se enferman mucho, porque a veces no tenemos agua para tomar o para cocinar. Las viejitas también sufren mucho, porque tienen que ir muy lejos para lavar su ropa y cargan mucho peso. Cuando se pone peligroso, ni siquiera podemos ir a buscar (agua)”, cuenta Rosalía.

La otra opción que les ofrece la CRAC-PF para autorizarles el suministro de su propio manantial es pagarles 40 mil pesos (dos mil dólares) anuales; una cantidad impagable para estos campesinos. Durante la época seca la mitad de los adultos varones se han visto forzados a migrar a los campos del norte, porque sólo han podido sembrar tantito en un período de lluvias cada vez más acotado. Filiberto asesora legalmente a Mexcaltepec para denunciar el abuso y solicitar auxilio. El encargado de la unidad de riego muestra varias fotografías del pozo destrozado que adjuntaron en el expediente. Se acomoda obsesivamente el sombrero Marlboro. “Colocaron un alambre para cercar el manantial. Es fácil cortarlo, pero no queremos meter mano por miedo. Nos amenazan que si vamos por agua, nos van a detener y a multar”, asegura. Tres días después de nuestra

visita, ejecutaron a un lugareño en esa vereda. La policía comunitaria de Rincón de Chautla los ha convocado reiteradamente a reuniones que rehúyen por temor a no regresar. “El miedo es una generalización cuando vives en un narco-estado y sabes que tu trabajo conlleva un riesgo. Esa situación te hace bajar el *switch* (apagar) del miedo para poder continuar”, zanja Filiberto.

“Moisés... sí... sí... ya no requiero que me sigan dando seguimiento... sí, gracias... Moisés”

La señora de la escopeta

AYAHUALTEMPA | GUERRERO

La historia cuenta que las primeras semillas de amapola las trajeron a finales del siglo XIX los trabajadores chinos que huyeron de las minas de cobre de Baja California Sur hacia Sonora y Sinaloa. Cuando en la Segunda Guerra Mundial se disparó la demanda de morfina para las tropas, Estados Unidos acordó con México que su materia prima se iba a sembrar en la serranía de Sinaloa, donde lo que germinó fue la narco-cultura.

Sus piernas son tan delgadas como la escopeta de salón que porta, pero aguanta firme el paso al pelotón de jóvenes con quienes patrulla. A sus 72 años, Escolástica Luna todavía tiene balas en la recámara y quiere morir de pie. El rocío de la Montaña Baja de Guerrero se clava en los huesos de La Señora, como la conocen, que apenas usa huaraches y un vestido fino cubierto por un mandil. Ni siquiera se tapa con el fular rojo que cruza su indumentaria tradicional de vivos rosados, verdes y bordados naranjas.

La primera vez que esta mujer nahua salió de su poblado fue en mayo de 2006 para llevar al hospital a un hijo herido de bala. La segunda vez que pisó la ciudad fue días después, para ir a la cárcel a pedir explicaciones por dos de sus hijos, detenidos junto a otros seis vecinos. El resto de hombres de Rincón de Chautla tuvo que huir para eludir el mismo destino y entre el centenar de habitantes tan sólo quedaron mujeres. La nombraron a ella para tomar las riendas, porque era la más aguerrida, la que más había gritado frente a

los policías. “Nos decían que nos íbamos a morir de hambre. Pero tenemos manos, pies, podemos trabajar. Las señoras empezamos a cultivar la mazorca y nunca nos faltó qué comer”. Blande su mano izquierda mientras con la derecha empuña la culata del arma de caza.

Aquella mujer escuálida, alta, de venas y arrugas marcadas, no se limitó a arar y cuidar el ganado, sino también a exigir al ayuntamiento mejoras en la rampa de acceso, láminas para los tejados, un enfermero y un maestro. Cuando al alcalde de Chilapa le preguntaban por qué Rincón de Chautla tenía una cancha tan bonita con techado y gradas, respondía que La Señora le había seguido a todas partes para insistirle, a diferencia de otros comisarios que sólo entregaban los papeles y se desentendían. Escolástica pasó de ser ama de casa a dar mítines y abanderar marchas en Chilpancingo, Acapulco y Ciudad de México.

Sus hijos salieron de la cárcel en 2008 tras ser acusados de un homicidio jamás comprobado, cuyo proceso dilataron casi tres años, el tiempo suficiente para desarticular su movimiento social. Varios poblados aledaños se habían unido a grupos delictivos y tras seis años de conflictos, crearon la CRAC-PF. Sí, ésa que en otros lugares acusaban de extorsionadora y asesina. Los buenos y malos de la historia dependen de quienes cuenten esa historia. El bien y el mal es un jeroglífico absurdo de descifrar entre la maraña de grupúsculos armados de estas montañas. ¿O todos son malos? ¿O todos son buenos? Todos se arman para defenderse de alguien y probablemente todos en algún momento confunden ese objetivo con la ambición de obtener más poder e ingresos. Todos maman de la pobreza, el abandono y la enquistada espiral de violencia. “Las localidades que ya estaban controladas por el crimen nos negaban el permiso para cortar un poco de leña de uso doméstico, pero ellos cargaban camionetas enteras de troncos. Se apoderan de todos los recursos naturales para sacarle más beneficio

y dominar a la comunidad. Ya no podíamos agarrar agua sin más, teníamos que pedirselo a ellos (los delincuentes)”, alega La Señora sobre el surgimiento de la CRAC-PF, una escisión de la CRAC-PC.

A comienzos de 2019, la policía comunitaria emboscó y mató a una decena de *ardillos* cuando se dirigían por la mañana a su puesto de guardia en el cruce de entrada a Rincón de Chautla, cuyo letrero de bienvenida quedó como un cenicero. “Ahorita van a llover balas, los vamos a terminar, no va a quedar ni huella”, escuchó la anciana en la tarde por las conversaciones de radio entre sus enemigos, mientras 15 camionetas descendían por el empinado cerro hacia lo hondo, hacia la población. Una ratonera sin salida. Los sicarios vaciaron sus cargadores por doquier, sin embargo, en el enfrentamiento no hubo bajas de los comuneros y sí dos fallecidos de Paz y Justicia, la pseudo-autodefensa de Los Ardillos. Los de la CRAC-PF han recibido adiestramiento militar de antiguos guerrilleros y han desarrollado una gran puntería de disparo, indispensable para combatir con sus rudimentarias escopetas monotiro. “Tenemos que reservar mucho el parque (munición), porque está cada vez más difícil de conseguir y nos cuestan cinco veces más, como todo lo demás”, indica Escolástica, ufanada de haber sobrevivido a la refriega.

Los Ardillos emprendieron entonces una estrategia de asfixia. Los pobladores de Rincón de Chautla no podían salir a comerciar debido al cerco de los rivales. La escasez de enseres se acentuó, porque los vendedores de los municipios próximos, zonas de influencia ardilla, inflaron los precios. El maestro y el enfermero se marcharon.

La CRAC-PF puso a desfilar a una veintena de menores armados para llamar la atención de las autoridades ante la pasividad a cuatro meses del intento de invasión del cártel. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y esa misma semana de mayo de 2019 acudieron a la comunidad representantes

de todos los niveles de gobierno. El show mediático, sin embargo, no se alejaba tanto de la realidad. Varios muchachos de 8 a 12 años juegan a las canicas en uno de los repechos del monte. Cinco de ellos portan escopetas calibre 12 y la camiseta verde oliva con las insignias de la comunitaria. Ocultan las caras con paliacates rojos, negros y algunas gorras Monster, la marca de bebidas energizantes. Uno de ellos carga una canana. Los niños cuidan el ganado desde lo alto, avizoran que nadie robe las ovejas. Como cualquier otro campesino, ellos también deben meterse al campo preparados. “El delincuente puede salir de algún lado y atacarnos, tenemos que estar armados para defendernos. Así ya no tenemos miedo”, asegura tímido Valentín, el mayor de todos. Aprendió a disparar a los 10, cuando a uno de sus amigos lo atacaron en el bosque. “¿Preferirías estar en la escuela?”, le pregunto. “Me gustaría estudiar, pero no se puede, porque al ir a la escuela puedes encontrar a alguien y te puede secuestrar. Por eso ya no vamos a la escuela”. Hace un par de años mataron a un leñador al lado de la Secundaria de Valentín e incendiaron un colegio en la comunidad contigua.

Después de presentar en público a los “niños soldado”, el gobierno envió de nuevo profesores y construyó unas aulas. Se hizo válida la máxima de que “en la Montaña de Guerrero, todo se logra a tiros”. Esta vez no hizo falta jalar el gatillo, pero la presión también sirvió para que se desplegaran varios retenes de la Guardia Nacional, aunque sin demasiado resultado, porque a los seis meses ejecutaron a 10 músicos de Alcozacán, feudo de la CRAC-PF. “El gobierno dice que no es bueno que las mujeres y niños se organicen, pero el grupo delictivo viene también a por mujeres y niños. No hay que tener miedo a agarrar un arma. No es para matar a un inocente, es para cuando nos vengán a atacar. Cuando los sicarios entran a una comunidad y terminan con todos los hombres. ¿Si ya mataron a los maridos, quién nos va a

defender? Nosotras mismas nos vamos a defender”, alienta Escolástica a otras mujeres en la cancha de Ayahualtempa, la comunidad donde ella, sus hijos y parte de la CRAC-PF se ha refugiado ante la estrangulación del crimen en Rincón de Chautla.

Las ventanas de adobe exhalan el humo de las cocinas de leña que hacia el mediodía empiezan a guisar unos platos que nunca saben si tendrán comensal; el menú diario de nerviosismo de las mujeres ante la duda de si regresarán sus maridos e hijos de la siembra. Ayahualtempa tiene 14 huérfanos y acoge a 34 familias desplazadas. Es uno de los últimos reductos de la CRAC-PF. Parejas de comunitarios pasean por las gredosas calles escopeta al hombro. Los pobladores sólo pueden moverse a pie a través de la densa pineda, por donde los delincuentes raramente se adentran. “Es nuestra única forma de salir de la comunidad. Los Ardillos no caminan por ahí. Los jóvenes se meten a sicarios y se olvidan del monte. Sólo utilizan carreteras principales”, apunta la septuagenaria, que no se ha sentado en todo el día. Hacia las dos de la tarde me recomiendan irme, porque los criminales redoblan los rondines y supervisan todos los vehículos que van y vienen de esa trinchera contraria. Hace poco mataron al comisario de una ranchería cercana.

La Señora decidió tomar las armas tras el ataque a Rincón de Chautla en 2019 y participó en un entrenamiento militar junto a otras compañeras de avanzada edad. En sus seis años de lucha, o existencia, la CRAC-PF apenas acaba de lograr un programa del gobierno federal para que les compre el excedente de maíz, que les resulta imposible vender ante el bloqueo para sacar sus mercancías. Pero, nada le borra la desdentada sonrisa a Escolástica, capaz de asimilar una muerte por decapitación: “El gobierno nunca ha venido a defendernos. Ya no necesitaré su apoyo si sólo van a venir a recoger mi cabecita”.



La sed embotellada de Puebla

La defensora de la vida

JUAN C. BONILLA | PUEBLA

El acocil es un diminuto crustáceo endémico de México, muy parecido al camarón. Formaba parte de la dieta de los pueblos prehispánicos y suele comerse en salsa de chile guajillo. La contaminación de los ríos lo ha puesto al borde de la desaparición.

Un enorme cráter se abrió misteriosamente en Puebla en mayo de 2021. El agujero de 126 metros de diámetro y 45 metros de profundidad, como un estadio de fútbol, no fue producto de un volcán, sino de la sobreexplotación del agua subterránea por parte de fábricas y de la agroindustria. La Conagua esgrimió, en un inicio, que el repentino hundimiento se debió a causas naturales, sin detallar cuáles. Varios estudios averiguaron que la absorción en exceso del líquido arrastró las arcillas que compactan la tierra y, al pasar de la sequía intensa a fuertes precipitaciones, el suelo se vino abajo. La Tierra exhibía de ese modo dantesco la crisis hídrica en la región, pero, en lugar de generar conciencia, sirvió de atractivo turístico durante los meses posteriores.

En Juan C. Bonilla, a las afueras de la capital del estado, miran el socavón con preocupación. “A mí no me dejan cavar otro pozo y para las grandes compañías no hay límite”, se queja Francisca. A la mujer de 67 años le queda

fuerza, pero no paciencia, para estirar la cuerda hasta ocho veces hasta que asoma la cubeta de agua de la noria que tiene en su traspatio. Hace un año era peor, tenía que dar 14 jalones para sacar los 10 litros de agua que bebe y usa para bañarse a diario. Sus hijos se encargan del resto, para lavar los trastes, fregar el suelo y refrescar al corral de cabras y gallinas.

Todo cambió el 8 de agosto de 2021. Un millar de personas ocuparon la embotelladora Bonafont de la localidad para frenar lo que definen como un saqueo. La planta extraía 1 640 mil metros cúbicos de agua diaria, equivalente al consumo de más de cuatro millones de mexicanos, sumados a los tantos miles de litros para limpiar los garrafones. Los manifestantes llevaban cinco meses en un plantón indefinido frente a la empresa y el enésimo desaire de las autoridades, que rechazaron cualquier reunión, tronó el enojo y terminó en el asalto.

Lo primero que vieron al entrar al recinto fue una placa conmemorativa al descubridor de la abundancia de agua en ese punto, quien inauguró en 1992 la embotelladora Arco Iris, adquirida 12 años después por el grupo Danone. También había una vitrina con una varita de madera que los llamados rascadores emplean para golpear el suelo y, dependiendo del sonido, percibir si hay agua. En la sala de juntas todavía estaba el pastel que iban a comerse los directivos para festejar el Día Mundial del Agua, esa misma tarde, justo antes de salir corriendo por el avance de la marabunta.

Francisca acudía casi a diario para llevar varios tazones de ensalada de atún que alimentaban la resistencia. “Desde entonces noté que llegaba más agua a mi pozo. Estaba contenta”, dice. Se hizo amiga de los ocupantes que, como ella, eran de origen cholulteca y provenían de varios pueblos de alrededor. Le ponía feliz sentir el entusiasmo con el que se realizaban los talleres agrícolas, de costura, comunicación...

y estaban a punto de abrir un canal de televisión por internet cuando, la madrugada del 15 de febrero de 2022, medio centenar de patrullas policiales y de la Guardia Nacional rodearon el perímetro y desalojaron a las 15 personas que pernoctaban. Francisca se desveló por el ladrido de los perros. Uno de los compañeros venía a avisarla, porque ella nunca usa celular. Al llegar a la planta, la fuerza pública había desplegado un cordón de 100 metros y francotiradores en la azotea, por si el operativo se salía de control. “Sentí coraje, rabia, indignación”, comenta.

Desde esa noche hizo suya la protesta y por eso cubre su rostro con un paliacate rojo y un sombrero de paja, que la protegen del sol y de cualquier reprimenda. Francisca no es su nombre real. “Esto lo hago por toda la represión a través de grupos de choque (matones). Ellos no han hecho calumnias, nos han ofendido, golpeado, para intimidarnos—, asegura —quieren hacer creer a la gente que somos delincuentes, cuando nuestro único delito es defender la vida”. Al decir vida se refiere al agua. Y cuando dice ellos, a los tres niveles de gobierno y a la empresa Bonafont. Cuando el colectivo Pueblos Unidos se presenta en las oficinas de diversas instancias estatales para pedir explicaciones, los funcionarios les piden sus identificaciones, les quitan el celular y los pasan a una sala de reuniones donde les dicen que ya los conocen y saben dónde viven. Todo esto, según Francisca, para intimidarlos.

La mujer me acompaña hasta la Bonafont, pero se queda a unos 100 metros. No quiere exponerse demasiado. La trasnacional francesa blindó su fábrica con dos vallas de concertinas, potentes focos de luz y varios antidisturbios armados que, al acercarme con la cámara, me graban con sus celulares desde la azotea. Se esconden detrás de algún muro cuando los veo. Danone rechazó mi solicitud de entrevista y me remitió a un comunicado que explica que el

único pozo de extracción opera a 130 metros de profundidad y, por tanto, esto no impacta en las aguas someras que surten a los primitivos pozos de las comunidades. “El volumen concesionado representa el 0.09% de la disponibilidad de agua para uso industrial del acuífero del Valle de Puebla, el cual, de acuerdo con reportes oficiales, tiene un balance hídrico positivo, es decir, no presenta sobreexplotación alguna”, argumenta la nota. La compañía descartaba retomar las operaciones a mediano plazo debido a “la vandalización del pozo, los daños en las máquinas de producción y a la falta de condiciones sociales”. En septiembre de 2022, cuatro meses después de esa carta y de mi visita, Bonafont reabrió la planta como depósito de distribución de garrafones, sin restablecer la extracción.

El negocio es redondo y multimillonario, sobre todo en México, que desde 2020 es el mayor consumidor de agua embotellada del mundo: 286 litros por persona del líquido en plástico. En otras palabras, los mexicanos gastaron más de 28 mil millones de pesos (un billón y medio de dólares), repartidos casi todos en unas pocas empresas extranjeras, como Danone, Coca Cola y PepsiCo. Y el consumo y su precio van en aumento. La falta de regulación federal en el suministro y la calidad del servicio de agua potable, obliga a comprar agua envasada, que tiene un impacto medioambiental 3 500 veces mayor que beberla del grifo.



De pequeña Francisca se bañaba en un canal que pasaba por delante de su casa, del que ya no queda ni rastro. En los surcos de los terrenos se juntaba un agua cristalina que podía hasta beberse. Los fines de semana iba con sus

hermanas a jugar al ameyal (manantial). Su madre no les dejaba meterse, porque tenía cinco metros de hondo. Había peces y cangrejos. “El agua se escuchaba”, añora. Hoy, en el río del que habla, hay un par de niñas chapoteando y apenas les cubre hasta la cintura. Las raíces destapadas de los árboles dan cuenta del descenso del nivel. Aún así, Francisca se alegra. “Antes del cierre de la ex-Bonafont, era muy poquita el agua, nada más tapaba hasta los tobillos. Ahorita se ha recuperado bastante”, dice.

En el interior de Puebla, cuando cavan un pozo y brota la primera agua, la costumbre es lanzar cohetes para celebrarlo. Los vecinos escuchan la señal y acuden al lugar para que la familia dueña del nuevo pozo les comparta galletas, refresco y su júbilo. Las madres les dan esa primera agua a los más pequeños para que aprendan a hablar más rápido. “Últimamente suenan más petardos”, dice Francisca, en una mezcla de sentimientos encontrados: el orgullo por ese logro y la nostalgia por aquella infancia tranquila.

El valle de Puebla era una región rica en agua por situarse en las faldas de dos grandes volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatepetl. Los cultivos de granos, hortalizas y frutas eran tan generosas que hasta abrieron bodegas de sidra para aprovechar las manzanas y peras que no podían recolectar a tiempo y caían de los árboles. En los últimos 15 años, la sequía y la actividad de la embotelladora, según ella, marchitaron esos campos. “Muchos de mis vecinos se fueron. Los jefes de familia tuvieron que migrar a Estados Unidos, porque la economía estaba muy escasa. Eso trajo desintegración familiar y problemas sociales hasta la fecha”, cuenta.

Una de las asambleas del municipio terminó a puñetazos entre quienes querían regirse por usos y costumbres —forma de gobierno ancestral— y quienes querían seguir bajo la ley convencional de partidos. A Francisca la agarraron de

los pelos, la tiraron al suelo y la patearon. Los moratones fue lo que menos le dolió. En la consulta sobre ese asunto, se impuso cuatro a uno la opción de continuar igual. De haber ganado el plebiscito, la comunidad hubiese podido administrar directamente los recursos públicos y decidir, por ejemplo, sobre el uso y extracción de su agua. “Ese domingo era la fiesta patronal y la población andaba distraída, por eso escogieron esa fecha. El proceso se vio enturbiado por la injerencia descarada de Bonafont”, dice. Como se ve en fotografías, había botellas de esa marca en las mesas electorales y la semana previa repartieron leche Danone a la gente. Dos días antes de la consulta, una camioneta verde intentó atropellar a uno de sus colegas del “Movimiento por el Agua y la Vida”. Las amenazas se empezaban a cumplir.

La mujer cholulteca va siempre acompañada por una de sus hijas. Es su medida de protección. “Para el gobierno somos un estorbo. Por eso quieren acabar con nosotros, desaparecernos y sabemos a lo que estamos expuestos”, afirma. Los años le pesan y empiezan a encorvarle y a tambalear sus pasos. Recupero su firmeza tras el asesinato del camarada Samir Flores, opositor a la instalación de una termoelectrica en Morelos. “No queremos el gasoducto, porque representa un riesgo para la vida”, manifestó en una visita del presidente López Obrador, 10 días antes de aquel 20 de febrero de 2019. El riesgo no era la tubería de gas, ni su impacto ambiental, sino los intereses político-económicos. Luego del homicidio, Francisca aceptó que su vida vale menos que un garrafón de 20 litros, literalmente, al mismo precio que tres balas de una nueve milímetros. Todos los caminos llevan a la muerte. “El agua es vida y sin ella moriremos. Es también un misterio. Hasta ahora la ciencia no ha encontrado la manera de producir agua. Por eso la guerra del agua es a nivel mundial”.



La eterna batalla yaqui

Los guerreros mártires

VÍCAM | SONORA

El palo fierro, como su nombre indica, provee una madera resistente. Las tribus del noroeste de México utilizaban los troncos para sostener sus viviendas y para cocinar. La infusión de sus flores servía para tratar el asma y los males de estómago.

Hace más de cuatro mil años, los primeros pobladores del sur de Sonora eran los *surem*, unos seres chiquitos, barbudos, muy longevos e inteligentes. Un árbol de mezquite les alertó de la llegada de unos forasteros —los españoles— que les darían dos opciones: dividirlos y evangelizarlos, o bien, dejarlos ser *surem*, pero alejados de su territorio. Algunos se hicieron católicos y se volvieron humanos grandes y fuertes —yaquis—, pero vulnerables a las enfermedades. Los *surem* se transformaron en hormigas, lagartijas, peces o se adentraron en el monte como seres animados invisibles.

La naturaleza los previno del ingreso de los colonos y pudieron anticiparse militarmente para vencerlos; pero, no les avisó de la Guerra del Yaqui, una contienda que, desde el último tercio del siglo XIX hasta el primero del XX, arrasó con la mitad de la etnia. Fue la lucha armada más larga y sangrienta de la historia de México. Centenares de yaquis fueron enviados como carne de cañón a la Segunda Guerra de Marruecos tras un escabroso acuerdo del presidente

Álvaro Obregón y España. Al líder de aquella feroz resistencia, el legendario Tetabiate, lo enterraron en la cima de la sierra, desde donde hacía rodar pedruscos para chafar a los soldados enemigos. Los restos de otra docena de guerreros descansan a las afueras de Vícam, la cabecera política de la nación yaqui. A 20 minutos de arenoso camino, Fernando Jiménez frena la camioneta y se mete entre unos cactus que dan paso a un agreste panteón. Algunas familias también han sepultado a sus seres queridos ahí, para que estén al lado de los héroes caídos.

Fernando se quita el sombrero de cuero. Hince la rodilla. El sol relumbra su piel avellana y el cabello canoso. Se santigua. “Perdón por venir a este lugar sagrado y molestaros sin motivo aparente”, murmura en su lengua. Así parsimoniosamente en cada una de las 12 cruces de palos. Perdieron la Guerra del Yaqui, sus tierras y su agua. “Los abuelos cuentan que el agua corría libremente por el río hasta la llegada del hombre blanco. Consigo llegó el capitalismo y todos esos cambios y el agua se convirtió en una mercancía, donde ya tenía un valor”, dice. Por el río Yaqui navegaron los españoles, quienes en sus crónicas lo describían como “el Guadalquivir americano”. Hoy, está totalmente seco. Durante la segunda mitad del siglo pasado, el caudal menguó paulatinamente por la construcción de tres presas. En los años cuarenta, el presidente Lázaro Cárdenas lanzó el proyecto de La Angostura. Los yaquis amenazaron con volar la obra, si no se les garantizaba el agua. El dirigente firmó un decreto para restituir parte de sus terrenos y darles la mitad del agua del río Yaqui y sus arroyos.

Lejos de cumplir con ese acuerdo, Miguel Alemán emprendió la construcción de Oviáchic, la mayor de las presas, finalizada en 1952. Doce años después, se puso en marcha el último de los embalses, El Novillo, que terminó de sorber lo poco que quedaba del río. Cuando los yaquis pensaban

que ya no les podían quitar más agua, en 2010 el gobierno estatal de Guillermo Padrés inició la construcción del Acueducto Independencia para trasvasar los escurrimientos de su valle hacia Hermosillo, capital del estado, con el objetivo de volverla en otro polo financiero del norte, como Tijuana o Monterrey. “Se acabaron el río Sonora, porque entregaron concesiones sin control y, entonces, vienen como langostas ahora a terminarse nuestra agua”, dice Fernando. Desde 2010, él armó los bloqueos carreteros que paralizaron el comercio hacia Estados Unidos por el noroeste. Aunque en 2013 la Suprema Corte ordenó paralizar la obra y exigió consultar a la etnia, la construcción siguió y el acueducto sigue funcionando al día de hoy.

Cuando no estaba en medio de la autopista con un altavoz o dando declaraciones a los medios, Fernando estaba reunido en Ciudad de México con organismos de derechos humanos, tribunales o la ONU. Era un incordio para el gobernador. El 23 de septiembre de 2014, una camioneta sin matrícula derrapó frente al ambientalista yaqui mientras iba a su trabajo; varios encapuchados le pusieron una bolsa en la cabeza, le amarraron las manos y lo montaron al vehículo. Lo golpearon durante los 200 kilómetros hasta Hermosillo. Lo acusaron de secuestro, agresión y robo de auto para meterlo un año preso. Lo liberaron por falta de pruebas, cuando las autoridades estatales ya habían logrado su cometido: desarticular al movimiento. A las pocas semanas también soltaron a su colega Mario Luna. Al hijo de éste le dieron una madriza como reprimenda por la labor de su padre. A su hermana la secuestraron el 21 de junio de 2021.

Ese mismo día, los forenses determinaron que los restos humanos hallados en una fosa a las afueras de Vícam eran de Tomás Rojo, quien había desaparecido un mes antes. Era uno de los portavoces de la tribu. Fernando era muy amigo de Tomás y ambos habían encabezado las protestas contra

el Acueducto Independencia en la que se consideró la primera “guerra por el agua”.

“Tomás tenía un trabajo muy avanzado, sabía cómo atajar jurídicamente el problema del acueducto y a alguien con mucho poder económico no le convenía”, dice. La fiscalía, en cambio, detuvo a dos muchachos cualquiera y relacionó el asesinato con pugnas internas. Tomás abogaba por retirar los retenes en la vía de entrada a cada uno de los ocho pueblos yaqui. En un inicio, esos grupos de jóvenes pedían una “cuota de apoyo” a los conductores para mejorar servicios de la comunidad, pero con el tiempo comenzaron a trabajar para células del narco. Tomás propuso sustituir esos peajes irregulares por casetas oficiales.

Algunos otros piensan que pudo ser un ajuste de cuentas de antiguos aliados y ahora enemigos dentro de la tribu. Tomás se oponía al acueducto, pero era favorable a la instalación de un gasoducto. Tal vez alguien sospechó que en medio de negociaciones con el gobierno estatal pusiese sobre la mesa un pacto de “agua por gas”. Como sea, su homicidio supuso el enésimo revés para la nación yaqui. “Se piensan que muerto el perro, se acabó la rabia, pero siempre habrá yaquis detrás dispuestos a morir por defender el agua. Nunca voy a llenar los guaraches de Tomás, pero, hasta donde pueda, voy a seguir la lucha”, asegura Fernando. Dos meses antes de la desaparición de Tomás, habían asesinado a otros dos ambientalistas de la tribu. Uno de ellos, Luis Urbano, había participado en una caravana por la defensa del agua que terminó en el sur de la Ciudad de México. En la cancha de la clausura pronunció un discurso que alertaba del riesgo de muerte para los yaquis por enfrentarse al ejecutivo estatal. La premonición se cumplió seis años después.

Esa tarde que nos encontramos, en febrero de 2022, Fernando había convocado en el panteón a cuatro hombres y tres niños de Vícam para representar la danza del Venado y

Pascola, una ofrenda a los guerreros mártires y a los *surem*. Los pascolas son seres malignos, hijos del diablo. El venado es un ser bondadoso y puro. La flauta y el tambor arrancan la danza cuando el sol se empieza a esconder en el desierto de cactáceas. El ritmo se marca raspando dos palos fierros. Uno de los chicos se pone una máscara negra pintada con una cruz blanca, de largas barbas y cejas de crin de caballo que encarnan a un anciano, un ser ruin y pervertido. El pascola agita los 12 cascabeles (los 12 apóstoles) de su cinturón y una pandereta mientras se burla de los presentes con posturas escatológicas y sexuales. El más pequeño, de 12 años, se venda los ojos, se acomoda una cabeza de ciervo con paliacates rojos en sus cuernos y sacude dos maracas, imitando los movimientos del animal. Los seis pasajes de la danza vibran entre los chasquidos de los capullos de mariposa atados a sus piernas. El atardecer relame los postreros compases. Me sobrecoge y me emociona.

El Venado y Pascola formaba parte de un ritual de petición de lluvias. Antiguamente se bailaba a la orilla del río, donde los venados bajaban a tomar agua y los indígenas aprovechaban para cazarlos. El agua les daba agua y también comida. Pero, ya no hay río y ahora utilizan una cubeta. El río Yaqui tenía un significado espiritual. “Es la sangre de nuestra tierra. Es quien le da vida y sentido a que nosotros estemos asentados en esta parte del mundo”, dice Fernando.

Otra de las fábulas cuenta que una grave sequía azotó a la tribu y su población moría de sed y enfermedades. Los jefes de los ocho pueblos se reunieron y mandaron un gorrión para rogar el auxilio de *Yuku*, su dios de la lluvia. En lugar de ayudarlos, la deidad les castigó con fuertes tornados y relámpagos mortales. Y lo mismo hizo ante la súplica de otros dos tipos de ave. Desesperados, los yaquis mandaron al sapo *Bobok*. “Señor, no trate tan mal a los yaquis. Envíenos un poco de agua para beber, porque morimos de

sed”, le dijo. El ávido sapo logró sortear la furia de *Yuku* hasta que las tormentas formaron el río Yaqui. De aquellas aguas no queda nada, sólo un lecho cuarteado, como el territorio y el alma de la Nación.

Las cartas de la Nueva España hablan de dos millones de hectáreas de tierras pertenecientes a la etnia. Pero, se contabilizaron menos de medio millón durante los gobiernos de mediados del siglo pasado. Desde entonces, los yaquis se han visto forzados, por dinero o por presiones, a cercenar parte de su territorio. Sólo quedan 18 mil hectáreas cultivables y menos del 5% son explotadas por los yaquis. En su mayoría, trabajan como jornaleros para los *yoris* (los blancos), a quienes les tuvieron que malvender sus terrenos para sobrevivir. La tribu recibe 30% de las aguas de la presa Oviáchic, mientras que los terratenientes, el 70%. El gobierno justifica ese reparto según la extensión de los sembradíos.

El 21 de septiembre de 2021, López Obrador visitó por tercera vez a los pueblos yaqui. Les pidió perdón por la guerra de exterminio que sufrieron y se comprometió a devolverles parte de sus tierras. Les prometió, además, triplicar la entrega de agua. Fernando y otros líderes de la etnia sentaron al presidente en la sede de la Guardia Tradicional —gobierno indígena— de Vícam, una empalizada de troncos de mezquite y techo de palma. Un recinto sagrado donde no se puede mentir. Tal vez por eso el mandatario eludió responder a las reclamaciones para detener el funcionamiento del Acueducto Independencia. En su conferencia mañanera al día siguiente, desde Palacio Nacional, aseguró que “cancelar eso (ese trasvase) va a resultar problemático”, porque “ya hay una inversión”. Eso, a pesar de la improcedencia legal de la infraestructura, conocida como un “monumento a la corrupción” por el descarado desvío de recursos públicos, además de un absurdo técnico. Las sequías dejaron los

niveles de las presas tan bajos que el acueducto ni podía operar. Fernando cree que es obra de la naturaleza: “Los *surem* se encargaron de destapar lo absurdo del proyecto”.

A finales de febrero de 2024, López Obrador inauguró el Acueducto Yaqui, que en teoría abastecerá, a las 50 comunidades de la tribu. La obra trasvasa el agua de la cuenca que surte hoy a varias ciudades, a un millón y medio de personas. “El acueducto garantiza agua para los yaquis por 30 años”, dijo el presidente. “¿Y luego qué?”, se pregunta Fernando.



La única calzada asfaltada de Vícam, donde radican la mitad de los 17 mil yaquis de Sonora, es la autopista que la atraviesa. Por sus polvorientas calles de persianas bajadas deambulan zombies, en busca de una limosna o de una sombra donde tirarse a pasar el viaje. Los esqueléticos cuerpos, el caminar arrastrado y la mirada perdida son la huella de la metanfetamina. La potente droga sintética ha quebrado a gran parte de la juventud yaqui. “En los noventa nos metieron el alcohol y ahora la drogadicción”, dice Fernando. “Todo es una estrategia del gobierno para debilitarnos y provocar divisiones internas”.

Durante la reforma agraria de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los yaquis no pudieron recibir créditos por sus tierras, porque eran de uso comunal, así que las rentaron. Muchos empresarios y gente del gobierno, recuerda Fernando, les pagaba con botellas de tequila. Por si fuera poco, en 1991 una avioneta cargada de droga se estrelló a la afueras de Vícam y los jóvenes recogieron la merca. El kilo de cocaína se vendía a 50 pesos (unos 600 de los nuevos

pesos mexicanos) y muchos se engancharon. A partir de 2006, con el despliegue del ejército en la “guerra contra el narco”, los traficantes pagaban con piedras de crystal a los muchachos para que los guiaran por atajos. Para Fernando, es imposible que las autoridades no hayan podido frenar, o al menos mitigar, el ingente trasiego de droga por esa zona, tanto por aire como por tierra.

Bajo el letrero de “Bienvenido a Vícam”, varios chavos exigen un pago a los vehículos. La tarifa para las decenas de tráilers que pasan a diario es de 100 pesos (cinco dólares) y los autos aportan a voluntad. “Son de los mismos criminales. Luego se lo dan a ellos o se lo gastan en droga”, susurra Fernando. Treinta kilómetros más adelante, en Loma de Guamúchil, hay dos camionetas atravesadas sobre la autopista para obligar al tráfico a reducir la velocidad y pasar por el retén para meter sus moneditas en el bote. Pueden llegar a recaudar más de 100 mil pesos al día (cinco mil dólares), calcula. Fernando cree que ya todo está viciado, muerto. Lleva un paliacate negro en señal de luto, por su amigo Tomás y por su tribu. Lo ajusta un broche azul, blanco y rojo, los colores de la bandera yaqui que se ve en muchas matrículas de auto.

La entrada a ese otro pueblo está presidida por una descomunal estatua de un danzante yaqui, de la altura del Cristo Redentor de Brasil. El gobierno estatal la presentó en 2015 como un nuevo parador turístico de la región, pero nunca invirtió un solo peso más en promover esa iniciativa. Nadie va a visitar ese punto remoto y peligroso del desierto. En el fondo, fue un gesto para tratar de contentar a los yaquis y amansar las protestas por el acueducto. Sólo creó fricciones por la ubicación de la figura. No fue casualidad que se colocase en Lomas de Guamúchil. Fue más un regalo de agradecimiento, como se descubriría meses después, por acabar con la guerra por el agua y apoyar el gasoducto.

El vaquero

LOMA DE BÁCUM | SONORA

El palo fierro se conoce como la madera del desierto. Los yaquis y los seris tenían prohibido tumbar estos árboles sagrados y, solamente cuando se marchitaban, los usaban para elaborar utensilios e instrumentos musicales. Su merma ha dificultado la celebración y transmisión de las danzas tradicionales originales.

En medio de la explanada hay tres grandes cruces de troncos que representan tanto la Santísima Trinidad como el aire, el fuego y el agua. Sincretismo. Es el centro ceremonial de Loma de Bácum, en palabras de historiadores, la cuna de las rebeliones de la belicosa nación yaqui. Los primeros colonos fueron expulsados a la fuerza y no fue hasta el siglo XVII que los jesuitas pudieron entrar en territorio yaqui. En una ramada, varias mujeres cocinan a leña el almuerzo para la veintena de vecinos que se han arrimado para conversar conmigo. “Ya estamos en el infierno, sólo podemos ir al paraíso”, suelta Guadalupe Flores. La expresión se emplea en el desierto del norte de México como metáfora del insufrible calor. Esta vez, sin embargo, el vaquero se refiere a la oleada de violencia que azota a su gente.

Una anciana se adormece en una silla de escritorio rota fuera del porche. Las banquetas bajo las tejas son exclusivas para los integrantes de la Guardia Tradicional, como

Guadalupe, que se acomoda el cinturón de bordados ecues-tres antes de sentarse. “Desde que llegó la civilización, como lo llaman, quisieron apoderarse de nuestras tierras y aguas, y a nosotros usarnos como esclavos. Siempre combatimos la intromisión de personas extrañas, pero ahora es entre nosotros mismos”, dice. Enfrente, hay una docena de camionetas calcinadas. El 21 de octubre de 2016, una turba trató de asaltar la sede de gobierno de Loma de BÁCUM. En el primer intento, hubo un intercambio de disparos en el que murió uno de los asaltantes, originario de Loma de Guamúchil. Su cadáver aún yacía tibio cuando, por la tarde, se abalanzaron unos 600 agitadores transportados en tres autobuses y 12 vehículos con el logotipo de IEnova, la constructora que iba a pasar un gasoducto por ahí debajo. Sus hermanos de Lomas de Guamúchil, a 10 kilómetros, se habían aliado con la empresa y el gobierno estatal para deponer a la autoridad de Loma de BÁCUM, que se oponía al ducto. “Les pagaron 50 mil pesos por matarme”, dice Guadalupe. Iban a por él, según le contaron luego algunos de los arrepentidos involucrados en el ataque.

Guadalupe narra que fue una ofensiva bien planeada. Primero pasaron para comprobar que eran pocos, unos 40, y luego volvieron con metralletas. Se situaron frente a la escuela justo a la hora de salida de los niños para que los de Loma de BÁCUM no pudieran disparar. “Ellos mismos mataron al chavo. Su idea era que hubiese muertos para justificar la entrada de la policía”, dice. Pero, una semana después detuvieron a uno de los suyos, Fidencio Aldama, para Guadalupe, un preso político. “Su pistola era de calibre .46 y el tiro salió de una .22”. La reyerta dejó un amasijo de chasis, agujeros de bala en las paredes de la Guardia Tradicional y una fractura definitiva entre los pueblos yaqui, o, mejor dicho, entre Loma de BÁCUM y los otros siete.

Loma de BÁCUM es el único de los pueblos yaqui que no tiene el panteón en su explanada central. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la tribu se volvió un estorbo para el desarrollismo del recién independizado México y, en 1868, el ejército ejecutó a decenas de indígenas dentro de su iglesia. El templo acabó incendiado por la virulencia de la artillería y tuvieron que refundar el pueblo en otro sitio. Un siglo después, el río Yaqui se desbordó e inundó gran parte de esas infraviviendas, hasta día de hoy, fabricadas con carrizo, mezquite y algo de adobe. El pueblo se trasladó de nuevo, un kilómetro apartado de sus lápidas. En esa última mudanza, le construyeron otra iglesia a su Virgen de Santa Rosa de Lima. Pero, la Virgen siempre volvía a aparecer en el antiguo templo. Los yaquis rebautizaron a la efigie como la Virgen del Camino, por las huellas que encontraban cada mañana entre ambos santuarios. Finalmente, la ocultaron en la Sierra del Bacatete, tanto para evitar que se moviese como que se la robasen los militares. Sólo cuatro personas de Loma de BÁCUM saben dónde se esconde la cueva. La sacan una vez al año para la procesión del 1 de julio, el único día en que se reúnen las autoridades de los ocho pueblos. Las diferencias se dejan a un lado durante la fiesta. Las danzas a la Santísima sirven para pedir lluvias y fertilidad a sus campos. “La Virgen hace su milagro: juntar a todos los yaquis. Tal vez, ser los únicos que sabemos dónde está, es lo que todavía salva a BÁCUM”, dice Guadalupe. Aún los necesitan. Quienes han intentado buscar la figura de oro en la serranía han aparecido muertos.



Guadalupe viste el paliacate rojo y el sombrero vaquero que caracterizan a los guerreros de la etnia. Carga un viejo fusil Winchester de la época de la Revolución, a comienzos del siglo pasado, en la que combatieron junto al ejército mexicano bajo la promesa de que les devolverían sus tierras. El engaño motivó un alzamiento en el que participó su abuelo, quien le enseñó a manejar uno de los rifles .30-60 con mira telescópica que confiscaron a los militares.

De pequeño, Guadalupe disparaba a los ladrones del ganado. En los años setenta, a los sembradores de marihuana que trabajaban para Caro Quintero, el capo del cártel de Guadalajara apodado “el narco de narcos”; a partir de los noventa, a los narcos que operan en el valle, un enclave privilegiado para el trasiego de droga. Pueden esconder los laboratorios en la sierra y, en la planicie, las pistas de aterrizaje clandestinas. El francotirador calcula que ha abatido a medio centenar de criminales. A sus 65 años, la vista ya no le alcanza para apuntar a un kilómetro de distancia, por lo que presta su rifle a los más jóvenes. En los últimos años, han retomado el uso de flechas, ahora lanzadas con arcos comerciales de 80 libras, más eficaces que los fusiles porque no hacen ruido. La delincuencia organizada ha intentado meterse en la sierra y en el pueblo como sea, ofreciendo armas, dinero y droga. “Les decimos que no. No tienen ningún permiso. Si los vemos aquí, los vamos a sacar. En los otros pueblos sí han tenido tratos (con el narco)”, dice. Guadalupe encabeza uno de los escuadrones de la Guardia Tradicional, gobierno y también milicia.

Los cuatro muchachos y otro par de sesentones, altos y atléticos, se suben en una Nissan NP300 para dirigirse hacia la sierra del Bacatete, un lugar sagrado que los militares tienen prohibido pisar. Los traficantes lo aprovechan para campar a sus anchas. Ahí se encuentra el *Yo' o Joara*, una de las dimensiones del alma en la cosmovisión yaqui. En sus

cavernas, los yaquis se encierran durante días para fortalecerse ante un reto mayor, ir a la guerra o asumir un puesto de mando. No todos lo soportan; algunos salen enloquecidos por lo que ven, lo que escuchan y los animales que enfrentan.

La camioneta blanca rotulada con el escudo de la Guardia Tradicional se estaciona en un rancho. “A la sierra sólo se entra con caballo y rifle”, dice Guadalupe. Se le estiran las duras facciones cada vez que lanza esos lapidarios consejos. El grupo continúa el camino a caballo. Por delante se abre un denso macizo que escala hacia el Triángulo Dorado del narcotráfico, en la Sierra Madre Occidental. Por el Bacatete huyó su abuelo a comienzos del siglo, cuando las bombas de los aviones de las Fuerzas Armadas caían sobre sus cabezas y cientos de los sublevados corrieron medio desnudos para camuflarse entre las rocas y arbustos. Mataron a unos 25 mil yaquis. Otros miles fueron deportados a la otra punta del país, a Yucatán, como esclavos en las plantaciones de henequén. “La tribu resistió a una de las guerras más injustas y cruentas que un pueblo haya soportado”, admitió el Estado mexicano al cabo de un siglo.

“Los ejércitos siempre han sido para servir a los reyes, para proteger sus riquezas. En el sistema actual protegen a los gobiernos y los intereses de las empresas. Antes había menos soldados y estábamos más seguros”, reflexiona Guadalupe. Es el más formado del pueblo. Prefirió estudiar derecho para asesorar a la tropa *yoemia* (los guerreros) antes que ocupar cargos en la Guardia Tradicional. Su paso por la universidad le dejó la costumbre de llevar un bolígrafo en el bolsillo de su camisa de cuadros y la necesidad de usar lentes de sol progresivos.

“Cuando un país quiere subyugar a otro pueblo, le manda a su ejército, pero antes tiene que justificar su presencia. Para ello siembra la droga, crea conflictos entre la

población, dándoles dádivas o drogándola para que se peleen. Es la estrategia para decir que penetran para poner orden y detrás entran todas las empresas”. La explicación es panfletaria y obvia, pero suficientemente lógica para haberse ganado con ese tipo de discursos la confianza de su gente. Es su portavoz y jefe de facto de Loma de Bácum, aunque los documentos los firman otros. La credibilidad se la ganó con hechos. Aprendió a sobrevivir en la sierra comiendo carne de iguana y jabalí desde los 12 años. A esa edad, los yaquis inician sus 10 años de servicio obligatorio en la Guardia Tradicional.

Entre los 1 700 habitantes de Loma de Bácum hay tantos jóvenes que sólo les toca apersonarse en los patrullajes semanales por el pueblo un par de veces al año. Quienes suben al Bacatete, en cambio, han recibido un entrenamiento más específico de la mano del comandante, rango que ocupó Guadalupe durante mucho tiempo. Mostró a la tropa cómo disparar, caminar por el monte o esquivar a los muchos enemigos. La disciplina y la cadena de mando son castrenses. “No cualquiera está preparado para la guerra contra los *yoris*. Todos lo saben, porque a todos los blancos nos han matado a alguien”, dice.

La última vez que Guadalupe se enfrentó al ejército fue el 11 de abril de 2021. La Guardia Tradicional atravesó dos de sus camionetas frente a una patrulla que pretendía entrar sin permiso a su territorio. La excusa de los militares era que un día antes habían encontrado media tonelada de metanfetamina en la zona. En el encontronazo los soldados les amenazaron con quitarles su arsenal —un puñado de rifles viejos—. Guadalupe les respondió con una advertencia, de que iban a morir en la sierra, en cuyas copas de los árboles tienen ocultos a francotiradores armados. Los de verde terminaron por marcharse.

Trece días después, desaparecieron a 10 vecinos de Loma de Bácum.

Localizaron los restos de cinco de ellos a los pocos días. Las autoridades difundieron la hipótesis de la reprimenda: las víctimas trabajaban para el narco como halcones y, al ser las fiestas patronales, descuidaron sus labores de vigilancia, lo que favoreció el decomiso de droga antes mencionado por parte del ejército. “Si se trata de un castigo matan a uno o dos, no un grupo tan grande. Esa masacre requiere mucha logística. Es un mensaje a todo el pueblo”, cree Guadalupe, quien relaciona el episodio con los intereses mineros. Su nuevo caballo de batalla son las 26 concesiones de explotación que el gobierno de Sonora ha entregado a espaldas de la tribu. En los últimos años, han sorprendido dentro de su territorio a varios técnicos en tareas de prospección. “Para meter la mina, primero tienen que limpiar el terreno. Contratan a sicarios para sembrar terror, secuestrar, que la gente se vaya y tener el campo libre”, añade. Se basa en que, si algún cártel hubiera cometido la matanza, habrían dejado una narco-manta con su autoría y los motivos.

Dos días después de la desaparición, la Guardia Tradicional se lanzó hacia lo alto de la sierra para cazar a los culpables. El operativo se llevó a cabo bajo la supervisión de la Guardia Nacional, la Marina y la policía estatal. Pero, según observó Guadalupe, ninguna de las corporaciones disparó ni una sola vez cuando se toparon con los sicarios. “Eso nos da a pensar que son de la misma gente (de los cárteles) y que no se iban a matar entre ellos”, dice. Los yaquis tumbaron a dos y hubiesen sido más, si no se les hubiera acabado la munición. La desconfianza de Loma de Bácum hacia el Estado llega al punto de que el pueblo únicamente come de sus cultivos por la paranoia de ser envenenados.

El escuadrón, con un par de rifles al hombro y una pistola calibre .49, deja atrás los cactus de la llanura y se pierde

entre las zarzas durante varios días. Es donde Guadalupe se siente más seguro. El vaquero se ha enfrentado al ejército, al narco, a empresas, a otros yaquis, a la sierra y a la sequía. Pero, sigue sin escuchar el canto del tecolote, el ave nocturna que presagia la muerte.

El profesor

PÓTAM | SONORA

El palo fierro es una planta nodriza porque su sombra crea un ambiente más fértil y húmedo que propicia el brote de otra vegetación. Su longevidad la convierte prácticamente en un recurso no renovable. Cuando se corta un palo fierro, no sólo se pierde la cobertura arbórea, sino que se pone en riesgo a gran parte de la flora del desierto.

En los 10 kilómetros de terracería entre la carretera federal y Pótam, la segunda cabecera de la nación yaqui, hay al menos cuatro andrajosos halcones que ni siquiera se molestan en disimular. Escriben en su celular cada vez que pasa un vehículo desconocido. Se cubren en la sombra de los pinos salados que crecen en los márgenes del drenaje agrícola. Un arbusto invasor que se nutre de suelos arenosos donde el agua se evapora con rapidez. A 40 kilómetros de Loma de Bácum sigue siendo desierto, a ratos como una playa sin mar.

El letrero del oxo, la cadena de abarrotes, es la construcción más alta del pueblo. El rocío enfanga la calle principal y a sus pocos comercios y viviendas de hormigón. A su espalda, un laberinto de bohíos separados por cercas de carrizo. Tan herméticas como el carácter de la etnia. En el centro de salud de Pótam reciben a unos 40 pacientes a la semana con problemas gastrointestinales. Una de las

enfermeras me cuenta que se han triplicado los casos de diarrea y disenterías entre los siete mil habitantes.

Un estudio del científico Rodrigo González, que me guía por esos derroteros, confirma que el aumento de las dolencias se debe a la contaminación del agua. Dicho informe refutaba a la autoridad sanitaria estatal, que rechazaba que el acueducto hubiese deteriorado el agua que beben los yaquis. Tras la publicación, al investigador del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSon) se le cerraron muchas puertas y varias amistades yaquis se alejaron, pero encontró el respaldo y el cariño de Loma de Bácum, a quienes ha asesorado en cuestiones del agua desde hace 30 años.

Por otro lado, los análisis revelan un riesgo para la salud por la deficiente o nula aplicación de cloro al agua de beber. En Bácum, la mortalidad por tumores de vejiga y de hígado duplican el promedio anual. La mitad de las casuchas de Vícam y Pótam no tienen desagüe y se ha propagado la fiebre tifoidea, la salmonelosis y el dengue. Sus pocas alcantarillas están destapadas y cubiertas de un charco de mugre. Cuando llueve, el inconcluso drenaje se desborda y los vecinos se inundan en su propia mierda.

A la salida de la clínica, dos hombres con gorra y gafas de sol merodean nuestro vehículo y no se marchan hasta que arrancamos.



En el patio de Georgina Molina hay un hoyo de un metro de profundidad con un pequeño motor adentro. Se encarga de bombear agua unas cuatro horas a la semana desde la enjuta tubería municipal. Aprieta un interruptor, colgado del tejado para que los perros no lo muerdan, y sale agua

de la manguera. Corre a llenar dos enormes tambos, que le servirán para lavar la ropa, los trastes y ducharse. Su madre también se la bebía y de eso murió hace nueve años. “Sufría unos dolores muy fuertes de vientre”, dice. Cuando en el hospital de la ciudad les dijeron que era por causa del agua, empezaron a comprar agua embotellada. Pero como tomaba muy poquita agua, porque no les alcanzaba para muchos garrafones, sufrió un cuadro de deshidratación que acabó con su vida.

Pese a sus 42 años, Georgina solía enfermarse a menudo del estómago y contrajo varias fiebres altas. Hace tres años tuvo un aborto por los fuertes vómitos, calenturas y escalofríos que le dieron durante una noche. Desde entonces, sólo bebe agua en plástico. Se gasta casi la mitad de lo que gana de la venta de tortillas de maíz en comprar un botellón diario. La extrema pobreza en Pótam obliga a la mayoría a beber agua corriente. Muchos extraen todavía el agua de pozos noria. En verano, algunos de sus vecinos recogen el agua de los canales de riego o de las cloacas para lavar la ropa y los trastes. Su casucha es algo mejor que las chabolas de los arrabales. Se pasa el día entre la cocina de leña, el fregadero, la letrina y la despensa hecha con carteles electorales. Siempre tiene que haber alguien en la casita para que no se roben su bomba.

Junto al agujero del motor hay clavadas una cruz, como en todos los hogares yaquis, y una pala. Frente a la primera, la familia se santigua al entrar y rezan para que caiga agua en primavera. Con la segunda, remueven el lodo que tapa la tubería y daña su bien más costoso, la bomba de agua. “Si tuvieses que escoger, ¿te quedarías con la cruz o con la pala?”, le pregunto. Duda. Lo piensa mucho. “Con la pala, pero no se lo digas a nadie”.



El cementerio de Pótam está plagado de tumbas pequeñas, de niños y niñas, los más vulnerables a las penurias de una tribu sobre la que cae a plomo la ley de Darwin: la supervivencia del más fuerte. Rodrigo conoció a los yaquis a comienzos de los noventa al atender un llamado de socorro para erradicar la epidemia de alcoholismo y desnutrición infantil. La situación le chocó tanto que se puso a estudiar algo de yaqui para hacerles de traductor. Los acompaña en visitas médicas, realiza entrevistas de campo para diferentes investigaciones y les ayuda con todo tipo de trámites. Su última gestión fue buscar un laboratorio en Estados Unidos para extraer una segunda muestra de ADN de la supuesta osamenta de los 10 desaparecidos de Loma de Bácum, entre quienes había un buen amigo suyo.

También era amigo de Tomás Rojo y de Fernando Jiménez, a quien recogió a la salida de prisión y con quien planeó un operativo de seguridad para evitar que lo aprehendieran de nuevo. De todos esos adalides de la defensa del agua se distanció tras el ataque a Loma de Bácum. “Yo mismo vi a Tomás ese día dando órdenes desde la carretera junto a los *huachicoleros* (delincuentes) y los (agentes) estatales”, dice. Desde esa ruptura lo han hostigado. Necesita escolta para ir a Lomas de Guamúchil; el alcalde de Ciudad Obregón lo acusó públicamente de exigirle 400 millones de dólares a cambio de permitir el gasoducto, y los favorables a IEnova pidieron su destitución del ITSon. A veces lo ha seguido alguna patrulla estatal hasta la puerta de su casa.

Por ese motivo, Rodrigo se ha pasado toda la mañana algo callado y, bien entrada la tarde, cerciorado de que no soy un informante, desmenuza su versión de la maraña de intereses entre empresas privadas, crimen organizado, los varios niveles de gobierno y los notables de la tribu yaqui: “Tomás Rojo y los agricultores del Movimiento por el Agua estuvieron apoyados por el PRI en su oposición al

Acueducto Independencia, un proyecto del PAN. Cuando llega el PRI al poder, tanto al gobierno federal (2012) como al estatal (2015), pasan a estar en su nómina (comprados) y los utilizan para imponer el gasoducto”. El famoso “gas por agua” que me habían comentado.

Nada de esa charla es en vano para Rodrigo, que tampoco esconde sus aspiraciones políticas. El especialista en recursos hidráulicos concursó para la rectoría del ITSon, hizo campaña por Morena en 2018 y en 2021 fue candidato a la alcaldía de Cajeme, que contiene a Ciudad Obregón y varios pueblos yaqui. Actualmente, es el consejero del gobernador de Sonora, el oficialista Alfonso Durazo, sobre cuestiones de la tribu. “Ya le he dicho (a Durazo) que el punto hídrico de los acuerdos con los yaquis resulta inviable. Por muy buenas intenciones que tengan, no pueden crear agua ni tierra. Si se la quitan a los agricultores o la ciudad, se va a recrudecer el conflicto entre la etnia y los mestizos”, explica. Su ambición ahora pasa por ser rector de la futura universidad yaqui que prometió López Obrador.

Asimismo, fue director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme desde septiembre de 2018 hasta febrero del año siguiente. Renunció, según él, porque lo presionaron para firmar contratos fraudulentos. Durante sus cinco meses en la instancia canceló tres de esas licitaciones infladas y comenzó los procesos para frenar otras tres. Cuando abandonó su puesto, aprobaron los cinco contratos para constructoras de la región. “Sumaban 15 millones (unos 750 mil dólares) en moches para los funcionarios. Luego, esas empresas encargadas de la distribución del agua incumplían con su servicio y tenían que generar sobrecostos para contratar a otras”, denuncia.

Rodrigo saca el celular al entrar y salir de cada pueblo para enviarle un mensaje directamente al subsecretario

estatal de seguridad, reportándole su itinerario, por si acaso. Así de fea está la cosa. Nos da la “hora cero” como llaman por estas latitudes al lapso de atardecer que funde al día y la noche. El horario en que los cárteles imponen sus toques de queda. Comienza a oscurecer, pero las farolas aún no se han encendido. Es momento de irnos a casa.



El 21 de octubre de 2016, Rodrigo recibió una llamada al mediodía. Un anónimo le avisó que iba a bordo de un autobús en convoy que se dirigía a Loma de Bácum con el propósito de atacar su Guardia Tradicional. El mismo asaltante le contó semanas después que le habían pagado a cada uno 200 pesos por realizar un trabajo del que les dieron pocos detalles. La noche anterior los habían trasladado a Chichiquelites —la misma ranchería donde en 2021 hallarían los restos de varios de los 10 vaqueros desaparecidos—. Les invitaron cerveza y crystal hasta la madrugada. En medio del desierto no tenían señal telefónica para alertar a nadie y, a la mañana siguiente, partieron engañados y drogados.

Rodrigo colgó y se comunicó de inmediato con las autoridades de Loma de Bácum. Tuvieron media hora para juntar algunos guardias y *winchesters*. Luego, llamó al servicio de ambulancias, hospitales y a la prensa local para anticiparles la tragedia. Se pasó toda la clase pegado al teléfono, repitiendo el mismo aviso más de 30 veces. Cree que tenía el teléfono pinchado, porque, a los pocos minutos, escuchó un helicóptero que sobrevolaba su laboratorio en Ciudad Obregón. “No tenía sentido la policía allí, si el ataque estaba ocurriendo a 20 kilómetros”, dice. Intuyó que lo estaban vigilando y bajó en seguida al estacionamiento. Rompió un

poste con el auto, de los nervios, y le insistió mucho al ce-lador para que registrase su salida en la libreta por si quizá lo levantaban.

Sudaba, temblaba. El ruido de las hélices sobre su cabeza. Fueron los 10 peores minutos de su vida. Catorce calles hasta su casa. Rodrigo dejó el auto a un metro de la puerta y se metió a gachas. Cerró las cortinas de todas las ventanas y llamó a varios de sus colegas abogados por si venían a arrestarlo. Llegó a tramitar un amparo. Los días posteriores consiguió un programa antivirus contra Pegasus, el software utilizado por la administración de Peña Nieto para espiar los teléfonos de decenas de activistas, académicos, periodistas y opositores en general. Su buen amigo, Guadalupe, le estará eternamente agradecido: “Si no hubiese habido prensa ni nos hubiésemos preparado con algo de antelación, hubiese sido mucho peor. El profesor evitó una matazón”.



El curso del río Yaqui lo ocupa ahora el forraje, algunas barracas y fosas clandestinas. Es un vertedero de cadáveres del narco donde han encontrado hasta 15 cráneos en un mismo hoyo. Por temor, nadie baja a recoger los cuerpos que tiran. A un lado de la autopista, quedan las ruinas de un restaurante que sucumbió a los asaltos y las extorsiones. En el desvío hacia el centro de Loma de Bácum hay una tienda de abarrotes carbonizada. La dueña había aceptado los sobornos del gobierno para apoyar la instalación del gasoducto y la autoridad tribal la expulsó por la fuerza. En la orilla de enfrente, hay una pequeña cruz de madera azul rodeada de vasos con velas y un nombre: Víctor Vázquez.

El joven de 18 años patrullaba en la Guardia Tradicional cuando hubo una refriega con unos vecinos pagados por IEnova, según Guadalupe. Le dispararon desde dentro de una vivienda que también incendiaron. Un año y medio después, dos sicarios disfrazados de enfermeros acribillaron al secretario del ayuntamiento de Bécum. “Siempre han querido aniquilarnos. Antes era con bombas y ahora nos están matando silenciosamente. Es una cuestión de ellos o nosotros, de matar o vivir”, dice el líder de la tropa *yoemia*. El despojo y la guerra empapan su cultura. Desde el siglo pasado acuñaron los términos *torokoyori*, para nombrar a los “traidores que se unen a los blancos”, y *kau jomem*, “guerreros que defienden el territorio”.

Guadalupe vive de la siembra de ajonjolí y frijol, pero últimamente carga más tiempo el fusil que la pala. Se duele, porque antes del gasoducto no había tanta muerte. “A los vendidos los hemos sacado de sus ranchos y entonces nos han metido al crimen organizado — dice —. Nos han atacado a balazos y a balazos nos hemos defendido. El ejército lo sabe, el gobierno lo sabe, todos ellos lo saben. Cuando los topamos en la sierra, ellos mismos se van, porque saben que aquí les tiramos a matar”.

El plan de López Obrador contempla modificar el trazado del gasoducto para que rodee el pueblo, pero no habla de las mineras, ni de los desaparecidos, ni de los presos políticos, como reclama el vaquero de Loma de Bécum. Para Guadalupe, la batalla de la nación yaqui es interminable. Imagina su funeral como se celebraba antiguamente en medio de la explanada, el centro ceremonial. El cuerpo del difunto se amarraba arriba de un tronco para que su alma estuviera más cerca del dios del Sol, el padre de la tribu. “Me moriré echando tiro en el Bacatete, de donde venimos, nosotros, los *surem*. Y, luego, que me quemem en el palo más alto”, afirma. A diferencia de la tierra, en el

infierno las promesas se cumplen a fuego. Pero, el tecolote sigue sin cantar.





Cuando el agua se acabe se publicó en una época
en la que el agua ha sido secuestrada y transformada en mercancía.
En cada página resuena un eco de lucha,
fluye una corriente de esperanza
y persiste la memoria de lo vital.

Impreso en papel cultural ahuesado de 75 g
en Mujica Impresor, S.A. de C.V. con domicilio en
Camelia 4, colonia El Manto, Ciudad de México,
en el mes de noviembre del 2024.

El tiraje consta de 1 500 ejemplares.

¿Puede un manantial de resistencia brotar en medio de la aridez de la violencia? ¿Qué memorias se guardan en el andar de quienes se enfrentan al secuestro del agua?

Cuando el agua se acabó, los vecinos de Georgina bebieron el sobrante del riego en el desierto de Sonora. Doña Carmen en Oaxaca y los productores de Chihuahua se alzaron para frenar el saqueo. A Óscar lo asesinaron en la frontera norte por denunciar el monopolio; a Ricardo, por negarse a enviar pipas de agua a una barriada capitalina tomada por pandillas. Los hijos de Francisco debieron abandonar la Montaña de Guerrero cuando su siembra se marchitó. Alberto vive bajo amenaza por haber expuesto cómo las macrogranjas de cerdos infestan los cenotes de Yucatán. A un biólogo en Monterrey también lo amenazaron de muerte.

Este libro recorre doce de las zonas más convulsas de México para sumergirse en el conflicto por el agua. Las historias aquí contadas pertenecen a quienes, ante la escasez y el despojo, alzan la voz para recordarnos que, sin agua, la supervivencia es una ilusión.